

CONSEJO EDITORIAL

CARMEN GUADALUPE CÓRDOBA,
Decana Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.

MARÍA DEL CARMEN ESCOBAR,
Universidad de El Salvador,
El Salvador.

MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA,
Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, UNAH.

ROBERTO PINEDA,
Director Escuela de Sociología,
Universidad Nacional, Costa Rica.

CARLOS BRIONES,
Director FLACSO-El Salvador.

VIRGILIO ÁLVAREZ
Director FLACSO-Guatemala.

JORGE MORA,
Director FLACSO-Costa Rica.

MANUEL ROJAS,
Director Revista Centroamericana
de Ciencias Sociales.
Investigador FLACSO-Costa Rica.

CONSEJO ASESOR

JAIME BEHAR,
Instituto de Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Estocolmo, Suecia.

ELSA LILY CABALLERO,
UNAH, Honduras.

CARLOS CARRANZA,
Escuela de Sociología, UNA, Costa Rica.

RICARDO CÓRDOVA,
Fundaungo, El Salvador.

CARLOS IVÁN DEGREGORI,
Instituto de Estudios Peruanos, Perú.

ERIC HERSHBERG,
Social Science Research Council,
New York, Estados Unidos.

JOSÉ ITZIGSOHN,
Brown University, Providence,
Estados Unidos.

KEES KONNINGS,
Universidad de Utrecht,
Holanda.

ALEJANDRA LIRIANO,
República Dominicana

ORLANDINA DE OLIVIERA,
Colegio de México, México.

MANUEL ORTEGA,
CASC-UCA, Nicaragua.

IRMA OTZOY,
Consultora independiente,
Guatemala.

GUILLERMO ACUÑA,
FLACSO-Costa Rica.

ANNE MARIE SEGUIN,
INRS-Urbanisation, Institut National
de la Recherche Scientifique,
Montreal, Canadá.



El fondo editorial de la FLASCO que apoya parcialmente esta publicación, es posible gracias al patrocinio institucional de la Agencia Sueca de Cooperación para la Investigación (SAREC) de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) en el marco del Programa Centroamericano de Posgrado.



FLACSO
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA

© Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales:
Sede Costa Rica, Sede Guatemala y
Programa El Salvador
Primera Edición: julio del 2008
Producción editorial: José Navarro Salas
Asistente de edición: Flor Salas Morera

FLACSO-Costa Rica. Apartado 11747, San José, Costa Rica, Tel: (506) 222-48059
Fax: (506) 225-34289, e-mail: flacso@flacso.or.cr Pág. web: <http://www.flacso.or.cr>

ÍNDICE

Encuentros

Refugiados guatemaltecos en cuatro destinos: flujos migratorios y contextos de recepción. *Leila Rodríguez* ----- 5

Movilidad social en Centroamérica. *Pablo Sauma, Guillermo Monge Guevara* ----- 43

Aproximación a un índice sintético de pobreza regional. *Mirta Macías Ruano, Luis Reyes Cardona* ----- 85

Diez años de acciones colectivas en Costa Rica. *Sindy Mora Solano* ----- 131

Elecciones de alcaldes municipales 2006 en Costa Rica: muchos los llamados, pocos los concurridos. *Ronald Alfaro Redondo* ----- 169

¿Es posible la cooperación en una comunidad rural que comparte un recurso común? *Roger Madrigal, Francisco Alpízar* ----- 205

Voces Nuevas

Vinculaciones vecinales en el proceso de conformación y disfrute del capital social comunitario. Caso de la comunidad Lagos de Lindora, Santa Ana, Costa Rica.

Ana María Soto Blanco ----- 235

Reseñas

Céspedes, Víctor Hugo y Jiménez, Ronulfo (Editores). 2007

Distribución del Ingreso en Costa Rica:

1988 – 2004. IV Jornada anual de la Academia de Centroamérica.

San José, Costa Rica ----- 273

CAMUS, Manuela (Editora) 2007. *Comunidades en movimiento.*

La migración internacional en el norte de Huehuetenango.

CEDFOG – INCEDES, Guatemala, 223 pp. ----- 277

La política fiscal en la encrucijada. El caso de América Central.

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. ICEFI Guatemala.

2007. 207 pp. ----- 281

Resúmenes/Abstracts ----- 285

Lista de publicaciones de FLACSO-Costa Rica 2008 ----- 295

Lineamientos para autores ----- 297

ENCUENTROS

Refugiados guatemaltecos en cuatro destinos: flujos migratorios y contextos de recepción

Leila Rodríguez¹

La emigración guatemalteca tiene sus raíces tanto en largos procesos de enfrentamiento armado como en el agotamiento del modo de subsistencia tradicional de muchas regiones del país. Los refugiados e inmigrantes salieron del país, y se asentaron en distintos países. México y Belice recibieron el mayor número dada su proximidad geográfica con Guatemala. Otros guatemaltecos continuaron hacia el norte, a los Estados Unidos y Canadá, y otros, en menor número, migraron hacia el sur a Costa Rica. Cada Gobierno y sociedad respondió de forma distinta a la afluencia de guatemaltecos.

En este artículo se presenta un perfil de los guatemaltecos residentes en cuatro países: Belice, México, Estados Unidos, y Costa Rica². Se busca contestar tres preguntas específicas acerca de las comunidades en dichos países:

-
- 1 Candidata a doctorado en Antropología y Demografía por la Universidad Estatal de Pennsylvania, EE. UU. E-mail: lilar@pop.psu.edu.
 - 2 A pesar de que Canadá ha sido un importante país receptor de guatemaltecos, no se incluye en este análisis, dado el limitado acceso a los datos del censo canadiense.

1. ¿Cuáles fueron las políticas hacia los refugiados en cada uno de los países?
2. ¿Cuál es el perfil actual de la población guatemalteca en cada uno de los países?
3. ¿Es su situación resultado de la composición de cada flujo migratorio, o de las políticas de refugiados en cada país?

Primero se presenta un resumen histórico del conflicto en Guatemala, consideraciones teóricas sobre los refugiados, la respuesta política en los cuatro países de recepción, e información obtenida de estudios etnográficos disponibles acerca de las comunidades guatemaltecas en dichos países. Seguidamente, se utilizan datos del censo del año 2000 de cada país para establecer el perfil demográfico y socioeconómico de cada comunidad. Finalmente, se interpretan los perfiles de cada comunidad, con base en la información sociopolítica y etnográfica para discernir si estos son resultado de las características de los guatemaltecos que migraron a cada país, o de los distintos contextos de recepción.

2. Antecedentes históricos de la migración guatemalteca

La emigración a gran escala de guatemaltecos se originó en dos procesos paralelos: la violenta guerra civil presente en el país, y el agotamiento del minifundio como principal medio de subsistencia (CEH). La década de los 80 se conoce como “la década perdida de Centroamérica”, dadas sus recesiones económicas y violento clima político. Durante décadas, conflictos civiles aquejaron la región, particularmente Nicaragua, El Salvador, y Guatemala, y alcanzaron su nivel más alto de violencia en esta década (Loucky y Moors, 2000).

En Guatemala, el colonialismo condujo a un legado de desigualdad extrema con la población mayoritaria indígena viviendo en pobreza (Hanlon *et al.*, 2000), y de polarización económica, social y cultural. La élite gobernante, en cuyas manos se mantuvo el poder económico y político, mantuvo relaciones cercanas con intereses empresariales estadounidenses (en particular lazos con la United Fruit Company). Una década (1944-54) de reforma agraria, laboral y educacional, y una política exterior independentista por parte de Juan

José Arévalo y su sucesor, Jacobo Arbenz, amenazó esos intereses. A finales de 1954, Guatemala contaba con una población de 3 millones de habitantes. El 5% de ellos captaba el 80% de los ingresos, y el 80% de la población captaba el 15% de los ingresos. De las tierras cultivables, el 70% pertenecían a tan solo 2% de la población (Cruz Burguete, 2000). Arbenz fue derrocado por el coronel Castillo Armas, quien era apoyado por la CIA estadounidense (Ferris, 1987). Bajo Castillo se iniciaron décadas de intensos gobiernos militares en Guatemala, y los líderes de oposición fueron eliminados. Las guerrillas se convirtieron en la única forma de disensión viable. El conflicto armado continuó durante la década de los 60, se redujo en los 70, y alcanzó sus niveles más intensos en los 80. El enfrentamiento armado fue multicausal, y en él participaron visiblemente el ejército y la insurgencia, pero también grupos con poder económico, partidos políticos y diversos sectores de la sociedad civil (CEH).

Similares conflictos continuaban en otros países centroamericanos, y el número de desplazados alcanzó entre 2 y 3 millones en la región, de una población total de 20 millones. La mayoría de los refugiados se mantuvieron dentro de la región. Ningún país, aún los que estaban en guerra, fue exento de recibir refugiados (ACNUR, 1988). En Guatemala, la gran mayoría de los refugiados fueron indígenas maya, así como lo fueron poco más del 83% de los heridos y muertos (Hanlon et al., 2000). A finales de los 80, representantes de los Gobiernos centroamericanos se reunieron para buscar pacificar la región. En una de estas reuniones, Esquipulas II en 1988, acordaron convocar una Conferencia Internacional sobre Refugiados en Centroamérica para proponer nuevas soluciones a la situación de los refugiados en la región (ACNUR, 1989). En Guatemala, un acuerdo se firmó en 1996 entre el Gobierno y las guerrillas de izquierda para proteger los derechos de los indígenas, concluyendo con eso oficialmente el conflicto. El saldo de la guerra fue, de una población total de 10,5 millones de personas, 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 440 aldeas arrasadas, 6.000 viudas, y 12.500 niños huérfanos (Cruz Burguete, 2000).

3. Refugiados y el Estado

La naturaleza del éxodo centroamericano dificulta su análisis, pues es difícil diferenciar entre emigrantes cuya principal motivación para salir del país fueron cambios en la economía de subsistencia y refugiados políticos en esta población. Los movimientos de refugiados fueron generados por conflictos políticos que a la vez fueron resultado de las desigualdades económicas que llevaron a algunos a emigrar y otros a luchar (Hamilton y Stoltz Chinchilla, 1991).

Antes de analizar las políticas de refugiados que definió cada país, cabe discutir, a modo de marco teórico, los conceptos de refugiados y asilados, y su relación con los modernos Estados-naciones. La validez de la distinción entre refugiados e inmigrantes ha sido cuestionada por algunos científicos sociales. En este artículo se evidencia cómo la salida de los refugiados se debe a cambios en el Estado-nación, no simplemente en los mercados laborales, y cómo el Estado receptor desempeña un papel más directo en la adaptación de los refugiados que de los inmigrantes (Hein, 1993).

Según la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas, un refugiado es una persona que “(...) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales temores, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” (Naciones Unidas, 1951).

Esta definición no toma en cuenta la distinción entre refugiado y asilado que definen las leyes migratorias de muchos Gobiernos. En los Estados Unidos, por ejemplo, un refugiado es una persona que pide amparo fuera de los Estados Unidos, comúnmente en la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Un asilado, en cambio, es aquella persona que se encuentra dentro de los Estados Unidos y pide asilo directamente al Gobierno para no regresar a su país. Si bien esta

distinción presenta diferentes obstáculos para quienes busquen huir de su país, y requiere distintos documentos de su parte, su relación con los Estado-naciones es la misma (CEH).

Esta relación se inicia con la cuestión de por qué debe un Estado ayudar a los refugiados. Carens (1991) define tres razones. Primero, existen con frecuencia conexiones causales entre ciertos Estados y ciertos grupos de refugiados. Cuando un Estado genera refugiados, es porque ha instigado la persecución de un grupo de personas, o ha sido incapaz de ayudar o no ha estado dispuesto a ello. En este caso, es la obligación del Estado a ayudar a los refugiados a encontrar asilo. Otra instancia se da cuando las políticas y acciones de un Estado hacia otro pueden ser directamente responsables por la creación de refugiados en este. En el caso de los cuatro países receptores analizados en este artículo, esta situación es aplicable a los Estados Unidos, cuya influencia en los conflictos centroamericanos agravó la situación y contribuyó a generar refugiados.

Un segundo argumento sobre la obligación de los Estados de ayudar a los refugiados es moral y humanitario. Aun cuando no existe ninguna conexión entre un Estado y los refugiados, los Estados son organizaciones políticas colectivas de los seres humanos, y como tales deben responder a las necesidades de otros seres humanos (Carens, 1991).

La tercera razón alude a la legitimidad moral de sistema de Estados-naciones, la cual depende de la provisión de membrecía y protección a sus ciudadanos. Los refugiados son huérfanos o víctimas de abuso del sistema de Estado-naciones. Su existencia delata el fracaso de su estado de origen, pero también delata el fracaso del sistema de dividir al mundo en Estados independientes y soberanos, y de asignar a las personas a uno de ellos según su nacimiento (Carens, 1991). La disfunción del sistema surge de la inhabilidad de los Estados de manejar el conflicto y controlar la violencia (Nef y DaSilva, 1991). La existencia de los Estado-naciones no es natural. Son instituciones sociales creadas por los seres humanos, y por lo tanto imperfectas. Sin embargo, para justificar tal sistema de división mundial, debe haber un mecanismo de reparación: cuando un Estado fracasa a tal grado que produce refugiados, otros Estados deberán recibirlos.

A pesar de los previos argumentos de la obligación de los Estados de ayudar a los refugiados, con frecuencia las políticas de refugiados son dictadas por los intereses domésticos y de política exterior, y afectadas por incentivos y sugerencias provenientes de instituciones internacionales que promueven normas comunes en todo país (Hartigan, 1992). Los cambios en las políticas reflejan conflictos entre grupos domésticos que se benefician de o apoyan a los refugiados y los que no (Hamilton y Stoltz Chinchilla, 1991), e instituciones internacionales, en particular el ACNUR.

4. Contexto sociopolítico de recepción a los refugiados

En esta sección se analizarán las políticas de refugiados que formularon Costa Rica, Estados Unidos, México y Belice, que afectaron la situación de los guatemaltecos. Se analizará el contexto sociopolítico de dichas políticas, el papel desempeñado por el ACNUR y la eficacia con que se implementaron las políticas.

4.1 Costa Rica

Costa Rica gozaba de una reputación de ser un país con una política abierta hacia los refugiados. Sin embargo, el país solamente había recibido un pequeño número de refugiados intelectuales previamente, y no se había enfrentado con un flujo masivo de refugiados con bajos niveles educativos hasta la década de 1980 (Larson, 1992). Para 1990, el país, que en ese momento tenía una población de 3 millones de personas, había recibido a unos 50.000 refugiados. La gran mayoría de estos refugiados provenía de Nicaragua, y un grupo menor de El Salvador y Guatemala (Wiley, 1995).

En la década de los 80, el Gobierno costarricense trataba de manera distinta a los refugiados según el país de origen y las condiciones económicas nacionales, los intereses de política externa, preocupaciones sobre seguridad nacional y opinión pública (Basok, 1990). Durante esa década, los países centroamericanos, incluyendo Costa Rica, enfrentaron graves crisis económicas: exorbitantes deudas externas, acumulación de ingresos por una minoría,

disminución en el comercio, reducción de producción, y pobreza (Mármora, 1988). Además, el país se encontró bajo fuertes presiones por parte de la administración Reagan para que adecuara su política de refugiados a la política externa de los Estados Unidos (Aguayo, 1985), que en ese tiempo se centraba en la lucha anticomunista de la Guerra Fría. Por estas razones, y la creciente xenofobia dentro del país, las políticas hacia los refugiados se tornaron progresivamente más severas y restrictivas conforme avanzó la década y cambiaron las administraciones (Ferris, 1987; Larson, 1992).

En 1980, el gobierno del presidente Carazo creó la Comisión Nacional para Refugiados (CONAPARE) y el Consejo Nacional de Migración (CNM). CONAPARE estaba a cargo de coordinar los esfuerzos de las organizaciones internacionales que ya trabajaban dentro del país. Esta comisión contaba con representantes de la Oficina de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, organizaciones no gubernamentales (ONG), ACNUR, Cruz Roja, y representantes del sector privado según nombrados por el Presidente. El CNM estaba a cargo de determinar la condición de refugiados. Para este fin, quienes solicitaban condición de refugiados debían presentar su cédula de identidad, pasaporte y un documento de la policía de su país de origen, que avalara la buena conducta (por ejemplo, la hoja de delincuencia). Este último documento es sumamente difícil de conseguir para personas que huyen de su país en condición de refugiados, y evidencia el intento por parte del Gobierno costarricense de disminuir el ingreso de refugiados (Larson, 1992).

Para 1981 se les requería a los refugiados presentar un comprobante de solvencia económica dentro de Costa Rica. Un año después se incrementó el número de representantes en CONAPARE para incluir al Ministerio de Justicia (cuyo representante presidiría la comisión), el Ministerio de Gobernación y Policía, y el Ministerio de Seguridad Pública (Larson, 1992). La inclusión de estos ministerios inicia el proceso de definición del asunto de refugiados como un problema de seguridad nacional y no solamente de derechos humanos.

Este cambio en enfoque fue aumentado por el gobierno del presidente Monge, quien en 1982 creó el Consejo de Seguridad

Nacional (CSN) y cambió drásticamente la política de refugiados. El derecho de los refugiados al empleo fue limitado para proteger a los ciudadanos del desplazamiento laboral. Los refugiados podían ahora solamente trabajar en el empleo para el cual habían obtenido permiso. De nuevo se incrementaron los representantes a CONAPARE para incluir al Ministerio de Planificación, Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA, y la Cruz Roja Costarricense. También se incrementaron de nuevo los documentos necesarios para obtener condición de refugiado: un tiquete de regreso al país de origen y prueba de tuberculosis (Larson, 1992). De mayor importancia fue la eliminación del derecho del ACNUR al voto en la comisión, aunque se le mantuvo el derecho de voz. Esto evidencia la decisión del Gobierno de reducir el papel del ACNUR, quien abogaba por los derechos de los refugiados, y darle control al Estado sobre la integración de estos, al reconocer que era una situación de largo plazo.

A mediados de 1985 se establecen dos organizaciones nuevas, con el fin de “(...) crear mecanismos de cohesión y eficacia que fortalezcan las acciones de las autoridades nacionales en el campo de refugiados y que permitan la canalización de recursos internacionales” (Larson, 1992:335³). Estas nuevas instituciones son el Consejo Nacional de Refugiados (CNR), encargado desarrollar las políticas para asistir y proteger los refugiados, y la Dirección General para Protección y Asistencia a Refugiados (DIGEPARE), encargada de coordinar entre las distintas organizaciones de refugiados. A finales de ese año se destaca la compleja burocracia en torno a los refugiados. Un nuevo decreto laboral dificulta gravemente la posibilidad de los refugiados de obtener empleo legalmente. Primero, la solicitud de empleo por parte del refugiado debía portar la firma del interesado y de un representante del ACNUR, ambas autenticadas por un abogado; el contrato laboral o una carta por parte del futuro empleador que incluyera la oferta de salario, descripción del trabajo, y horario; y copia del registro y licencia del negocio en caso de serlo. Segundo, el solicitante debía presentar un análisis para el cual debía

3 Traducción propia.

pedir al potencial empleador una descripción del trabajo y del negocio, la planilla, incluyendo los gastos y ganancias del negocio, y una lista de todos los empleados, sus cédulas de identidad y sueldos (Larson, 1992).

Para aquellos refugiados que lograban preparar todos los documentos, el proceso podía tardar hasta seis meses, y los permisos debían renovarse cada seis meses. Sobra decir que pocos empleadores se esperaban seis meses para poder llenar el puesto. Si un refugiado quería ser jefe propio, el proceso era aún más lento, ya que incluía un estudio por parte de un funcionario público del barrio donde residía el refugiado, para asegurarse de que su negocio no compitiera con similares negocios costarricenses. Las restricciones para obtener condición de refugiado causaron una gran población de indocumentados en el país, que legalmente tenían aún acceso a servicios de salud y educación. La falta del Gobierno en cuanto a discernir entre refugiados e indocumentados causó que ambas categorías se confluyeran entre la sociedad costarricense, lo que incrementó la negatividad hacia los refugiados (Wiley, 1995).

El próximo gobierno trajo consigo pocos cambios a las políticas de refugiados. El presidente Óscar Arias (1986-1990) se enfocó en el proceso de paz regional, por el cual ganó el premio Nobel. Durante su presidencia, el Gobierno aceptó que los refugiados se quedarían a largo plazo o de manera permanente en el país, e incrementó sus esfuerzos por integrarlos a la sociedad costarricense para que fueran una menor carga social (Larson, 1992).

4.2 Estados Unidos

En Estados Unidos, las políticas sobre los inmigrantes se han formulado tradicionalmente en torno a preocupaciones económicas y presiones domésticas, pero sus políticas hacia los refugiados se han formulado en relación con su política exterior (McBride, 1999). En el caso de Guatemala, el apoyo del Gobierno estadounidense al régimen dictador en Guatemala resultó en que a los guatemaltecos que arribaron a este país no se les reconociera su condición de refugiados.

En 1980, a finales de la Administración Carter, el país estableció el Acta de Refugiados, donde estableció una política federal

humanitaria de refugiados, el derecho al asilo en la ley estadounidense, e institucionalizó la asistencia de repatriación de refugiados (la cual sería pagada en parte por el Gobierno federal). Esta política elevó la ley estadounidense a los estándares internacionales (Gzech, 2006). Sin embargo, una de sus principales provisiones, la aceptación ideológicamente neutral de refugiados, nunca fue implementada. El ingreso de refugiados siempre fue afectado por las exigencias de la política exterior, presión pública y restricciones de presupuesto (Zucker y Flint Zucker, 1991).

El apoyo de la Administración Reagan (iniciada en 1981) a los gobiernos militares de El Salvador y Guatemala causó que no se les reconociera como refugiados, al contrario de los nicaragüenses que inmigraron durante el régimen comunista en Nicaragua (Ferris, 1987; McBride, 1999). Entre 1984 y 1990, Estados Unidos otorgó asilo al 25% de los solicitantes nicaragüenses, pero solamente al 2,6% de los salvadoreños y 1,8% de los guatemaltecos (Gzech 2006). A pesar de esto, se calcula que entre 1981 y 1990 ingresó un millón de salvadoreños y guatemaltecos al país. Miles fueron deportados en las fronteras y no se les permitió servicios legales ni se les informó de su derecho a solicitar asilo.

También existía una política de detención, en campamentos de carpas, hoteles, u otros lugares. Bajo detención, se les rechazaba la condición de refugiados, se negaban las visitas de familiares, y se limitaba el acceso a la comunicación telefónica o por carta. El objetivo era que la encarcelación, particularmente si es prolongada y en condiciones difíciles, provocara que la persona retornara a su país de origen y motivara a los demás a migrar a otro lugar (Helton, 1991). Las leyes migratorias permitían al Fiscal General del Estado y a oficiales de migración proveer permisos de trabajo y condiciones de detención a su discreción. Jueces recibían cartas para cada refugiado por parte del Departamento de Estado con su opinión acerca de cada solicitud de asilo (Gzech, 2006).

Varios sectores de la sociedad estadounidense desafiaron a su Gobierno y trabajaron a favor de los refugiados, así como lo hicieron los refugiados mismos que ya estaban establecidos. Un grupo de iglesias conformó el Movimiento de Santuario, que a mediados de la década de 1980 contaba con 150 congregaciones que auspiciaban a

los que se encontraban ilegalmente en el país. Más de 1.000 sinagogas y otras organizaciones religiosas los apoyaron. Abogados defendían casos individuales o formulaban acciones de clase. Los refugiados mismos formaron organizaciones de asistencia mutua, muchas de las cuales siguen funcionando en el presente (Gzech, 2006). Una acción de clase en contra del Gobierno por tratamiento discriminatorio de las demandas de asilo de los salvadoreños y guatemaltecos logró que a los guatemaltecos presentes en el país antes de 1990 se les otorgara una nueva entrevista (Davy, 2006).

4.3 México

México, al igual que Costa Rica, gozaba de una reputación de brindar asilo a refugiados, si bien estos habían sido históricamente pequeñas élites intelectuales (ACNUR, 1986). La llegada de guatemaltecos marcó la primera ocasión en que el país se vio inundado de grandes masas de refugiados empobrecidos. México también funcionó como país de tránsito para los refugiados que buscaban llegar hasta los Estados Unidos (Castillo, 2006). Al igual que Estados Unidos, el Gobierno mexicano no reconocía a los guatemaltecos como refugiados ya que buscaba buenas relaciones con el Gobierno guatemalteco. Asimismo, al igual que para los países centroamericanos, la década de 1980 fue una época de graves problemas económicos para México, incluyendo la caída en el precio del petróleo y el aumento de la deuda externa.

La respuesta inicial del Gobierno mexicano fue deportar a los refugiados, en particular de la región de Chiapas. Sin embargo, hacia finales de los 80 el país protegía a aproximadamente 50.000 refugiados, de unos 200.000 guatemaltecos que se calcula ingresaron en el país (Castillo 2006). Durante esa década no cambiaron los intereses domésticos del país, pero sí evolucionó la intervención del ACNUR (Hartigan, 1992). Las deportaciones masivas iniciales resultaron en protestas por parte de miembros de la Iglesia Católica y la comunidad de derechos humanos. Asimismo, las deportaciones en sí fracasaron, ya que no podían mantenerse al paso de la afluencia de refugiados. Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano no podía controlar el creciente número de organizaciones de ayuda a

refugiados. La intervención del ACNUR se tornó una opción viable para México, ya que proveía un modelo legal, recursos financieros y personal capacitado, además de legitimación a escala internacional. La otra alternativa, reproducir las políticas estadounidenses de detención y deportación, era imposible porque México no contaba con los recursos necesarios para poder implementarlas. Además, se creía inicialmente que el problema de los refugiados sería transitorio (Hartigan, 1992).

La protección internacional de refugiados se basa, principalmente, en dos instrumentos: la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951, y el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1967 (Durieux, 1992). La principal norma de estos acuerdos es la práctica de *non-refoulement*, o la prohibición en contra de forzar la repatriación de los refugiados. Otras normas incluyen criterios para establecer el estatus de refugiados, y derechos a la protección física y otros servicios.

El ACNUR consiguió fácilmente que el Gobierno mexicano se comprometiera con la política de *non-refoulement*. Sin embargo, la repatriación voluntaria inició desde 1986, pero con poco éxito. Eventualmente, un convenio tripartito llevó a un acuerdo entre México, Guatemala, y el ACNUR a la repatriación voluntaria. Entre 1993 y 1999 regresaron unos 46.000 refugiados (Castillo 2006). No obstante, ocasionales intentos de secuestrar y deportar a los refugiados continuaron por parte de oficiales (Hartigan 1992).

Con el tiempo, el Gobierno mexicano empezó a cuestionar el beneficio de proteger a los refugiados y la pérdida de soberanía que conlleva la protección internacional de refugiados. Incapaz de revocar la condición de refugiado, el Gobierno mexicano buscó reducir el número de nuevos refugiados, colocando severas restricciones geográficas al ACNUR: este solo podía operar en Chiapas y desde una pequeña oficina en el Distrito Federal. En respuesta, el ACNUR se enfocó más en proteger a los refugiados a los que tenía acceso que en aumentar sus operaciones. A mediados de los 1980, muchos refugiados seguían siendo deportados, explotados o matados (Hartigan, 1992).

El ACNUR encontró a aliados dentro del Gobierno mexicano que respondieron a los incentivos financieros y políticos ofrecidos, y que

trabajaron al lado del ACNUR. Algunos funcionarios tenían preocupaciones por la imagen internacional de México. El ACNUR también fortaleció la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En 1981 asumió control del presupuesto de la Comisión y la expandió. Mientras que militares y oficiales de migración enmarcaban la política de refugiados en términos de la seguridad nacional, algunos miembros del cuerpo diplomático se unieron a COMAR para re-enmarcar el asunto en términos de derechos humanos (Hartigan, 1992).

A finales de los 80, el gobierno del presidente Salinas de Gortari resaltó el tema de los derechos humanos, al cual unió el asunto de los refugiados. Por primera vez se redactaron leyes específicas al tema de refugiados, aunque, de manera indirecta, incorporándolas a la Ley General de Población previamente existente. Una vez que México estipuló sobre la condición de refugiados en sus leyes domésticas, se vio obligado ratificar leyes internacionales (Durieux, 1992). Debido a que el asunto de los refugiados se manejó de forma general, por medio de la Ley General de Población, muchos detalles críticos, como la determinación de la condición de refugiados, fueron definidos por regulaciones administrativas, fuera del debate público.

En 1989, la COMAR instó a la expansión de su cobertura y por extensión la del ACNUR, organización que continuó influyendo en el asunto de los refugiados en México a pesar de sus restricciones (Hartigan, 1992). A mediados de los 90, se implementó un programa de estabilización migratoria para los 22.000 refugiados que se quedaron en México. Muchos tenían hijos nacidos en México y su naturalización fue el primer paso para su integración. Varios de los campamentos de refugiados habían adquirido sus propios sistemas de organización, incluyendo conexiones directas con el Gobierno federal y organizaciones civiles e internacionales. Al crecer se fueron convirtiendo en aldeas, y su sistema de organización fue incorporado a los sistemas político-administrativos de los municipios donde se localizaban (Castillo, 2006).

4.4 Belice

Finalmente, Belice también fue receptor de refugiados guatemaltecos, a pesar de su relación conflictiva con el país, dados los reclamos territoriales de Guatemala (Ferris, 1987). Los campesinos guatemaltecos históricamente han migrado a Belice en busca de trabajo. De hecho, la región fronteriza con Guatemala comparte una población maya. Sin embargo, la identidad beliceña se encuentra enmarcada en la cultura creole (Everitt, 1984), una mezcla africana, angloeuropea, hispana y amerindia. El país cuenta con una población autóctona maya, la cual se ha visto históricamente subordinada. Considerados como marginales en las políticas nacionales, son agrupados junto con los descendientes de los españoles y vistos como no creoles (Stone, 2000).

En la década de los 80, Belice también se encontraba abrumado por problemas económicos internos, y vaciló entre aceptar a los refugiados y cerrar sus fronteras (Aguayo, 1985). En general, el Gobierno beliceño respondió generosamente al ingreso de refugiados, ya que por mucho tiempo fomentó políticas de inmigración, en particular cuando era territorio británico y ese Gobierno lo clasificaba de subpoblado (Everitt, 1984). Al mismo tiempo, existía entre la población y el Gobierno temor a que la inmigración descontrolada afectara la composición étnica interna.

Los guatemaltecos que llegaban a Belice pertenecían a dos grupos: indígenas mayas kekchí, y mayas mopán y mestizos. El Gobierno promovió el asentamiento de los maya kekchí para aumentar la base agrícola del país y para dar más peso a su posición sobre los territorios disputados con Guatemala. La presencia de estos causó pocos problemas entre la población beliceña. Los demás guatemaltecos, sin embargo, se asentaron en otras regiones de Belice y causaron reacciones adversas en la población nacional, particularmente los creoles de habla inglesa (Everitt, 1984). No obstante, el país no contaba con estaciones de detención; los refugiados tenían libertad de viajar por todo el país y acceso a servicios médicos y educacionales; además, podían ser contratados libremente para el empleo (Palacio, 1988).

Los refugiados eran asistidos por el ACNUR, pero a mediados de los 80 ya se iba incrementando la tensión entre el Gobierno, presionado a mantener la identidad étnica del país, y el ACNUR, que abogaba por la entrada de refugiados. En 1984, el Gobierno anunció un período de amnistía para los extranjeros ilegales (Palacio, 1988). Eventualmente, el Gobierno beliceño colocó restricciones a la migración para disminuir la diversidad étnica en el país, acción que fue condenada por el ACNUR, que la calificó de degradante para el país (Payne, 1990).

En 1989, el Partido Unido del Pueblo se distanció de las administraciones previas y reconoció que la composición étnica del país estaba cambiando, y fomentó el multiculturalismo como un valor nacional (Durieux, 1992). Al igual que México, Belice no contaba con leyes específicas sobre refugiados, pero, al contrario de México, el primer paso del Gobierno beliceño fue acceder el Convenio y Protocolo de las Naciones Unidas, y posteriormente redactar leyes nacionales. También, al contrario de México, Belice no enmendó leyes existentes, tales como la Ordenanza de Migración de 1950, porque el Gobierno buscó deliberadamente la formulación de un Acta de Refugiados separada. Esta acción resultó útil en el ambiente de debates sobre la migración, ya que buscaba separar el asunto de los refugiados (Durieux, 1992).

El ACNUR proporcionó el contenido para la ley doméstica: la incorporación del contenido del Convenio y Protocolo en la ordenanza legal beliceña; la identificación de potenciales conflictos entre esas estipulaciones y previas leyes domésticas; y la estipulación de contenido concreto a artículos del Convenio redactados de manera general (Durieux, 1992). Debido al papel del ACNUR, el Acta de Refugiados beliceña incorpora el Convenio y Protocolo de manera más extensa que el decreto mexicano, en particular con respecto a las normas de determinación de condición de refugiados.

En resumen, las políticas estadounidenses hacia los refugiados fueron las más restrictivas; estas respondieron, ilegalmente, a intereses de su política exterior durante la Guerra Fría. En Costa Rica, las políticas se fueron haciendo progresivamente más restrictivas, y respondieron en parte a problemas económicos domésticos, y en parte a presiones del Gobierno estadounidense.

Según Aguayo (1985), la política costarricense en texto era similar a la estadounidense, pero en práctica era un poco más tolerante. México inició fuertes restricciones y deportaciones hacia los refugiados, luego se hizo más tolerante por la intervención del ACNUR, y después buscó de nuevo restringir el acceso de los refugiados al país. Sus políticas respondieron a asuntos domésticos principalmente. Ferris (1987) explica que las políticas mexicanas de refugiados centroamericanos fue ignorarlos lo más posible, deportarlos secretamente cuando fuese viable, tolerar su presencia la mayor parte del tiempo, y disuadir a nuevos refugiados de que llegaran. Por su parte, Belice tuvo las políticas más abiertas de los países analizados aquí, y sus restricciones se debieron principalmente a asuntos internos, en particular preocupaciones por cambios en la identidad nacional creole.

El ACNUR tuvo un papel minoritario en las políticas de refugiados estadounidenses, sirviendo principalmente como defensor de los refugiados. En Costa Rica, su papel fue similarmente limitado por el Gobierno, particularmente al quitarle el voto en la Comisión sobre Asuntos de Refugiados de la cual era miembro. En México, el ACNUR proporcionó apoyo legal, logístico y financiero cuando al país se le dificultaba el control de los refugiados. Sin embargo, el Gobierno buscó limitar su poder al restringir su cobertura geográfica, pero el ACNUR consiguió aliados dentro del propio Gobierno y continuó ejerciendo un papel importante. En Belice, el ACNUR proporcionaba protección a los refugiados, y a finales de los 80 desempeñó un papel central en la redacción de leyes domésticas específicas para los refugiados.

Estados Unidos mantuvo un estricto control sobre el ingreso de refugiados, al seleccionar a cuáles países de origen les otorgaba tal condición, y fomentar deportaciones y detenciones en las fronteras y dentro del país. La población actual guatemalteca en ese país es amplia, y no muestra señales de disminuirse en un futuro próximo. México logró un acuerdo de repatriación voluntaria, e incorporó a los restantes. Belice redefinió su carácter étnico nacional y redefinió sus políticas de refugiados. Finalmente, el número de refugiados en Costa Rica fue menor, y fue menos afectado por las restricciones legales y laborales que fueron redactadas con la población nicaragüense en mente.

Los refugiados guatemaltecos enfrentaron y continúan enfrentando numerosos retos para ajustarse a sus sociedades de recepción. Para la mayoría de ellos, indígenas maya de zonas rurales, la vida urbana los enfrenta con nuevos productos, nuevos trabajos y nuevos patrones de vida (Hernández Ixcoy, 2000). En Estados Unidos, por ejemplo, los trabajos realizados por guatemaltecos varían desde la industria textil (Loucky, 2000), trabajo agrícola en fincas cítricas y tomateras (Camposeco, 2000), y trabajo industrial en fábricas de pollo (Fink y Dunn, 2000). Es común que se encuentren viviendo en condiciones de hacinamiento (Loucky, 2000), y a veces los jóvenes enfrentan problemas de drogas (Hernández Ixcoy, 2000).

Distintos estudios etnográficos destacan que los guatemaltecos también se enfrentan con problemas de identidad. Camposeco (2000) explica cómo los guatemaltecos en Florida eran principalmente refugiados maya que fundamentaban, con poco éxito, sus solicitudes de asilo al Gobierno estadounidense en la discriminación racial y cultural que sufrían en Guatemala. Las olas más recientes de guatemaltecos incluyen refugiados ladinos quienes ponen en cuestión esos reclamos para poder hacer también sus solicitudes de asilo, y acusan a los mayas de racismo. También los presionan para que adopten una identidad nacional guatemalteca. Los refugiados no podían reproducir sus tejidos en los campos de refugiados, y al desgastarse su ropa tradicional (*huipiles*) utilizaban ropa occidental. Los colores de ropa tradicional indicaba a cuál grupo pertenecían y su estatus social, y algunos se quejaban de que sus hijos no entenderían de qué grupo son ni de dónde provendrían sus futuras esposas (ACNUR, 1984). En la Ciudad de México, muchos de los indígenas maya se instalaron en barrios populares donde intentan borrar señas de su identidad maya, y aparentan ser indígenas mexicanos de Oaxaca o Chiapas, para evitar ser expuestos a extorsión y persecución política (Hernández Ixcoy, 2000; González Ponciano, 2001).

A pesar de estos problemas, la experiencia de la guerra ha preparado a los guatemaltecos para enfrentar conflictos laborales y barrios peligrosos (Fink y Dunn, 2000; Loucky, 2000; Rodríguez y Hagan, 2000). Sus valores laborales, estructuras familiares y redes e instituciones sociales les ha permitido adaptarse mejor que otros

centroamericanos (Loucky, 2000; Rodríguez y Hagan, 2000), e irónicamente, a pesar de ser originarios de zonas rurales, estas instituciones también les ha permitido adaptarse mejor a las metrópolis norteamericanas que muchos ladinos originarios de zonas urbanas en Guatemala (Rodríguez, 1987). Las comunidades maya en Estados Unidos cuentan con numerosas iglesias, clubes de fútbol y asociaciones de recaudaciones de fondos (Rodríguez y Hagan, 2000; Hagan y Ebaugh, 2003).

5. Datos y metodología

Los datos utilizados para el análisis provienen del censo realizado en el año 2000 en los cuatro países receptores de interés: Costa Rica, México, Estados Unidos y Belice. Los censos de Costa Rica, México y Estados Unidos⁴ fueron consultados mediante el proyecto de Muestra Internacional de Microdatos de Uso Público (IPUMS, por sus siglas en inglés) del Minnesota Population Center (2007), y consisten en muestras del 10%, 10,6%, y 5%, respectivamente. El censo de Belice fue consultado mediante la base de datos del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (2007) y consta del censo completo.

Para el análisis se seleccionaron únicamente variables que podían ser comparadas en los cuatro países. El número reducido de variables disponibles dificulta el análisis, pero fue necesario utilizar un número reducido para poder establecer comparaciones entre los cuatro países receptores. Edad y sexo de la persona se mantuvieron en su forma original. Se construyó una variable para época u ola migratoria: “guerra” incluye a aquellos guatemaltecos que reportan haber migrado al país de residencia antes de 1996 (cuando oficialmente concluye la guerra civil); “posguerra” reúne a aquellos que inmigraron en 1996 o posteriormente. Se reconoce que la categoría “guerra” incluye personas que migraron antes de 1960 (inicio de la

4 El censo costarricense es realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; el mexicano por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el de Belice por la Belize Central Statistical Office, y el estadounidense por el United States Census Bureau.

guerra civil) pero estas son pocas y no influyeron los resultados por lo que se mantuvieron en esa categoría. Este grupo también combina dos tipos de personas: aquellas que migraron durante la época más intensa del conflicto armado, y aquellos que emigraron durante las épocas más fuertes de la crisis económica. No es posible hacer esta distinción con los datos disponibles, pero las políticas de cada país los afectó de manera similar en su arribo.

También se utilizaron dos variables educacionales. Una mide el nivel educativo más alto completado por los adultos mayores de 18 años. Para Costa Rica, México y Estados Unidos, se mantuvo una variable codificada en cuatro niveles: educación menor a primaria, primaria completa, secundaria completa y universidad completa. Para Belice, se utilizó una variable codificada similarmente, pero se combinaron la categoría de secundaria y postsecundaria en una sola. La segunda variable mide si los menores de 18 años están matriculados en la escuela. Para Costa Rica, México y Estados Unidos, se combinaron las categorías “no pero lo estuvo anteriormente”, “no, nunca”, y “no” en una sola para que esta variable fuera compatible con la categorización beliceña: sí y no.

Finalmente, se utilizaron dos variables como indicadores socioeconómicos: tenencia de la vivienda, y tipo de empleo realizado, ambas para adultos mayores de 18 años. Para los cuatro países se condensaron las categorías de tenencia de vivienda en tres: casa propia, de alquiler, u otra. La categoría “otra” incluye principalmente a ocupantes ilegales o precaristas. En cuanto a tipo de empleo, para Costa Rica, México y Estados Unidos, se utilizó la variable previamente codificada como asalariado, jefe propio y empleado sin pago. Para Belice se condensó una variable con categorías más específicas para que calzara con los demás países.

Para los análisis, primero se establece el patrón migratorio de guatemaltecos a cada país, y luego su perfil demográfico. Seguidamente, se compara la población guatemalteca de cada país, y por último, se comparan los guatemaltecos dentro de cada país según su época de migración.

6. Resultados

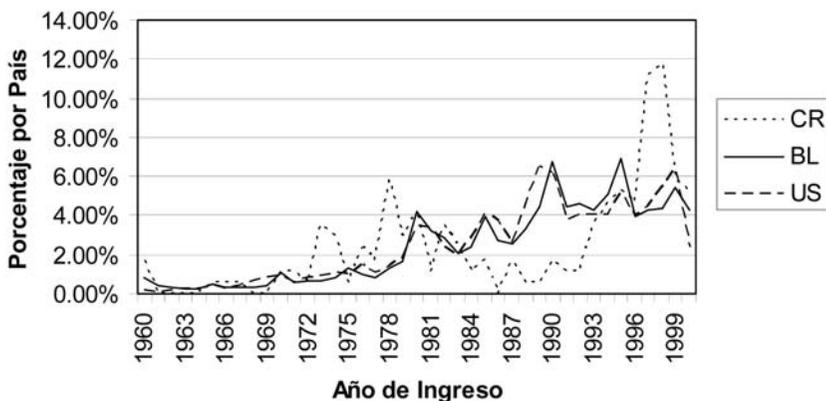
Los países seleccionados para el análisis cuentan con poblaciones guatemaltecas de tamaños muy distintos. Costa Rica es el país con la menor población guatemalteca (2.100), seguida por Belice con 14.693, México con 29.156, y Estados Unidos con la mayor población (487.288).

La figura 1 perfila el porcentaje de la población guatemalteca de cada país por año de ingreso. Esta información se recopiló de la pregunta del censo que pide el año de entrada al país del inmigrante⁵. De esta figura se observa que el patrón en Belice y Estados Unidos es muy similar: cada año ingresó un porcentaje similar de su población total. Costa Rica sigue un patrón muy distinto; de hecho, desde mediados de los 80 a mediados de los 90 los ingresos representan porcentajes bajos de su población total de guatemaltecos, mientras que representan los niveles más altos para Estados Unidos y Belice⁶. Esa década representa la parte más violenta del conflicto, lo cual explica los altos porcentajes que ingresaron en Belice y Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, la baja población guatemalteca indica que el país no fue uno de los principales receptores de refugiados guatemaltecos (el porcentaje más alto arribó después de la guerra) y posiblemente eran un grupo menor en número, pero más selecto en cuanto a nivel socioeconómico.

5 Este dato no está disponible en el censo mexicano.

6 Cabe señalar que los datos para el año 2000 deben ignorarse ya que los censos fueron conducidos ese año y no se registraron todas las personas.

Figura 1:
Ingreso de guatemaltecos por año (1960-1999)



Fuente: Censos 2000

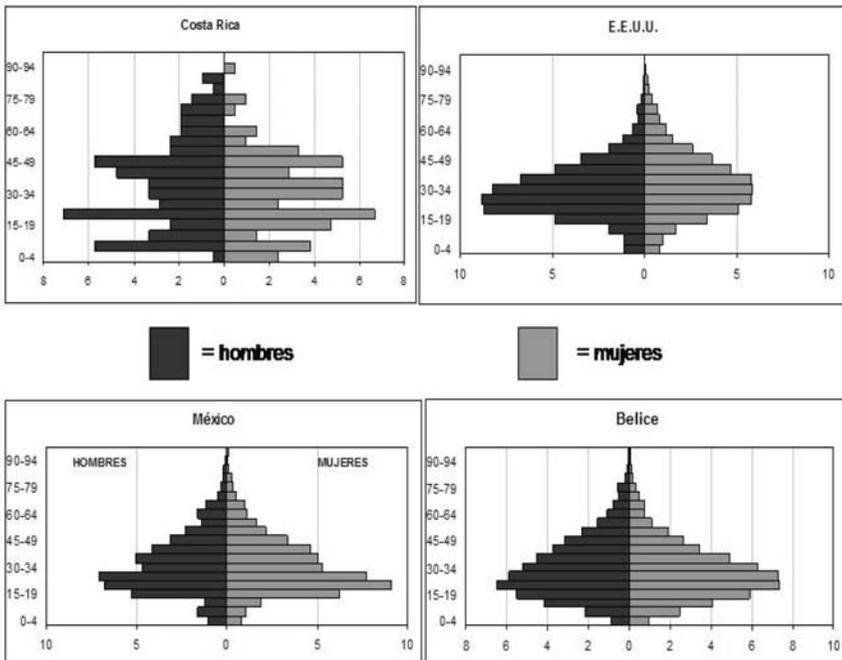
En los cuatro países, la mayoría de los guatemaltecos ingresaron previo a 1996. Esto es esperado ya que esa ola incluye un número mayor de años, en particular los años de guerra. En Belice y México, alrededor del 80% de los guatemaltecos censados ingresaron previo a y durante la guerra. En Estados Unidos lo hicieron el 70%, y en Costa Rica poco más del 60%. Esta diferencia es importante, ya que sugiere que el ingreso de guatemaltecos a estos últimos dos países está aumentando a pesar de no compartir frontera con Guatemala, como lo hacen México y Belice. Es decir, quien está emigrando después de la guerra está buscando tierras más lejanas.

De la población total de guatemaltecos, en Costa Rica 1.700 (81,0%) son adultos mayores a 18 años, porcentaje similar a Belice que reporta 11.683 (79,6%). Estados Unidos y México reportan una población más adulta: 432.609 adultos (88,8%) en Estados Unidos, y 25.522 (88,1%) en México⁷. Esto concuerda con el resultado anterior, ya que si un porcentaje más alto de la población

7 El censo mexicano incluye 180 personas cuyas edades no son reportadas. Éstas no se incluyeron en el cálculo de adultos. De incluirse, el porcentaje de adultos sería 87,5%.

guatemalteca en Estados Unidos y Costa Rica ingresó después de la guerra, esa población tiene menos tiempo en el país, y ha tenido menos años para envejecer. La figura 2 ofrece las pirámides poblacionales para los cuatro países, ilustrando la distribución por sexo y edad.

Figura 2:
Pirámides de población de guatemaltecos
por país de residencia



Fuente: Censos 2000.

Ambos México y Belice tienen una proporción levemente mayor de mujeres, al contrario de Estados Unidos que posee una población guatemalteca mayormente masculina. El proceso migratorio puede ser más riesgoso para una mujer, por lo cual es comprensible que los países fronterizos atraigan a más mujeres. En el caso de Estados Unidos, gran parte de esa población masculina es compuesta por los inmigrantes laborales de posguerra, quienes tienen menor necesidad de inmigrar en familia que los refugiados. La pirámide poblacional de

Costa Rica no presenta ningún patrón evidente. Esto se debe en parte a que la población guatemalteca en este país es mucho más reducida que en los otros tres, lo cual afecta la construcción del gráfico. No obstante, sobresalen poblaciones adultas de edad 50-54, y 20-24.

Las comparaciones entre los cuatro países demuestran más diferencias entre las comunidades guatemaltecas (véase cuadro 1). En todos los países, la mayoría de la población guatemalteca es casada, teniendo México y Belice los porcentajes más altos de casados, 76,9% y 77,2%, respectivamente. Esto concuerda de nuevo con los datos que indican que un porcentaje mayor de guatemaltecos llegó a México y Belice como refugiados que en los otros dos países. Los refugiados tienen más tendencia a emigrar en familia, lo cual explica el porcentaje más alto de casados. Estados Unidos y Costa Rica poseen porcentajes similares de solteros, aproximadamente un tercio de su población. Estados Unidos tiene un porcentaje mucho más alto de divorciados (17,9%) que los demás países cuyos porcentajes de divorciados oscilan entre 0,4 y 4,2%. México posee el porcentaje más alto de viudos (5,3%), aproximadamente el doble que los demás países.

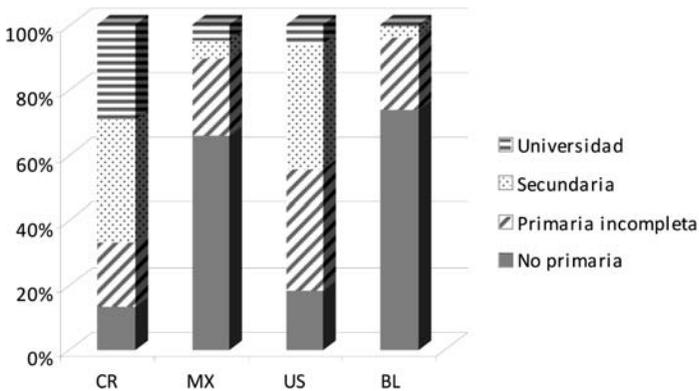
Cuadro 1:
Distribuciones por país de residencia

		Costa Rica	México	Estados Unidos	Belice
Estado Civil	Soltero/a	32,6	14,7	34,5	20,1
	Casado/a	61,1	76,9	44,9	77,2
Civil	Divorciado/a	4,2	3,1	17,9	0,4
	Viudo/a	2,1	5,3	2,6	2,3
Nivel Educativo	Pre-primaria	13,2	65,9	18,0	73,7
	Primaria	20,1	23,8	37,3	22,6
	Secundaria	37,5	5,8	39,1	3,4
	Universidad	29,2	4,6	5,6	0,4
Escolaridad	En la escuela	93,3	33,3	83,8	56,5
	No en la escuela	6,7	66,7	16,2	43,5
Tenencia de Vivienda	Propia	61,2	71,0	31,4	59,2
	Alquila	35,8	29,0	67,7	39,7
	Otra	3,0	0,0	0,9	1,1
Tipo de Empleo	Asalariado	71,4	59,9	91,0	68,4
	Jefe propio	26,2	31,4	8,6	26,2
	Sin pago	2,4	8,6	0,4	5,5

Fuente: Censos 2000.

Las variables educativas demuestran las diferencias más marcadas entre las poblaciones guatemaltecas residentes en cada país. Los guatemaltecos residentes en Costa Rica tienen más educación formal en promedio que los de los demás países; 29,2% poseen como mínimo un título universitario (véase figura 3). Los guatemaltecos en México y Belice presentan un perfil similar, aunque el porcentaje en México con secundaria y universidad completa (5,8% y 4,6% respectivamente) es levemente más alto que en Belice (3,4% y 0,4%).

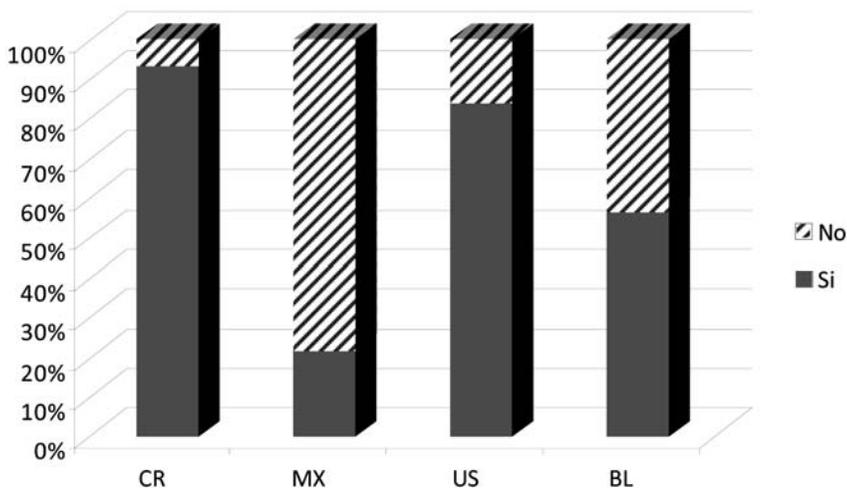
Figura 3:
Distribución por nivel educativo y país de residencia



Fuente: Censos 2000

La escolaridad de los menores de edad refleja un patrón similar (véase figura 4). Costa Rica es el país en el cual la mayoría (93,3%) de la población guatemalteca menor a 18 años está matriculada en la escuela. Le sigue Estados Unidos con un 83,8%, y Belice con un 56,5%. La situación se revierte en México, donde la mayoría de la población menor de edad no asiste a la escuela: tan solo lo hace un tercio de la población.

Figura 4:
Distribución por escolaridad de menores y país de residencia



Fuente: Censos 2000

Finalmente, los indicadores socioeconómicos también evidencian diferencias entre los países, especialmente entre México y Belice que en otros indicadores son similares. En todos los países, excepto los Estados Unidos, la mayoría de los guatemaltecos indicó ser dueños de sus viviendas. México tiene el porcentaje de guatemaltecos con casa propia más alto (71,0%), seguido de Costa Rica (61,2%) y Belice (59,2%). Por el contrario, en Estados Unidos el 67,7% de la población guatemalteca alquila su vivienda, y menos de un tercio son dueños de su vivienda.

En cuanto a tipo de empleo, en los cuatro países la mayoría de los guatemaltecos trabaja como asalariados, aunque el rango varía desde 91% en Estados Unidos, 71,4% en Costa Rica, 68,4% en Belice, a casi el 60% en México. México posee el porcentaje más alto de jefes propios y trabajadores sin pago (31,4% y 8,6%, respectivamente).

Estados Unidos tiene el porcentaje más bajo de jefes propios, tan solo un 8,6%. Ninguno de estos dos indicadores sigue necesariamente el patrón discernido hasta ahora; es decir, las diferencias entre los países con respecto a tenencia de vivienda y tipo de empleo no se adapta a la lógica del argumento de que un porcentaje mayor de los refugiados llegó a México y Belice, y de los inmigrantes posguerra a Estados Unidos y Costa Rica. Por lo tanto, se puede pensar que esto se debe más a condiciones estructurales de cada país que a las características de las distintas olas migratorias.

La segunda parte del análisis compara las distintas épocas de migración (guerra y posguerra) en cada país por separado. El cuadro 2 presenta las diferencias en estado civil según época de migración. En todos los países, los guatemaltecos que migraron durante la guerra poseen un porcentaje mayor de casados. Costa Rica tiene la diferencia más alta (30% más de quienes llegaron durante la guerra están casados que de quienes llegaron luego), seguido por los Estados Unidos con casi el 30% también, y México y Belice con aproximadamente 20% más. Es posible que esta diferencia se deba a que los refugiados migran más en familia, pero también se puede deber simplemente al hecho de que quienes migraron durante la guerra tenían más edad.

Cuadro 2:
Distribución porcentual por estado civil
y época de migración

	Grupo 1: Ingreso previo a 1996				Grupo 2: Ingreso post 1996			
	Solteros	Casados	Divorciados	Viudos	Solteros	Casados	Divorciados	Viudos
CR	22,8	70,3	5,0	2,0	55,8	39,5	2,3	2,3
MX	13,3	78,0	3,2	5,5	25,4	68,4	2,3	3,9
US	30,0	49,9	17,4	2,7	55,9	21,5	20,4	2,2
BL	17,3	78,7	1,8	2,2	38,1	58,8	2,0	1,1

Fuente: Censos 2000

Los países demuestran más diferencias en cuanto a época de migración y nivel educativo (véase cuadro 3). En Costa Rica, la población guatemalteca que arribó durante la guerra tiene un mayor nivel educativo, con un 15% de diferencia entre quienes tienen educación universitaria. La población guatemalteca en Estados Unidos también tiene niveles educativos más altos entre los que migraron durante la guerra, aunque en general tienen niveles educativos menores a los de Costa Rica. Lo contrario sucede en México, cuya población guatemalteca con educación secundaria o universitaria es mayor entre los inmigrantes de posguerra. Finalmente, en Belice prácticamente no hay diferencia entre el nivel educativo de los guatemaltecos según época de migración. Esto se debe probablemente a que quienes lograron hacer el largo viaje a Estados Unidos y Costa Rica durante la guerra eran guatemaltecos con un nivel socioeconómico mayor a quienes cruzaron la frontera hacia México o Belice. En la época de posguerra, los inmigrantes de menor nivel socioeconómico utilizan redes sociales para llegar hasta los países más lejanos, por lo cual el nivel educativo de ese grupo es menor en Estados Unidos y Costa Rica.

Cuadro 3:
Distribución porcentual por nivel educativo
y época de migración

	Grupo 1: Ingreso previo a 1996				Grupo 2: Ingreso post 1996			
	Menor	Primaria	Secundaria	Universidad	Menor	Primaria	Secundaria	Universidad
CR	10,9	20,8	34,7	33,7	18,6	18,6	44,2	18,6
MX	67,9	22,7	5,1	4,3	50,0	32,0	11,2	6,8
US	16,4	36,2	41,6	5,9	25,7	42,5	27,7	4,1
BL	74,2	22,4	3,0	0,3	72,4	23,8	3,1	0,7

Fuente: Censos 2000

La variable de escolaridad según época de migración no refleja el mismo patrón que nivel educativo (véase cuadro 4). En todos los países, un porcentaje mayor de los menores de edad que llegaron durante la guerra están matriculados en escuelas que los que llegaron más recientemente. La diferencia es más marcada en Estados Unidos y Belice, donde de 21 a 24% más de los jóvenes que migraron durante la guerra asisten a la escuela. En México y Costa Rica, la diferencia es de 13% y 11%, respectivamente. Como estas diferencias no reflejan las disparidades en el nivel educativo de los adultos, es posible que se deban a una mayor necesidad de los inmigrantes más recientes a que todos los miembros del hogar busquen empleo.

Cuadro 4:
Distribución porcentual por escolaridad infantil
y época de migración

	Grupo 1: Ingreso previo a 1996		Grupo 2: Ingreso post 1996	
	En la escuela	No en la escuela	En la escuela	No en la escuela
CR	100,0	0,0	89,5	10,5
MX	40,1	59,9	27,6	72,4
US	93,0	7,0	72,7	27,3
BL	63,6	36,4	39,4	60,6

Fuente: Censos 2000

En cuanto a tenencia de vivienda, los cuatro países de nuevo reflejan el mismo patrón: en todos, los guatemaltecos que arribaron durante la guerra tienen porcentajes mayores de dueños de casa (ver cuadro 5). En Costa Rica, México y Belice, la diferencia oscila entre 32 y 38 puntos porcentuales. En Estados Unidos la diferencia es más leve, de 22%. Esto se debe a que en general un porcentaje mucho mayor de los guatemaltecos en este país alquila su vivienda que en los otros tres países. En cualquier caso, es factible que las diferencias según época de migración en todos los países se deba a que los que migraron durante la guerra llevan más años en sus nuevos países de residencia y han tenido más tiempo para ahorrar y comprar su casa propia, o tuvieron acceso a ellas en condición de refugiados.

Cuadro 5:
Distribución porcentual por tenencia de vivienda
y época de migración

	Grupo 1: Ingreso previo a 1996			Grupo 2: Ingreso post 1996		
	Propia	Alquila	Otra	Propia	Alquila	Otra
CR	70,3	25,7	4,0	33,3	66,7	0,0
MX	74,7	25,3	0,0	43,1	56,9	0,0
US	35,3	63,8	0,9	13,4	85,9	0,7
BL	65,3	33,7	1,0	28,6	69,5	1,9

Fuente: Censos 2000

En cuanto a tenencia de vivienda, los cuatro países de nuevo reflejan el mismo patrón: en todos, los guatemaltecos que arribaron durante la guerra tienen porcentajes mayores de dueños de casa (ver cuadro 5). En Costa Rica, México y Belice, la diferencia oscila entre 32 y 38 puntos porcentuales. En Estados Unidos la diferencia es más leve, de 22%. Esto se debe a que en general un porcentaje mucho mayor de los guatemaltecos en este país alquila su vivienda que en los otros tres países. En cualquier caso, es factible que las diferencias según época de migración en todos los países se deba a que los que migraron durante la guerra llevan más años en sus nuevos países de residencia y han tenido más tiempo para ahorrar y comprar su casa propia, o tuvieron acceso a ellas en condición de refugiados.

Cuadro 6:
Distribución porcentual por tenencia de vivienda
y época de migración

	Grupo 1: Ingreso previo a 1996			Grupo 2: Ingreso post 1996		
	Asalariado	Jefe propio	Sin pago	Asalariado	Jefe propio	Sin pago
CR	68,8	31,3	0,0	80,0	10,0	10,0
MX	57,9	32,4	9,7	73,5	25,0	1,5
US	90,3	9,4	0,3	94,1	5,2	0,7
BL	72,6	22,9	4,5	85,9	10,9	3,2

Fuente: Censos 2000

7. Discusión y conclusiones

Un estudio de esta índole se dificulta debido al limitado número de variables disponibles en los censos. No obstante, los datos utilizados aquí poseen ciertas ventajas: provienen del mismo año, contienen variables similares, y aunque no indican el número de refugiados que han retornado a Guatemala, son más confiables que la información recolectada por autoridades migratorias que no capturan el gran número de personas que cruzan por lugares no designados en las fronteras porosas. Discernir cuáles características de las comunidades guatemaltecas son resultado de los perfiles de las personas que migraron hacia cada país, y cuáles son resultado de las políticas que cada Gobierno dictó para los refugiados, es más desafiante. Una variable como el sexo es claramente una característica de la persona. Variables como tipo de empleo, tenencia de vivienda y escolaridad de los menores de edad, tienen un gran componente relacionado con la sociedad de recepción, que puede o no ser afectado por las políticas hacia refugiados. Respecto de dos variables de interés, estado civil y nivel educativo, es imposible discernir de los censos si cambiaron luego del momento de migración, o si las poseían antes de migrar. Para poder realmente analizar el efecto de las políticas de refugiados, se necesitaría saber cuáles personas obtuvieron condición de refugiados y cuáles no. Esta variable no es medida en ninguno de los censos. No obstante estos límites al análisis, comparando los países, la época de migración en cada país y las políticas de refugiados, se pueden definir posibles causas de la situación de las comunidades guatemaltecas residentes en cada país.

Primero, la variable de educación se utilizará como indicativa de escolaridad y tenencia de vivienda. Es decir, se espera que una persona con alto nivel educativo tenga más probabilidad de matricular a sus hijos en escuela y de ser dueña de hogar. El tipo de empleo no se tomará en cuenta para discernir entre efectos del flujo migratorio y efectos de las políticas, ya que no hay conexión lógica entre ninguna. Trabajar como empleado propio puede ocurrir al

cerrarse las puertas del mercado laboral a un inmigrante o refugiado. Pero ser asalariado no se deriva de nivel educativo, ya que un trabajo de asalariado puede ocurrir en los puestos más elevados y los más bajos de la economía.

De los cuatro países, Estados Unidos y Costa Rica mantuvieron las políticas de refugiados más similares, siendo la estadounidense la más restrictiva de todas. Del cuadro 3 sabemos que en promedio los guatemaltecos en Costa Rica tienen niveles educativos mayores a los de los guatemaltecos en Estados Unidos. A lo interno de los dos países, quienes arribaron durante la época de guerra tienen niveles educativos mayores que los de posguerra. Por lo tanto, para ambos, Estados Unidos y Costa Rica, se espera que la población arribada durante la guerra presente también niveles mayores de escolaridad y tenencia propia de vivienda.

Según los cuadros 4 y 5, estas expectativas se cumplen en ambos casos. En Costa Rica, el nivel educativo superior de los refugiados posiblemente los protegió de las restricciones de las políticas que fueron diseñadas con otros refugiados más empobrecidos en mente. En Estados Unidos, la diferencia mayor (20%) en escolaridad guerra-posguerra, comparada con la costarricense (10%) es contraria a lo esperado dada la política restrictiva estadounidense. Es probable que esa brecha se deba a los cambios en la composición de la segunda ola guatemalteca. En cuanto a tenencia propia de vivienda, sí hay una menor brecha entre los guatemaltecos de guerra y posguerra en Estados Unidos que en Costa Rica, la cual sí puede responder a restricciones estructurales enfrentadas por los guatemaltecos que arribaron durante la guerra.

En el caso de México y Belice, ambos países recibieron poblaciones guatemaltecas similares durante la guerra. Sus políticas para refugiados, en cambio, fueron muy distintas, siendo la mexicana más restrictiva que la beliceña, la más abierta de los cuatro países analizados aquí. En México, al contrario de Estados Unidos y Costa Rica, los guatemaltecos de posguerra son quienes poseen un nivel educativo mayor. Por lo tanto, se espera que los guatemaltecos de la ola de guerra tengan niveles de escolaridad y tenencia propia de

vivienda menores que los de posguerra. En Belice, no hay una diferencia significativa en nivel educativo entre los guatemaltecos de los dos grupos, por lo que no se esperan diferencias en escolaridad ni tenencia propia de vivienda.

En el caso de estos dos países, no se cumple ninguna de las expectativas. En México, los menores de edad arribados durante la guerra no tienen niveles más bajos de escolaridad, y en Belice no tienen niveles similares: en ambos países, son los menores de edad arribados en épocas más recientes quienes tienen niveles de escolaridad menores. Esto se puede deber a que no hubo apoyo institucional ni financiero del ACNUR para quien arribara después de la guerra. Alternativamente, la mayoría de los guatemaltecos que migran a sus países vecinos son de zonas rurales y se asientan en zonas agrícolas. Esto explica en parte el bajo nivel de escolaridad general, pero para quienes han inmigrado más recientemente, la necesidad de que los menores de edad contribuyan económicamente puede ser mayor. En cuanto a tenencia propia de vivienda, en México los guatemaltecos arribados durante la guerra no tienen niveles más bajos que los de posguerra; al contrario, la tenencia propia de vivienda en este grupo es mayor. En el caso de Belice, el nivel de tenencia propia de vivienda no se mantuvo similar entre los grupos, también bajó. De nuevo, este escenario, contrario a la lógica, sugiere que en estos países la ayuda a los que arribaron durante la guerra aportó un apoyo que ya no es disponible.

En resumen, el nivel educativo de los guatemaltecos en Costa Rica y Estados Unidos deriva los resultados esperados: el grupo con mayor educación tiene también la escolaridad y tenencia de vivienda mayor. La educación alta de los guatemaltecos en Costa Rica probablemente protegió a quienes llegaron durante la guerra de los aspectos negativos de políticas de refugiados que se hicieron progresivamente más restrictivas. En Estados Unidos, el grupo más educado (guerra) también disfrutó de su ventaja con respecto al de posguerra, pero esta ventaja es menor que entre los guatemaltecos de Costa Rica, lo cual refleja las mayores dificultades que enfrentó ese grupo en el país con las políticas más restrictivas. Es decir, las políticas más restrictivas no eliminaron los efectos de tener la mayor educación promedio, pero parece ser que disminuyeron las ventajas

que provee. En México y Belice, los inmigrantes de posguerra, a pesar de tener igual o mayor educación que su contraparte, se encuentran en desventaja con respecto a escolaridad y tenencia propia de vivienda, por no contar con las políticas e instituciones que apoyaron a quienes llegaron durante la guerra. En particular, la influencia del ACNUR en estos dos países fue mayor que en Costa Rica y Estados Unidos, resaltando la pérdida de quienes llegaron a México y Belice después de la guerra.

Bibliografía

Aguayo, Sergio (1985): *El Éxodo Centroamericano*. (México City, Foro 2000).

ACNUR (1984): "Killing time which kills us", *Refugees*, N.o 6.

ACNUR (1986): "Asylum in Mexico: A proud tradition", *Refugees*, N.o 34.

ACNUR (1988): "Haven for Some", *Refugees*, N.o 53.

ACNUR (1989): "CIREFCA: an essential step forward", *Refugees*, N.o 62.

Basok, Tanya (1990): "Welcome Some and Reject Others: Constraints and Interests Influencing Costa Rican Policies on Refugees", *International Migration Review* Vol. XXIV, N.o 4.

Camposeco, Gerónimo (2000): A Maya Voice: The Refugees in Indiantown, Florida, en J. Loucky y M. M. Moors (eds.): *The Maya Diaspora: Guatemalan Roots, New American Lives* (Philadelphia, Temple University Press).

Carens, Joseph H. (1991): States and Refugees: A Normative Analysis, en H. Adelman: *Refugee Policy: Canada and the United States* (Toronto, York Lanes Press).

Castillo, Manuel Ángel (2006): "Mexico: Caught between Central America and the United States". *Migration Information Source*, artículo electrónico consultado 15-06-2008. [<http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=389>]

Centro Centroamericano de Población (2007): Censos poblacionales. Base de datos consultada 15-06-2008, [<http://censos.ccp.ucr.ac.cr>]

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH): Guatemala: Memoria del Silencio. Artículo electrónico consultado 3-12-2008, [<http://shr.aas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/toc.html>]

Cruz Burguete, Jorge Luis (2000): "Integración de los Refugiados Guatemaltecos en Campeche", *Estudios Sociológicos*, Vol. XVIII, N.o 54.

Davy, Megan (2006) "The Central American Foreign Born in the United States", *Migration Information Source*, artículo electrónico consultado 15-06-2008 [<http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=385>]

Durieux, Jean-François (1992): "Capturing the Central American Refugee Phenomenon: Refugee Law-Making in Mexico and Belize", *International Journal of Refugee Law*, Vol. IV, N.o 3

Everitt, John C. (1984): "The Recent Migrations of Belize, Central America", *International Migration Review* Vol. XVIII, N.o 2.

Ferris, Elizabeth G. (1987): *The Central American Refugees* (New York, Praeger).

Fink, L. and A. Dunn (2000): The Maya of Morgantown: Exploring Worker Identity within the Global Marketplace, en J. Loucky y M. M. Moors: *The Maya Diaspora: Guatemalan Roots, New American Lives*. (Philadelphia, Temple University Press).

González Ponciano, Jorge Ramón (2001): "Guatemaltecos en la Ciudad de México", *Amérique Latine Histoire et Mémoire*, Vol. II.

Gzech, Susan (2006): "Central Americans and Asylum Policy in the Reagan Era", *Migration Information Source*, artículo electrónico consultado 15-06-2008 [<http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=384>]

Hagan, Jacqueline. M. y Helen Rose Ebaugh (2003): "Calling Upon the Sacred: Migrants' Use of Religion in the Migration Process." *International Migration Review* Vol. XXXVII, N.o 4.

Hamilton, Nora. y Norma Stoltz Chinchilla (1991): "Central American Migration: A Framework for Analysis", *Latin American Research Review*, Vol. XXVI, N.o 1.

Hanlon, Nolin, Catherine. L, et al. (2000): Flight, Exile, Repatriation, and Return: Guatemalan Refugee Scenarios, 1981-1998, en J. Loucky y M. M. Moors (eds.): *The Maya Diaspora: Guatemalan Roots*, New American Lives. (Philadelphia, Temple University Press).

Hartigan, Kevin (1992): "Matching Humanitarian Norms with Cold, Hard Interests: the Making of Refugee Policies in Mexico and Honduras, 1980-89", *International Organization*, Vol. XLVI, N.o 3.

Hein, Jeremy (1993): "Refugees, Immigrants, and the State", *Annual Review of Sociology*, Vol. XIX.

Helton, Arthur C. (1991): The Detention of Asylum-Seekers in the United States and Canada, en H. Adelman (ed.): *Refugee Policy: Canada and the United States* (Toronto, York Lanes Press).

Hernandez Ixcoy, Domingo (2000): A Maya Voice: The Maya of Mexico City, en J. Loucky y M.M. Moors (eds.): *The Maya Diaspora: Guatemalan Roots*, New American Lives (Philadelphia, Temple University Press).

Larson, Elizabeth M. (1992): "Costa Rican Government Policy on Refugee Employment and Integration, 1980-1990", *International Journal of Refugee Law*, Vol.IV, N.o 3.

Loucky, James (2000): *Maya in a Modern Metropolis: Establishing New Lives and Livelihoods in Los Angeles*, en J. Loucky y M.M. Moors (eds.): ***The Maya Diaspora: Guatemalan Roots, New American Lives*** (Philadelphia, Temple University Press).

Mármora, Lelio (1988): *Social Integration and Employment of Central American Refugees*, en P.R. Pessar (ed.): ***When Borders Don't Divide: Labor Migration and Refugee Movement in Latin America*** (New York, Center for Migration Studies).

McBride, Michael J. (1999): "Migrants and Asylum-Seekers: Policy Responses in the United States to Immigrants and Refugees from Central America and the Caribbean" ***International Migration***, Vol. XXXVII, N.o 1.

Minnesota Population Center (2007): ***Integrated Public Use Microdata Series*** -International: Versión 3.0, (Minneapolis, University of Minnesota).

Naciones Unidas (1951): ***Convención sobre el Estatuto de los Refugiados***. Tratados de las Naciones Unidas. Ginebra. 2545: 137.

Nef, Jorge y R. DaSilva (1991): *The Politics of Refugee Generation in Latin America*, en H. Adelman (ed.): ***Refugee Policy: Canada and the United States*** (Toronto, York Lanes Press).

Palacio, Joseph O. (1988): *Illegal Aliens in Belize: Findings from the 1984 Amnesty*, en P.R. Pessar (ed): ***When Borders Don't Divide: Labor Migration and Refugee Movements in the Americas***, (New York, Center for Migration Studies).

Payne, Anthony J. (1990): "The Belize Triangle: Relations with Britain, Guatemala and the United States", ***Journal of Interamerican Studies and World Affairs***, Vol. XXXII, N.o 1.

Rodríguez, Néstor, y Jacqueline María Hagan (2000): Maya Urban Villagers in Houston: The Formation of a Migrant Community from San Cristobal Totonicapán, en J. Loucky y M.M. Moors, (eds.): *The Maya Diaspora: Guatemalan Roots, New American Lives* (Philadelphia, Temple University Press).

Stone, Michael C. (2000): Becoming Belizean: Maya Identity and the Politics of Nation, en J. Loucky y M.M. Moors, (eds.): *The Maya Diaspora: Guatemalan Roots, New American Lives* (Philadelphia, Temple University Press).

Wiley, James (1995): “Undocumented Aliens and Recognized Refugees: The Right to Work in Costa Rica” *International Migration Review* Vol. XXIX, N.º 2.

Zucker, Norman L., y Naomi Flink Zucker (1991): The 1980 Refugee Act: A 1990 Perspective, en H. Adelman (ed.): *Refugee Policy: Canada and the United States* (Toronto, York Lanes Press).

ENCUENTROS

Movilidad social en Centroamérica

*Pablo Sauma¹
Guillermo Monge Guevara²*

En este artículo se realiza una revisión bibliográfica sobre el tema de la movilidad social en Centroamérica, delimitada a estudios cuantitativos. Además de describir la metodología y los resultados obtenidos en ellos, se realiza un análisis crítico de los trabajos, y se plantean algunas consideraciones para la investigación del tema en la región.³

El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera se analiza la situación actual y algunas tendencias recientes de la distribución

-
- 1 Economista costarricense, especialista en política social. Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y consultor internacional en el tema de su especialidad. Correo electrónico: jsauma@cariari.ucr.ac.cr.
 - 2 Ingeniero civil y politólogo costarricense. Es investigador asociado de PROCESOS, una ONG especializada en análisis sobre desarrollo humano, y consultor en gestión institucional, política social y equidad de género. Correo electrónico: gmongeg@racsa.co.cr.
 - 3 Este estudio fue patrocinado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Corporación de Estudios para América Latina (CIEPLAN); y presentado en el taller internacional *Cohesión social, movilidad social y políticas públicas en América Latina*, realizado en julio del 2007, en la ciudad de Antigua, Guatemala.

del ingreso en Centroamérica. En la segunda se presentan las metodologías utilizadas en los estudios identificados sobre movilidad social en Centroamérica. La tercera se dedica al análisis de los resultados obtenidos en ellos, así como de las percepciones sobre movilidad social que se desprenden del Latinobarómetro 2005. Finalmente, en la cuarta sección se realiza un análisis crítico de los estudios considerados y se presentan algunas reflexiones de los autores para el estudio de la movilidad social en Centroamérica.

1. Situación actual y tendencias de la desigualdad en Centroamérica

El tema de la movilidad social en Centroamérica no tendría la importancia académica y política que posee, si esta región no estuviera atravesada por profundas y múltiples desigualdades de ingreso y de acceso a bienes clave para el bienestar social. Para empezar, es importante hacer notar la existencia de desigualdades en ingreso entre los países. Mientras en Panamá y Costa Rica el producto interno bruto (PIB) per cápita supera los US\$4.500, en Honduras apenas supera los US\$1.000, y en Nicaragua es inferior a esa magnitud. En situación intermedia se ubican Guatemala y El Salvador, con poco menos de US\$2.500.

Las desigualdades dentro de los países también son considerables. Los datos de las encuestas de hogares del año 2005 (cuadro 1) muestran que en todos ellos el 10% de la población con ingreso per cápita más elevado se apropia de entre un 28,7% y un 40,5% del ingreso nacional, mientras que el 40% de la población con menor ingreso per cápita se apropia de entre un 10,6% y un 15,9% de ese ingreso nacional.

Cuadro 1
Centroamérica: población, PIB y desigualdad
en la distribución del ingreso, por países, 2005.

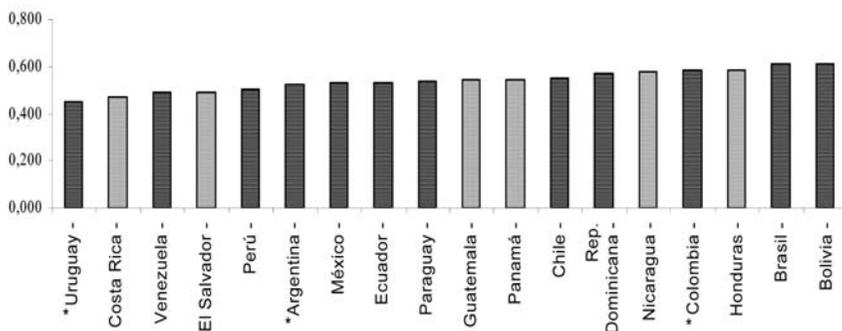
- cifras absolutas y relativas -								
	población (en miles) 1/	PIB 2/		Desigualdad en la distribución ingreso 3/				
		total (millones US\$)	per cápita (US\$)*	coef. Gini	participación en el ingreso total:			
					40% más pobre	30% siguien- te	20% siguien- te	10% más rico
total	39.955	97.401	2.438		14,1*	24,6*	28,6*	32,7*
Costa Rica	4.322	20.021	4.632	0,470	15,2	26,2	29,9	28,7
El Salvador	6.875	16.974	2.469	0,493	15,9	26,0	28,8	29,3
Guatemala	12.700	31.648	2.492	0,543	14,2	22,2	26,8	36,8
Honduras	7.347	8.365	1.139	0,587	10,6	22,1	28,6	38,8
Nicaragua	5.483	4.910	895	0,579	12,2	21,5	25,7	40,7
Panamá	3.228	15.483	4.796	0,545	13,2	24,8	28,9	33,1

*Estimación propia
1/ Población estimada por CELADE (2004)
2/ Los datos del PIB total fueron tomados de CEPAL (2007), y los per cápita estimados con las cifras de población aquí incluidas.
3/ A partir de los ingresos per cápita. Los datos fueron tomados de CEPAL (2006) y corresponden al 2005 para Costa Rica y Panamá, al 2004 para El Salvador, al 2003 para Honduras, al 2002 para Guatemala y al 2001 para Nicaragua.

Fuente: Elaboración propia y CELADE (2004), CEPAL (2007 y 2006).

La alta desigualdad en la distribución del ingreso es una característica que Centroamérica comparte con el resto de América Latina, que es la región más desigual en el mundo. En el gráfico 1 se muestra el valor del coeficiente de Gini -el indicador de desigualdad más utilizado para comparaciones internacionales-, para 18 países latinoamericanos alrededor del año (CEPAL, 2006). Se observa que Costa Rica y Uruguay son los dos países con coeficiente de Gini más bajo, o sea, con la menor concentración en la distribución del ingreso. El Salvador está en un nivel medio-bajo de desigualdad en el contexto regional; Panamá muestra un nivel intermedio; y Nicaragua y Honduras están entre los países latinoamericanos con alta desigualdad.

Gráfico 1
América Latina y el Caribe (18 países):
coeficiente de Gini de la distribución del ingreso
per cápita de las personas, alrededor del 2005



* Estimación para área urbana. En el caso del Argentina, para el Gran Buenos Aires.
 Fuente: CEPAL (2006).

Los datos mostrados reflejan un alto nivel de pobreza relativa en los países de la región. Pero, además, en estos países hay muchos hogares en situación de pobreza relativa que también son pobres en un sentido absoluto; esto es, sus miembros no tienen suficientes ingresos para adquirir los bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Más aún, un considerable porcentaje de personas en pobreza absoluta carece de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias; esto es, están en pobreza extrema o indigencia.

Se estima que en el 2005 un 55% de los casi 40 millones de centroamericanos se encontraba en pobreza, y lo más grave, un 30% de esa misma población estaba en pobreza extrema. Costa Rica muestra la situación más satisfactoria (7% en pobreza extrema, 21,1% de la población en pobreza), seguida por Panamá y luego por El Salvador. Con las mayores incidencias tanto de pobreza extrema como total, se encuentran Guatemala, Nicaragua y Honduras (en ese orden). Los tres tienen más de 30% de la población en pobreza

extrema y más de 60% en pobreza (cuadro 2). La pobreza en Centroamérica es más grave en las áreas rurales, donde habita el 48% de la población de esa región.

Cuadro 2
Incidencia de la pobreza como insuficiencia de ingresos
en la población total de los países centroamericanos,
alrededor del año 2005.

% de población bajo las líneas de pobreza respectivas							
	Centro- américa*	Costa Rica	El Salvador	Guate- mala	Hondur- ras	Nicara- gua	Panamá
año	2005	2005	2004	2002	2003	2001	2005
Pobreza extrema	30,2	7,0	19,0	30,9	53,9	42,4	15,7
área urbana	19,8	5,6	13,8	18,1	35,1	33,4	7,7
área rural	41,6	9,0	26,6	37,6	69,4	55,1	29,4
Pobreza 1/	54,7	21,1	47,5	60,2	74,8	69,3	33,0
área urbana	45,1	20,0	41,2	45,3	62,7	63,8	24,4
área rural	65,4	22,7	56,8	68,0	84,8	77,0	47,8

* Estimación propia, con las proyecciones de población (CELADE, 2004) y estimaciones de los países de la distribución urbana/rural.
 1/ Incluye la pobreza extrema.

Fuente: CEPAL (2006) y estimación propia.

Conviene tener presente que la desigualdad va más allá de los ingresos. Como señalan De Ferranti y otros (2003): *Las encuestas estándar no proporcionan datos comparables sobre la desigualdad en el ejercicio del poder o influencia dentro de una sociedad, pero su importancia y relación con la riqueza está avalada por abundante información política, histórica y sociológica.*

Las estadísticas disponibles para los países centroamericanos sobre desigualdad en la distribución del ingreso muestran pocos avances significativos entre 1990 y la actualidad. Con excepción de Costa Rica, en que la desigualdad aumenta⁴, los demás países

4 Según la CEPAL (2006), de forma consistente con la información oficial a escala nacional, el coeficiente de Gini pasó de 0,438 en 1990 a 0,470 en el 2005.

muestran pequeñas reducciones⁵. Se observa, por ejemplo, que entre 1990 y 2005 tanto la pobreza extrema como la pobreza total se redujeron 7 puntos porcentuales en la región. En todos los países hubo caídas en la pobreza en el período citado; las disminuciones mayores se dieron en los países con importantes niveles de incidencia (Honduras, Nicaragua y Guatemala). (Véase el cuadro 3).

Cuadro 3
Incidencia de la pobreza como insuficiencia de ingresos
en la población total de los países centroamericanos,
alrededor de 1990.

_ % de población bajo las líneas de pobreza respectivas _							
	Centro- américa*	Costa Rica	El Salvador	Guate- mala	Hondur- ras	Nicara- gua	Panamá
año	1990	1990	1995	1989	1990	1993	1991
Pobreza extrema	37,0	9,9	21,7	42,0	60,9	48,4	19,2
área urbana	24,8	6,4	14,9	26,4	43,6	36,8	16,0
área rural	47,6	12,5	29,9	50,2	72,9	62,8	26,7
Pobreza I/	62,4	26,3	54,2	69,4	80,8	73,6	42,8
área urbana	51,8	24,9	45,8	53,6	70,4	66,3	40,9
área rural	71,6	27,3	64,4	77,7	88,1	82,7	50,6

* Estimación propia, con las proyecciones de población (CELADE, 2004) y estimaciones de los países de la distribución urbana/rural.
I/ Incluye la pobreza extrema.

Fuente: CEPAL (2006) y estimación propia.

- 5 Según la CEPAL (2006), el coeficiente de Gini en Guatemala se redujo de 0,582 en 1989, a 0,543 en 2002; en Honduras de 0,615 en 1990 a 0,587 en 2003; y en Nicaragua de 0,582 en 1993, a 0,579 en 2001. En El Salvador se dio un aumento entre 1995 y 2001, pasando de 0,507 a 0,525, pero luego se redujo hasta 0,493 en 2004; sin embargo, es necesario comprobar si este último resultado responde a una situación real, o más bien es algo puntual relacionado con la encuesta. Finalmente, para Panamá no hay información disponible comparable para inicios de los años noventa y la actualidad, pues las encuestas de los primeros años solamente captaban información sobre ingresos urbanos.

También ha habido cambios positivos en cuanto a acceso a servicios e inversión en capital humano (De Ferranti y otros, 2003). En Guatemala, por ejemplo, los resultados sobre percepciones de pobreza y bienestar a partir de *focus groups* en 10 aldeas rurales (Banco Mundial, 2003), muestran que las comunidades perciben que el bienestar y las condiciones de vida de la comunidad han mejorado durante los últimos cinco años. Atribuyen estos logros fundamentalmente a mejoras en los servicios públicos y en la educación. En lo que respecta al ejercicio de la ciudadanía, hay avances en los países centroamericanos, pero también tareas pendientes (PNUD, 2004).

2. Metodologías utilizadas en estudios sobre movilidad social en Centroamérica

En esta sección se explican las metodologías de análisis de la movilidad social que se han empleado en los trabajos recientes sobre este tema que incluyen a los países centroamericanos. La sección consta de cuatro apartados. En el primero, se mencionan las distintas formas de clasificar los estudios cuantitativos de movilidad social a partir de las metodologías que emplean. Los tres apartados siguientes se enfocan en un tipo de metodología particular: el de análisis de brechas educativas entre individuos, el de análisis de correlaciones entre variables de educación de personas que son hermanas entre sí, y el que mide la movilidad con base en el ingreso.

2.1. Tipos de estudios sobre movilidad social

En las últimas décadas se ha generado una gama amplia de enfoques analíticos y de métodos para estimar la movilidad, aunque todos coinciden en que la movilidad social se refiere a cambios en la situación socioeconómica de las familias y sus miembros a través del tiempo. Esos estudios ponen énfasis en diferentes dimensiones relacionadas con la situación económica y social de las familias y sus miembros, como el ingreso, el consumo, los ingresos laborales, la ocupación y la educación, entre los más importantes.

Los estudios de movilidad social se pueden clasificar según el nivel de generalidad en el análisis, diferenciando entre estudios de macromovilidad y de micromovilidad. Los primeros se centran en valorar cuánta movilidad existe en un país y la comparan en el tiempo y entre países. Los segundos investigan cuáles individuos o cuáles familias experimentan cambios de estatus más grandes que los demás (Fields, 2004).

Respecto de la dimensión temporal, se puede distinguir entre los estudios de movilidad intrageneracional y los de movilidad intergeneracional. En los primeros se analizan las variaciones experimentadas por un mismo individuo o una misma familia en distintos momentos (para ello se necesitan datos de panel). Con los de tipo intergeneracional, se analizan las influencias de una generación en la movilidad social de la generación siguiente (usualmente, se analiza la forma como influyen las condiciones de vida de los padres en las oportunidades de mejora social de los hijos).

También se pueden clasificar los estudios según las fuentes de información utilizadas, distinguiendo en este caso entre estudios basados en paneles de datos y los que se sustentan en datos puntuales de encuestas de hogares. Los primeros permiten trazar los cambios en cuanto a estatus socioeconómico de las propias familias o los individuos mismos, en dos o más momentos. Con los otros se pueden analizar tendencias al cambio en estatus socioeconómico, pero no referidas a individuos o familias particulares.

En este artículo se han clasificado los estudios encontrados según la dimensión utilizada para la estimación. En esos trabajos, las metodologías identificadas ponen el énfasis en la educación y los ingresos. Entre los que analizan la educación, hay dos tipos de estudios: los que calculan la movilidad social con base en las brechas educativas de la población considerada en el estudio, y los que lo hacen con base en correlaciones entre brechas educativas de hermanos. En lo que respecta a la movilidad social a partir del ingreso, el estudio identificado utiliza seudopaneles.

2.2. Movilidad social a partir de brechas educativas de individuos

2.2.1. Metodología de Andersen (2001)

Esta metodología fue desarrollada en Andersen (2001), quien realizó una estimación de movilidad social para 18 países latinoamericanos, incluyendo los seis centroamericanos. Fueron utilizadas encuestas de hogares de mediados o finales de los noventas. Posteriormente, en De Ferranti y otros (2004) se empleó la misma metodología para calcular movilidad social en 20 países de la región, 18 de ellos latinoamericanos entre los que se encuentran los seis centroamericanos⁶. En ese último trabajo se utilizaron encuestas de hogares de principios y mediados de los noventas, así como de finales de esa década y principios de la siguiente.

La explicación de la metodología que se realiza a continuación corresponde a Andersen (2001). Los dos supuestos básicos de esta son: a) una brecha escolar más pequeña implica mayores oportunidades futuras para los adolescentes o jóvenes; y b) la igualdad de oportunidades es un buen indicador de movilidad social. Estos supuestos parecen ser razonables porque existe una vasta evidencia empírica sobre los vínculos positivos entre educación e ingresos: entre desigualdad educativa y desigualdad en el ingreso (Lam, 1999), entre brechas educativas y desigualdad (Dahan y Gaviria, 1999), y entre brechas educativas y movilidad social (Dahan y Gaviria, 1999).

Como indicador de oportunidades de ascenso social, se utiliza la brecha educativa, la cual es definida como la disparidad entre: a) los años de educación que un adolescente o un adulto joven habría completado si hubiera ingresado a la educación formal con una edad de inicio normal y hubiera avanzado un grado por año, y b) los años de educación reales. Es decir, mide los años de educación perdidos. De esta forma, el indicador desarrollado por Andersen (2001) se presenta como una forma de medir la movilidad social en general y no solamente las oportunidades de mejora en el nivel educativo de los hijos.

6 Los dos países restantes fueron Jamaica y Trinidad y Tobago.

Para cada país se seleccionan todos los adolescentes que viven con al menos uno de sus padres. Se realizan regresiones que vinculan sus brechas escolares con: a) dos variables de entorno familiar: ingreso per cápita de los adultos de la familia, y el nivel de educación de madre y padre; y b) otras variables que podrían ser relevantes para explicar las brechas escolares (edad, edad del jefe de familia en el nacimiento del hijo, *dummies* de la presencia de hermanas mayores, hermanos mayores, hermanas menores, o hermanos menores, una *dummy* de relación no biológica con el jefe de familia, una *dummy* de jefatura femenina en el hogar, una *dummy* de existencia de padres únicos, una *dummy* de existencia de trabajo por cuenta propia del jefe de familia, ingreso regional promedio, y promedio de educación regional).

Luego se usa el método de descomposición de Fields para determinar la importancia del contexto familiar en las explicaciones de las brechas escolares. Con este método se calcula para cada variable explicativa un factor de ponderación de la desigualdad, que es el producto del coeficiente estimado para cada variable explicativa, la desviación estándar de esa variable, y la correlación entre la misma variable y la variable dependiente. Todos los factores de ponderación son escalados en la regresión para que sumen R^2 , y cada uno consiste en la medida del porcentaje de la variación total que es explicado por la respectiva variable.

El índice de movilidad social es igual a 1 menos la suma de los dos factores de ponderación de desigualdad que corresponden a cada una de las dos variables de entorno familiar. Cuando el índice es bajo, el entorno familiar es un determinante importante de la brecha educativa; consecuentemente, la movilidad social es baja.

2.2.2. Metodología de Behrman, Birdsall y Székely (1999)

Esta metodología fue desarrollada en Behrman, Birdsall y Székely (1999), en cuya aplicación se utilizaron encuestas de 16 países de América Latina. En algunos de ellos fueron consideradas dos o tres encuestas. Los años de las encuestas varían entre 1980 y 1996. Se incluyeron cinco países de Centroamérica (todos menos Guatemala).

El planteamiento general de esta metodología es similar al de Andersen (2001), pues ambos tratan de establecer la influencia del entorno familiar en la brecha escolar; sin embargo, tienen diferencias importantes. En este estudio se construyen dos indicadores de movilidad social, con los que se busca captar la asociación entre el entorno familiar y la escolaridad de los niños, adolescentes o jóvenes entre 10 y 21 años que habitan en los hogares. Se supone que estos índices son medidas de movilidad social porque tanto el entorno familiar como la escolaridad se asocian fuertemente con el contexto económico y social.

Los pasos para el cálculo de los índices son los siguientes:

- a) Se calculan las brechas educativas de forma separada para cuatro grupos de edad: 10-12, 13-15, 16-18, y 19-21 años. Se consideran estos grupos por separado, para tomar en cuenta que la probabilidad de influencia del entorno familiar crece en las edades mayores. La decisión escolar marginal; es decir, permanecer en la escuela o abandonarla, tiende a depender también de la posición en la economía de la familia del niño. Por tanto, para cada encuesta y para cada grupo de edad también se consideran cinco quintiles de hogares, según la escolaridad de los padres. Esta última variable determina en una importante proporción el ingreso permanente de los hogares y también puede influir en ciertas características de los entornos familiares distintas al ingreso, tales como las características genéticas y las preferencias en cuanto a la escolarización de los hijos.
- b) Se estima la asociación entre el entorno familiar y las brechas escolares. Para establecer cuán fuertes son esas asociaciones, se corren regresiones de la brecha escolar con tres indicadores de entorno familiar: escolaridad del padre, escolaridad de la madre, e ingreso familiar. Además, en la regresión se incorporan dos variables de control que captan si el hogar es rural o urbano, y ciertas características demográficas (por ejemplo, si es un hogar con jefatura femenina), además de un componente de disturbio estocástico.

c) Se calculan los índices de movilidad, con base en los resultados del cálculo explicado en el párrafo anterior para cada una de las submuestras. Primero se calcula el “índice proporcional de movilidad intergeneracional escolar”, definido como la proporción de la varianza total asociada con el promedio ponderado de las tres variables de entorno familiar, donde los pesos relativos están dados por los coeficientes estimados en la regresión. Luego, se calcula el “índice ajustado de movilidad intergeneracional escolar”, definido como el Índice Proporcional multiplicado por el cociente entre la brecha promedio y la escolaridad esperada, para cada submuestra. Se normalizan estos índices para que sus valores se ubiquen entre 0 y 100, de tal forma que los mayores valores indiquen mayor movilidad (y menor influencia del entorno familiar).

Los dos índices están correlacionados positivamente entre sí con un coeficiente de correlación de 0,79, pero representan aspectos distintos de la movilidad intergeneracional relativa a la escolaridad. El Índice Proporcional está construido para que se mantenga invariante a la magnitud absoluta de la brecha escolar promedio. En contraste, el índice ajustado está diseñado para que sea sensible a las diferencias entre las brechas escolares promedio. Dos países con brechas distintas pueden tener el mismo índice proporcional, pero necesariamente tendrían índices ajustados distintos: el de mayor brecha tendría el índice menor. Estas diferencias de diseño en los dos índices se basan en el supuesto de que el entorno familiar tiene un efecto absoluto mayor conforme mayor sea la brecha escolar.

2.3. Movilidad social a partir de correlaciones educativas entre hermanos

Esta metodología de cálculo de la movilidad social fue usada en Dahan y Gaviria (1999) y en Behrman, Gaviria y Székely (2001). En el primero de esos trabajos se analizaron encuestas de hogares de 17 países, 16 latinoamericanos y Estados Unidos, cuyos años se encuentran entre 1992 y 1997. Entre esos países se incluyen cuatro de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. En

el segundo trabajo se utilizaron encuestas de hogares realizadas entre 1998 y 2000 en 20 países, 18 latinoamericanos -entre los que se encuentran los seis de Centroamérica-, Jamaica y Estados Unidos.

En esos trabajos se calcula un índice de movilidad social basado en la correlación de resultados escolares entre hermanos(as). El índice mide el nivel en que los resultados escolares pueden ser explicados por el entorno familiar. El diseño del índice está basado en el supuesto de que aquellos niños que al final de su adolescencia hayan quedado rezagados en cuanto a escolaridad, tendrán los peores resultados socioeconómicos en la edad adulta.

La selección de las muestras está sujeta a dos restricciones. Primero, se restringe a los niños entre 16 y 20 años de edad, con lo que se busca reducir la dispersión en cuanto a los tipos de decisiones marginales de escolaridad. Segundo, se restringe a aquellos hogares con dos o más niños en el rango de edad especificado.

El cálculo del índice involucra dos pasos principales. Primero, se identifican aquellos niños que se han quedado rezagados irremediablemente. Luego se determina el grado en que el entorno familiar explica su pobre desempeño. En este punto, se calcula primero un indicador guía de falla socioeconómica y luego se calcula la correlación entre hermanos de este indicador. Se interpreta esta correlación como el índice de movilidad social.

El indicador de falla socioeconómica está basado en la mediana de la escolaridad dentro de cada edad (no se comparan niños de distintas edades) y de cada categoría de género específica (no se comparan mujeres con hombres), y toma en cuenta también los años de inicio y término de la educación básica establecidos en los programas de estudio de cada país. Por ejemplo, para el caso de los jóvenes masculinos de 18 años de Brasil, se asigna un valor de 1 cuando los años de escolaridad son 6 o más y un valor de 0 cuando son cinco o menos. Nótese que es un indicador muy conservador.

La correlación entre hermanos resume todas las influencias comunes a todos los niños en una misma familia. Estas influencias incluyen no solamente las características de los padres, sino, también, las características de la comunidad en que viven, tales como la calidad de la educación y las normas prevalecientes en el vecindario. Las correlaciones entre hermanos, por otro lado, permiten descartar

todas las posibles influencias familiares que no son compartidas por los hermanos. Las influencias no compartidas son potencialmente importantes. Los psicólogos, por ejemplo, han argumentado desde hace tiempo que el orden de nacimiento de los hijos ejerce mucha influencia en la frecuencia y el tipo de interacción entre padres e hijos. Los economistas, por su parte, han argumentado que los padres pueden tratar a sus hijos de manera muy distinta por razones pecuniarias.

Si hubiera movilidad social perfecta, el entorno familiar no tendría ningún efecto en el desempeño socioeconómico de los niños, y por tanto, cualquier par de hermanos tendría características de escolaridad similares a las de dos personas cualesquiera escogidas al azar. En ese caso, el índice tendría un valor de cero. Si hubiera poca movilidad, el entorno familiar tendría un efecto elevado en el desempeño escolar (y por tanto, en el socioeconómico) de los niños, lo cual se reflejaría en que los hermanos tendrían características muy similares entre sí; el índice, entonces, sería cercano a uno.

2.4. Movilidad social a partir del ingreso

Una metodología para determinar la movilidad social a partir del ingreso mediante seudopaneles fue utilizada por Calónico (2006). En el estudio se incluyeron ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Venezuela y Costa Rica (el único país de Centroamérica que se estudió). Se utilizaron 81 encuestas de esos países (entre 6 y 12 encuestas por país), cuyos años varían entre 1992 y 2003.

En el citado trabajo, la movilidad social se determina mediante estimaciones de relaciones económicas en seudopaneles, estos últimos contruidos a partir de encuestas de hogares. A diferencia de los paneles propiamente dichos, los seudopaneles no “siguen” a los individuos en el tiempo, sino a grupos de ellos con el mismo año de nacimiento (cohortes). Se definieron cohortes con intervalos de cinco años.

Se restringió la muestra a individuos entre 21 y 64 años que estaban empleados en el momento de la encuesta y que tenían ingresos.

La variable de ingreso utilizada fue el ingreso monetario laboral, el cual permite una mejor comparación entre países y generalmente representa la mayor proporción del ingreso total. Esos ingresos fueron deflatados con el índice de precios al consumidor de cada país y año.

El índice de movilidad absoluta mide el grado en que el ingreso actual es importante para determinar la evolución de sus valores futuros. Es una medida de la forma como los individuos se mueven a lo largo de la distribución total del ingreso, y una medida cercana de la existencia o no de igualdad de oportunidades. Si el índice es cercano a 1, hay una situación de baja movilidad, mientras que un índice cero, muestra movilidad total.

El índice de movilidad condicional resulta de agregar efectos fijos individuales al modelo. El índice se relaciona con la movilidad alrededor del ingreso promedio de cada individuo. Dado un conjunto de características individuales, el índice mide la rapidez con la cual los individuos que ganan más o menos en relación con sus capacidades se acercarán al ingreso promedio. Esas características individuales que se reflejan en el modelo incluyen diferencias en educación, salud, entorno familiar, etc., que llegan a influir en su capacidad de generar ingresos. Si la movilidad condicional es muy baja, los choques sobre los ingresos individuales causarán más desigualdad en el ingreso, pues los ingresos no lograrían recuperarse al nivel correspondiente a las capacidades de los individuos. En la bibliografía sobre macroeconomía, a esto se le conoce como “convergencia condicional”.

3. Principales resultados de los estudios sobre movilidad social

Esta sección se divide en tres partes. En la primera se analizan los resultados de estudios sobre movilidad social en Centroamérica. La segunda sección está dedicada al análisis de información proveniente de encuestas de opinión acerca de las percepciones de la población centroamericana en relación con sus expectativas y proyecciones de movilidad social. Por último, en la tercera sección se realizan algunas consideraciones generales sobre la movilidad social en Centroamérica a partir de los resultados anteriores.

3.1. La movilidad social en los países centroamericanos

En primer lugar se consideran los estudios sobre movilidad social calculada con base en brechas educativas. Hay dos estudios que utilizan la metodología expuesta por Andersen (2001), que son el propio de ese autor, y el estudio de De Ferranti y otros (2004).

En estos estudios el indicador de oportunidades de ascenso social es la brecha educativa, definida como la disparidad entre los años de educación que un adolescente o un adulto joven habría completado si hubiera ingresado a la educación formal con una edad de inicio normal y hubiera avanzado un grado por año, y por otra parte, los años de educación reales. Se controla por variables de entorno familiar (ingreso per cápita de los adultos de la familia y el nivel de educación de madre y padre), y otras variables que podrían ser relevantes para explicar las brechas escolares (edad, edad del jefe de familia en el nacimiento del hijo, etc.). Por la fórmula de cálculo, un índice de movilidad social menor refleja baja movilidad social y viceversa.

En el cuadro 4 se muestran los resultados obtenidos por Andersen (2001) para los dos grupos de edad analizados, los de 13-19 años y los de 20-25 años. En todos los casos, el índice de movilidad social es mayor para los jóvenes de 13-19 años que para los de 20-25; sin embargo, como el autor señala, la estimación para este último grupo de edad podría estar sesgada, pues muchos de los jóvenes de esa edad ya habían dejado sus hogares (reduciendo la población considerada para el análisis), y porque probablemente las características de los jóvenes de este grupo de edad que aún permanecen en sus hogares sean muy diferentes a las de aquellos que se fueron. Por ello, en este trabajo se analizan los resultados para el grupo de 13 a 19 años.

Cuadro 4
América Latina (18 países):
Índice de Movilidad Social por grupos de edad,
alrededor de 1997.

	año	13-19 años		20-25 años	
		índice	posición	índice	posición
América Latina*		0,855	-	0,796	-
Chile	1998	0,912	1	0,803	7
Argentina**	1996	0,898	2	0,815	6
Uruguay**	1997	0,885	3	0,792	9
Paraguay	1998	0,879	4	0,767	13
Panamá	1997	0,870	5	0,786	10
Perú	1997	0,869	6	0,843	1
México	1996	0,861	7	0,771	12
Rep. Dominicana	1996	0,860	8	0,821	4
Bolivia	1997	0,851	9	0,792	8
El Salvador	1995	0,847	10	0,821	5
Costa Rica	1998	0,847	11	0,761	15
Colombia	1997	0,843	12	0,781	11
Honduras	1998	0,843	13	0,739	18
Guatemala	1998	0,842	14	0,841	2
Nicaragua	1998	0,841	15	0,835	3
Venezuela	1997	0,837	16	0,755	16
Ecuador	1998	0,813	17	0,766	14
Brasil	1997	0,812	18	0,755	17

* Promedio simple.
 ** Incluye solamente áreas urbanas, pero el autor realizó un ajuste para lograr comparabilidad con los demás países.

Fuente: Andersen (2001:42).

Según los datos sobre el grupo de 13 a 19 años que se encuentran en el cuadro 4, Panamá es el único país centroamericano que se ubica en una posición de alta movilidad (quinto lugar entre los 18 países). Luego se ubican El Salvador y Costa Rica, con índices de movilidad social por debajo del promedio latinoamericano, seguidos muy de cerca por Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El autor realizó un análisis “entre” países considerando la movilidad social respecto a varias dimensiones globales. La primera fue la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, realizando un ajuste en este último para lograr una mayor comparabilidad; sin embargo, no se encontró una clara relación entre movilidad social y

desigualdad. Analizó también el ingreso per cápita, y encontró una correlación relativamente fuerte con movilidad social, acorde con algunos planteamientos teóricos que asocian alta movilidad con mejores recursos humanos y esto, a su vez, con mayor ingreso (aunque debe tenerse cuidado con la causalidad, pues opera en ambos sentidos).

Se encontró también una correlación positiva -y relativamente fuerte- entre movilidad social y grado de urbanización; sin embargo, cuando se consideraron los jóvenes urbanos y rurales por separado, ambos se vieron afectados en la misma vía por el entorno familiar.

En lo que respecta al sistema educativo, siempre a nivel de análisis entre países, hay una clara relación negativa entre movilidad social y las brechas educativas en los países, comprobando que se puede mejorar la movilidad social reduciendo las brechas educativas, por la vía del acceso a la educación y la calidad de esta.

También analizó el autor el “mercado matrimonial”, a partir de la correlación entre los niveles educativos de las parejas de jefes de hogar -que muestra una alta correlación en los países latinoamericanos-. Sin embargo, al correlacionar esa variable con la movilidad social, no se obtuvo un resultado satisfactorio.

Con posterioridad al estudio de Andersen (2001), De Ferranti y otros (2004) emplearon la misma metodología. En el cuadro 5 se muestran los resultados para los 18 países latinoamericanos, para ambos grupos de edad. Al igual que en el estudio de Andersen (2001), el indicador de movilidad social es menor para el grupo de 20-25 años que para el de 13-19 años.

Cuando se considera el grupo de 13-19 años y la estimación más reciente, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala se ubican entre los seis países con los valores más bajos de movilidad entre los 17 países con información, y El Salvador y Guatemala son precisamente los países con menor movilidad. Panamá y Costa Rica, por su parte, ocupan posiciones intermedias-altas.

Cuando se analiza el valor del indicador de movilidad social a través del tiempo, Costa Rica muestra gran estabilidad, El Salvador, en cambio, muestra una clara tendencia de movilidad social descendente. El indicador para Honduras se mantiene entre el inicio y el final del período analizado, luego de un incremento en el medio.

Nicaragua, por su parte, muestra movilidad social descendente entre los dos años disponibles. Finalmente, Panamá, muestra movilidad social ascendente entre el inicio y el final de período, luego de una reducción del indicador en el período intermedio.

Cuadro 5
América Latina (18 países): Índice de movilidad social por grupos de edad, a inicios y mediados de los noventa y a finales de los noventa e inicios de la década siguiente.

	año			13-19 años				20-25 años		
	inicio	medio	final	inicio	medio	final	posición final	inicio	medio	final
Chile	1990	1996	2000	0,918	0,914	0,922	1	0,862	0,823	0,834
Argentina	1992	1996	2001	0,922	0,904	0,907	2	0,851	0,834	0,814
Uruguay	1989	1995	2000	0,923	0,907	0,900	3	0,880	0,842	0,820
Perú	-	1994	2000	-	0,917	0,898	4	-	0,912	0,874
Panamá	1991	1995	2000	0,867	0,850	0,893	5	0,822	0,798	0,856
México	1992	1996	2000	0,905	0,905	0,868	6	0,842	0,846	0,768
Costa Rica	1990	1995	2000	0,854	0,853	0,856	7	0,806	0,778	0,766
Paraguay	-	1995	1999	-	0,846	0,851	8	-	0,768	0,762
Brasil	1990	1995	2001	0,827	0,808	0,844	9	0,763	0,762	0,795
Venezuela	1989	1995	1998	0,831	0,857	0,843	10	0,799	0,816	0,788
Colombia	-	1996	1999	-	0,845	0,842	11	-	0,794	0,812
Honduras	1990	1995	1999	0,841	0,853	0,840	12	0,727	0,746	0,728
Bolivia	-	1996	1999	-	0,828	0,838	13	-	0,799	0,799
Nicaragua	-	1993	1998	-	0,860	0,828	14	-	0,855	0,811
Ecuador	-	1994	1998	-	0,852	0,824	15	-	0,815	0,782
El Salvador	1991	1995	2000	0,865	0,844	0,819	16	0,786	0,774	0,793
Guatemala	-	-	2000	-	-	0,799	17	-	-	0,735
Rep. Dominic.	-	1995	-	-	0,885	-	-	-	0,871	-

Fuente: De Ferranti (2004:446).

Para el grupo de 13 a 19 años, se compararon los valores de movilidad social de Andersen (2001) con los de De Ferranti (2004). Para la comparación se escogieron los datos de De Ferranti (2004) correspondientes a los mismos años de las encuestas usadas por Andersen (2001), y cuando ello no era posible, se usaron datos correspondientes a encuestas con uno o dos años de diferencia. Solamente en Costa Rica y Guatemala hubo diferencias mayores al 2% entre los valores calculados por ambos trabajos. En ambos casos,

el valor calculado por De Ferranti (2004) fue mayor. La diferencia entre los valores de ambos trabajos fue de 3,6% para Costa Rica y de 9,1% para Guatemala. En ello puede influir el hecho de que para ambos países los datos de De Ferranti corresponden al año 2000, mientras que los de Andersen son del 1998. Sin embargo, los valores relativos de ambos países no varían: en ambos trabajos, Costa Rica tiene un valor normalizado cercano a 0,50 y Guatemala tiene uno de cero (es decir, ocupa el último lugar en ambos trabajos). En cuanto a las posiciones relativas de los países centroamericanos entre los 18 países comunes a ambos estudios, la única diferencia marcada se presenta en Costa Rica: en Andersen (2001) ocupa el lugar 13, mientras que en De Ferranti ocupa el lugar 7.

El segundo método utilizado para medir la movilidad intergeneracional con base en la brecha escolar es el Behrman, Birdsall y Székely (1999), que aunque en su planteamiento general tiene similitudes con el de Andersen (2001), también hay diferencias significativas entre ellos, por lo que sus resultados deben ser analizados por separado.

Como se recordará, estos autores calculan dos índices que representan aspectos distintos de la movilidad intergeneracional relativa a la escolaridad (sección 2). El índice proporcional capta la importancia relativa del entorno familiar, independientemente de la magnitud absoluta de la brecha escolar promedio. En contraste, el índice ajustado es sensible a las diferencias entre las brechas escolares promedio, y está construido con base en el supuesto de que el entorno familiar tiene un efecto mayor conforme mayor sea la brecha escolar.

En el cuadro 6 se incluyen los resultados de los dos índices para mediados de los años noventa. En ambos casos, cuanto mayor sea el valor del índice, mayor es el nivel de movilidad. Se puede notar que ninguno de los países centroamericanos se encuentra dentro del grupo con mayor movilidad. Costa Rica, Panamá y El Salvador ostentan valores intermedios en ambos índices (Costa Rica y Panamá se encuentran en un grupo cercano a los países con mayor movilidad, sobre todo en el índice ajustado). A la vez, Honduras y Nicaragua tienen valores de movilidad bajos, aunque hay países con valores aún menores (Argentina, Brasil, y México).

Cuadro 6
América Latina (16 países): Índices de movilidad social
intergeneracional, a mediados de los noventa.

	año	Índice Proporcional		Índice Ajustado	
		valor	posición	valor	posición
Argentina*	1996	12,4	16	59,0	13
Bolivia**	1995	80,2	3	95,0	2
Brasil	1995	27,2	15	34,5	16
Chile	1994	100,0	1	100,0	1
Colombia	1995	95,1	2	92,7	3
Costa Rica	1995	69,1	7	79,6	8
Ecuador	1995	75,3	5	89,3	5
El Salvador	1995	54,3	10	61,0	12
Honduras	1996	50,6	12	57,6	14
México	1994	48,1	14	71,5	10
Nicaragua	1993	50,6	13	55,4	15
Panamá	1995	63,0	8	85,7	6
Paraguay	1995	53,1	11	63,0	11
Perú	1996	58,0	9	75,8	9
Uruguay**	1995	70,4	6	89,9	4
Venezuela	1995	77,8	4	84,0	7

* Buenos Aires.
 ** Urbano.

Fuente: Behrman, Birdsall y Székely (1999:31).

Los índices ajustados tienen valores mayores que los índices proporcionales en todos los países considerados, con excepción de Chile y Colombia que son precisamente los que tienen los mejores niveles de movilidad proporcional. Los países centroamericanos no son la excepción en ese sentido. Tres de esos países (El Salvador, Honduras y Costa Rica) tienen diferencias similares entre ambos índices. Honduras es el país con una diferencia entre índices proporcionalmente menor, mientras que en Panamá la diferencia es sustancialmente mayor que en los otros países. Cuanto menor sea la diferencia entre ambos índices, mayor es el impacto del tamaño absoluto de la brecha escolar sobre el entorno familiar. Entonces, los datos mencionados parecen indicar que Honduras es el país donde la brecha escolar tiene un peso negativo mayor en la movilidad; mientras que Panamá, por el contrario, es el país cuya movilidad se ve menos afectada por la magnitud de la brecha escolar.

Para Honduras y Costa Rica se realizaron estimaciones en dos momentos en el tiempo. En Honduras para 1989 y en Costa Rica 1981, además de 1996 y 1995 respectivamente. En los países hay movilidad intergeneracional ascendente, tanto cuando se considera el indicador proporcional como el ajustado. Esta movilidad es mayor en el caso costarricense que en el hondureño, al aumentar el índice proporcional de 9,9 a 69,1 en Costa Rica y de 42,0 a 51,6 en Honduras, y el ajustado de 51,3 a 79,6 y de 53,7 a 57,6, respectivamente.

Estos autores analizaron el vínculo entre movilidad social y algunos indicadores macro (PIB per cápita ajustado por paridad de compra; apertura comercial -exportaciones más importaciones entre el PIB-; profundización financiera -M2 entre PIB-; y la tasa de inflación); así con variable que denominan de política educativa (gasto público en educación respecto al PIB; gasto público en educación primaria por estudiante ajustado por paridad de compra; y número promedio de estudiantes por maestro -como indicador de calidad de la educación-). Entre los principales resultados generales obtenidos por estos autores, se tienen los siguientes: En primer lugar, se refuerzan las conclusiones de numerosos estudios que confirman la existencia de una clara asociación negativa entre el ingreso de los padres y la educación y las brechas de educación de niños, con diferencias a través de países, a través del tiempo, en quintiles de educación paternas y en categorías de edad infantiles. Segundo, encontraron que los mercados mejor desarrollados -particularmente los financieros- aumentan la movilidad social, separando resultados educativos individuales del entorno familiar. Tercero, los resultados sugieren que la política educativa puede resaltar la movilidad. Un mayor gasto público por niño escolarizado y una mejor calidad de la educación primaria y secundaria, se asocian positivamente con la movilidad intergeneracional; mientras que niveles relativamente mayores de gasto público en educación terciaria pueden reforzar el impacto de contexto familiar y reducir la movilidad intergeneracional.

Adicionalmente a los anteriores, como se destaca en la sección precedente, fueron identificados dos estudios de movilidad intergeneracional educativa basados en correlaciones entre hermanos: Dahan y Gaviria (1999) y Behrman, Gaviria y Székely

(2001). Ambos estudios están basados en la misma metodología, y en ellos se calcula un índice de movilidad social basado en la correlación de resultados escolares entre hermanos(as). El índice mide el nivel en que los resultados escolares pueden ser explicados por el entorno familiar (y comunal). Se supone que la correlación entre hermanos resume todas las influencias comunes a todos los niños en una misma familia, y estas influencias incluyen no solamente las características de los padres, sino también las características de la comunidad en que viven, tales como la calidad de la educación y las normas prevalecientes en el vecindario. Las correlaciones entre hermanos, por otro lado, permiten descartar todas las posibles influencias familiares que no son compartidas por los hermanos.

Según la metodología seguida, cuanto menor sea el valor del índice, mayor es el nivel de movilidad social. Esto, porque si hubiera movilidad social perfecta, el entorno familiar no tendría ningún efecto en el desempeño socioeconómico de los niños, y por tanto, cualquier par de hermanos tendría características de escolaridad similares a las de dos personas cualesquiera escogidas al azar (índice cero); en cambio, si hubiera poca movilidad, el entorno familiar tendría un efecto elevado en el desempeño escolar (y por tanto, en el socioeconómico) de los niños, lo cual se reflejaría en que los hermanos tendrían características muy similares entre sí (el índice entonces sería cercano a uno).

En el cuadro 7 se presentan los índices de movilidad social calculados en ambos estudios. En Dahan y Gaviria (1999), Costa Rica aparece como el país con más movilidad social, Panamá ostenta un nivel intermedio de movilidad, Nicaragua está entre los que tienen baja movilidad, y El Salvador presenta el nivel de movilidad más bajo. Destaca el estudio que todos los países latinoamericanos considerados en ese estudio tienen niveles de movilidad mucho más bajos que Estados Unidos. Es importante destacar que según los autores, hasta el 50% de las diferencias en los resultados entre países son imputables al entorno familiar.

Cuadro 7
América Latina (18 países): Valores de movilidad social,
años correspondientes a cada medición, y
posiciones relativas, para los dos estudios

	Dahan y Gaviria (1999)			Behrman, Gaviria y Székely (2001)		
	año	índice	posición	año	índice	posición
Argentina*	1996	0,437	6	1998	0,53	12
Bolivia	1997	0,561	11	1999	0,53	11
Brasil	1996	0,531	10	1999	0,55	15
Chile	1996	0,435	5	1998	0,45	4
Colombia	1997	0,587	14	1999	0,51	9
Costa Rica	1995	0,340	1	1998	0,51	10
Ecuador	1995	0,577	13	1998	0,55	14
El Salvador	1995	0,599	16	1998	0,61	18
Guatemala	-	-	-	1998	0,55	16
Honduras	-	-	-	1999	0,50	8
México	1996	0,594	15	1998	0,54	13
Nicaragua	1993	0,576	12	1998	0,57	17
Panamá	1997	0,480	9	1999	0,41	2
Paraguay	1995	0,423	4	1998	0,37	1
Perú	1997	0,385	2	2000	0,48	7
Rep. Dominicana	1996	0,466	8	1998	0,48	6
Uruguay*	1995	0,418	3	1998	0,41	3
Venezuela	1995	0,438	7	1999	0,48	5

* Urbano.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Dahan y Gaviria (1999:29) y Behrman, Gaviria y Székely (2001:30).

En el caso de Behrman, Gaviria y Székely (2001), se observa que El Salvador, Nicaragua y Guatemala tienen los valores de movilidad más bajos de los países analizados. Honduras y Costa Rica aparecen con valores de movilidad intermedios.

Entonces, a pesar de que los dos estudios utilizan el mismo método, los resultados muestran algunas diferencias importantes entre sí, cuando se considera la posición que ocupan los países en cada caso. Con respecto a los cuatro países centroamericanos comunes en ambos estudios, se observa lo siguiente: a) Costa Rica tiene el nivel más alto de movilidad en Dahan y Gaviria (1999), pero ocupa un lugar intermedio en términos absolutos y relativos en Behrman, Gaviria y Székely (2001); b) con Panamá sucede lo contrario: en el primer estudio se ubica en una posición intermedia, mientras que en el segundo se ubica con la segunda movilidad más

alta del conjunto de países analizados; c) El Salvador se mantiene con la movilidad más baja de todos los países comunes a ambos estudios; y d) Nicaragua está en el grupo de países con menores niveles de movilidad en ambos estudios.

Vale la pena destacar que en ambos estudios fue considerado Estados Unidos, que muestra la mayor movilidad social -en los dos casos-, con un índice bastante menor que el de los demás países estudiados (0,203 en Dahan y Gaviria, 1999; y 0,21 en Behrman, Gaviria y Székely, 2001).

En resumen, las diferencias se presentan en los casos de Costa Rica y Panamá, y se restringen a oscilaciones entre el nivel de alta movilidad y el de movilidad intermedia. En esas diferencias puede estar influyendo el hecho de que los estudios utilizan encuestas de distintos años para los mismos países. Las de Behrman, Gaviria y Székely (2001) son tres años más recientes para el caso de Costa Rica y dos años más recientes para el caso de Panamá.

Es importante resaltar que cuando se comparan los resultados de ambos estudios para todos los países, en la mayoría de los países comunes a ambos estudios (11 de 16), los niveles de movilidad son similares o cercanos, y en los otros cinco países sí hay diferencias importantes en los niveles de movilidad. Panamá y Costa Rica se encuentran entre esos últimos.

Como resultado global para los países considerados, Dahan y Gaviria (1999) encuentran que la movilidad social se incrementa con el acceso a la educación (medida, por ejemplo, con la brecha educativa promedio) y con el ingreso per cápita.

Por su parte, Behrman, Gaviria y Székely (2001) encuentran como resultado global que la movilidad social en los países latinoamericanos está fuertemente asociada con los niveles educativos y el gasto en educación.

En Calónico (2006) se concluye que la movilidad absoluta es baja en los países considerados (cuadro 8), lo cual refleja que la desigualdad persiste a lo largo del tiempo, y que el esfuerzo individual no es suficiente, por lo que se requieren medidas de política para proveer mayor igualdad de oportunidades a todos. Costa Rica ocupa la quinta posición en los dos indicadores incluidos en el estudio.

Cuadro 8
América Latina (8 países): índices de movilidad absoluta y
movilidad condicional

país	años encuestas	índice de movilidad absoluta		índice de movilidad condicional	
		índice	posición	índice	posición
Chile	1992, 94, 96, 98, 2000, 03	0,677	1	0,332	1
Venezuela	1994-2003	0,703	2	0,507	2
México	1992-2001	0,715	3	0,536	3
Colombia	1992-2003	0,796	4	0,749	6
Costa Rica	1992-2003	0,862	5	0,626	5
Brasil	1995-99, 2001-03	0,894	6	0,664	4
Argentina	1992-2002	0,944	7	0,959	8
Uruguay	1995-2003	0,951	8	0,880	7

Fuente: Calónico (2006).

En el caso de la movilidad condicional, hay diferentes patrones, aunque prevalecen los bajos niveles de movilidad, que reflejan que el funcionamiento de los mercados de trabajo no es satisfactorio, y los *shocks* sobre los ingresos de los individuos probablemente tienden a amplificar los efectos en la desigualdad en la distribución del ingreso. Se confirma la necesidad de intervenciones para mejorar las oportunidades de los individuos para insertarse en el mercado de trabajo. Con ese fin, las intervenciones tempranas en educación y salud son prioritarias.

3.2. Análisis de las percepciones sobre movilidad social en Centroamérica

El *Latinobarómetro* ofrece una buena aproximación a las percepciones sobre movilidad social, en lo que se denomina la “expectativa intergeneracional”. En el *Latinobarómetro* 2005 (Corporación Latinobarómetro, 2005) se preguntó a los entrevistados de 18 países latinoamericanos sobre la situación que tenían en el momento de la entrevista respecto a la que tenían sus padres, específicamente: *Tomando todo en cuenta, ¿diría usted que sus padres vivían mejor, igual o peor que como vive usted hoy?*

Para América Latina en su conjunto, un 55% de los entrevistados manifestó que sus padres vivían mejor que ellos hoy; es decir, que consideraban que habían sufrido una movilidad social descendente (cuadro 9).

Cuadro 9
Latinobarómetro 2005: Porcentaje de personas entrevistadas que consideran que sus padres vivían mejor

país	% consideran padres vivían mejor
Chile	35
Panamá	43
México	45
Costa Rica	46
Brasil	47
Venezuela	48
El Salvador	52
Argentina	53
Uruguay	54
Rep. Dominicana	54
Honduras	54
Guatemala	55
América Latina	55
Colombia	62
Bolivia	62
Nicaragua	66
Perú	67
Ecuador	68
Paraguay	75

mayoría de entrevistados consideran que viven peor que sus padres = movilidad descendente

Fuente: Corporación Latinobarómetro (2005).

Sin embargo, por países hay diferencias, pues en seis de los 18 países considerados, más de la mitad de los entrevistados tiene la percepción contraria; es decir, que sus padres vivían igual o peor que ellos, lo cual significa que la percepción mayoritaria en cada uno de esos países es que no se dio movilidad social o que fue ascendente. Estos países son: Venezuela, Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Chile.

Entre los países donde la percepción de la mayoría de los entrevistados es de movilidad descendente, se ubican cuatro centroamericanos: El Salvador (52%), Honduras (54%), Guatemala (55%), y Nicaragua (66%).

Se correlacionaron esas percepciones con los coeficientes de Gini de la desigualdad en la distribución del ingreso, pero el coeficiente no resultó significativo a escala latinoamericana. En cambio, a escala centroamericana el coeficiente aumentó, y aunque sigue siendo bajo (0,56), refleja que cuanto mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso en los países centroamericanos, mayor es la percepción sobre movilidad descendente.

El *Latinobarómetro* 2005 también captó las percepciones de los entrevistados sobre la movilidad en el futuro, expresada por la situación que tendrán los hijos de los entrevistados: *Y respecto de sus hijos, ¿cree usted que ellos vivirán mejor, igual o peor que como vive usted hoy?*

Un 54% de los entrevistados en Latinoamérica considera que sus hijos vivirán mejor; es decir, tienen una expectativa de movilidad social ascendente (cuadro 10).

Cuadro 10
Latinobarómetro 2005: Porcentaje de personas entrevistadas que consideran que sus hijos vivirán mejor

país	% consideran hijos vivirán mejor	
Ecuador	36	
Nicaragua	43	
El Salvador	43	
Paraguay	44	
Bolivia	45	
Perú	49	
Costa Rica	50	
Uruguay	51	} mayoría de entrevistados considera que sus hijos vivirán mejor que ellos = expectativa de movilidad ascendente
América Latina	54	
Argentina	56	
Panamá	57	
Venezuela	58	
Colombia	58	
México	59	
Guatemala	60	
Honduras	61	
Rep. Dominicana	65	
Brasil	67	
Chile	76	

Fuente: Corporación Latinobarómetro (2005).

Por países, 11 presentan porcentajes superiores a 50%, es decir, la expectativa es de movilidad social ascendente, y entre ellos se encuentran Panamá (57%), Guatemala (60%) y Honduras (61%); un país -Costa Rica- se ubica exactamente en el 50%; y seis países muestran porcentajes inferiores a 50%, o sea, que predomina la expectativa de no movilidad o movilidad descendente. Entre estos últimos están El Salvador y Nicaragua (43% en ambos casos).

Los coeficientes de correlación entre esta expectativa y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso son muy bajos, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Sin embargo, en el caso centroamericano, esta situación está directamente relacionada con los

resultados de Nicaragua y El Salvador, pues si estos dos países se excluyen, el coeficiente de correlación sería de 0,95, lo cual refleja que la elevada desigualdad no constituye un obstáculo para esperar una movilidad social ascendente. Se podría interpretar también de esa afirmación que las mejores expectativas de movilidad hacen más tolerables esos mayores niveles de desigualdad.

Las percepciones en Nicaragua y El Salvador podrían verse afectadas por la situación política y económica en el primero de ellos, y por el tema de la inseguridad en el segundo.

3.3. La movilidad social en Centroamérica: resumen

Lo primero por destacar es que aún los países con los niveles de movilidad social más altos en el contexto latinoamericano, poseen niveles de movilidad social relativamente bajos en el contexto mundial. Esta situación resulta evidente cuando se comparan, por ejemplo, los índices de movilidad de los países latinoamericanos con los de Estados Unidos, presentes en algunos de los estudios considerados.⁷

En términos generales, los países centroamericanos pueden separarse en dos grupos desde la perspectiva de la movilidad social. Costa Rica y Panamá por una parte, que en Centroamérica muestran en la mayoría de las estimaciones los mayores niveles de movilidad (aunque están en un nivel intermedio en el contexto latinoamericano); y los demás países, con menores niveles en los contextos centroamericano y latinoamericano. El Salvador es un caso particular, pues mientras en algunas estimaciones muestra muy poca movilidad, en otras es relativamente elevada.

Según los análisis de brechas educativas de los estudios considerados, la mayoría de los países centroamericanos no favorece la movilidad social. Esto está en buena medida relacionado con problemas de cobertura y calidad de la educación, y a su vez, con el

7 Específicamente: Dahan y Gaviria (1999) y Behrman, Gaviria y Székely (2001)

reducido gasto público social. Costa Rica y Panamá presentan la mayor movilidad social gracias a sus menores brechas educativas, pero, también, son los países centroamericanos que muestran los mayores niveles de gasto público social en términos per cápita.

Debe considerarse además la consistencia entre las mediciones de movilidad social y las percepciones sobre movilidad social que se desprenden del *Latinobarómetro*, pues Costa Rica y Panamá son los dos países centroamericanos que muestran una percepción mayoritaria en el sentido de que se ha dado movilidad social ascendente. Para los demás países, la baja movilidad social según las mediciones coincide con las percepciones de movilidad social descendente de acuerdo con el *Latinobarómetro*. Debe recordarse también que para Centroamérica se dio una correlación relativamente fuerte entre esa percepción y la desigualdad, en el sentido de que a mayor desigualdad en la distribución del ingreso en los países centroamericanos, mayor es la percepción sobre movilidad descendente.

En lo que respecta a la expectativa de movilidad social futura, tienen una expectativa de movilidad social ascendente Panamá, Guatemala y Honduras. Costa Rica está en una situación intermedia, y en El Salvador y Nicaragua predomina la expectativa de no movilidad o movilidad descendente.

4. Los estudios sobre movilidad social en Centroamérica: avances, limitaciones y perspectivas

4.1. Análisis crítico sobre los estudios de movilidad social aquí considerados

Se pueden encontrar varias ventajas y limitaciones de las metodologías de movilidad educativa. Entre las limitaciones hay que señalar que se trata de metodologías de estimación de la movilidad intergeneracional. Es decir, que las mediciones de movilidad del grupo en análisis están basadas en comparaciones con las condiciones de vida de la generación anterior, las cuales se expresan en las variables de entorno familiar. En unos casos, esto se logra

mediante correlaciones con datos sobre los padres de familia (Andersen, 2001; De Ferranti y otros, 2004; Behrman, Birdsall y Székely, 1999). En otros casos, se recurre a correlaciones entre datos de hermanos(as) en una misma familia (Dahan y Gaviria, 1999; Behrman, Gaviria y Székely, 2001), como forma de aproximación al entorno familiar. Ambas estrategias están orientadas a medir la movilidad en función de comparaciones entre dos generaciones. Este tipo de metodologías difiere de las de medición de la movilidad intrageneracional, para las cuales se requiere de datos de panel. Con estas otras metodologías es posible seguir las condiciones de movilidad de un individuo particular en distintos momentos y a lo largo de varios años. Esta es una ventaja sobre el enfoque de movilidad intergeneracional, que no permite análisis individualizados. Además, el enfoque de movilidad intrageneracional no requiere de estrategias de medición indirecta de la movilidad ni de comparaciones entre generaciones.

Otra desventaja de las metodologías de movilidad intergeneracional es que están restringidas a estimar la movilidad en grupos de población dentro de un rango de edad. Con el paso del tiempo, las personas analizadas llegan a tener edades mayores al límite superior del rango de edad considerado en el estudio, y al superar ese límite de edad se pueden alterar, de alguna manera, las formas de asociación entre generación de ingresos y entorno familiar. Los estudios de movilidad intergeneracional no pueden captar esos cambios en el tiempo, a diferencia de los de movilidad intrageneracional.

Desde el punto de vista del análisis de las desigualdades de género, también hay desventajas asociadas con las metodologías de movilidad intergeneracional, basadas en mediciones de desventajas educativas. Cuando se aplican esas metodologías, el hecho de que las mujeres tengan brechas educativas similares o menores que los hombres en la mayoría de los países latinoamericanos –incluyendo los de Centroamérica– puede llevar a concluir que la movilidad social en las mujeres no es menor que en los hombres. Sin embargo, esa conclusión puede no ser cierta si se consideran las discriminaciones de género en los mercados laborales que se expresan, entre otros aspectos, en la segmentación ocupacional por sexo y en las brechas de ingreso por sexo.

El enfoque de movilidad intergeneracional educativa también tiene ventajas con respecto al de movilidad intrageneracional basado en paneles de datos. Una muy importante reside en que no se requiere de costosas encuestas de panel para lograr estimaciones de movilidad, pues se basan en datos procedentes de las encuestas de hogares que existen en casi todos los países de la región. Otra gama de ventajas se desprende del hecho de que no están basadas principalmente en datos de ingreso familiar o individual.⁸ En general, se considera que las mediciones de ingreso son muy inexactas, altamente dependientes de la estacionalidad en grupos grandes de población, y de difícil comparación entre países. Al respecto, en De Ferranti y otros (2004) se menciona que los estudios de movilidad intrageneracional en América Latina no siempre han logrado separar la medición de la movilidad a partir del ingreso, de los efectos de la volatilidad en el ingreso que es resultado de los frecuentes choques económicos en la región. De tal manera que en algunos países los datos de movilidad no son otra cosa que “volatilidad expresada con un nombre más agradable”⁹ (De Ferranti y otros, 2004).

El hecho de no depender de variables de ingreso también otorga ventajas a las metodologías de movilidad intergeneracional educativa con respecto a las que también miden movilidad intergeneracional, pero con base en datos de ingreso. En contraste, el uso de la brecha escolar como medida de movilidad social presenta ventajas importantes porque es un indicador relativamente simple (no es más que una estimación de años de educación perdidos), que se puede construir con datos existentes en los países y no presenta problemas de comparabilidad entre países.

La brecha escolar entraña, sin embargo, una limitación por tener presente: no incluye estimaciones de brecha en calidad de la educación. Como se expresa en Andersen (2001), si se logran construir brechas escolares ajustadas en función de la calidad de la

8 Algunas metodologías de movilidad educativa, como la empleada en Behrman, Birdsall y Székely, 1999, emplean datos de ingreso familiar, pero esa no es la variable central para explicar la movilidad.

9 En inglés: “volatility by a nicer name”.

enseñanza, probablemente se observaría que el entorno familiar es aún más importante, porque se captarían las diferencias entre la pobre calidad de la educación que se recibe en las escuelas públicas de muchos países de la región –y especialmente, en zonas rurales dispersas o en vecindarios pobres– y la buena calidad educativa de los centros educativos privadas a los que asisten niños o adolescentes de clase media alta o alta.

De los estudios sobre movilidad intergeneracional analizados, también se desprenden comparaciones críticas entre las metodologías de unos y otros. Andersen (2001) señala algunas desventajas de la metodología empleada en Behrman, Birdsall y Székely (1999) con respecto a la suya (también utilizada por de Ferranti y otros, 2004):

a) En Behrman, Birdsall y Székely (1999) se correlaciona la brecha escolar con solamente tres variables indicativas de entorno familiar (años de escolaridad del padre, años de escolaridad de la madre, e ingreso familiar); mientras que en la metodología desarrollada por Andersen (2001) se incluye un número más grande de variables educativas, lo cual permite obtener un modelo más robusto.

b) En la metodología de Andersen (2001) se utiliza la herramienta de descomposición de Fields (1996) para determinar la importancia relativa de las variables de entorno familiar, la cual es invariante a la escala de las variables. Esta herramienta tiene, entre otras, la ventaja de que no es necesario traducir todos los ingresos en una denominación monetaria común, como fue necesario para Behrman, Birdsall y Székely (1999) para tratar de que el índice de ingreso familiar sea comparable entre países.

c) En lugar de incluir la educación de padre y madre, en Andersen (2001) se incluye solamente la del progenitor que tiene el mayor valor en la ecuación, lo cual tiene la ventaja de que se pueden analizar los adolescentes que viven con un solo progenitor. Además, se considera razonable que el máximo nivel de educación de los padres es un mejor indicador.

d) En Behrman, Birdsall y Székely (1999) se dividieron las muestras en 559 submuestras, algunas de las cuales son tan pequeñas que sus resultados difícilmente son estadísticamente significativos.

En Andersen (2004) también hay comparaciones entre el método de medición de movilidad usado en ese trabajo y el que se empleó en Dahan y Gaviria (1999).¹⁰ Con respecto a este último estudio, se precisan las siguientes ventajas:

- a) Las muestras de Dahan y Gaviria (1999) son mucho menores que las de Andersen (2001) porque en el primer trabajo se escogen únicamente los hogares con al menos dos hermanos entre 16 y 20 años, para poder calcular las correlaciones entre hermanos. En las encuestas utilizadas por ese estudio, el uso de ese criterio llevó a utilizar únicamente el 37% de todos los hogares con población en ese rango de edad. Mientras tanto, el método de Andersen (2001) permite aprovechar los datos de casi todos los adolescentes disponibles en las encuestas de hogares.
- b) El método de Andersen (2001) mide la influencia de la brecha educativa sobre el entorno familiar de manera directa, mientras que el de Dahan y Gaviria (1999) lo hace de manera indirecta.

Además, se menciona que ni en Behrman, Birdsall y Székely (1999) ni en Dahan y Gaviria (1999) se reportan los intervalos de confiabilidad ni los errores estándar para cada uno de los índices que se calculan. Por tanto, no se puede saber si las comparaciones entre países son estadísticamente significativas.

En Behrman, Gaviria y Székely (2001) se compara la metodología usada en ese estudio y en Dahan y Gaviria (1999) –la cual utiliza correlaciones entre las brechas de escolaridad de hermanos que viven en una misma casa– con la que se utilizó en Behrman, Birdsall y Székely (1999). Se señalan dos ventajas de la primera metodología sobre la segunda:

- a) La metodología de los dos primeros estudios no depende del uso de variables de ingreso, las cuales son de difícil comparación entre países y están sujetas a errores de medición, principalmente en las colas de la distribución del ingreso.
- b) A diferencia de la metodología de Behrman, Birdsall y Székely (1999), la otra metodología no requiere de estimaciones

10 Recuérdese que Dahan y Gaviria (1999) y Behrman, Gaviria y Székely (2001) utilizan la misma metodología de cálculo de movilidad social. Por tanto, las críticas aplicables al primer estudio también son válidas para el segundo.

econométricas con problemas potenciales de *endogeneidad* que son difíciles de evitar. Se menciona, a manera de ejemplo, que las correlaciones entre desempeño escolar de los niños o adolescentes y características de los padres se introducen factores asociados con la dotación genética que afectan tanto la escolaridad como los ingresos.

c) En Dahan-Gaviria se miden los controles de todas las características no observables de las características familiares, las cuales se expresan en las correlaciones entre brechas escolares de hermanos. Esa es una ventaja, se dice en el citado trabajo, porque ha sido demostrado en estudios anteriores que las correlaciones entre hermanos permiten estimar de manera no sesgada las correlaciones intergeneracionales y logran medir esas correlaciones de manera conservadora.

Para el caso específico del método de seudopaneles, en Fields y otros (2006) se destaca que es un método que está recibiendo una creciente atención para calcular movilidad social. Según se explicó en la segunda sección, este método está basado en la construcción de cohortes de individuos con base en datos de encuestas de hogares, y en la estimación de los cambios en los ingresos promedio de la cohorte en el tiempo. Es una manera de aproximarse al tipo de medición que se hace con las metodologías de movilidad intrageneracional basadas en paneles de datos. Pero, a diferencia de estas últimas, el método de seudopaneles no rastrea el ingreso de personas o familias específicas, sino el de cohortes que tienen ciertas características comunes (usualmente, de edad, género y a veces, educación). Este método presenta varias de las ventajas propias de los de movilidad intrageneracional basada en paneles de datos. Entre ellas, que no dependen de comparaciones con respecto a variables de entorno familiar y que pueden rastrear los cambios en movilidad de un grupo de individuos, sin restringirse a un rango de edad previamente fijado. El método también tiene ventajas con respecto al de movilidad intrageneracional basado en paneles de datos. La principal es que puede ser aplicado con base en encuestas de hogares. Esa es una ventaja en costo (pues los paneles de datos son caros), de disponibilidad (porque las encuestas de hogares se producen periódicamente), y también en extensión temporal (pues el análisis de

las cohortes puede ser continuado en el tiempo, mientras que los paneles de datos suelen tener un momento de término).

En Calónico (2006) se mencionan otras ventajas del método de seudopaneles sobre el método de movilidad intrageneracional basado en paneles de datos. Una consiste en que el método de seudopaneles no requiere establecer restricciones a ciertas regiones geográficas o a ciertos grupos (jóvenes, trabajadores, etc.), las cuales son comunes en el otro método, pues las encuestas de hogares tienden a ser representativas de la población nacional en general. Otra ventaja consiste en que los seudopaneles no se ven afectados por efectos de desgrane en la muestra, pues en cada período se obtiene una muestra nueva. En tercer lugar: dado que los seudopaneles se construyen promediando variables dentro de cada cohorte, los problemas de medición en el error se reducen significativamente.

Entre las desventajas del método de seudopaneles que se mencionan en Fields (2006), están las siguientes: a) puede conducir a sesgos en las estimaciones si hay niveles de error de medición para las cohortes que varían con el tiempo; b) el análisis de los seudopaneles puede involucrar ciertos sesgos cuando no se logra rastrear un grupo consistente de individuos en el tiempo debido a ciertos eventos como migración, muerte, o disolución o creación de hogares; y c) la vinculación entre el análisis del ingreso de los individuos o los hogares con el ingreso de la cohorte elimina la posibilidad de estudiar cualquier efecto de movilidad en el ingreso intracohorte.

4.2. Consideraciones generales para el estudio de la movilidad social en la región

La medición de la movilidad es importante para orientar la agenda de políticas públicas. En la medida en que desigualdad y movilidad son complementarias, es necesario medir la movilidad y no solo la desigualdad. Recuérdese que la movilidad ilumina especialmente las políticas orientadas a generar mayores oportunidades (nivelar el piso), mientras que las de desigualdad pueden llevar a dar asistencia a los más

Pobres o vulnerables, sin que necesariamente se ponga el énfasis en la generación de oportunidades.

En países como los centroamericanos con niveles de desigualdad muy altos, el aumento de la movilidad permite generar condiciones para reducir la desigualdad en el largo plazo y hacer menos dura la desigualdad en el corto y mediano plazo para grandes grupos de población. En cambio, si se pone la mira únicamente en las condiciones actuales de desigualdad, se puede estimular la parálisis y la impotencia en términos de políticas públicas porque las brechas son muy grandes y las opciones de reducirlas son muy escasas.

Como se menciona en Behrman, Birdsall y Székely (1998), *para entender mejor las causas de la alta desigualdad en la región y para identificar opciones de política que podrían afectar la desigualdad, sería útil conocer si la desigualdad está impulsada principalmente por la ausencia de oportunidades para grandes segmentos de población debido a sus entornos familiares o si es impulsada por diferencias en las características individuales que no están vinculadas con su entorno familiar*. Si a la hora del diseño de políticas solamente se pone la atención en las mediciones de desigualdad en el ingreso, las conclusiones pueden ser muy distintas a si además se utiliza información sobre movilidad social. Al respecto, Dahan y Gaviria (1999) menciona que si en los países latinoamericanos hubiera habido una valoración más equilibrada de la desigualdad y la movilidad, las recomendaciones de políticas tal vez habrían sido distintas: tal vez hubiera habido más políticas relacionadas con la disponibilidad de oportunidades y menos políticas relacionadas con compensar a los perdedores.¹¹

Adicionalmente, en Birdsall y Graham (1998, citado por Behrman, Birdsall y Székely, 1998), se menciona que para evaluar el impacto de las reformas en los mercados de la región y la sostenibilidad probable de esas reformas –incluyendo el apoyo

11 Traducción libre de los autores.

político a ellas— es esencial la caracterización del grado de movilidad social que existe entre generaciones y dentro de una misma generación, y si tal movilidad ha sido afectada por las reformas recientes.

La producción periódica de indicadores de movilidad que sean comparables entre países, es una prioridad tanto académica como política. Sería provechoso contar con estudios de movilidad social, que midan distintos determinantes de la situación económica y social de las familias y sus miembros, como el ingreso, el consumo, los ingresos laborales y la ocupación, con una gama más amplia de metodologías.

En todo caso, de las metodologías de movilidad intergeneracional educativa analizadas, la de Andersen (2001) parece ser la que muestra mayores ventajas. Se sugiere considerar su utilización en el proyecto de estimación periódica de la movilidad social en Centroamérica. El hecho de que esa metodología ponga el énfasis en las mediciones de brecha escolar es una ventaja en términos de política pública porque además de constituir por sí misma una medida de movilidad en el ingreso, es una medida de rezago —o adelanto— en el desempeño escolar de los países, y una forma consistente de vincular movilidad con desempeño escolar.

Se sugiere además la aplicación de la metodología de seudopaneles para realizar estudios comparables de movilidad social en los países centroamericanos. La medición de movilidad por cohortes puede ser útil para el diseño de políticas públicas, porque puede dar insumos para analizar políticas diferenciadas para distintos grupos sociales.

Bibliografía

Andersen, Lykke E. (2001): **Social mobility in Latin America: Links with adolescent schooling**, (Washington D. C., Banco Interamericano de Desarrollo).

Banco Mundial (2003): **La pobreza en Guatemala**, (Washington D. C., Banco Mundial, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Informe N.º 24221-GU).

Behrman, Jere R.; Alejandro Gaviria; y Miguel Székely (2001): **Intergenerational mobility in Latin America**, (Washington D. C., Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo).

Behrman, Jere R.; Nancy Birdsall y Miguel Székely (1999): “*Intergenerational mobility in Latin America: deeper markets and better schools make a difference*”, in: Birdsall, Nancy y Carol Graham (eds.): **New markets, New opportunities?: Economic and social mobility in a changing world**, (Washington D. C., Brookings Institution and Carnegie Endowment for International Peace).

Calonico, Sebastian (2006): **Pseudo-panel analysis of earnings dynamics and mobility in Latin America**, (México D.F., ponencia presentada en la Conferencia 2006 de la Latin American and Caribbean Economic Association).

CELADE (2004): **América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población 1950-2050**, (Santiago, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía –CELADE–, Boletín Demográfico N.º 73).

CEPAL (2007): **Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2006**, (Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, documento LC/G.2332-P/B).

CEPAL (2006): **Panorama Social de América Latina 2006**, (Santiago, Comisión Económica para América Latina -CEPAL-, documento LC/G.2326-P/E).

Corporación Latinobarómetro (2005): **Latinobarómetro 2005**, (Santiago, Corporación Latinobarómetro).

Dahan, Momi y Alejandro Gaviria (1999): **Sibling correlations and social mobility in Latin America**, (Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo).

De Ferranti, David; Guillermo E. Perry, Francisco H. G. Ferreira y Michael Walton (2003): **Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?**, (Washington D.C., Banco Mundial, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe).

Fields, Gary; Robert Duval Hernández; Samuel Freije Rodríguez; y María Laura Sánchez Puerta (2006): **Inter-generational income mobility in Latin America**, in: Economía (revista de la Latin American and Caribbean Economic Association, en proceso de edición, obtenido en: <http://econ.ucsd.edu/~rduvalhe/>).

Lam, David (1999): **Generating extreme inequality: Schooling, earnings, and intergenerational transmission of human capital in South Africa and Brazil**, (Ann Arbor, United States, University of Michigan, Population Studies Center, Research Report No. 99-439).

PNUD (2004): **Informe sobre la democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos**, (New York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-).

Sauma, Pablo (2003): **Pobreza y vulnerabilidad social: mercado de trabajo e inversión social en el istmo centroamericano a inicios del milenio**, (México, Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, documento LC/MEX/L.586.)

ENCUENTROS

Aproximación a un índice sintético de pobreza regional

Mirta Macías Ruano¹
Luis Reyes Cardona²

La pobreza ha ido adquiriendo un protagonismo creciente, tanto en el ámbito académico, como en la agenda política, situándose en la actualidad entre las principales prioridades de los Gobiernos y la cooperación internacional. Así, hay distintas opciones teóricas para su definición y medición, que han evolucionado desde una perspectiva economicista, basada en la medición del nivel desarrollo, a partir de producto interno bruto (PIB) a finales de la década de los años setenta, hasta un enfoque más integrador, basado en las capacidades de las personas donde el ingreso es un medio para alcanzar mejores capacidades y por ende mejores condiciones de vida.

El presente artículo describe las distintas opciones de definición y medición de la pobreza. Este trabajo trata de aportar una perspectiva distinta acerca de la pobreza. Con este propósito se ha construido un indicador sintético que incorpora variables

1 Becaria investigadora del Programa ALBAN, Universidad de Valladolid, mirtamaru@hotmail.com

2 Programa de Doctorado en Sociología, Universidad de Valladolid, lreyes64@hotmail.com

demográficos, económicas, educativas, laborales, que permitan caracterizar la pobreza tanto desde la perspectiva teórica como estadística para el período 2000-2005; dicho indicador tiene desagregación geográfica, lo cual permite ver la evolución de la pobreza en el ámbito departamental. Para ello se usa la técnica estadística de análisis de componentes principales.³

I MARCO TEÓRICO

En el debate sobre las distintas teorías que intentan explicar y definir la pobreza, destacan los esfuerzos de diversas organizaciones, entre ellas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE), entre otras.

Desde la perspectiva del Banco Mundial, se argumenta que la estrategia para reducir la pobreza no viene dada solo por el crecimiento económico, sino en la relación que se establece entre el crecimiento y el desarrollo del capital humano. Este enfoque se denomina crecimiento pro pobre (Ravallion, 2004; Kawani et al., 2004; OCDE, 2006) y plantea, por un lado, el tipo de crecimiento económico que favorece a los pobres y, por otro, la relación causa-efecto entre el denominado círculo vicioso de la pobreza y el crecimiento.

En tal sentido, estudios de la OCDE, y sobre todo del Banco Mundial (2006), señalan que la pobreza por ser un fenómeno de carácter estructural incorpora no solo los aspectos materiales, sino otras dimensiones, pudiendo citar, entre otras, las socioculturales, políticas, de género, etc. que se consideran estrechamente relacionadas entre sí y que constituyen el denominado círculo vicioso de la pobreza y del cual la pobreza forma parte. Por ello, es probable que la pobreza tal vez sea la consecuencia que origina que un país muestre tasas de crecimiento reducidas. Ello explicaría que un

3 El presente trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Programa ALBAN de la Unión Europea.

aumento del nivel de ingresos no reduce necesariamente la pobreza, dado que esta no solo es de carácter económico.

Este cambio en el enfoque de la pobreza asume el supuesto conocido de que la relación entre crecimiento y pobreza es estrecha, y plantea la posibilidad de que haya círculos viciosos en los que un crecimiento bajo genera altos niveles de pobreza, y estos niveles de pobreza, a su vez, hacen que el crecimiento sea reducido.⁴

Los círculos viciosos pueden conducir a la formación de “clubes de convergencia”, países más ricos y más pobres, regiones o familias que tienden a converger en diferentes niveles de ingreso o de bienestar en el largo plazo. El que se trate de trampas de pobreza de las que no es posible escapar sin intervención, o sencillamente de un alargamiento del tiempo necesario para la transición a estados de ingresos más altos, es una diferencia de importancia secundaria, en especial cuando se consideran las cuestiones de política económica (Banco Mundial, 2006, p. 9).

A partir de los anteriores planteamientos, se introduce el concepto de crecimiento pro pobre, definido como: *el crecimiento económico (absoluto) que permite que un rápido crecimiento del ingreso medio de los pobres sea ascendente* (OCDE, 2005, p. 3). Desde una perspectiva relativa, el crecimiento pro pobres compara los cambios en el ingreso de los pobres con los cambios en los ingresos de toda la población; es decir, pobres y no pobres. Por tanto, el crecimiento es pro pobres si los ingresos de la población pobre crecen tan rápido como el de la población en su conjunto.

Una segunda perspectiva, corresponde a la pobreza humana, que rompe con el enfoque de los bienes y la dependencia de los ingresos sobre la calidad de vida. Este nuevo paradigma concilia los conceptos de pobreza absoluta y relativa, ya que la privación de los ingresos y/o los productos pueden provocar una privación absoluta de las capacidades mínimas; es decir, la pobreza se interpreta como falta de capacidades y oportunidades en la sociedad.

4 En el citado informe se señala que la pobreza persistente en América Latina puede, por sí misma, estar entorpeciendo el logro de tasas de crecimiento más altas, que hay círculos viciosos reforzadores que mantienen a las familias, regiones y países en la pobreza e incapacitados para contribuir al crecimiento nacional.

La sustentación teórica se encuentra en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen (2000, p. 114), según el cual el nivel de vida de un individuo está determinado por sus capacidades y no por su ingreso (renta), ya que este último es un instrumento para obtener dichas capacidades. En tal sentido, la pobreza humana se concibe como la carencia de una relación mínima de algunas capacidades elementales como: analfabetismo, malnutrición, duración abreviada de la vida, mala salud materna y enfermedades susceptibles de prevención.

Una tercera aproximación a la pobreza la encontramos en el ámbito de la Unión Europea. En este contexto, existe un acuerdo generalizado que plantea el problema de la **pobreza como exclusión**⁵, destacando el potencial descriptivo y la riqueza analítica del concepto de exclusión social, pudiendo resaltar, al respecto, las aportaciones de Subirats et al. (2004) y Martínez (2003).

Subirats et al. (2004, p. 21), continuando con la tradición europea en cuanto a la exclusión social, aclaran que el fenómeno no se puede explicar considerando una única causa o factor, sino que precisamente la pobreza se define por la acumulación de factores o déficits interrelacionados, los cuales se retroalimentan entre sí.

Por su parte, Martínez (2003 p. 35) aborda la temática a partir de la confrontación de dos realidades; por un lado, existe un contingente poblacional de precarias condiciones habitacionales, analfabetismo, violencia o marginación, condiciones de las cuales las personas pobres no pueden salir. Paralelamente, es evidente la existencia de otro flujo (circular) de personas que no saben lo que es la supervivencia física y que su problema fundamental no es ni la marginación social o el analfabetismo. Mientras el primer flujo crece en progresión geométrica, el segundo lo hace en progresión aritmética.

En tal perspectiva, los individuos o familias sufren carencias de medios para la subsistencia digna durante un determinado período y, además, no tienen acceso a los pilares básicos de la sociedad, como

5 Hay que recordar la definición adoptada por la Unión Europea, por ejemplo, son pobres aquellas personas, familias o grupos cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son limitados que les hacen quedar excluidos del modo de vida mínimo aceptable en el Estado miembro en que habitan.

la cultura o la salud. Se puede decir que esos individuos o familias son pobres, en relación con otros miembros de la sociedad que disponen de medios y posibilidades para vivir dignamente, obviamente en una sociedad desarrollada.

Finalmente, la **Comisión Económica para América Latina** y el caribe (CEPAL) nos proporciona una alternativa de medición de la pobreza: el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI), herramienta creada a fines de los años 70, con el objetivo de medir y/o caracterizar la pobreza, mediante un enfoque directo. Se define la pobreza de forma estructural; se trata de establecer si el hogar está logrando realmente satisfacer esas necesidades. Se considera que una unidad es pobre si no alcanza uno de los umbrales correspondientes a algunas de las necesidades básicas.

II ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ECONOMÍA HONDUREÑA

Al analizar cualquier territorio, ya sea en el ámbito de país, departamento, municipio o región, hay que incidir en los contextos (socioeconómicos, históricos y políticos) en que se inserta. El producto interno bruto (PIB) es uno de los indicadores para evaluar el comportamiento económico; sobre todo, en el caso de Honduras, el crecimiento del PIB es una condición necesaria para sustentar la estrategia de reducción de la pobreza, pero por sí sola no es condición suficiente para superarla. Las anteriores consideraciones son el punto de partida para el desarrollo del presente apartado, donde se presentan datos de la evolución de los principales agregados económicos.

II.1 Producto interno bruto

El grado de actividad regional se analiza mediante las tasas de crecimiento de variables como el PIB, PIB per cápita, estableciendo comparaciones con otras economías para situar a Honduras en el contexto del área centroamericana.

De acuerdo con los datos que se recogen en el Cuadro 1, Honduras presenta para el período de referencia (1995-2006) valores superiores

a la media de América Latina, en cuanto a la tasa de crecimiento del PIB. En comparación con los datos de la región a partir del año 2001, se sitúa levemente por encima de la media.

Una segunda magnitud de la economía hondureña, es su PIB per cápita, que presenta, de manera general, tasas de crecimiento muy reducidas en el período 1995-2001 (0,7 y 0,1, respectivamente) y una tasa moderada en el 2006 (3,2). Dichos valores al compararse con la media de América Latina son ligeramente superiores para los años 1995 y 2001 y próximos en el año 2006. Para el quinquenio 2001-2006, la tasa del PIB per cápita hondureño es superior a la media del área centroamericana.

Cuadro 1.
Evolución de las tasas de crecimiento del PIB
y PIB per cápita 1995-2006

País/región	PIB			PIB per cápita		
	1995	2001	2006	1995	2001	2006
América Latina	1,1	0,4	5,3	-0,6	-1,2	3,8
Centroamérica	4,6	1,7	5,3	2,5	-0,3	2,8
Honduras	3,7	2,7	6,0	0,7	0,1	3,2

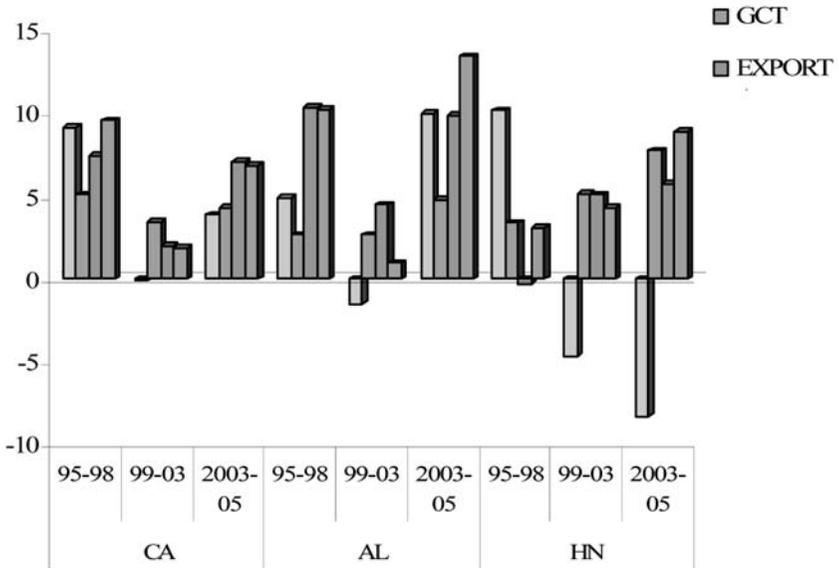
Fuente: BCII y CEPAL (1995-2006).

Teóricamente, una economía eficaz requiere un buen funcionamiento de ciertas variables, entre las que destacan los componentes del PIB. Dentro de los estudios realizados en orden a establecer de un modo riguroso las fuentes del crecimiento económico, destacan los de De Gregorio y Lee (1999) que plantean que una fuerte contribución de la formación de capital a la tasa de crecimiento de los países vía mejora de la capacidad instalada disponible para producir, aumentará el PIB de la economía.

El Gráfico 1 da cuenta de la evaluación de los componentes del PIB para las regiones analizadas. En el caso hondureño, en comparación a Centroamérica y América Latina, es evidente la contracción, cada vez mayor, de la inversión en la formación de

capital fijo, lo cual no contribuye a dinamizar la demanda. Esta última depende cada vez más del consumo interno que crece a una tasa mayor que el PIB y las exportaciones. En consecuencia, el ahorro del país es nulo o inexistente en tales condiciones.

Gráfico 1.
Evolución componentes PIB 1995-2005



Fuente: CEPAL 2006

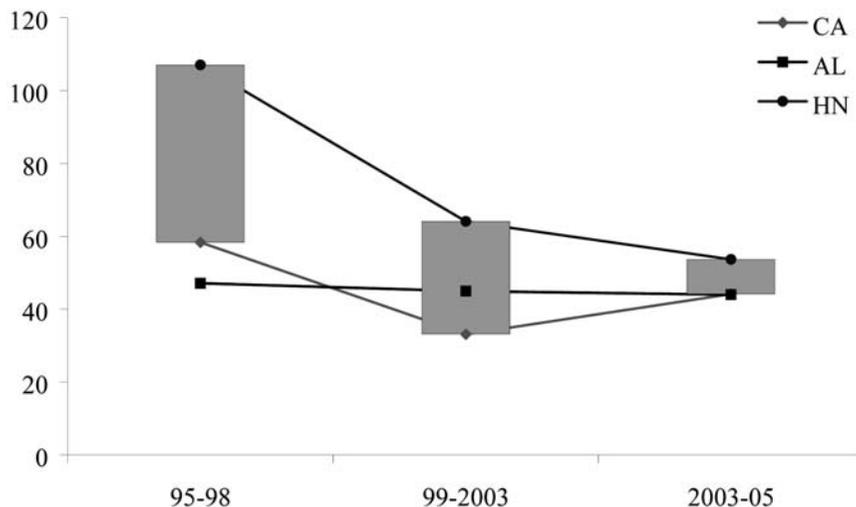
Una de las debilidades de la economía hondureña, ha sido el alto nivel de endeudamiento. Como puede apreciarse en el Gráfico 2 la relación deuda/PIB siempre ha sido una de las más elevadas de América Latina con valores para el período analizado entre 107,1% y 53,7%, lo que constituye un verdadero estrangulamiento de la economía.⁶ Por otra parte, se identifica una reducción muy

6 En el año 2006, la relación deuda/PIB alcanza el 33%, producto de la condonación de la deuda externa hondureña en el marco de la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).

significativa de la carga de la deuda (deuda/PIB) en un 50% con respecto al período 95-98, a pesar de ello Honduras no logra aproximarse a la media del contexto (Centroamérica y América Latina, en general).

El elevado endeudamiento es una de las características de la economía hondureña, consideración que le ha permitido ser parte de la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).

Gráfico 2.
Evolución deuda externa 1993-2005



Fuente: Elaboración propia, con datos de CEPAL (2006).

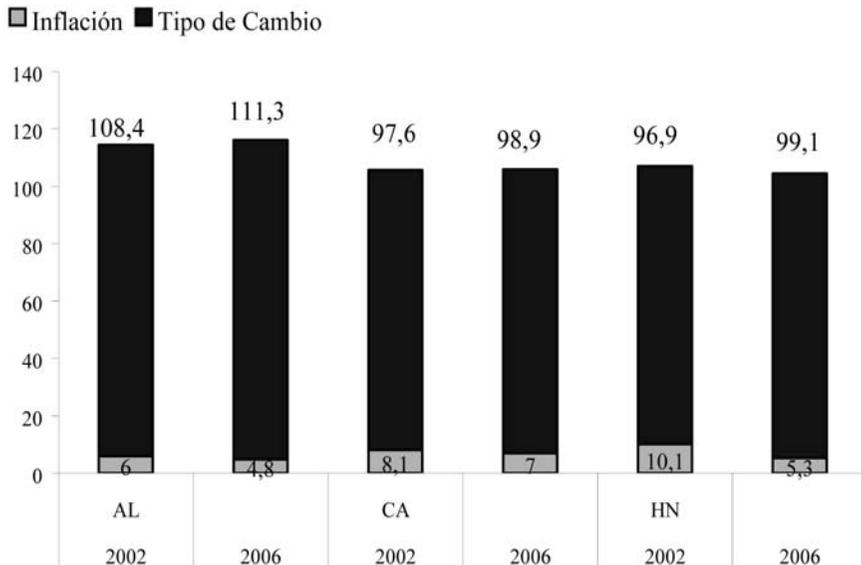
II.2 Evolución de la inflación y el tipo de cambio

La inflación medida por la variación en el índice de precios al consumidor (IPC) se recoge en el Gráfico 3. Como puede observarse, la tasa inflacionaria en Honduras en el año 2006 es próxima a la media de América Latina y menor en un 1,4% a la de la región centroamericana.

En la reducción favorable de la tasa de inflación, influyó la apreciación de la moneda nacional (lempiras), con respecto al dólar estadounidense, lo cual permitió que los bienes importados se abarataran con respecto a los productos de origen nacional y redujo el efecto al alza de los precios internacionales de los productos básicos.

Por otra parte, los resultados en cuanto el control de la inflación también se asocian a la política económica enmarcada en los acuerdos en tal materia que Honduras suscribe con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sobre todo en el quinquenio 2000-2005 donde tuvieron que cumplirse una serie de requisitos para poder lograr el punto culminación en el marco de la Iniciativa HIPC.⁷ En tal sentido, uno de los objetivos es precisamente el control de la inflación que en el período se redujo en aproximadamente un 4,8%.

Gráfico 3.
Inflación y el tipo de cambio real efectivo (2000=100)



Fuente: Elaboración propia, con datos de CEPAL (2006).

7 Significa haber superado todas las fases y ser incluido como País Pobres Altamente Endeudados y por tanto lograr la condonación de la deuda externa.

II.3 Mercado laboral

En un contexto como el de Honduras, de cara a la reducción de la pobreza no solo es necesario un crecimiento económico sostenido en un marco de inflación decreciente, sino que también es preciso un aumento en los niveles de empleo.

La información del Cuadro 2 resume la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo. Una primera lectura que se extrae, se refiere a que la demanda laboral en Honduras se desacelera, lo cual se refleja en la contracción de la tasa de ocupación para el año 2005 en un 1,1%. En segundo lugar, el mercado laboral hondureño, en comparación al área centroamericana y de América Latina, presenta tasas de ocupación por debajo del promedio para el período analizado.

Finalmente, en lo que atañe a la tasa de desempleo, esta se mantiene alrededor del 6% por debajo de la media centroamericana y de América Latina. También cabe mencionar que en el año 2005, el salario promedio real en Honduras alcanza una tasa de crecimiento cercana a la media de América Latina, superior en un 5% al promedio del área centroamericana.

Cuadro 2.
Evolución de indicadores del mercado laboral

Indicador	Tasa de Ocupación		Desempleo		Salarios ⁸	
	2002	2005	2002	2005	2002	2005
América Latina	52,9	53,5	10,7	9,1	0,0	5,5
Centroamérica	50,3	61,7	7,2	13,8	0,8	0,8
Honduras	49,7	48,6	0,8	6,5	2,1	5,8

Fuente: CEPAL 2006.

8 Tasa de crecimiento anual.

II.4 Crecimiento económico y pobreza

Estudios de la CEPAL (2000, p. 5) señalan la existencia de una relación entre la evolución macroeconómica y los determinantes claves de la pobreza y enfatizan la incidencia en esta del crecimiento económico. En este epígrafe se expone, de manera descriptiva, la relación entre crecimiento económico y pobreza.

Un primer escenario que se deduce de la información contenida en el Cuadro 3, se refiere a que la tasa promedio de crecimiento de la población hondureña se sitúa en un 2,5, mientras que el incremento registrado en el PIB oscila entre un 2,6% y un 6%. En consecuencia, el margen de contribución del crecimiento económico a la reducción de la pobreza es escaso y esta aumenta o se mantiene en el período analizado.

Un segundo escenario indica que dada la actual tasa de crecimiento poblacional, una reducción de la tasa de pobreza requiere un crecimiento de la economía a una tasa del 6% anual. La diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y la de la población es de un 3,5%, que corresponde exactamente con el porcentaje de reducción de la pobreza entre 2005 y 2006. Adicionalmente, se observa una tendencia contractiva (4,7%) en la incidencia de la pobreza rural, mientras que la pobreza urbana tiene una trayectoria inestable y su tasa disminuyó en un 2,7%.

Cuadro 3.
Evolución del crecimiento del PIB y la pobreza
en Honduras 2001-2006.

Categoría	2001	2003	2005	2006
Tasa de crecimiento del PIB	2,6	3,5	4,1	6,0
Pobreza Urbana	57,7	57,2	60,3	54,9
Pobreza Rural	73,8	72,5	71,5	69,1
Pobreza Total	64,5	65,1	65,3	61,8
Tasa de crecimiento poblacional 2000-2005	2,5			

Fuente: Cálculos propios, con base en datos INE, (2000-2006); CEPAL (2005-2006).

III METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA

Según Ravallion (2003), antes de intentar cuantificar cualquier característica o situación, se debe tener claro el concepto que se quiere medir, por tanto, es necesario elegir el concepto de pobreza por utilizar y, con ello, se condiciona el enfoque elegido. Así, cuando medimos la pobreza nos encontramos en la disyuntiva metodológica y conceptual de expresar la pobreza en términos absolutos o relativos, entre el enfoque directo o indirecto, entre la perspectiva objetiva o subjetiva. Sin embargo, los indicadores de bienestar más aceptados han sido la satisfacción de ciertas necesidades y el consumo de bienes o el ingreso disponible. A continuación se describen las metodologías más usadas para medir la pobreza.

III.1 Método de líneas de pobreza (ingreso-consumo)

El enfoque del ingreso es un método indirecto de medición de la pobreza, que examina el potencial consumo de las familias a partir de un ingreso corriente. Se enmarca en una perspectiva *bienestarista*, que supone que con el ingreso corriente percibido por las familias adquieren una combinación de bienes y servicios, que les permite maximizar su utilidad de acuerdo con sus preferencias.

Uno de los indicadores más comunes usados para medir pobreza en este método, son el ingreso y el gasto en consumo; este último se considera sobre todo como una aproximación más directa del bienestar de una persona, mientras el ingreso es una variable próxima de lo que puede ser el bienestar de un individuo (BM, 2001, p. 4).

Desde este punto de vista, se considera como pobre a las familias que tienen un nivel de ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades básicas; es decir, gastos básicos en alimentación y servicios mínimos. Para ese nivel de ingreso mínimo, se requiere establecer lo que se denomina línea de pobreza.

El Banco Mundial (2001, p. 4) define el concepto línea de pobreza como umbral por debajo del cual se clasifica a determinado individuo o unidad familiar como pobre; en otras palabras, es el punto que separa los pobres y no pobres.

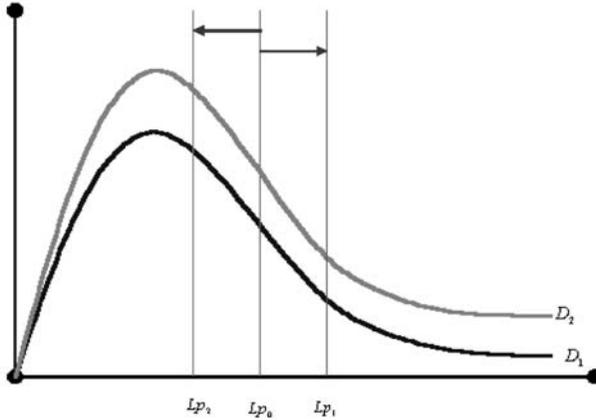
La línea de pobreza puede interpretarse como un punto en la función del gasto del consumidor, que proporciona el costo mínimo que representa para un hogar alcanzar un nivel dado de utilidad a los precios prevaletientes y para determinadas características domésticas (Ravallion, 1997, p. 5). Por lo que si consideramos un hogar con características x (un vector) que consume una canasta de bienes en cantidades q (también un vector); se supone que las preferencias del hogar con respecto a todas las canastas de consumo asequibles puede representarse mediante una función de utilidad que asigna un único número a cada posible q , dado x .

Por tanto, la función de gasto del consumidor es: $e(p, x, u)$, que representa el costo mínimo de un nivel de utilidad u para un hogar con características x cuando se enfrenta con el vector de precios p . Cuando se evalúa al nivel de utilidad real, $e(p, x, u)$, es simplemente el gasto total real en consumo, ($y = pq$), para un hogar maximizador de utilidad.

Simbolícese u_z como el nivel de utilidad de referencia necesaria para escapar de la pobreza. La línea de pobreza es entonces: $z = e(p, x, u_z)$. Lo anterior significa que la línea de pobreza es el costo mínimo del nivel de utilidad de la pobreza a los precios vigentes y según las características de los hogares.

Desde esta perspectiva, el umbral es el punto de corte de la distribución de los ingresos, tal como se puede observar en el Gráfico 4 los valores a la izquierda de la línea de la pobreza (LP) son los que están en situación de pobreza y los de la derecha representan a los no pobres.

Gráfico 4.
Línea de pobreza



Fuente: Elaboración propia.

Una vez establecidos los umbrales, hay que centrarse en expresar la pobreza en medidas estadísticas que permitan resumir el concepto en un indicador. Entre los indicadores que permiten cuantificar la incidencia, profundidad y gravedad de la pobreza, se encuentran los siguientes:

a) Índice de recuento o incidencia (H)

Es la medida más simple, solo recoge la incidencia de la pobreza, pero no la severidad, por lo que expresa el porcentaje de personas cuya renta o consumo está por debajo de la línea de pobreza; es decir, la parte de la población que no puede adquirir la canasta de productos básicos. A continuación, se proporciona su cálculo e interpretación de manera resumida (Tabla 1).

Tabla 1.
Incidencia de la pobreza

Variable		Definición
q	Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza	Mide el % de personas debajo la línea de pobreza $0 \geq I \leq 1$ Un índice menor o cercano a 0 indica menor incidencia
n	Población total	
H	q/n	

Fuente: Elaboración propia.

Dado que el ejercicio de recuento (H) no toma en cuenta el hecho de que podría haber personas un poco por debajo de la línea de la pobreza, ni tampoco que la distribución entre los pobres podría ser o no ser muy desigual en sí misma, se ha optado por usar otro estadístico agregado del mismo tipo del recuento, llamado diferencia de los ingresos o brecha de la pobreza (I).

b) La brecha de la pobreza

Suele considerarse representativa de la severidad de la pobreza y se define como la distancia media que separa a la población de la línea de pobreza, asignándose a las personas no pobres el valor de cero. Este indicador representa el déficit de renta o consumo global medio con respecto a la línea de pobreza de toda la población; en otras palabras, estima el total de los recursos necesarios para llevar a todos los pobres hasta el nivel de línea de pobreza.

Tabla 2.
Índice brecha de la pobreza (PG)

Indicador	Variable	Definición
Brecha de Ingreso (I)	Z	Línea de pobreza
	Y_i	Ingreso per cápita pobres
	q	Número de personas con ingreso per cápita inferior a LP
$PG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]$	$0 \geq I \leq 1$	Índice cercano a (0) significa menor brecha de ingresos

Fuente: CEPAL (2001).

Puede decirse que la brecha de la pobreza es igual al producto de multiplicar el coeficiente del déficit de ingreso (I) por el índice de incidencia de pobreza (H), definiéndose el coeficiente del déficit de la renta de la siguiente manera:

I= Cociente de brecha ingreso definido por:

$$I = \frac{Z - Y}{Z} * q \text{ donde: } Y_q = \sum_{i=1} Y_i$$

Donde Y_i denota el ingreso medio de los pobres

$$PG = I * H$$

Tanto el ratio del recuento (H) como el de brecha de la pobreza (I) presentan ciertas limitaciones; el primero, según Sen (1995, p. 120) solo toma en consideración el número de hogares/personas por debajo de la línea de pobreza, mientras que el ratio de la brecha solo considera la diferencia media de ingreso de los pobres respecto a la línea. Además, ninguno de los dos presta atención a la distribución de los ingresos entre los pobres.

Por lo tanto, se necesita otro estadístico que permita captar la transferencia y desigualdad de ingresos. Una alternativa la constituye los índices de familia de Foster, Green y Thorbeche (FGT) que toman en consideración el desnivel de la pobreza con respecto al umbral.

c) La gravedad de la pobreza (FGT)

Este indicador tiene en cuenta no solo la distancia que separa a los pobres de la línea de pobreza (brecha), sino, también, la desigualdad entre estos, por lo que se asigna un mayor peso a las unidades familiares más alejadas de la línea de la pobreza.

Tabla 3.
Índice de gravedad de la pobreza

Indicador	Variable	Definición
Gravedad de la pobreza (P_{∞})	Z	Línea de Pobreza
	Y_i	Ingreso del i-ésimo individuo pobre
	q	Total de pobres
	n	Total de población
		$0 \geq P_2 \leq 1$
	$\alpha = 0$	el índice es igual a la incidencia de la pobreza (H).
	$\alpha = 1$	es igual a la brecha de la pobreza (H*1).
	$\alpha = 2$	representa la distancia media de ingreso de los pobres, al cuadrado, con respecto a la línea de pobreza

$$P_{\infty} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{Z - Y_i}{Z}$$

Fuente: Banco Mundial(2001).

III.2 Método de necesidades básicas insatisfechas

El anterior método ingreso–consumo no está exento de críticas; uno de los argumentos es que la línea de pobreza que supone que la satisfacción de las necesidades solo depende del ingreso o el consumo corriente. Una segunda crítica es que el ingreso no considera si la necesidad está satisfecha o no; por ejemplo, una persona con un nivel de ingreso superior a la línea de pobreza puede ser considerada no pobre; sin embargo, puede tener insatisfecha sus necesidades; es decir, mide la potencialidad de satisfacer las necesidades mediante ingreso, sin considerar el nivel de satisfacción de esas necesidades.

Una alternativa de medición de la pobreza es el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI), herramienta creada a fines de los años 70, con el objetivo de medir y/o caracterizar la pobreza, mediante un enfoque directo. Se considera que una unidad es pobre si no alcanza uno de los umbrales correspondientes a algunas de las necesidades básicas. Definidas estas como una canasta de bienes

materiales, entre los que se cuentan: las condiciones de la vivienda, acceso a los servicios públicos, asistencia escolar de los menores, el nivel educativo, la ocupación del jefe de hogar.

Tabla 4.
Método de necesidades básicas insatisfechas

Necesidades Básicas Insatisfechas		Condición
VI	Vivienda inadecuada	Piso de tierra
VS	Vivienda sin servicios	Sin agua por acueducto o sin conexión a alcantarillado o pozo séptico
HC	Hacinamiento crítico	Hogares con número de personas por cuarto superior a tres
DE	Dependencia económica	Hogares cuyo jefe tenga un nivel educativo inferior a tercero de primaria y tres o más personas por cada persona ocupada
IE	Inasistencia escolar	Hogares en los que al menos un niño entre 7 y 11 años pariente del jefe no asiste a un centro de enseñanza escolar
Cálculo $INB_i = VI_i + VS_i + HHC_i + DE_i + IE_i$ Donde i = persona VI, VS, HC, DE, IE = 1 si cumple condición Si no la cumple = 0		Interpretación NBI = 1, la persona es considerada pobre NBI >1, la persona es pobre extrema

Fuente: CEPAL (2001).

Los métodos de medición de pobreza antes indicados ofrecen tanto ventajas como desventajas (CEPAL, 2001), que se sintetizan en las siguientes:

a. Líneas de pobreza

- Ventajas umbrales
- ❖ 2,212 KC diarias por personas, es adecuado para seguimiento de ingesta calórica.
- Gasto mediante el cual los integrantes del hogar pueden alcanzar un nivel de ingesta calórica, se considera un parámetro adecuado por ser representativo de la unidad familiar.
- Gasto mediante el cual los integrantes de la unidad familiar satisfacen sus necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias), el umbral es coherente para gastos reales.

❖ Desventajas

- ❑ Umbral de 2,122 KC no es representativo.
- ❑ Gasto mediante el cual los miembros del hogar alcanzan un nivel de ingesta calórica, no es coherente para gastos reales.
- ❑ Se cuestiona la confiabilidad de los ingresos debido al sesgo en proceso de recolección de la información.
- ❑ El cálculo de la canasta básica de alimentos (CBA) y los supuestos que permiten definir el valor final de la línea de pobreza de pobreza son débiles e imperfectos. El valor de la CBA se calcula en un año y luego esta se ajusta por el IPC por un período largo. Ello supone que la estructura de consumo de los hogares pobres no se ha modificado, ajustando sus preferencias a los cambios en los precios relativos de bienes de la canasta original.

b. Necesidades básicas insatisfechas

❖ Ventajas

- ❑ Mide la pobreza de manera directa y multidimensional. En el primer caso, se determina a partir de la constatación de la presencia de carencias críticas en los hogares; por ello, es mejor que la línea de pobreza ya que cuando se mide pobreza por los ingresos del hogar, se asume que este se traduce efectivamente en el acceso a la mayor parte de las dimensiones abstractas que se definen como bienestar mínimo. Multidimensional porque abarca distintas dimensiones del fenómeno que se analiza.
- ❑ Permite una desagregación tanto territorial como por tipo de indicador; ello permite elaborar mapas de pobreza, diseñar medidas específicas para el combate a esta, así como evaluar sus resultados.

❖ Desventajas

- ❑ La satisfacción de las necesidades básicas depende solamente de algunas fuentes del bienestar.
- ❑ El número de pobres crece, salvo casos excepcionales, a medida que aumenta el número de aspectos considerados en el índice.
- ❑ Solo identifica pobres, pero no permite medir ni la brecha ni la distribución entre los pobres.
- ❑ La metodología no permite distinguir si, por ejemplo, un hacinamiento crítico es tan grave.

Las opciones metodológicas descritas en líneas precedentes han tenido una aplicación generalizada en los países latinoamericanos⁹; sin embargo, la familia de indicadores del bienestar y la calidad de vida ofrecen una importante variedad de alternativa de análisis. Estos indicadores recogen una serie de variables socioeconómicas y demográficas¹⁰ que resumen información muy diversa sobre las condiciones de vida de una determinada sociedad; no obstante, es a mediados y finales de la década de los años 70 cuando se comienza a recurrir a este tipo de indicadores, aunque es en la década de los años 90 cuando se construye un indicador de las condiciones de vida que tiene aceptación internacional, como es el indicador de desarrollo humano y de pobreza humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Desde entonces, y de forma paulatina, conceptos como desarrollo, bienestar o condiciones de vida han ido perdiendo el carácter estrictamente cuantitativo para desarrollarse en un concepto con características cualitativas donde el desarrollo es un fin para optar por mejores condiciones de vida.

Teniendo en consideración los aspectos previamente indicado, en esta parte de la investigación proponemos la construcción de un indicador que resuma y refleje las condiciones sociodemográficas y económicas de Honduras, a partir de una serie de variables que, de acuerdo con la literatura, se asocian con la pobreza. Para tal fin hacemos uso de la técnica estadística de análisis de componentes principales (ACP), que nos permitirá resumir un grupo considerable de variables en un conjunto mucho menor y que tienen una explicación teórica como estadística.

9 La razón porque no se incluye en la investigación la metodología de medición de pobreza de capacidades (IDH) es por cuestiones operativas en cuanto a la información disponible en las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, dado que este trabajo forma parte de una investigación mayor y no se dispone de información sobre el PIB departamental se optó por no incluir dicho enfoque.

10 Al respecto, Barro y Sala-Martí (2004) en su análisis de convergencia usan variables como estado de derecho (rule of the law) la fecundidad, etc.; por su parte, Sach (2005) propone variable como la competitividad.

Una de las bondades de esta técnica es precisamente que permite usar un volumen considerable de información y recoger otros aspectos del problema de estudio, en nuestro caso la pobreza que no se capta con los métodos convencionales porque las variables están definidas mientras que con esta técnica se pueden incorporar n variables siempre que haya una sustentación teórica que avale su uso.

IV ASPECTOS METODOLÓGICOS

La **selección de las áreas de análisis** obedece, en primer lugar, a una sustentación teórica de determinadas variables que se relacione con la pobreza; en segundo lugar, está en función de la información que cada variable, que en conjunto hacen un volumen de información considerable para caracterizar las condiciones de vida en Honduras durante el período de referencia 2000-2005. Los aspectos considerados para nuestra investigación se sintetizan en los siguientes:

Demográficos. Estudios sobre el tema asocian la pobreza con la trampa demográfica (Sach, 2005; Barro y Sala-i Martin, 2003); así, aquellos hogares pobres se caracterizan por tener una composición familiar mayor, estructura poblacional joven, mayor dependencia demográfica y hacinamiento.

Educación. Es una variable clave para lograr la cohesión económica y social, así como mejores opciones de remuneración, en la medida en que las retribuciones al factor trabajo se esperan sean en función de la cualificación del capital humano.

Infraestructura y servicios. Existen una serie de condicionantes para el bienestar entre los que destacan la calidad de la infraestructura de la vivienda (materiales de pared, piso), así como el acceso a servicios básicos que dan cuenta del confort y las condiciones de habitabilidad de los hogares.

Mercado laboral. Sin lugar a dudas, el mercado de trabajo es una de las principales fuentes de ingresos de los individuos/hogares y en la medida en que genera empleo y hay mayor tasa de ocupación, las familias aumentan sus ingresos y las opciones de bienestar, sin que ello suponga que el ingreso o el mercado laboral son las únicas variables determinantes del bienestar. Por otra parte, la retribución al

factor trabajo está determinada por condicionantes de carácter estructural e individual que hacen diferenciación en términos de inserción laboral; esta última se asocia a una determinada productividad y remuneración según el sector de actividad; por ello, se deduce que el tipo de inserción laboral incide en las condiciones de los individuos/hogares en la medida en que afecta la remuneración de la fuerza de trabajo; así, hay actividades que son menos o más remuneradas de acuerdo con el sector de actividad económica.

Económicos. Los ingresos son un medio importante para la satisfacción de determinadas necesidades o mínimos necesarios aceptables en términos de calidad de vida. Las principales fuentes de ingresos de los hogares en la mayoría de los países latinoamericanos, sin lugar a dudas, son los ingresos por trabajo y en segundo lugar las remesas; estas últimas constituyen una estrategia de subsistencia en los hogares pobres.

Vale matizar que los anteriores factores considerados en nuestro análisis no son los únicos explicativos de la pobreza. Se han realizado diferentes aproximaciones de medición del fenómeno no basadas en las metodologías tradicionales¹¹, con la finalidad de proponer otras opciones de medición de la pobreza o las condiciones de vida, las que, por tanto, no solo se limitan a ciertas variables en función del método utilizado. La finalidad es incorporar un grupo de variables que concentre otras dimensiones del problema estudiado; así, elementos del mercado de trabajo y la precariedad laboral, vista desde la perspectiva de un segundo empleo o la jornada de trabajo, cobran relevancia. De igual forma, la geografía, el aspecto ambiental o factores institucionales, como puede ser el buen gobierno o la eficiencia, son cuestiones importantes asociadas a pobreza.

Sin lugar a dudas, los últimos dos elementos tienen mucha relevancia en términos de pobreza; sin embargo, en nuestra investigación no ha sido posible incorporarlos porque no se recogen en las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y se carece de información al respecto; por otra parte, hasta cierto punto la información estadística sobre la institucionalidad son indicadores carácter global; es decir, son expresados en el ámbito de

11 Método de: NBI, índice de pobreza humana, líneas de pobreza.

país; por tanto, no tienen desagregación geográfica, variable importante para nuestro análisis para ver la evolución de las condiciones de vida en el ámbito regional.

En lo que respecta a la **unidad de análisis**, esta la constituyen los hogares; por tal motivo, la selección de las variables se ha hecho teniendo en consideración que el propósito de la investigación es estudiar la pobreza desde la perspectiva teórica y estadística ; por ello, los aspectos antes indicados deben contribuir a su caracterización.

La **principal fuente de información** la constituyen las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples para los años 2000 y 2005 del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras. A partir de la información de los aspectos antes indicados, se construyeron las matrices compuestas por n hogares con p variables para cada año analizado (véase Cuadro 4).

Cuadro 4.
Muestral 2000-2005

Año	Hogares	Variables ACP
2001	16237	40
2005	7195	40

Fuente: Elaboración propia, a partir de EHPPM (2005-2006).

V APROXIMACIÓN DE LA POBREZA DESDE LA PERSPECTIVA ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)

La pobreza como fenómeno social se ha desarrollado en correspondencia con las transformaciones económicas, sociales y políticas; por ello no resulta fácil de explicar y medir mediante una sola perspectiva metodológica o teórica. Por tal motivo, para extraer conclusiones que tengan carácter válido, deben estudiarse los distintos factores que de acuerdo con la literatura, inciden en las condiciones de vida de una sociedad, tal como argumentan Pérez y Mora (2006, p. 20) al señalar que, en la actualidad, las causas de

dicho fenómeno se buscan en aquellos factores cuya interacción constituyen un obstáculo que limita las capacidades de la personas, e inciden, de manera negativa, en las oportunidades que tienen los hogares de estratos específicos de la sociedad, en cuanto a obtener los recursos necesarios, tanto monetarios como físicos, para contar con unos mínimos aceptables de vida.

La metodología elegida en este estudio es la del análisis factorial. En concreto, se va utilizar la técnica de Análisis de Componentes Principales, técnica que es empleada para identificar un número reducido de factores (los componentes), que recogen la mayor parte de la información proporcionada por un número elevado de variables explicativas de la pobreza.

Una vez definida la unidad de análisis, el siguiente paso consiste en seleccionar las variables a considerar en el modelo ACP. El proceso ha consistido en realizar una serie de pruebas, mediante la combinación de las 40 variables, a fin de obtener un modelo que explique, desde la perspectiva teórica y estadística, las condiciones de pobreza en los hogares hondureños en el período analizado. Finalmente, se obtiene un modelo de caracterización de la pobreza en los hogares, a partir de 14 variables cuya descripción se recoge en la Tabla 5.

Tabla 5.
Variables utilizadas en el ACP

N.º	Etiqueta	Nombre de la variable	Fuente
1	Agua	Acceso a agua	INE
2	Educación	Años de estudio aprobados	INE
3	mpared	Material de las paredes	INE
4	mpiso	Material piso	INE
5	Hacinado	Hacinamiento	INE
6	saneamiento	Saneamiento	INE
7	depecon	Dependencia económica	INE
8	Tamañoh	Tamaño del hogar	INE
9	inseragricola	Inserción agrícola	INE
10	IngresoOP	Ingreso ocupación principal	INE
11	IngresoOS	Ingreso segundo empleo	INE
12	PEAtrab2	Segundo empleo	INE
13	Jornada laboral2	Horas adicionales 2 empleo	INE
14	ocupados	Total ocupados	INE

Fuente: Elaboración propia.

V.1 Análisis de componentes principales

El objetivo fundamental del ACP es transformar un conjunto de variables cuantitativas a las que llamaremos variables originales, que la literatura económica identifica como explicativas de la pobreza, caracterizadas por compartir información común entre sí (correlacionadas), en un conjunto mucho más reducido de variables denominadas componentes principales. Estas últimas están no correlacionadas y extraen la máxima información del conjunto original de variables.

De acuerdo con Jonson (2000), básicamente se trata de explicar p variables observables X_1, X_2, K, X_p , por $p+m$ ($m < p$) variables no correlacionadas, no observables $F_1, F_2, K, F_m, U_1, U_2, K, U_p$ que denominaremos factores, de acuerdo con el siguiente modelo lineal.

$$X_1 = a_{11}F_1 + a_{12}F_2 + \dots + a_{1j}F_j + \dots + a_{1m}F_m + d_1U_1$$

$$X_i = a_{i1}F_1 + a_{i2}F_2 + \dots + a_{ij}F_j + \dots + a_{im}F_m + d_iU_i$$

$$X_p = a_{p1}F_1 + a_{p2}F_2 + \dots + a_{pj}F_j + \dots + a_{pm}F_m + d_pU_p$$

Las variables F_1, F_2, K, F_m , son variables no observables denominadas “factores comunes”, pues influyen en mayor o menor medida, en todas ellas. Las variables U_1, U_2, K, U_p son variables no observables denominadas “factores únicos”, pues son factores específicos que influyen solamente en una variable.

Matriz de datos (X) se expresa de la siguiente manera: $X = A * F + D$, donde, A es una matriz de patrón factorial que recoge la relación entre las variables y los factores comunes, y D es una matriz que recoge los coeficientes de los factores únicos.

En definitiva, se parte de que cada variable X puede expresarse como una combinación lineal de “ m ” factores comunes al resto de las variables, más un factor único propio de cada variable.

Los factores comunes van a obtenerse de modo que el primero sea el que explique o recoja la mayor parte de la variabilidad de la muestra de datos; el segundo sea ortogonal (esté linealmente

independiente) al primero y sea el que recoja la mayor parte de la variabilidad de los datos no explicada por el primero, y así sucesivamente. De este modo, los factores van a estar linealmente independientes y ordenados de modo decreciente, según la parte de la variabilidad total de los datos que recoge o explica cada uno de ellos.

Cada coeficiente a_{ij} se denomina carga factorial y representa la correlación lineal entre la variable i y el factor j . Un coeficiente grande en valor absoluto indica que la variable i y el factor j están estrechamente relacionados.

Una vez seleccionadas las variables, la información se estructuró en la matriz de coeficiente $A(n \times p)$ que se denomina matriz de patrón factorial, formada por n hogares y p variables observadas para los años 2000-2005. Previo a la realización del Análisis de Componentes Principales, es necesario comprobar la idoneidad de dichos análisis; es decir, se debe valorar si efectivamente las variables originales comparten información y si presentan un patrón de correlación común, dado que se trata de encontrar factores subyacentes que explican tales correlaciones; tal resultado lo proporciona la matriz de correlación entre las variables.

Para determinar si el modelo es adecuado y tiene sentido determinar la idoneidad del análisis factorial, antes deben efectuarse varias aproximaciones valorativas; entre ellas destacan:

- Determinantes de la matriz de correlaciones entre las variables
- Test de esfericidad de Barlett
- Medida de la adecuación muestral (Kaiser, Meyer y Olkin)
- Medida de adecuación para cada una de las variables incluidas

Para que el análisis factorial sea adecuado, es necesario que las variables estén correlacionadas dado que se trata de encontrar factores subyacentes que explican tales correlaciones. Tal resultado lo proporciona el determinante de la matriz de correlación (R_{xx}) entre variables. Así, un determinante próximo a 1 indica incorrelación entre las variables.

Un contraste estadístico muy utilizado para estudiar si es adecuado el análisis factorial, es el test de esfericidad de Barlett, que permite comprobar la hipótesis de incorrelación lineal entre las variables; es decir, $H_1 : R_{xx} = I$ frente a la alternativa $H_1 : R_{xx} \neq I$.

Rechazamos la hipótesis nula cuando el valor calculado del estadístico sea grande ya que si no existen correlaciones lineales significativas entre las variables $\ln|R| = \ln(1) = 0$. El test de esfericidad de Barlett resulta de la transformación ji-cuadrado del determinante de la matriz de correlaciones y se expresa de la siguiente forma:

$$-(n-1) - \frac{1}{6}(2p+5)\ln|R| \rightarrow \chi_{p(p-1)/2}^2$$

, donde p es el número de variables.

La medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Okin (KMO) contrasta si las correlaciones parciales entre variables son suficientemente pequeñas, lo que permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación simple observados versus la magnitud de los coeficientes de correlación parcial, de ser así, dichos coeficientes deberán ser casi nulos por la siguiente medida:

$$KMO = \frac{\sum_{i \neq i'} r_{ii'}^2}{\sum_{i \neq i'} r_{ii'}^2 + \sum_{i \neq i'} r_{ii'}^{*2}}$$

donde:

r_{ij} es el coeficiente de correlación observado entre las variables i y j.

y r_{ij}^* = coeficiente de correlación parcial entre las variables i y j

Estos coeficientes miden la correlación entre las variables i y j una vez eliminada la influencia que las restantes variables ejercen sobre ellas. Estos efectos pueden interpretarse como el resultado correspondiente a los factores comunes, y por tanto, al eliminarlos,

r_{ij} representará la correlación entre los factores únicos de las dos variables, que teóricamente tendría que ser nula. Si hubiese correlación entre las variables, estos coeficientes deberían ser próximos a 0, por lo que un KMO tomaría valores cercanos a 1, lo cual constituye un buen indicio de que el ACP es bueno. Al respecto, se plantean como criterios válidos para juzgar los valores de un KMO¹², los que resumen a continuación:

- KMO = 0,9 maravilloso.
- KMO = 0,8 son adecuado.
- KMO = 0,6 -0,8 regulares.

12 Puede calcularse para cada una de las variables incluidas en el análisis. Los valores son los elementos de la diagonal de la matriz antimagen

Una vez comprobada la idoneidad del ACP, el siguiente paso consiste en determinar el número de factores por extraer. En el análisis de componentes principales, no se considera que existan factores únicos y, por tanto, cada variable solo viene explicada por factores comunes. Esto significa que la matriz de la que se parte es la matriz de correlaciones, ya que $D=0 \Rightarrow R_{xx} = AA'$

Por otra parte, se considera que la varianza de cada variable puede descomponerse en dos partes, una explicada por los factores comunes (comunalidad = h_i^2), y otra explicada por su factor único (unicidad = d_i^2) $Var(x_i) = h_i^2 + d_i^2 = \text{comunalidad}_i + \text{unicidad}_i = 1$.

$h_i^2 = \text{comunalidad} = \text{parte de la varianza de } x_i \text{ que explican los factores comunes.}$

$d_i^2 = \text{unicidad} = \text{parte de la varianza de } x_i \text{ que explica su factor único.}$

En lo que se refiere a los criterios de selección de los factores, los más usados son los siguientes:

- Valores propios mayores que 1.
- El porcentaje de la varianza total explicada, dejando de seleccionar factores una vez que dicho porcentaje supera un nivel mínimo (que usualmente se elige entre el rango de 60 a 85 por ciento).
- Gráfico de sedimentación, que consiste en graficar los valores propios con respecto a los factores, con lo cual se genera una curva con pendiente negativa y se seleccionan aquellos factores que se encuentran justo antes del punto donde la curva cambia de concavidad.

Identificadas las componentes, el siguiente paso es su interpretación. Para ello se observó la correlación que tienen con las variables originales (saturaciones o cargas factoriales). Así, cada componente se interpreta a partir de aquel subconjunto de las variables iniciales que estén más correlacionadas (positiva o negativamente).

Para interpretar las componentes, es deseable que cada componente se asocie con un único grupo de variables y que este sea diferente al resto de las componentes; sin embargo, una estructura tipo que permita comprender claramente las componentes, no se obtiene de manera automática. En esta investigación, para facilitar la

interpretación de los resultados obtenidos, se utilizó el procedimiento de rotación de factores y más específicamente la rotación Varimax.

En el método Varimax, los ejes rotados se obtienen maximizando la suma de las cargas factoriales al cuadrado dentro de cada factor, donde una de sus propiedades más importantes es que, después de aplicada la varianza total, explicada por los factores y la comunalidad de cada variable, no se ve modificada, aunque, por supuesto, sí cambia el porcentaje de varianza explicada por cada eje.

Aplicando todo el procedimiento hasta aquí descrito, finalmente hemos obtenido las componentes cuyos resultados se interpretan en el epígrafe que describimos a continuación.

V.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La descripción de los componentes obtenidos y el porcentaje explicado de la varianza total en cada factor, se resumen en el Cuadro 6. De manera general, se puede decir que la agrupación obtenida a partir del ACP tiene una interpretación adecuada, recogiendo cada una de las componentes variables homogéneas, que, en conjunto, explican más de un 71,0% de la variabilidad en el período analizado, porcentaje que se considera adecuado (Fernández, 1988 citado en Herrero et al., 2006), dado que un porcentaje bajo de explicación de la varianza tendría poco valor explicativo y mucha pérdida de información; en el caso contrario, un porcentaje demasiado alto haría sospechar que hay información redundante que no podría sintetizarse.

Cuadro 5.
Factores y varianza explicada

	Factores	Auto valor inicial	% Varianza	Varianza Acum.
ACP año 2000	F1	4,318	31,834	31,834
	F2	2,102	16,171	48,005
	F3	1,801	13,854	61,859
	F4	1,331	10,241	72,101
ACP 2005	F1	3,935	23,890	23,890
	F2	2,457	20,381	44,271
	F3	1,916	19,347	63,618
	F4	1,043	8,313	71,931

El análisis de componentes principales (ACP) que nos ha permitido reducir el número de datos de las variables observadas en un grupo de factores que renombramos en función de las variables que se incorporan en cada bloque o factor y que exponemos a continuación.

En el año 2000 se obtienen cuatro componentes (véase Cuadro 7) con una varianza total explicada de un 72,1%. El **primer factor (F1)** se denomina “**Condiciones de habitabilidad y servicios**”; explica, aproximadamente, un 31,8% de la varianza y resume variables que describen las condiciones de la infraestructura de la vivienda, en cuanto a los materiales de paredes y piso, así como el acceso a servicios básicos; además, incluye el logro educativo, la inserción agrícola y el hacinamiento. Se identifica una correlación positiva en la mayoría de las variables, por lo que los hogares con mayores puntuaciones en este eje serán los que tienen mejores condiciones de habitabilidad.

El **segundo factor (F2)**, que llamaremos “**Demográfico**”, mide la dinámica poblacional, por medio de variables, como la estructura de edad; en este caso, hogares con población joven (menores de 15 años) y la dependencia económica¹³, la composición del hogar recoge aproximadamente un 16,1%. Hay una alta correlación positiva; por tanto, los hogares con indicadores más elevados son los que presentan mayor nivel de pobreza.

El **tercer factor (F3)**, denominado “**Fuerza de trabajo**”, explica aproximadamente un 13,8% de la varianza y resume las variables como la dotación de recurso humano medido por la composición del hogar y población económicamente activa ocupada. Ambas variables tienen correlación positiva: mayor población empleada, mejores condiciones de vida.

El **Cuarto Factor (F4)**, lo llamaremos “**Ingresos y empleo**”, explica alrededor del 10,2% de la variabilidad y comprende información de los ingresos del mercado laboral. Se identifican elevadas correlaciones de signo positivo con las variables relativas al ingreso.

13 Relación entre las personas en edades dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) que no trabajan y total personas que tienen un empleo.

Cuadro 6.
Resultado ACP, 2000

Variables	Factores			
	F1	F2	F3	F4
Material piso	0,830	0,097	-0,012	0,050
Saneamiento	0,788	0,116	0,007	0,056
Material pared	0,730	0,005	-0,015	0,039
Años de estudio	-0,709	-0,365	0,069	-0,012
Inserción agrícola	0,543	0,034	0,469	0,303
Hacinamiento	0,511	0,494	0,238	0,049
Menores de 15 años	0,169	0,899	0,281	0,050
Dependencia económica	0,141	0,844	-0,391	-0,005
Total ocupados por hogar	-0,091	-0,087	0,953	0,060
Tamaño hogar	0,067	0,605	0,758	0,064
Segundo trabajo	0,256	0,019	0,153	0,844
Jornada laboral 2	0,183	0,016	0,089	0,839
Ingreso segundo trabajo	-0,180	0,031	-0,048	0,649
Varianza explicada (%)				
F1 Condiciones de Habitabilidad				31,834
F2 Factor Demográfico				16,171
F3 Factor Fuerza de Trabajo				13,854
F4 Factor Condiciones de empleo				10,241
Varianza explicada				72,101
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales				
Método de Rotación: Normalización con Varimax con Kaiser				

Finalmente, en el año 2005, se obtienen cuatro componentes, tal como describe el Cuadro 8, con una varianza explicada del 71,9%. El **primer factor (F1)** lo llamaremos “**Factor condiciones de habitabilidad**”. Sintetiza la información de las condiciones de la infraestructura de las viviendas, como es el caso de los materiales de paredes y pisos. Además, incluye el acceso a servicios básicos, la inserción agrícola y el logro educativo, y expresa el 23,8% de la varianza. Aparece muy bien representada por las correlaciones positivas en todas las variables referidas a la calidad de los materiales de la infraestructura de la vivienda y el acceso a servicios básicos. Por tanto, es un factor que expresa las condiciones de habitabilidad: así, los hogares con mayor puntuación en este serán los que tienen mejores condiciones de habitabilidad, aunque se asocia de manera negativa con la variable logro educativo (años aprobados).

El **segundo factor (F2)**, al cual llamaremos “**Factor demográfico**”. Explica la varianza en un 20,3% y mide la dinámica poblacional, por medio de variables como la estructura de edad; en este caso, hogares con población joven (menores de 15 años), la dependencia económica corresponde al total de personas en edades dependientes por cada persona con un empleo y el tamaño del hogar y el hacinamiento. Las variables están altamente correlacionadas de manera positiva; por tanto, los hogares con mayores puntuaciones son los que tienen mayor porcentaje de población joven, más carga económica y mayor tamaño del hogar.

El **tercer factor (F3)** lo llamaremos “**Fuerza de trabajo y empleo**”; este explica un 19,3% la variabilidad y comprende información total de las personas que están empleadas por hogares; además, resume información referente a la segunda jornada laboral, la población ocupada con un segundo empleo y la dependencia económica. Se identifica una correlación alta y positiva con las variables del mercado laboral; por tanto, opone aquellos hogares con mayor número de personas empleadas con aquellos que tienen una menor proporción de PEA empleada. Por el contrario, con la dependencia económica la correlación es negativa.

El **cuarto factor (F4)** llamado “**Factor ingresos**”. Explica 7,7% de la variabilidad y resume la información de los ingresos procedentes del mercado laboral; ambas variables tienen una alta correlación positiva; por tanto, contrapone a aquellos hogares que tienen mayores ingresos con los de menores ingresos.

Cuadro 7
Resultados ACP, 2005

Variables	Factores			
	F1	F2	F3	F4
Material piso	0,820	0,038	-0,038	-0,016
Saneamiento	0,790	0,082	-0,030	-0,015
Años de estudio	-0,720	-0,191	0,106	0,141
Material pared	0,704	-0,020	-0,008	0,064
Inserción agrícola	,594	0,205	0,352	0,213
Menores 15 años	0,086	0,962	-0,034	0,024
tamaño del hogar	0,142	0,828	0,466	0,028
Dependencia Económica	0,042	0,781	-0,544	0,027
Hacinamiento	0,499	0,522	0,172	-0,076
Ocupados	-0,030	-0,034	0,927	-0,021
Jornada laboral 2	-0,063	0,056	0,894	0,024
Segundo trabajo	0,392	0,255	0,418	0,385
Ingreso segundo trabajo	-0,070	-0,028	-0,021	0,924
Varianza explicada (%)				
F1 Condiciones de Habitabilidad				23,890
F2 Factor Demográfico				20,381
F3 Factor Fuerza de Trabajo				19,347
F4 Factor Condiciones de empleo				8,313
Varianza explicada				71,931
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales				
Método de Rotación: Normalización con Varimax con Kaiser				

VI ÍNDICE DE POBREZA

Una vez obtenidas las componentes (ortogonales), con una capacidad explicativa similar al conjunto original de las variables, el segundo objetivo es sintetizar esta información en un índice que explique el concepto de pobreza y la cuantifique en el ámbito de los departamentos de Honduras y que nos permita captar las diferencias según departamentos en cuanto a los niveles de pobreza en los hogares hondureños.

Con esta finalidad se construye un indicador sintético, que tiene tantos valores como sea el número de hogares considerados y representa el nivel de pobreza en cada uno de los años analizados. Se

obtiene como una media ponderada de las componentes, asignándole a cada factor un peso, en función de su participación en la explicación de la varianza común, y se expresa de la siguiente forma ¹⁴:

Tomando como base los anteriores valores del indicador para cada año y teniendo en consideración que puede tomar valores tanto positivos como negativos, se realiza una clasificación a partir de cuartiles. Previo a ello, se ha ordenado el índice de pobreza de menor a mayor, tal como puede observarse en el Cuadro 8.

Cuadro 8
Tipificación de la pobreza, 2000-2005

Cuartil	2000	2005
Pobres extremos (Q1)	-0,4837	-0,3554
Pobres moderados (Entre Q1 ya Q2)	0,0258	-0,0135
Pobreza Relativa (Entre Q2 y Q3)	0,5080	0,3389
No pobres (Mayor a Q3)	Mayor a 0,5080	Mayor 0,3389

Fuente: Elaboración propia.

La clasificación de la pobreza ha tenido como referencia, en primer lugar, las distintas realidades en Honduras existentes; es decir, las características de pobreza en la zona norte no son similares a las observadas en los departamentos de la región sur o centro del país. Y dentro de la zona norte hay diferencias entre departamentos y municipios, solo por citar un ejemplo.

En segundo lugar, se ha tomado como referencia los umbrales de pobreza extremo y relativo, y se agrega la pobreza moderada y no pobres, por considerar que las estratificaciones socioeconómicas no se limitan a la dicotomía ser pobre o no, o ser pobre relativo extremo, ya que coexisten distintas realidades, como se ha comentado previamente.

14 Concretamente, el peso o ponderación del Factor F_i se calcula como el cociente entre la varianza explicada por ese factor y la varianza explicada en conjunto por las componentes.

Los resultados obtenidos indican que el grado pobreza no es igual en toda la geografía hondureña, y esta muestra una evolución de manera diferenciada según departamentos, a lo largo del período analizado, tal como puede observarse en el Cuadro 9.

En el **año 2000**, la pobreza extrema (Q1) afecta a un total de 10 departamentos. Dentro de este grupo presentan mayor porcentaje de hogares en dicha condición los departamentos de: Intibuca, Ocotepeque, La Paz, Valle, Santa Bárbara, mientras que en el otro extremo destacan Cortés y Francisco Morazán, con una mayor proporción de hogares que se caracteriza por no ser pobre y un número de reducido de hogares en situación de pobreza extrema.

Con respecto al **año 2005**, hay cambios muy significativos en la tipología de pobreza. En el rango de no pobres (Q4) los departamentos de Francisco Morazán y Cortés durante el período analizado presentan un deterioro de sus condiciones de vida, lo cual se refleja en la reducción del porcentaje de hogares en este grupo y permite variaciones en los cuartiles 3 y 4.

En la categoría de pobreza moderada (Q2), se identifican cambios significativos en los departamentos de Copan, Ocotepeque y Santa Bárbara, pasan de pobres extremos a pobres moderados, tal como puede apreciarse en el Cuadro 9.

En el conjunto de pobreza extrema (Q1), se presentan variaciones con respecto al año 2000; hay un total de once (11) en dicha condición, siendo notorio el deterioro de las condiciones de vida en los departamentos de: Atlántida, Colón, Comayagua y Choluteca.

Cuadro 9
Índice de pobreza según departamentos 2000-05

Nivel Pobreza	2000				2005			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Atlántida	16,6	24,7	32,8	25,8	27,7	25,0	24,4	23,0
Colón	26,1	29,5	32,4	12,0	34,2	32,5	24,3	9,0
Comayagua	28,8	29,1	22,5	19,6	30,6	27,2	20,5	21,6
Copan	37,3	30,4	19,0	13,3	22,1	30,3	24,7	22,8
Cortés	8,0	15,9	34,2	41,8	13,7	21,1	30,0	35,1
Choluteca	31,4	33,9	21,7	13,0	31,2	26,9	24,8	17,1
El Paraíso	32,0	30,9	25,4	11,7	38,0	26,5	17,6	17,8
Francisco Morazán	11,3	17,2	24,2	47,3	13,4	17,6	27,6	41,4
Intibuca	51,2	32,0	13,2	3,6	38,4	23,5	25,5	12,6
La Paz	42,8	34,2	17,2	5,7	33,7	28,7	23,8	13,7
Lempira	39,7	27,4	20,5	12,4	40,5	37,0	16,7	5,8
Ocotepeque	48,2	33,5	13,0	5,3	24,0	34,6	25,5	16,0
Olancho	38,4	30,8	16,0	14,8	37,9	30,0	18,5	13,6
Santa Bárbara	41,8	31,5	16,2	10,5	33,8	35,2	21,8	9,2
Valle	40,0	29,1	21,0	10,0	37,8	29,4	15,9	16,8
Yoro	35,2	31,0	24,9	9,0	34,3	26,8	27,0	11,9
Total	25							

Fuente: Elaboración propia.

El análisis arriba indicado permite una agrupación geográfica; con el objetivo de fundamentar nuestro análisis, se plasma en una distribución espacial cartográfica para los años estudiados, lo que permite visualizar y dilucidar las diferencias en las condiciones de vida según departamentos. Por otro lado, se puede apreciar una mejor representación cartográfica del indicador sintético de pobreza.

En el Mapa 1 representa la estratificación social de Honduras; así, por un lado, la pobreza extrema se concentra en las zonas fronterizas, la parte nororiental y oriental. Se caracterizan por ser áreas rurales y áridas en algunos casos y poco articuladas con el eje de desarrollo; por tanto, la geografía se convierte en un factor adverso. Mientras que los departamentos con menor nivel de pobreza se ubican en la zona norte y el centro, en el primer caso, puede asociarse al hecho de

ser la zona industrial de Honduras; por tanto, se concentra la mayor parte de la infraestructura; en el segundo caso, obedece a que en el departamento de Francisco Morazán se encuentra la capital del país.

En el grupo de pobreza moderada (Q2) destacan Comayagua y Choluteca, mientras que los departamentos con mayor predominancia de hogares pobres relativos, son Atlántida y Colón, ambos situados en la costa norte de Honduras.

Mapa 1.
Tipología de Pobreza 2000¹⁵



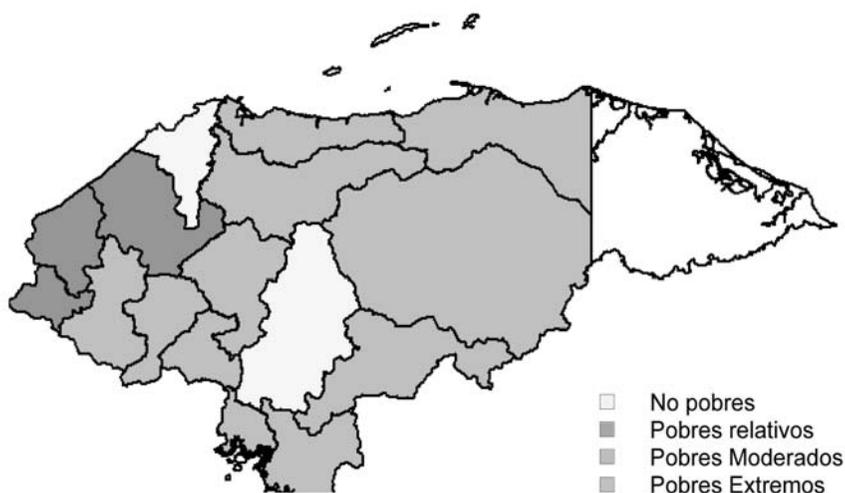
Fuente: Elaboración propia.

En el año 2005, la tendencia en los departamentos que tienen menos proporción de hogares en situación de pobreza se mantiene invariable, aunque las variaciones más significativas se observan en los departamentos de Occidente y más específicamente en Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara, que han cambiado de categoría con respecto al año 2000, pasan de ser pobres extremos a pobres

15 Honduras tiene un total de 18 departamentos; sin embargo, en las Encuestas de Hogares no se incluye Gracias a Dios e Islas de la Bahía. en la muestra.

moderados. También llama la atención el deterioro de las condiciones de vida en Atlántida y Colón, al pasar de pobres relativos a pobres extremos, en el resto de departamento no se identifican movimientos, siguen siendo pobres extremos.

Mapa 2.
Tipología de Pobreza 2005



Fuente: Elaboración propia.

El anterior análisis nos ha permitido situar el indicador de pobreza desde la perspectiva geográfica; sin embargo, la evolución de las distintas categorías analizada para cada departamento requiere un ejercicio donde se representa de manera más ilustrativa, cuál ha sido variación concreta durante el período analizado. Por ello como un medio para analizar los cambios en el territorio hondureño, desde la perspectiva de la estratificación por medio del indicador sintético de pobreza, se proporciona una tabla resumen que contiene los aspectos antes indicados.

Los cambios en los niveles de pobreza según la severidad, expresados en términos de los cuartiles entre 2000 y 2005, se presentan de manera sintetizada en la Tabla 6. En general, podemos

decir que hay una polarización en cuanto a la tendencia en la categoría de pobreza extrema; por un lado, ocho (8) departamentos reducen la proporción de hogares indigentes, en el otro extremo siete (7) aumentan la proporción de familias indigentes; no obstante, Choluteca no presenta cambios ni a la alza o la baja, se mantiene constante en cuanto al porcentaje de hogares en dicha categoría.

En el cuartil mayor (Q4), nueve de los dieciséis de los departamentos aumentan el porcentaje de hogares que mejoran su condición al ser no pobres. En el grupo de la pobreza moderada (Q2) llama la atención que en Francisco Morazán, Olancho y Valle el porcentaje de hogares se mantiene invariable en esta categoría en el período analizado, en tanto que en seis zonas aumenta la proporción de familias y las restantes seis se reduce (véase Tabla 6).

Los cambios también se observan en el conjunto de pobreza relativa; en nueve de los departamentos aumentó el porcentaje de los hogares en dicha condición, mientras que en siete se reduce. Vale destacar que departamentos como Cortés, Francisco Morazán, que se consideran con una estratificación homogénea al mantenerse en el período sin variación en su condición de no pobres, paradójicamente presentan un deterioro en las condiciones de vida; por ello, la proporción de hogares no pobres se reduce; se incrementan los porcentajes de hogares en los tres primeros cuartiles, como se puede observar en la Tabla 6.

En cuanto al patrón de los cambios, no se identifica una pauta común. Las combinaciones que se obtienen centran la atención en el primer y último cuartil, porque en términos de reducción de la pobreza son más significativos los cambios en dichos cuartiles, sin que ello suponga que las variaciones observadas en los demás cuartiles no tengan importancia; estos se sintetizan en las siguientes:

- Aumentos en la pobreza extrema y reducción en la categoría de no pobres.
- Reducción de pobreza extrema y aumento de la proporción de no pobres.
- Sin variación en la proporción de pobreza extrema y aumento de no pobres.
- Aumento de pobreza extrema y aumento de no pobres.
- Reducción de pobreza extrema y reducción de no pobres.

En los cuartiles 2 y 3, las combinaciones no necesariamente tienen una relación direccional; es decir, que un aumento se traduzca en una reducción o viceversa; en este grupo se identifican tres asociaciones: inversa, directas y neutra (constante). En el grupo de pobreza moderada y relativa hay muchos matices, entre las que sobresalen las siguientes:

- ✓ En el conjunto de pobreza relativa (Q3) ocho departamentos aumentan la proporción aunque en similar proporción de departamentos esta se reduce.
- ✓ En el grupo de pobreza moderada, cuatro departamentos no presentan modificaciones, mientras seis aumentan y seis reducen el porcentaje de hogares en dicha situación.

Tabla 6.
Variación de la pobreza 2001-05 según cuartiles

Departamentos	Q1	Q2	Q3	Q4
Atlántida	↑	↑	↓	↓
Colón	↑	↓	↓	↓
Comayagua	↑	↓	↓	↑
Copán	↓	=	↑	↑
Cortés	↑	↑	↓	↓
Choluteca	=	↓	↑	↑
El Paraíso	↑	↓	↓	↑
Francisco Morazán	↑	=	↑	↓
Intibuca	↓	↓	↑	↑
La Paz	↓	↓	↑	↑
Lempira	↑	↑	↓	↓
Ocatepeque	↓	↓	↓	↑
Olancho	↓	=	↑	↓
Sta. Bárbara	↓	↓	↓	↓
Valle	↓	=	↑	↑
Yoro	↓	↓	↑	↑

Fuente: Elaboración propia.

VII CONCLUSIONES

Del análisis realizado, se pueden extraer, entre otras, las conclusiones siguientes:

1. De manera general, los resultados nos indican que la pobreza en Honduras no está caracterizada únicamente por factores de tipo económico, sino que cobran relevancia otros relacionados con la cualificación, las características demográficas, el mercado de trabajo, las condiciones de habitabilidad de los hogares.

2. Estos resultados son coherentes con las explicaciones de la pobreza realizadas por los enfoques teóricos más utilizados, como es el del desarrollo humano, las necesidades básicas insatisfechas y pobreza de ingresos. En tal sentido, sugiere que en el análisis de la pobreza deben incorporarse diferentes alternativas conceptuales y de medición que permitan una mejor comprensión del problema.

3. La pobreza extrema es predominante y no solo se concentra en los departamentos fronterizos de Occidente, sino, también, en los de la zona Sur, Centro y Oriente.

4. En el lado opuesto, se identifican dos departamentos que se caracterizan por tener mejores condiciones de vida del país (Q4). Tal situación puede asociarse con la concentración de la inversión social en la capital y la industria en Cortés.

5. Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque ascienden en la estratificación, al pasar de pobreza extrema a pobreza moderada en el período analizado.

6. Cortés, Francisco Morazán y Atlántida tienen una mayor proporción de pobreza relativa.

7. El proceso redistributivo en la estratificación de los departamentos que sugiere que la pobreza extrema se redujo en ocho de los once departamentos en dicha situación, lo cual se corresponde con una mayor presencia de hogares en situación de pobreza moderada.

8. Asimismo, se incrementa el porcentaje de hogares que no son pobres en nueve de los seis departamentos analizados, evolución que puede considerarse muy positiva.

Bibliografía

Banco Central de Honduras (1990-2006) *Memoria Anual*. Tegucigalpa. D.C.

Banco Mundial (2006): *Reducción de la pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos*. Banco Mundial. Washington D.C.

Barro, R.J. (1997): *Determinants of Economics Growths: A cross-Country Empirical Study*. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge.

Barro, R.J. y Sala-i- Martin (2004): *Economic Growth. Second Edition*. The MIT Press, Cambridge, London, England.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2006a) *Boletín Estadístico*. Naciones Unidas. Santiago de Chile

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000-2006b) *Panorama Social América Latina*. Naciones Unidas. Santiago de Chile.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000-2006c) *Estudio Económico de América Latina*. Naciones Unidas. Santiago de Chile.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2001a) *El método de la Necesidades Básicas Insatisfechas y su aplicación en América Latina*. Serie Estudios Estadísticos y Prospectiva. Naciones Unidas. Santiago de Chile.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2001b) *El uso de Indicadores Socioeconómicos en la formulación y evaluación de Proyectos*. Serie Manuales. N.º 15. Naciones Unidas. Santiago de Chile.

French Davis, R. (2001): *Las reformas económicas en América Latina: Tareas pendientes*.

Información de Comercio Exterior N.o 790, febrero-marzo. pp. 37-49.

European Commission (199) Means Collection, Volume 6. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Herrero, L.C.; Figueroa, V; Sanz, A. (2007): *Disparidades Territoriales en Castilla y León: un estudio de la Convergencia Económica a Nivel municipal*. Consejo Económico y Social de la Comunidad de Castilla y León, Valladolid, España.

Instituto Nacional de Estadística Honduras (1995-2006): *Encuesta Permanente de Hogares*. Tegucigalpa. D.C.

Johnson., D (2000): *Métodos multivariantes Aplicados al Análisis de Datos*. Thomson Editores. México. D.F.

Kakwani, N.; Khandker, Sh. ; Son, H. (2004): *Pro-poor growth: Concepts and measurement with country cases studies*: UNDP. International Poverty Centre WP 1 August. Brasilia

Macías, M; Rodríguez, B.; Ogando, O. (2007a): *La evolución de la Pobreza en Honduras: Un análisis para el periodo 1995-2006*. XXI Congreso ASEPELT: Valladolid.

Macías, M. (2006b): *Evaluación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de Honduras*. Suficiencia Investigativa de Doctorado. Universidad de Valladolid. Valladolid.

Martínez, J.A. (2003): *Economía de la Pobreza*. UNED Ediciones. Madrid

Organization for Economic Cooperation and Development (2006a): *Pro-poor Growth. Policy Statement*. www.oecd.org/dac/ict.

Organization for Economic Cooperation and Development (2005b): *The contribution of ICTs for pro-poor growth*. www.oecd.org/dac/ict.

Paes de Barros (2005): *El Combate a la Pobreza en Centroamérica*. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nueva York.

Pérez Sáinz, J; Mora M (2006): *De la Pobreza a la Exclusión Social. La Persistencia de la Miseria en Centroamérica*. San José Costa Rica.

Perry, G. (2005): *Crecimiento en América Latina: en busca del tiempo perdido*. Banco Mundial. Bogota. Colombia.

Programa de la Naciones Unidas (1999-2006): *Informe de Desarrollo Humano. Honduras*. Tegucigalpa. D.C.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997): *Informe de Desarrollo Humano. Naciones Unidas*. Nueva York

Ravallion, M. (2004): *Pro-poor Growth: A primer World Bank Policy Research*. WP N.o 3242. www.econ.worldbank.org.

Sachs, J. (2005): *El fin de la Pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo*. Random House Mandori. Barcelona.

Sala I Martín, J (2002): *Apuntes de Crecimiento Económico*. Antoni Bosch Editor. Barcelona.

Salama, P. (2005) *Apertura Revisada: Crítica teórica y empírica del Libre Comercio*. Centro de Estudio del Desarrollo. Cuaderno N.o 60 septiembre-diciembre. pp. 1-24.

Sen, A, (2000) *Desarrollo y Desigualdad*. Planeta. Barcelona.

Subirats, J. Goma Carmona, R.; Brugue Torruela, J. (2005): *Análisis de los factores de exclusión social*. Documento de Trabajo N.o 4. Fundación BBVA. www.fbbva.es.

ANEXOS

**ANEXO 1
KMO y prueba de Bartlett año 2000**

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.		0,713
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	611213,791
	gl	78
	Sig.	,000

**ANEXO 2
Comunalidades año 2000**

	Inicial	Extracción
Inserción agrícola	1,000	0,608
total miembros con segundo empleo	1,000	0,801
hacinamiento	1,000	0,564
material pared	1,000	0,535
material piso	1,000	0,701
sanitario	1,000	0,638
dependencia económica	1,000	0,885
menores de 15 años	1,000	0,918
años de estudio	1,000	0,642
y segunda ocupación	1,000	0,457
total ocupados por hogar	1,000	0,928
jornada2	1,000	0,746
Tamaño hogar	1,000	0,949

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.

**ANEXO 3
KMO y prueba Bartlett 2005**

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.		0,766
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	253575,700
	gl	78
	Sig.	,000

ANEXO 4
Comunalidades 2005

	Inicial	Extracción
inserción agrícola	1,000	0,564
subempleo	1,000	0,542
hacinamiento	1,000	0,557
Material pared	1,000	0,499
Material piso	1,000	0,676
saneamiento	1,000	0,632
depecon	1,000	0,908
menores 15 años	1,000	0,934
logro educativos (años estudio)	1,000	0,586
ingreso trabajo2	1,000	0,860
total ocupados por hogar	1,000	0,862
jornada2	1,000	0,808
tamaño del hogar	1,000	0,923

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.

ENCUENTROS

Diez años de acciones colectivas en Costa Rica

Sindy Mora Solano¹

1. El estudio de las acciones colectivas²

Una protesta social de gran magnitud, relatada en la novela *Cruz de Olvido*, de Carlos Cortés, se realizó frente a una de las siete puertas de Casa Presidencial en Zapote. El motivo de esta manifestación fue la clausura del programa televisivo “Mensajes del más acá”, un espacio mediante el cual los “costarrisibles” enviaban mensajes a la Virgen de los Ángeles y ella los respondía (Cortés, 2004: 281). La forma y el carácter en que esta protesta fue reconstruida en la citada novela, evidencia la banalización de las demandas planteadas mediante los recursos de la protesta social, en un texto que retrató a Costa Rica como una isla de paciencia y olvido, pequeñez y alcoholismo, las enfermedades de un país en el que no sucede nada desde el *Big-Bang*.

Pero, ¿coinciden estas representaciones con la dinámica política nacional, con la participación de los diversos actores colectivos y con las características de la protesta social costarricense? ¿Forman parte

-
- 1 Socióloga. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, E-mail: smora@iis.ucr.ac.cr; sindymora@gmail.com
 - 2 Este artículo es un producto logrado en el marco del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

del espectro de “la política”, las acciones de protesta realizadas en el país? Y finalmente, ¿son “nimiedades” las que mueven a los individuos y grupos sociales a demandar espacios colectivos para interponer sus reclamos? ¿Qué se puede concluir de las prácticas democráticas costarricenses a partir del análisis de la protesta social?

Frente a las imágenes de la apacible y reposada Costa Rica contemporánea relatadas en diversos discursos de lo nacional, el presente artículo es el resultado de una preocupación sencilla, pero para la cual se carecía de respuestas desde el concepto de las acciones colectivas. Esta preocupación iniciada en los trabajos de Hannia Francheschi, (2002)³ se resume en los siguientes interrogantes: ¿quiénes protestan?, ¿cómo protestan? y ¿por qué lo hacen?

El interés inicial de esta investigación fue construir una base de datos que permitiera visualizar las principales tendencias y desarrollos en la protesta social costarricense, a fin de tener criterios rigurosos, a partir de los cuales establecer comparaciones y distinciones a largo plazo, sobre la participación de los protagonistas de este tipo de proceder político.

Lejos de desdeñar el valor de la política institucionalizada, este trabajo tuvo como punto de partida una inversión epistemológica de la mirada con la que tradicionalmente se entiende la política, buscando retratar las dinámicas de los actores colectivos que no necesariamente se encuentran inmersos en espacios constituidos jurídica o institucionalmente, pero que buscan acercarse y ser reconocidos por las élites políticas mediante sus demandas. Finalmente, la acción colectiva es un instrumento mediante el cual se acercan a los gobernantes o a los representantes de las instancias a las que se dirigen las demandas, aquellos que se encuentran privados de esos vínculos, y que no conocen o les resultan ineficaces otras formas para propiciar un encuentro.

El presente artículo se compone de una sección teórico-metodológica, en el que se aborda el tema de las acciones colectivas, para posteriormente pasar a analizar los principales rasgos del

3 Como iniciativa del Programa Estado de la Nación y luego asumida institucionalmente por el Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad de Costa Rica.

conflicto social entre 1995-2004. Si bien el análisis de algunos de los mecanismos que rompen con el mito de la pasividad costarricense forman parte de lo argumentado seguidamente, el tema de las potencialidades efectivas de la ciudadanía para la institucionalización de una cultura de vigilancia y rendición de cuentas, así como las limitaciones y carencias de esa ciudadanía, quedan pendientes para futuras investigaciones. Cómo juegan estos actores en los espacios políticos institucionalizados, y qué tipo de relaciones establecen con quienes ejercen el poder, forman parte de los interrogantes a los que se debe prestar mayor atención en posteriores indagaciones.

2. ¿Por qué analizar la protesta social desde el concepto de acciones colectivas?

2.1. Consideraciones conceptuales

El concepto de acciones colectivas es un instrumento analítico de larga data en las ciencias sociales, que posee un amplio desarrollo histórico. Ya desde la década de los años 20 del siglo pasado, la Escuela de Chicago utilizó el concepto de “comportamiento colectivo” como categoría para comprender procesos donde se veían involucrados grandes grupos sociales, ejemplificando con dicho *constructo*, los fenómenos de la moda, las sectas o los movimientos de masas.

Esta noción, que fue asociada al desequilibrio y anomia de la sociedad estadounidense, fue el antecedente del concepto “acciones colectivas”, alimentando la perspectiva que posteriormente dio origen a la **Teoría de la elección racional** a principios de la década de los 60. Lejos de entender las acciones colectivas como sinónimo de comportamientos desviados o patológicos, Mancur Olson, principal representante del *Rational Choice*, rechazó el supuesto de que la irracionalidad fuera el elemento explicativo de la acción colectiva. Por el contrario, desde su perspectiva, fue el comportamiento racional de los movimientos sociales de los años 60 el que permitió explicar el desarrollo de este tipo de acciones. De esta manera, a partir de una

visión racional del comportamiento, por acciones colectivas se entendió la suma de decisiones tomadas por un individuo para buscar el beneficio al actuar en conjunto con otros (Edelman, 2001).

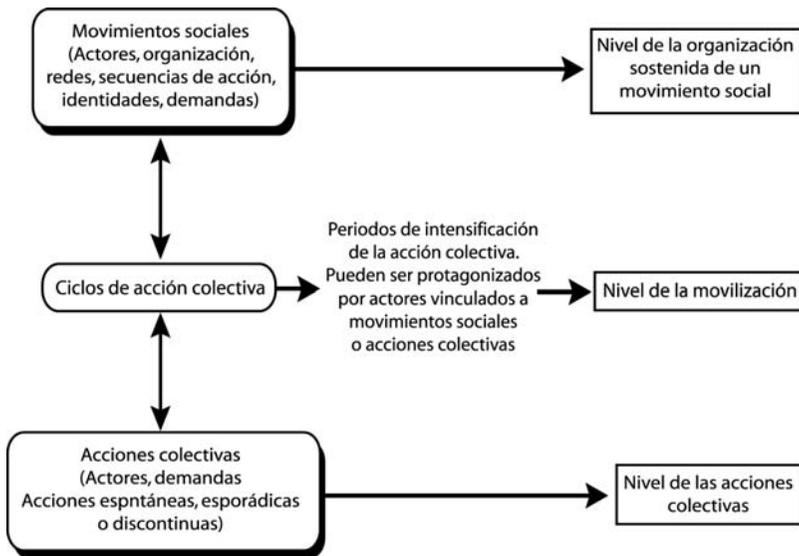
Posteriormente, en la década de los años 70 surgieron dos perspectivas centrales en el estudio de la acción colectiva. La primera de ellas, de origen europeo, fue la **Teoría de los nuevos movimientos sociales**, que tuvo a Alain Touraine como uno de sus principales exponentes. De acuerdo con Edelman, en su concepción de las acciones colectivas, Touraine unió dos conceptos claves provenientes del marxismo y del análisis weberiano, que enriquecieron su concepción. De Marx tomó el concepto de “conflicto social” y de Weber el concepto de “actor”, cuya actuación situó en la sociedad posindustrial, lo que significó el fin del predominio del conflicto laboral y de clase, y por ende, el advenimiento de una diversidad de colectividades e identidades, con capacidad de actuar y de afectar las relaciones de dominación (Edelman, 2001).

Frente a esta matriz analítica, surgió la **Teoría de la movilización de recursos**, principalmente anclada en la Academia Norteamericana, y como resultado de una relectura de la Teoría de la Elección Racional. Esta teoría se centró en el cómo y con qué recursos – humanos, cognitivos, materiales, técnicos u organizacionales, entre otros –, un movimiento social surge en lugares y tiempos específicos. Posteriormente, un nuevo desarrollo analítico dentro de la Teoría de Movilización de Recursos fue el enfoque de la **Estructura de las oportunidades políticas**, que ha puesto el acento en la dinámica interna de las organizaciones, así como en las condiciones que posibilitan o impiden la acción (Edelman, 2001).

De acuerdo con Tarrow (1998), uno de los principales representantes de la Teoría de la Estructura de las Oportunidades Políticas, la acción colectiva es la unidad base de los movimientos sociales. Como lo muestra el diagrama 1, mientras que el concepto de movimiento social refiere al nivel de la organización con una mayor permanencia temporal, el concepto de acción colectiva refiere al nivel de las prácticas de protesta social, como

lo son las huelgas, el paro de labores, las marchas, las declaraciones públicas, las amenazas, los bloqueos y las huelgas de hambre, entre una diversidad más amplia de acciones.

Diagrama 1.
Movimientos sociales y acciones colectivas
como utilidades analíticas



Fuente: Elaboración propia a partir de Tarrow, Sidney:(1998) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza Editorial).

Si bien los actores vinculados a un movimiento social pueden protagonizar acciones colectivas, en sentido inverso, una acción colectiva no puede ser considerada por sí sola como un movimiento social. Los movimientos suponen la existencia y permanencia relativa de redes de actores que comparten desafíos colectivos y protagonizan acciones políticas para ver satisfechas sus demandas. Por su parte, la acción colectiva no necesariamente se encuentra vinculada a un movimiento social, por lo que puede ser definida a partir de su carácter espontáneo, esporádico o discontinuo,

involucrando grupos sociales que no siempre se identifican como actores políticos. A su vez, un proceso de intensificación de la acción colectiva puede definirse como un ciclo de acción colectiva, el que no necesariamente tiene que ser protagonizado por los actores que se vinculan a un movimiento social (Tarrow, 1998).

La riqueza del concepto de acciones colectivas reside en su carácter menos restrictivo en relación con los movimientos sociales, en el sentido de que permite registrar una serie de acciones y diversidad de actores, que se organizan para plantear las demandas a las entidades que consideran pertinentes, sin que necesariamente exista una organización formal o permanente que las potencie. Por ello, el presente es un esfuerzo por aproximarse a la protesta social, mediante la acción colectiva como unidad analítica, y no por medio del nivel de la organización o de los movimientos sociales. Por supuesto, esta aproximación no niega el valor epistemológico y político de los movimientos sociales, pero busca no reducir la protesta a ellos.

Ahora bien, el carácter esporádico e inusual de algunas acciones colectivas no implica que se encuentren al margen de las formas culturales de hacer política. Como señala Tarrow, este tipo de acciones se insertan en repertorios culturales que serían los depositarios de una cultura pública heredada de la acción colectiva; de allí que “la acción colectiva no se origina en la cabeza de los organizadores, sino que se inscribe culturalmente y se comunica socialmente” (Tarrow, 1998, 46), a partir del reconocimiento y la experiencia de quienes han recurrido a ellas.

2.2. Consideraciones metodológicas

En el presente artículo se analizan las principales tendencias de las acciones colectivas de protesta social en el período 1995-2004. Este acercamiento constituye un esfuerzo por visibilizar los principales nudos del conflicto social que han atravesado la sociedad costarricense en estos diez años, identificando para ello repertorios de protesta, actores, demandas y respuestas de las entidades a las que se dirigen las acciones.

La protesta social fue reconstruida a partir de la revisión de *La Nación* y *Diario Extra* en el período 1995-2004. La unidad analítica de la revisión periodística fue la acción colectiva de protesta social en la que participaron dos o más individuos o grupos sociales, organizados formal o informalmente, con independencia de que estas acciones se encontraran vinculadas a movimientos sociales. La finalidad de estas acciones fue ver satisfechas sus demandas frente a las entidades consideradas competentes.

Evidentemente, la reconstrucción de las acciones colectivas mediante fuentes periodísticas introduce un sesgo considerable, en cuanto estos medios no reportan con fidelidad la totalidad de acciones realizadas por la diversidad de actores que recurren a estos instrumentos políticos⁴. No obstante, es importante señalar que la práctica de dejar un registro sobre las acciones colectivas que se organizan o en las que participan dichos actores, no forma parte de las destrezas aprendidas de los protagonistas de estas acciones.⁵

La información proveniente de estas fuentes fue procesada a partir del **Manual de codificación de la base de datos de acciones colectivas**, un instrumento que contiene 11 categorías analíticas para el procesamiento de la información. Estas categorías incluyen la tipología de acciones, el tipo de actor, el tipo de organización, las alianzas, las demandas, la categoría y cobertura territorial de la demanda, el tipo de solución propuesta por los actores, las respuestas y las entidades a las que se dirige la acción, y las formas de represión de las acciones colectivas. Considerando la definición de acciones

4 Sobre el tema del abordaje de movilizaciones sociales por parte de la prensa escrita, se pueden consultar los trabajos de Fonseca (2003) y Martín (2004).

5 En este sentido, y con la finalidad de solucionar el problema empírico y metodológico señalado, el 9 de noviembre de 2004 se celebró una reunión con representantes de distintas organizaciones sociales para tratar de encontrar una solución al problema del subregistro de las fuentes periodísticas. Uno de los resultados más llamativos de esta reunión fue que las organizaciones no guardan un registro de las acciones colectivas que organizan o en las que participan, y cuando lo hacen los volantes o documentos entregados a los manifestantes no conservan fechas, por lo que es imposible saber cuándo sucedió. En esta reunión participaron Rocío Alfaro, Sebastián Alfaro, Manuel Calderón, Juan Carlos Cruz, Hannia Franceschi, Giselle García, Sindy Mora, Emelda Navarrete, Ciska Raventós, Ana Rodríguez y Martín Rodríguez.

colectivas dada, es pertinente aclarar que la presente reflexión no profundiza en el tema de la organización de los actores, así como no niega la existencia de movimientos sociales, cuyas acciones deben reconstruirse mediante otras metodologías y fuentes complementarias a las consultadas en esta investigación.

El período de estudio fue elegido partiendo del supuesto de que 1995 constituye un año de gran valor simbólico y político para entender las formas de protesta gestadas a partir de ese momento. Como han señalado diversos autores, la firma del Pacto Figueres-Calderón en junio de 1995 y el autoritarismo con el que José María Figueres Olsen abordó el conflicto e intentó la construcción del consenso en su Administración (Cortés, 2001), constituyen un punto de inflexión de suma relevancia para comprender los resultados electorales de los años siguientes (Raventós *et al.*, 2005). El proceso de ruptura de las lealtades asociadas al Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), así como el cierre del ciclo político iniciado en los años cuarenta con los padres de los firmantes del Pacto, tuvo como correlato una alta conflictividad social, a la que refiere la presente reflexión.

3. Conflictos que permanecen, nuevos conflictos y conflictos invisibilizados

El estudio de las acciones colectivas en el período 1995-2004 resulta de interés si se atienden los cambios en los resultados electorales de los últimos años. Si bien no existe una relación directa entre el aumento de la abstención en las elecciones de 1998 y el 2002, el surgimiento de una tercera fuerza política-partidaria y la utilización de los recursos de acción colectiva, estos eventos de la vida política nacional dan cuenta del malestar ciudadano con el desempeño de sus gobernantes y con las condiciones socioeconómicas del período (Raventós *et al.*, 2005).

Situando los datos que a continuación se presentan, es importante señalar que en la década de los años 90 se profundizaron y recogieron

los frutos de los llamados ajustes estructurales que fueron y han sido percibidos como “una desorganización sostenida de lo conocido y lo existente [... con...] costos que debían ser pagados por alguien” (Solís, 2006: 34). En este sentido, la disconformidad expresada en estos diez años de protesta social, la conflictividad que ha permanecido o se ha transformado, así como la conflictividad resuelta o invisibilizada, son, en gran medida, expresiones del cobro de facturas del proceso de ajuste iniciado en los años 80.

Valga señalar que este proceso de ajuste estructural se caracterizó por las negociaciones “privadas” realizadas por tecnócratas, quienes fueron nombrados discrecionalmente por el Presidente de la República, conformando una institucionalidad informal, cuyas discusiones se realizaban mediante la utilización de un lenguaje técnico, “que establecía distancia respecto del resto de la ciudadanía, para quienes esta jerga especializada resultaba incomprendible” (Raventós, 2001). En este sentido, la conflictividad del período puede entenderse también como el reclamo de espacios para situar en el debate público, la discusión –también pública– de determinados problemas sociales y de la toma de decisiones.

Así, la conflictividad social de la que hablan estos diez años de protestas, es una conflictividad que ha sido expresada desde y en contra de la institucionalidad existente – como lo muestran los resultados electorales del período–, pero también demandando la defensa de la institucionalidad pública, siendo una conflictividad que se ha condensado como experiencia cotidiana de la disconformidad y que ha constituido una cultura política de protesta cuyo malestar se desborda, pero cotidianamente.

Desde esta perspectiva, la protesta social es una forma de acercarse al fenómeno del desencanto con la política y los políticos, tanto como una forma creativa por parte de actores colectivos –a quienes no siempre se les reconoce su politicidad–, para extender el espectro de los fenómenos de la política. Lo anterior ha planteado nuevos retos institucionales para comprender los cambios en la concepción de la participación limitada al plano de lo electoral, frente a lo que parecen ser nuevas modalidades de participación, nuevos actores, nuevas alianzas e incipientes potencialidades para incidir en el rumbo de la toma de decisiones.

3.1. La intensificación del conflicto social

Si se atiende como eje de análisis el número de acciones colectivas del período y la intensificación del conflicto social, un primer resultado de esta investigación es que entre 1995 y el 2004 se realizó un total de 3.904 acciones colectivas. Como lo muestra el cuadro 1, 1995, 2000 y 2004 fueron años en los que la expresión de acciones colectivas fue mayoritaria, registrándose 450, 613 y 648 acciones, respectivamente.

Cuadro 1
Total de acciones colectivas en Costa Rica,
1995-2004

AÑO	Casos	%
<i>Total década</i>	<i>3904</i>	<i>100.00</i>
1995	450	11.53
1996	283	7.25
1997	169	4.33
1998	342	8.76
1999	351	8.99
2000	613	15.70
2001	328	8.40
2002	303	7.76
2003	417	10.68
2004	648	16.60

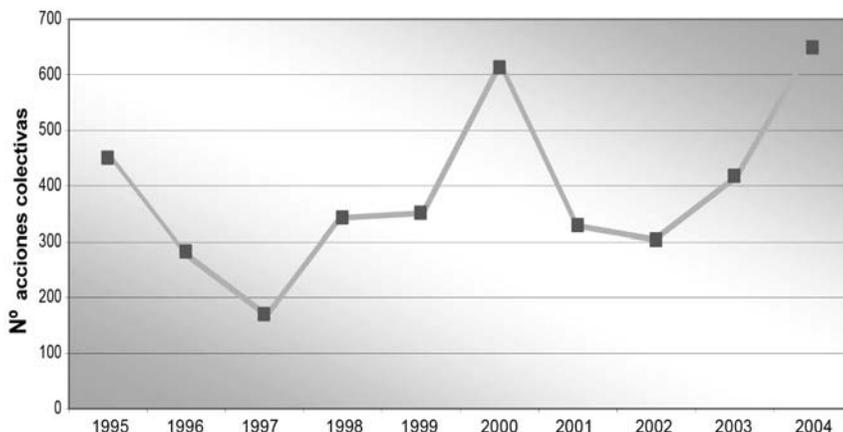
Fuente: Elaboración propia, a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Esta intensificación de la protesta que se ilustra en el gráfico 1 estuvo asociada al desarrollo de la huelga del Magisterio Nacional en 1995, a la oposición a la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, conocida como “combo ICE”, en el 2000, y a la negativa a la revisión técnica vehicular realizada por la empresa Riteve, así

como a la oposición al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) y a la solicitud de aumento salarial para los trabajadores del sector público, en el año 2004.

Estos procesos de intensificación de la protesta, denominados por Tarrow (2004) como ciclos de acción colectiva, y caracterizados por una dispersión geográfica nacional, con el involucramiento de una diversidad de actores, como lo muestra el anexo 1, tuvieron como denominador común el que las medidas de presión con un carácter masivo para incidir en las decisiones gubernamentales, solo fueran posibles cuando la aprobación de legislación o los actos administrativos-gubernamentales ya estaban consumados.

Gráfico 1
Evolución de las acciones colectivas en Costa Rica,
1995-2004



Fuente: Elaboración propia, a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra* y *La Nación* (1995-2004).

Así, el proyecto de ley de Reforma al Régimen de Pensiones se aprobó el domingo 9 de julio de 1995, durante las vacaciones de medio período, mientras que la huelga de los educadores inició una semana después, el 17 de julio del mismo año. Para el caso del “combo ICE”, este fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo del año 2000, siendo un día después

cuando se intensificaron las protestas⁶. Finalmente, la revisión técnica vehicular empezó a ser ejecutada por Riteve el 16 de julio del 2002, lo que generó una serie de manifestaciones que se mantuvieron hasta el día siguiente, pero la profundización e intensificación de las protestas solo se dio dos años después, en agosto del 2004.

En el cuadro 2 se muestra el despliegue de acciones colectivas utilizadas en estos ciclos de acción colectiva, específicamente en la huelga del Magisterio Nacional –entre el 17 de julio y el 18 de agosto de 1995–, en las protestas contra el Combo Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) –del 16 marzo al 4 de abril del 2000– y contra la revisión técnica vehicular realizada por Riteve –del 23 al 31 de agosto del 2004–.

Cuadro 2
Comparación del tipo de acciones colectivas utilizadas en la
huelga del Magisterio Nacional, combo ICE
y la oposición a Riteve

Tipo de Acciones	Magisterio	“combo ICE”	RITEVE
	1995	2000	2004
Totales	86	248	148
Bloqueo	5	191	97
Declaración pública	31	21	4
Marcha	14	10	6
Paro	8	3	19
Reunión con autoridades	6	5	6
Tortuguismo	0	0	16
Mitin o concentración	6	8	0
Huelga	7	2	0
Reunión o asamblea	5	1	0
Actos contra la propiedad	0	3	0
Denuncia ante entidades	2	0	0
Amenaza	1	1	0
Invasión de propiedad	1	1	0
Huelga de hambre	0	2	0

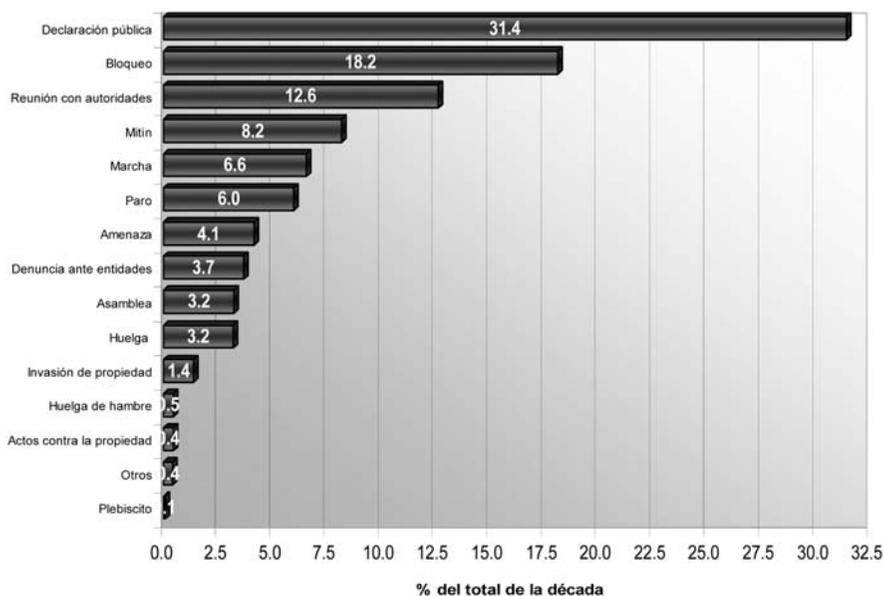
Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación* (1995, 2000 y 2004).

6 Sin embargo, no se debe olvidar que el detonante de estas manifestaciones lo constituyeron los bloqueos realizados en Ochomogo a partir del 16 de marzo del año 2000, bloqueos protagonizados por productores de papa y cebolla (Menjívar, 2000).

Como se puede observar, mientras que en la huelga del Magisterio Nacional la marcha fue el recurso predominante, el bloqueo se constituyó como la principal acción utilizada, tanto en las protestas contra el “combo ICE”, como en las manifestaciones contra el monopolio de la empresa Riteve. En este último escenario de protesta, los bloqueos se combinaron con la realización de acciones de tortuguismo, utilizando furgones propiedad de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), lo que dio origen a 16 acciones de este tipo. Un análisis más detallado de los resultados de estos tres ciclos de acción colectiva (véase anexo 1), debería considerar, entre otros aspectos, las potencialidades o limitaciones de los recursos de la acción colectiva para medir el éxito y fracaso de dichas coyunturas, lo que escapa a las motivaciones de esta reflexión.

Ahora bien, frente al predominio de este tipo de instrumentos, los mecanismos que componen la cultura política costarricense de protesta se presentan en el gráfico 2.

Gráfico 2
Tipo de acciones colectivas en Costa Rica 1995-2004



Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Como se puede observar, en el período 1995-2004 fue la declaración pública el principal tipo de acción colectiva utilizada para la expresión de demandas; es decir, aquellas acciones en las que el elemento central fue lo dicho de forma oral o escrita, en conferencias de prensa, comunicados públicos, medios de comunicación y boletines u otros mecanismos escritos, que quedaron registrados en las fuentes consultadas. A este predominio de la declaración pública, se pueden sumar las denuncias ante entidades estatales y las amenazas –esta última un tipo de declaración pública cuya finalidad es condicionar la solución de un problema determinado a la realización de medidas de presión–, lo que porcentualmente representó el 39% de las acciones.

Pero si bien la cultura de protesta costarricense se decantó mediante el recurso de la palabra, el bloqueo y el uso de la calle en general, mediante la realización de marchas y concentraciones, constituye el segundo pilar de dicha cultura. Un vistazo a los números totales de bloqueos, marchas y concentraciones realizadas entre 1995 y el 2004 en el cuadro 3, muestran el valor simbólico de las calles para plantear la discusión de agendas públicas. Al considerar las marchas, los bloqueos y las concentraciones en su totalidad, el uso de la calle como espacio de protesta agrupó el 32% de las acciones colectivas del período.

Cuadro 3
Repertorio de acciones colectivas en Costa Rica
1995-2004

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Total general</i>	450	283	169	342	351	613	328	303	417	648
Declaración pública	160	41	48	113	130	149	73	101	138	274
Denuncia ante entidades	15	15	5	24	1	8	11	11	46	8
Amenaza	24	17	4	20	23	20	5	9	10	30
Marcha	37	16	6	15	19	23	34	20	37	50
Mítin	35	33	11	51	40	55	19	11	33	32
Bloqueo	19	32	32	31	51	266	73	75	10	120
Asamblea	19	17	6	8	10	10	7	6	28	15
Paro	31	21	12	24	11	13	41	16	27	38
Huelga	35	20	14	8	11	9	5	2	15	6
Huelga de hambre	3	3	1	1	2	3	1	2	1	1
Reunión con autoridades	65	57	25	42	41	45	41	47	66	64
Invasión de propiedad	6	9	5	5	9	5	5	3	3	3
Actos contra la propiedad	0	2	0	0	2	5	1	0	2	5
Plebiscito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Otros	1	0	0	0	1	2	12	0	0	0

Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra* y *La Nación* (1995-2004).

Como lo muestra el cuadro 3, entre 1995 y 1999 el uso del bloqueo fue muy limitado, uso que se exacerbó en el contexto de las movilizaciones del “combo ICE” en el año 2000, cuando se presentó un total de 266 bloqueos. A excepción del 2003, después del “combo” el número de bloqueos realizados se multiplicó considerablemente en relación con los bloqueos que se presentaron entre el 95 y el 99, lo que convierte al año 2000 en un quiebre simbólico en cuanto a la utilización de este tipo de instrumento de político.

3.2. Conflictos visibilizados e invisibilizados, la protesta cotidiana y la informalidad de la protesta

Un segundo eje de análisis para comprender la conflictividad social del período corresponde al tipo de conflicto visibilizado por la prensa escrita, frente al conflicto que se oculta en sus páginas, sin que necesariamente esto implique la ausencia de participación de determinados actores.

Cuadro 4
Tipo de actor que participa en las
acciones colectivas, según año.
Totales 1995-2004

Demanda	Casos	%
<i>Total</i>	3,904	100.00
Trabajadores	1,815	46,5
Trabajadores informales	141	3,6
Ex trabajadores	117	3,0
Desempleados	0	0,0
Productores agropecuarios	211	5,4
Productores industriales	82	2,1
Empresarios	234	6,0
Vecinos	492	12,6
Grupos pro vivienda	74	1,9
Madres y padres	62	1,6
Estudiantes de secundaria	144	3,7
Universitarios	113	2,9
Jóvenes	0	0,0
Grupos ambientalistas	51	1,3
Grupos de Género	27	0,7
Grupos de Derechos humanos	4	0,1
Grupos de Usuarios	20	0,5
Indígenas	35	0,9
Agrupaciones religiosas	20	0,5
Privados de libertad	12	0,3
Grupos antiguerra	8	0,2
Discapacitados	8	0,2
No registrado en diarios	238	6,1

Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra* y *La Nación* (1995-2004).

Como muestra el cuadro 4, entre 1995 y el 2004 fueron los trabajadores quienes agruparon el mayor porcentaje de acciones colectivas (46,5% de las acciones). Si bien esta primacía del uso de los recursos de acción colectiva por parte de los trabajadores públicos puede deberse a que sus agrupaciones participan más activamente en este tipo de acciones, no se debe olvidar que sus condiciones laborales posibilitan la expresión de sus demandas mediante estos recursos, frente a los conflictos de los trabajadores del sector privado, por ejemplo, quienes tienen mayores obstáculos para plantearlos por la vía de la protesta.

De la misma manera, la preeminencia de los trabajadores en la participación en acciones colectivas se puede explicar por la mayor visibilización de su actuar político por parte de la prensa escrita. En este mismo sentido, se debe tener presente que las fuentes consultadas no constituyen registros fieles de lo que sucede en zonas rurales, por lo que en la participación de determinados actores puede registrarse un sesgo significativo que redimensiona la actuación de los trabajadores.

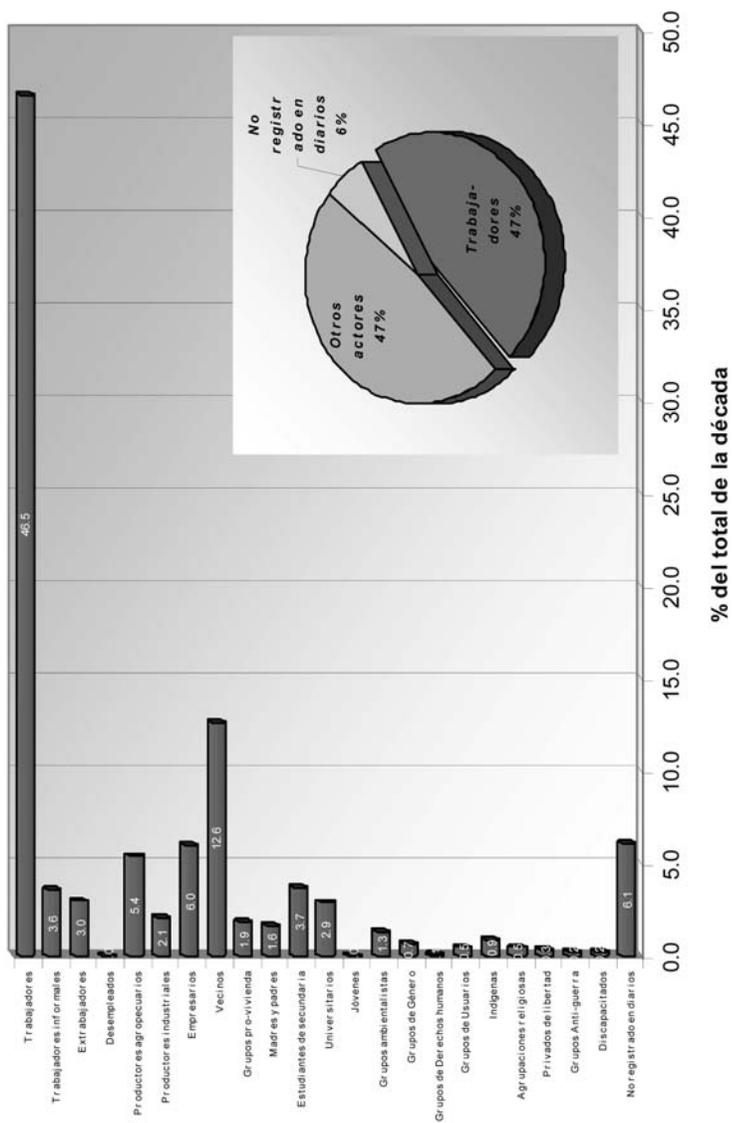
Como lo ilustra el gráfico 3, las acciones de protesta protagonizadas por los vecinos, los productores agropecuarios y los empresarios fueron predominantemente registradas, frente a las acciones de los grupos de género, los grupos indígenas, los grupos de usuarios, los privados de libertad, las agrupaciones de discapacitados y otro tipo de actores para los cuales se registran pocas acciones, quedando su accionar invisibilizado en los relatos de la prensa escrita.

Para citar algunos ejemplos de actores sociales invisibilizados en coyunturas políticas particulares, uno de los conflictos que recibió un abordaje limitado por parte de las fuentes consultadas fue el desalojo, la invasión de tierras y la toma de la Catedral Metropolitana por parte de los campesinos de Bambuzal, quienes fueron desalojados en julio del 2001 y se mantienen en un conflicto al que actualmente no se le ha dado solución. De la misma manera, fueron poco registradas en las fuentes periodísticas, las protestas contra la invasión de Irak –realizadas por distintos grupos denominados analíticamente como Grupos antiguerra–, así como la solicitud de pronunciamiento y rectificación de este, que al respecto diera en marzo del 2003, el

presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella. También, la solicitud de aprobación del proyecto de ley de penalización de la violencia doméstica fue otra de las demandas impulsadas por diversos grupos de mujeres, sin que recibiera mayor atención por parte de la prensa. Es importante indicar que la participación de las agrupaciones religiosas y en particular de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) se encuentra subregistrada en la prensa escrita, si se considera su creciente injerencia en temas de relevancia nacional (Mora, 2006).

Finalmente, es importante señalar que por las características propias de los ciclos de acción colectiva del “combo ICE” y Riteve, las fuentes periodísticas no lograron identificar con precisión a los actores colectivos involucrados en un 6,1% de las acciones.

Gráfico 3
Tipo de actor que participa en las acciones colectivas. 1995-2004



Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Un tercer criterio para analizar los conflictos que atravesó la sociedad costarricense en los últimos diez años es el que refiere a las condiciones de informalidad desde donde se gesta la protesta social. A este nivel, los dos conflictos más representativos fueron los protagonizados por los vendedores del Paso de la Vaca y Calle 8 en San José, agrupados en la Asociación Costarricense de Vendedores Ambulantes (ACOVEA), contra los desalojos realizados por la Municipalidad de San José, así como el reconocimiento de los derechos de taxistas informales –popularmente conocidos como “taxistas piratas”– frente a los taxistas formales y los porteadores del servicio. Estos forman parte de la colección de conflictos que han permanecido en los últimos diez años, sin que se vislumbre una solución posible en el mediano plazo.

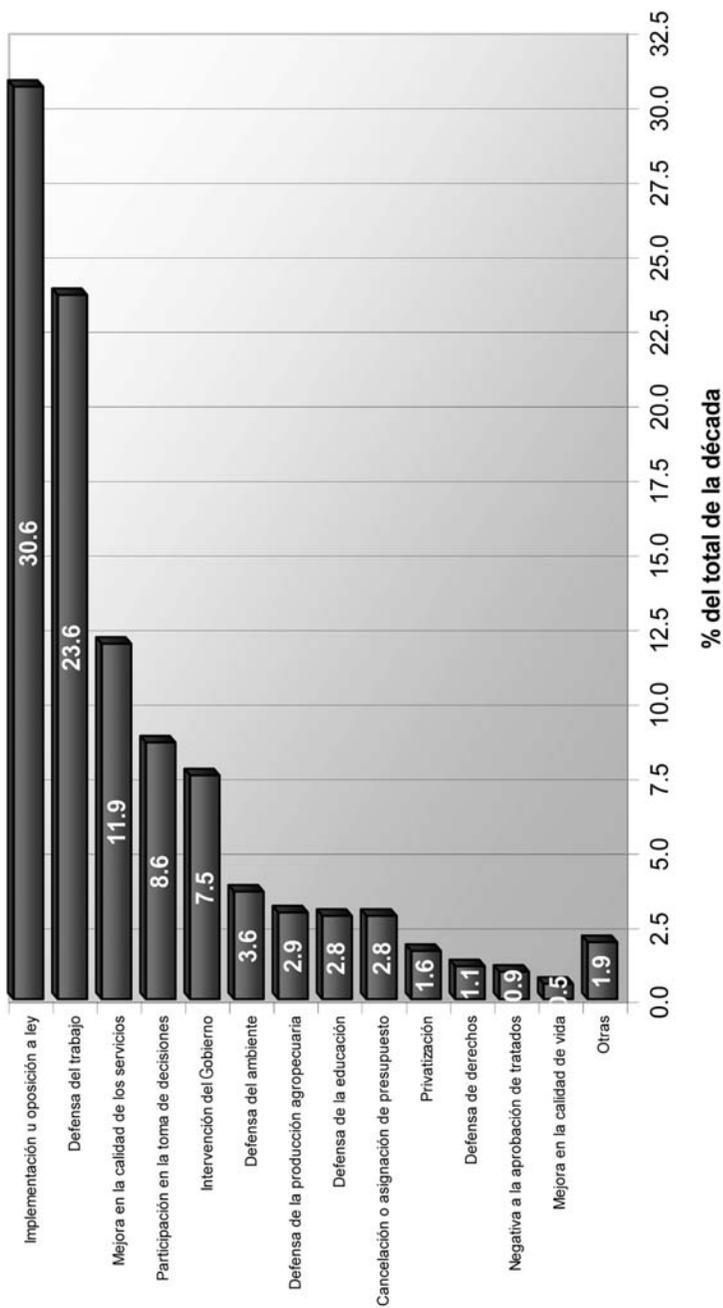
Un criterio importante en cuanto la conflictividad que ha atravesado a nuestro país es el conflicto experimentado y vivido cotidianamente como experiencia de verificación del funcionamiento inadecuado de las instituciones públicas, del mal estado de las carreteras y de la mala calidad y el alto costo de los servicios. Muchos de estos conflictos fueron protagonizados por los vecinos, como lo muestra el cuadro 4, para quienes se registraron un total de 12.6% de las acciones.

Finalmente, un conflicto que ha permanecido en la sociedad costarricense más allá de los diez años a los que refiere la presente reflexión, es el de los ex trabajadores bananeros afectados por el nemagón, quienes han reclamado al Estado, a lo largo del período estudiado –más allá de este–, una indemnización. Sobre este caso particular, una pregunta que se intentará responder más adelante es cómo se construye el consenso en una sociedad que utiliza diversas estrategias para visibilizar o invisibilizar sus conflictos, tanto como recurre a procedimientos de normalización de la conflictividad, arrastrando sin resolver, determinados problemas sociales.

4. ¿Por qué protestaron los actores colectivos?

Como lo muestra el gráfico 4, las principales demandas que movilizaron a los actores colectivos en el período estudiado, fueron las relacionadas con la negativa a la implementación de ley, reglamento, plan, acto o decreto ejecutivo.

Gráfico 4
Tipo de demanda expresada en las acciones colectivas en Costa Rica. 1995-2004



Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Este primer grupo de demandas agrupó el 30.6% de las acciones, siendo la demanda predominante en estos diez años, la oposición a la puesta en corriente legislativa y aprobación en primer debate del “combo ICE”. Como se puede observar en el cuadro 5, para el año 2000 un 8% de las demandas tuvo ese carácter. Sobre esta misma demanda, los porcentajes para el 2004, 2002 y 1995 son significativos –en orden de importancia porcentual–, de acuerdo con la identificación de los ciclos de acción colectiva ya mencionados.

Un segundo grupo de demandas centrales para comprender la conflictividad social costarricense fueron las peticiones relacionadas con la mejora de las condiciones laborales y la defensa del trabajo. En este tipo de demandas se pueden encontrar el aumento y pago de salarios, la cancelación de pensiones, prestaciones e indemnizaciones y la defensa de convenciones colectivas y libertades sindicales. En menor medida, las demandas laborales giraron en torno a la lucha contra los despidos y a la creación de fuentes de empleo.

Cuadro 5
Demandas expresadas en las acciones colectivas
en Costa Rica 1998-2004
Números relativos

Demandas	Años										Total
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
<i>Total</i>	11.5	7.2	4.3	8.8	9	15.7	8.4	7.8	10.7	16.6	100.00
Defensa del trabajo	2.8	2	1.1	1.6	2.5	2.9	3	1.8	2.6	3.3	23.6
Mejora en la calidad de los servicios	0.8	0.7	0.8	0.9	1.2	1	1.6	0.6	1.7	2.6	11.9
Participación en la toma de decisiones	1.7	0.6	0.3	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	1.1	1.5	8.6
Implementación u oposición a ley	3.7	2.1	1.2	2.2	1.8	8	1.4	3.3	1.2	5.7	30.6
Negativa a la aprobación de tratados	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.3	0.5	0.9
Intervención del Gobierno	0.8	0.6	0.2	1.1	0.7	0.8	0.4	0.3	1.3	1.3	7.5
Defensa del ambiente	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	3.6
Defensa de derechos	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0	0.1	0.2	0.1	1.1
Defensa de la educación	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4	2.8
Privatización	0.4	0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0	0.1	0	1.6
Defensa de la producción agropecuaria	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.1	2.9
Cancelación o asignación de presupuesto	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0	0.1	1.1	0	2.8
Mejora en la calidad de vida	0.1	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0	0.5
Otras	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	1.9

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Aun así, es importante señalar que también fueron los trabajadores quienes desempeñaron un papel importante en la solicitud de mejoras en la calidad de los servicios de las instituciones en las que laboran, así como la petición de presupuestos para el funcionamiento de dichas instituciones y la negativa a su privatización. Los casos más emblemáticos de este tipo de demandas se encuentran en las asociaciones sindicales del Instituto Nacional de Seguros (INS), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de Acueductos y Alcantarillados (AyA); los conflictos surgidos en dichas instituciones se han recrudecido con la tramitación legislativa del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC). También en el cuadro 5 se puede

observar como la negativa a los tratados de libre comercio ha venido en incremento desde el 2002. No obstante, el porcentaje tan reducido de demandas reportadas por la prensa respecto de la oposición con estos tratados y en particular al TLC, sitúa esta demanda en el escenario de los conflictos invisibilizados.

Un 11,9% de las demandas fueron expresadas a favor de la mejora en la calidad de los servicios. Dentro de este grupo de demandas se encontraron las solicitudes de mejora de la infraestructura física, o al aumento u oposición al costo, calidad y cobertura de los servicios. Finalmente, el conflicto con los productores agropecuarios ha acumulado un 2,9% de las protestas. Entre 1999 y el 2001, los productores de arroz y de cebolla recurrieron al uso del bloqueo, expresando su oposición a la importación y descargue de estos productos, solicitando el apoyo estatal a la producción nacional y la solución de los problemas crediticios con las entidades bancarias del país.

El cuadro 6 muestra como estas acciones se han dirigido principalmente a las figuras del Gobierno y a las entidades gubernamentales, como ministerios e instituciones descentralizadas.

Cuadro 6
Entidades a las que se dirigen las acciones
colectivas en Costa Rica, 1995-2004

	Casos	%
<i>Total</i>	3904	100.00
Gobierno	1483	38.0
Presidente	124	3.2
Ministerios	848	21.7
Instituciones descentralizadas	592	15.2
Poder Judicial	94	2.4
Asamblea Legislativa	248	6.4
Tribunal Supremo de Elecciones	7	0.2
Defensoría de los Habitantes	17	0.4
Municipalidad	208	5.3
Empresas	101	2.6
Iglesia Católica	79	2.0
Entidad de regulación	56	1.4
Entidad internacional	11	0.3
Otras	36	0.9

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Este panorama general de la cultura política de protesta costarricense permite introducir la pregunta de qué hace una sociedad con sus conflictos. La ausencia de seguimiento periodístico, la represión jurídica y policial, así como la reconstrucción mítica de las salidas dadas al conflicto, forman parte de algunos de los mecanismos utilizados.

5. Represión, silencio y reconstrucción mítica de la protesta: las respuestas al conflicto

El 17 de julio del año 2000 –pocos meses después de haber finalizado las protestas contra la aprobación en primer debate del “combo ICE”–, un manifestante que participaba en un bloqueo en Home Creek, en la provincia de Limón, murió tras recibir dos impactos de bala provenientes del arma de un miembro de la Fuerza Pública. Los bloqueos realizados por los miembros de dicha comunidad limonense tenían como finalidad presionar al Gobierno, a fin de que solucionara el problema de la escasez y la mala calidad del servicio de agua, las condiciones del asfalto de la calle principal, así como apresurar el nombramiento del personal médico del EBAIS de Sixaola. Ya en el mes de mayo de 1999, estas mismas demandas habían llevado a los vecinos de Sixaola a la realización de bloqueos, sin que se hubiesen cumplido los acuerdos con el Gobierno al llegar el año 2000.

La intervención policial en el “disturbio” de Home Creek en el año 2000, incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos, la detención de 12 manifestantes y la muerte del joven de 22 años. Si bien Rogelio Ramos y Linneth Saborío –entonces ministro de Seguridad Pública y directora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), respectivamente– no dudaron de la autoría del crimen por parte del agente policial, el hecho fue calificado como un “accidente”. Según la versión ofrecida por *La Nación*, el policía perdió el equilibrio y cayó al suelo, por lo que el arma se activó, produciendo la muerte del manifestante. Reconocido el “accidente” como producto de las dos detonaciones policiales, el Ministro de Seguridad anunció el despido del policía, no por el acto cometido en una protesta social, sino por haber violado la orden de portar su arma en el levantamiento de una barricada (Meza, 2000).

Pero esta muerte no fue la única producida en el desarrollo de una acción colectiva en el período estudiado. El 8 de octubre del 2002, Diario *Extra*, haciendo un recuento de los desalojos vividos por los campesinos de Bambuzal, reseñó la muerte de un campesino, producto del enfrentamiento con agentes policiales, aunque sin precisar la fecha en que se realizó el enfrentamiento (Villalobos, 2002).⁷

Esta confusión y silencio en torno a estas muertes se mezclaron con los mecanismos de reconstrucción mítica de las protestas, cuando el 28 de junio del 2001, la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP) premió al entonces presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, por la solución dada a las protestas del “combo ICE”. Ante la entrega de este premio, Rodríguez señaló que la salida dada al conflicto fue un ejemplo de una verdadera “solución a la tica”, en donde el diálogo y la negociación se impusieron sobre la confrontación social (Jiménez, 2001). Desde la perspectiva de Rodríguez, el aporte de su Administración consistió en evitar las lesiones profundas que se habrían impregnado en la institucionalidad costarricense, si otro hubiese sido el desenlace. Por ende, en esta relectura oficial del “combo ICE”, el diálogo gestado en la mesa de negociación fue el elemento central subrayado del mes de protestas callejeras, para darle una salida imaginaria al quiebre producido por el retiro de la corriente legislativa de los proyectos de ley.

Sin embargo, frente a la reconstrucción mítica de la protesta se hizo patente la represión de la protesta. El 13 de junio de 1997, *La Nación* informó acerca del rechazo a la solicitud de libertad bajo fianza para Álvaro Sequeira Ramírez y John Willie Zúñiga, quienes se mantenían encarcelados en la Unidad de Admisión de San

7 Al respecto, una de las estrategias para invisibilizar los resultados del enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública, son las imprecisiones en cuanto a las muertes producidas en estos. En el artículo titulado **La reforma agraria en Costa Rica (1962-2002): Balance de las intervenciones estatales en el cantón de Osa**, Antoni Royo señala que producto de estos desalojos, el 14 de julio del 2003 se produjo la muerte de uno de los campesinos de Bambuzal (Royo, 2003). *La Nación* de esas fechas no da información alguna sobre el deceso que reportó en el 2002 Diario *Extra*.

Sebastián. Ambos, integrantes del Frente Autónomo Nacionalista para la Reforma Agraria, fueron aprendidos por la Fuerza Pública, cuando junto con 100 familias intentaron usurpar una finca en Concepción de Alajuelita, propiedad del extinto Banco Anglo Costarricense (Martín, 13 de junio de 1997).

Este intento de apropiación de lo que quedaba en pie del Banco Anglo sucedió antes de que se aprobaran nuevos mecanismos de penalización de la participación en acciones colectivas, como lo fue la aprobación del artículo 256 bis, adicionado al Código Penal el 2 de mayo del 2002, y que fue publicado en *La Gaceta*, el 10 de mayo, y empezó a regir el 10 de noviembre del mismo año (Costa Rica, 2003).

Esta reforma jurídica dio origen a la penalización de los bloqueos en Costa Rica, que sostuvo el encausamiento legal de los manifestantes que participaron en las protestas contra el monopolio de Riteve en el 2004. Como se señala en el anexo 1, el 25 de agosto del 2004 fueron detenidas 85 personas y se decomisaron 54 furgones, resultado de la ejecución de cuatro intervenciones policiales simultáneas, realizadas en horas de la madrugada. A pesar de que los transportistas quedaron en libertad, contra ellos se inició un encausamiento legal “por obstrucción de vías públicas y en algunos casos también por motín, entorpecimiento de servicios públicos y privación de libertad” (Loaiza, 29 de agosto de 2004). En San Ramón, fue detenido y encausado legalmente Célimo Guido (Chacón, 16 de marzo de 2006).

Ya fuera reprimiendo la protesta, como lo evidenciaron los casos de Sixaola, Bambuzal y Riteve, ya fuera mitificando y celebrando las respuestas gubernamentales dadas a las manifestaciones contra la aprobación del “combo”, y por ende olvidando la represión y el trámite inconstitucional de los proyectos de ley (Solís, 2002), ya fuera encarcelando a los manifestantes o montando el andamiaje jurídico para la penalización de los bloqueos, los ejemplos seleccionados muestran algunas de las respuestas que la sociedad costarricense ha dado a sus conflictos. Estos eventos, tomados al azar de una serie de respuestas a las acciones de protesta, muestran la institucionalización de determinados mecanismos asumidos como respuestas naturales a la expresión del conflicto social.

Otro tanto se puede decir del tratamiento que las fuentes periodísticas consultadas dieron a este tipo de hechos. Solo por citar un ejemplo, el 12 de junio del 2004, con un artículo titulado “Precaristas invaden un terreno cada cuatro días”, *La Nación* informó sobre las 1062 usurpaciones de tierras reportadas solo en el año 2004 (Vargas, 12 de junio del 2004). De acuerdo con información del Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública, en los últimos 5 años el problema de las invasiones de tierras sufrió un incremento considerable, ya que en 1999 se ejecutó un total de 15 desalojos al año, mientras que a junio del 2004 se habían realizado 30 desalojos. Argumentando que la necesidad no siempre se encontró detrás de la usurpación de tierras, el artículo contrasta con las pocas acciones colectivas reportadas en relación con esta problemática, lo que evidencia el silencio periodístico en torno a este tipo de demandas.

Como lo muestra el cuadro 7, una de las características del estudio de las acciones colectivas ha sido la dificultad para darle seguimiento al tipo de respuesta que reciben las demandas planteadas por dichos actores. En cifras, esto se traduce a 2.959 acciones cuya respuesta no es reportada por la prensa escrita. Esta característica del estudio de las acciones colectivas puede deberse a la reducida capacidad o al desinterés de las instituciones gubernamentales para brindar respuestas a las acciones de protesta, así como puede explicarse por la imposibilidad de dar soluciones inmediatas a las peticiones hechas por los actores colectivos.

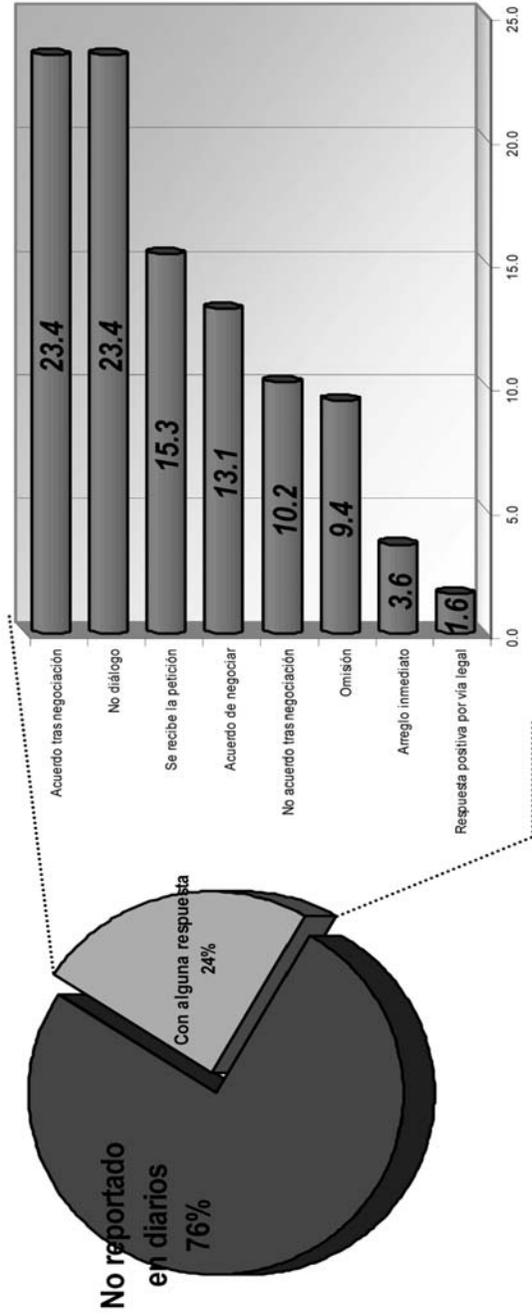
Cuadro 7
Tipo de respuestas dadas a las colectivas en
Costa Rica, 1995-2004

Respuesta	Casos	%
<i>Total</i>	<i>3904</i>	<i>100.0</i>
No registrado	2959	75.8
Acuerdo tras negociación	221	5.7
No diálogo	221	5.7
Se recibe la petición	145	3.7
Acuerdo de negociar	124	3.2
No acuerdo tras negociación	96	2.5
Omisión	89	2.3
Arreglo inmediato	34	0.9
Respuesta positiva por vía legal	15	0.4

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra* y *La Nación* (1995-2004).

De la misma manera, estas 2.959 acciones que corresponden al 76% de lo reportado en *La Nación* y *Diario Extra* –véase gráfico 5– son el reflejo del silencio de la prensa escrita, al no darles continuidad a las demandas colectivas, que son reproducidas como parte de un malestar naturalizado que no tiene por qué encontrar solución en las páginas de estos medios.

Gráfico 5
Distribución de las acciones colectivas según si reportan respuestas dadas y tipo en Costa Rica, 1995-2004



Fuente: Elaboración a partir de Bases de Datos de acciones colectivas, *Diario Extra y La Nación (1995-2004)*.

Sin negar el malestar existente y la cultura de protesta del país, este silencio institucionalizado de las fuentes consultadas puede ser parte de las estrategias de cultivo de la disconformidad ciudadana, que efectivamente se expresan mediante constantes acciones de protesta, pero que quedan planteadas sin solución alguna, posibilitando la reproducción de la disconformidad. Este mecanismo acompañaría al resto de estrategias utilizadas para evadir el conflicto, para no asumir las rupturas socioeconómicas, políticas e imaginarias de la Costa Rica contemporánea, lugar desde donde se perpetúa la normalización del conflicto, o como lo muestra la novela de Cortés, lugar desde donde el mito de una vida social sin conflictos adquiere vitalidad.

6. Reflexiones finales: aproximaciones a una cultura política de protesta

El estudio de las acciones colectivas ha permitido visibilizar la constitución de una cultura política de protesta con un repertorio de acciones diversificado, sostenido por dos pilares de protesta centrales, que son el uso de la palabra y la apropiación de espacios públicos mediante la realización de bloqueos, marchas y concentraciones. Lejos de las posiciones que responsabilizan a los sindicatos de su protagonismo en las acciones colectivas –lo que no niega su participación destacada en ellas–, esta cultura de protesta no tiene dueños, lo que ha potenciado la extensión del campo de los fenómenos políticos constreñidos a la visión electoral de la participación política, politizando, además, a actores tradicionalmente no considerados como tales.

En esta cultura de protesta, si bien algunas acciones recibieron respuestas positivas o negativas para la solución del conflicto, muchas fueron las acciones en las que el silencio imperó como sustituto de la respuesta. Por ello, el correlato de la cultura de protesta costarricense fue el de una cultura del silencio, en donde la omisión del conflicto ha permitido la reproducción del mito de que en Costa Rica no sucede nada desde el Big-Bang.

Esta expresión, reflejo de los discursos de inmovilidad y entramamiento económico y político de la Costa Rica contemporánea

(Solís, 2006: 8 y siguientes), forma parte de los mecanismos de la negación del conflicto, activados para postular la pasividad de los costarricenses como parte de los problemas actuales, siendo una expresión que invisibiliza las acciones colectivas, las demandas planteadas y las rupturas socioeconómicas y políticas que se expresan como vivencia cotidiana del malestar.

Esta interpretación tiene como supuesto la normalización del conflicto, en donde las 3904 acciones de protesta registradas por las fuentes consultadas, así como las acciones no registradas por estos medios, forman parte de un orden social construido con las carencias y necesidades de determinados actores. En el contexto de la normalización del conflicto, estas carencias y necesidades son vistas y en ocasiones no cuestionadas, como constitutivas de la sociedad costarricense. Es por ello que además de la normalización del conflicto, la muerte, la represión policial, la reconstrucción mítica y la distorsión oficial de lo sucedido, así como el silencio son los mecanismos –también normalizados– con los que se responde a la protesta, sin que la solución a las demandas planteadas se vislumbre en el horizonte de posibilidades ofrecidas en las páginas de los diarios o más allá de ellas.

Por supuesto, el silencio también ha sido cultivado por parte de quienes lo asumen como la única respuesta posible. Hasta donde la expresión de demandas colectivas se convierte en un lamento normalizado y sin respuesta, es parte de las preguntas que quedan sin responder en esta reflexión. El estudio de las potencialidades y debilidades de esta cultura de protesta para trascender el plano de las quejas aisladas, constituye también uno de los grandes retos políticos de la organización formal o informal de los actores sociales.

Desde esta perspectiva, una reconstrucción más exhaustiva de nuestra historia de la protesta, que posibilite pensar los instrumentos de acción colectiva con una trayectoria y con unos resultados particulares, podría arrojar datos más integrales en cuanto a las

limitaciones y potencialidades de la protesta, independientemente de que estas acciones se incluyan en movimientos sociales .⁸

Si bien este no es un trabajo que trate sobre las formas organizativas y de conformación de una ciudadanía activa, es importante considerar que para tener una ciudadanía activa se necesita algo más que la protesta. En este sentido, nuevas preguntas de investigación podrían sugerir aproximaciones metodológicas para explorar la relación entre la irrupción pública de ciertos temas mediante los recursos de la acción colectiva y la capacidad de brindarles seguimiento a las demandas, una vez hechas públicas.

Ya con los ciclos de acción colectiva de la huelga del Magisterio Nacional en 1995, del “combo ICE” en el 2000 y de Riteve en el 2004, se evidenció el riesgo asumido al protestar una vez que los proyectos de ley estuvieron aprobados o hasta que el arreglo con la empresa Riteve estuvo finiquitado. Los mecanismos y la estructura organizativa que operó detrás de este proceder político, así como los obstáculos que se encuentran tras la imposibilidad de construir una cultura de vigilancia y rendición de cuentas, pueden originar valiosas líneas de investigación para explorar no solo el pasado, sino, también, el presente, a la luz de nuevas coyunturas políticas, como, por ejemplo, la de la tramitación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC). En la que medida hay algún tipo de aprendizaje social respecto al fracaso o el éxito de la protesta, es también otra de las preguntas abiertas, que solo una perspectiva histórica más amplia permitirá responder.

8 El libro de Alvarenga (2005), titulado **De Vecinos a Ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica**, ofrece un panorama general de los movimientos comunales de Costa Rica en la segunda mitad del siglo pasado, siendo los movimientos de carácter comunal la unidad analítica de su trabajo. Sin embargo, el interrogante que busca plantear esta reflexión es el referido a las limitaciones, posibilidades e impacto de la acción colectiva en el sistema político, trabajo que se encuentra pendiente en las reflexiones de la comunidad de científicos sociales costarricenses.

Bibliografía

Alvarenga, P. (2005): *De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica*. (Editorial Universidad de Costa Rica/ Universidad Nacional).

Chacón, V. (2006): "Mi caso es persecución política", *Semanario Universidad*, N.º 1658.

Cortés, Alberto (2001): Cultura política y sistema de partidos en Costa Rica: ¿Nuevas tendencias en el 2002? En: Rovira, Jorge, editor. *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*. (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica).

Cortés, Carlos (2000): *Cruz de olvido* (Editorial Alfaguara).

Costa Rica (2003). *Código penal*. (San José Editorial Investigaciones Jurídicas S. A.).

Edelman, M. (2001): "Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics", *Annual Anthropological Review*, N.º 30.

Fonseca, A. (2003): "Privatización y prensa escrita en Costa Rica. El caso del COMBO ICE. Un análisis de la Posición del periódico La Nación en relación con el proyecto de Modernización del Instituto Costarricense de Electricidad. Período noviembre 1999-marzo 2001". *Tesis*. (Universidad de Costa Rica).

Francheschi, H. (2002): "Acciones colectivas de la sociedad civil hacia el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica 2001" *Ponencia* del capítulo Fortalecimiento de la Democracia del Octavo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (<http://www.estadonacion.or.cr/info2002/nacion8/frame-estnacion.html>)

_____, 2003 “Acciones colectivas de la Sociedad Civil hacia el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica, 2002” *Ponencia* preparada para el capítulo Fortalecimiento de la Democracia del Octavo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

(<http://www.estadonacion.or.cr/Info2003/nacion9/ponencias.html>)

Jiménez, G: “Soluciones “a la tica””, *Periódico La Nación*, 29 de junio de 2001.

Loaiza, Vanessa: “‘Traileros’ recuperaron sus vehículos” En: *La Nación*, 29 de agosto de 2004.

Martín, K. (2004): “El Combo del ICE y La Nación: Análisis para un periodismo socialmente responsable”. *Tesis*, (Universidad de Costa Rica).

Martín, R.: “Apelan fianza para líder de precaristas”, *Periódico La Nación*, 13 de junio de 1997.

Menjívar, M. (2000): “Reforma del ICE y lucha social: La concreción de un referendo popular”. Versión ampliada del texto presentado al Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible como insumo para la elaboración del *séptimo informe Estado de la Nación*. (San José Programa Estado de la Nación).

Meza, A. “Un muerto tras bloqueo”. *Periódico La Nación*, 18 de julio de 2000.

Mora, S. (2006): Acciones colectivas en la sociedad costarricense 2000-2005. *Ponencia* duodécimo informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (San José, Programa Estado de la Nación), (http://www.estadonacion.or.cr/Info2006/Ponencias/fortalecimiento/Acciones_colectivas%202005-2006.pdf.)

Raventós, C. (2001): Democracia y proceso de aprobación de las políticas de ajuste estructural en Costa Rica (1980-1995). En J. Rovira (ed.): *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*, (Editorial de la Universidad de Costa Rica).

Raventós, C.; Ramírez, O.; Gutiérrez, A. y García, R. (2005): *Abstencionistas en Costa Rica ¿Quiénes son y por qué no votan?*, (Universidad de Costa Rica/IIDH CAPEL/Tribunal Supremo de Elecciones).

Royo, A. (2003): La reforma agraria en Costa Rica (1962-2002): Balance de las intervenciones estatales en el cantón de Osa, *Revista de Historia*. N.º 48.

Solís, M. (2002): Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la privatización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica, *Revista de Ciencias Sociales*. N.º 95, Vol. 1.

Solís, M. (2006): *La Institucionalidad Ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo*, (Editorial de la Universidad de Costa Rica).

Tarrow, S. (2004): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, (Alianza Editorial).

Vargas, O. “Precaristas invaden terrenos cada cuatro días”. *Periódico La Nación*, 12 de junio de 2005.

Villalobos, M. “Demandan a la Standard Fruit Company”, *Diario Extra*, 8 de octubre.

Fuentes periodísticas consultadas

La Nación 1995-2004.

Diario Extra 1995-2004.

Anexo 1

Categorías analíticas	Acciones colectivas comparadas		
	1995 Huelga del Magisterio Nacional	2000 Combo ICE	2004 Riteve
Total de acciones colectivas en el año	450 acciones	613 acciones	648 acciones
Duración del ciclo	Del 17 de julio al 18 de agosto de 1995	Del 16 de marzo al 4 de abril del 2000	Del 23 de agosto al 31 de agosto del 2004
Número de acciones en los ciclos	86 acciones	248 acciones	148 acciones
Dispersión geográfica	Todo el país	Todo el país	Todo el país
Actores involucrados	Organizaciones sindicales magisteriales organizadas en el Frente de Organizaciones Magisteriales (FOM)	Pluralidad de actores en la participación de las acciones	Pluralidad de actores en donde se destaca la alianza denominada Movimiento Cívico Nacional
Identificación de actores	Posibilidad de identificar a todos los actores en las fuentes periodísticas	Imposibilidad de identificar a un 4.1% de los actores colectivos en las fuentes periodísticas	Imposibilidad de identificar a un 1.5% de los actores colectivos en las fuentes periodísticas
Tipos de alianzas	Reducidos apoyos por parte de actores no pertenecientes al gremio educativo. Conflictos al interior de las dirigencias sindicales y entre las bases y los representantes de los educadores	Participación conjunta de diversidad de actores, como trabajadores del sector público, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, vecinos y productores agrícolas	Participación conjunta de cámaras de transportistas, trabajadores del sector público, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y productores agrícolas
Acción predominante	Marcha	Bloqueo	Bloqueo y tortuguismo
Tipo de demandas	Expresión de una sola demanda de carácter gremial, cual fue derogar la Ley N.º 7531, "Ley de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional". Posteriormente, la demanda central de la huelga fue la apertura al diálogo y a la negociación por parte del Gobierno	Expresión de una sola demanda de carácter nacional, cual inicialmente fue la no aprobación de la "Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado", y posteriormente el retiro de corriente legislativa del "combo ICE"	Expresión de varias demandas de carácter gremial-nacional, cuales fueron la eliminación del monopolio de Riteve, la solicitud de un aumento salarial para los trabajadores del sector público superior al 4,5%, medidas para contrarrestar el alto costo de la vida y oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC)

Categorías analíticas	Acciones colectivas comparadas		
	1995 Huelga del Magisterio Nacional	2000 Combo ICE	2004 Riteve
Entidad a la que dirigen las acciones	José María Figueres Olsen, presidente de la República, Ministerios de Trabajo y de Educación Pública, y Asamblea Legislativa	Asamblea Legislativa y Administración Rodríguez Echeverría	Administración Pacheco de la Espriella, Ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de Trabajo, de Hacienda y Asamblea Legislativa
Grado de apertura a las demandas	Inicialmente, negativa al diálogo por parte de los representantes gubernamentales. En un segundo momento se construye un acuerdo con las dirigencias de algunas organizaciones sindicales. Se conformó una comisión de notables para analizar las peticiones de los educadores y educadoras, sin que se lograra la satisfacción de las demandas	Amplio grado de apertura a las demandas, debido al retiro del "combo ICE" de la corriente legislativa y la creación de la Comisión Mixta del ICE en la Asamblea Legislativa	Amplio grado de aceptación de las demandas, más no solución definitiva del conflicto. Producto de las negociaciones se flexibilizaron las reglas de revisión técnica vehicular, se aprobó un 0,5% de aumento salarial para el sector público y se "tomó nota de la oposición al TLC". Estas medidas suscitaron la renuncia de un número importante de representantes gubernamentales
Formas de represión de la acción colectiva	La acción predominante fue la retención del pago de salarios a los educadores. El 7 de agosto de 1995, frente a Casa Presidencial se produjo una violenta represión policial por parte de los miembros del Centro de Información Policial (CIP), después de la marcha más concurrida realizada por los educadores	La acción predominante fue el uso de la fuerza policial. Las sesiones legislativas de aprobación del Combo ICE se realizaron sin acceso del público a las barras legislativas. Dicha entidad estuvo custodiada por miembros de la Fuerza Pública. Después de la aprobación del "combo ICE" se registraron 15 intervenciones policiales alrededor de todo el país	La acción predominante fue el uso de la fuerza policial. Solo el 25 de agosto del 2004 se detuvieron 85 personas y se decomisaron 54 furgones producto de la ejecución de cuatro intervenciones policiales simultáneas, realizadas en horas de la madrugada. Después de esta fecha, se realizaron dos intervenciones policiales más. Adicionalmente, algunos de los detenidos de la protesta fueron encausados legalmente

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bases de datos de acciones colectivas, *Diario Extra* y *La Nación* (1995, 2000 y 2004).

ENCUENTROS

Elecciones de alcaldes municipales 2006 en Costa Rica: muchos los llamados, pocos los concurridos

*Ronald Alfaro Redondo
Político¹*

El domingo 3 de diciembre del 2006 se realizaron en Costa Rica los segundos comicios para elegir autoridades municipales en los 81 municipios y en los 469 distritos del país. En esta oportunidad se eligió un total de 4.941 representantes políticos. En la región latinoamericana Costa Rica fue uno de los últimos países en incorporar a su legislación la designación directa de este tipo de cargos. Sin embargo, los ciudadanos han desaprovechado las dos posibilidades de participar en la elección de sus autoridades políticas más cercanas. De igual forma, la débil organización y los escasos recursos con que encaran los partidos políticos estos comicios constituyen dos barreras que impiden la movilización de un mayor número de electores. Aun con estos factores adversos, es destacable la cantidad de ciudadanos que se postulan a los casi cinco mil escaños en disputa.

1 Político. Investigador del Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Docente e investigador Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: ralfaro@estadonacion.or.cr

Los principales acontecimientos de la elección estudiada son por un lado la bajísima participación del electorado (24%) y por el otro que, a diferencia de lo acontecido en la elección nacional, el Partido Liberación Nacional (PLN) ganó los comicios por un amplio margen de diferencia con respecto a sus contendientes. Con ello, el PLN recupera su hegemonía en las elecciones municipales que estaban bajo el control del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) desde 1998. El partido que triunfó en los últimos comicios nacionales tiene bajo su control la mayor cantidad de ayuntamientos. En comparación con los resultados de la elección nacional celebrada en febrero del 2006, los liberacionistas obtuvieron, en los comicios municipales, un mayor respaldo y también aumentaron los niveles alcanzados en esa misma elección cuatro años atrás. El apoyo hacia el PUSC decreció significativamente, comparado con el registrado en 2002. Por su parte, el Partido Acción Ciudadana (PAC), segunda agrupación con mayor respaldo en la elección presidencial 2006, aumentó ligeramente su caudal entre una elección municipal y otra, no obstante, en estos comicios se ubica como la tercera agrupación en importancia (cuadro 1). En este sentido, el carácter territorial que prima en las elecciones municipales se refleja de una u otra forma en los resultados.

Cuadro 1:
Resumen de los resultados de las
elecciones municipales 2002 y 2006

Partido político	Elección 2002	%	Alcaldes 2003-2007	Elección 2006	%	Alcaldes 2007-2011
Liberación Nacional	168.410	32,8	27	277.589	45,9	59
Unidad Social Cristiana	188.612	36,7	48	107.007	17,7	11
Acción Ciudadana	65.968	12,8	1	88.630	14,6	5
Movimiento Libertario	20.655	4,1	0	34.073	5,6	1
Otros partidos ^{a/}	70.046	13,6	5	97.896	16,2	5
Total	513.691	100,0	81	605.195	100,0	81

a/ La categoría Otros partidos incluye 30 agrupaciones en el 2002 y 39 en el 2006.
Fuente: Elaboración propia, con base en tribunal Supremo de Elecciones.

1. Contexto de las elecciones de autoridades municipales

En la Costa Rica de inicios del siglo XX las elecciones municipales se realizaban anualmente. No obstante, la reforma electoral de 1913 modificó la concurrencia de estas a cada dos años junto con las elecciones legislativas, situación que se prolongó hasta 1946. La Constitución Política de 1949 y el Código Electoral de 1953, optaron por concentrar la elección de todas las autoridades políticas en un mismo día en el mes febrero (presidente, diputados y regidores). Este aspecto se rompe con la promulgación del Código Municipal de 1998 que separa las elecciones de un conjunto de autoridades municipales, las cuales se celebran el primer domingo de diciembre cada cuatro años.

Las elecciones de alcaldes municipales se han celebrado en dos oportunidades (2002 y 2006). En los comicios de 2006 se disputó un total de 4.941 cargos, distribuidos en 81 alcaldes, 162 alcaldes suplentes, 938 síndicos municipales propietarios y suplentes, 3.752 concejales de distrito propietarios y suplentes, y 8 intendentes. Esta cifra representa la mayor cantidad de cargos de representación política en nuestra historia electoral reciente (cuadro 2).

Cuadro 2:
Cifras relevantes de las elecciones municipales
2002 y 2006

Aspecto	2002	2006	Comportamiento
Padrón Electoral	2.331.459	2.603.770	Aumentó
Juntas receptoras de votos	6.819	4.852	Disminuyó
Partidos políticos participantes	34	45	Aumentó
Cargos por elegir	4.900	4.941	Aumentó
Candidaturas inscritas	16.243	15.919	Disminuyó
Alcaldes	81	81	Igual
Alcaldes suplentes	162	162	Igual
Síndicos (propietarios y suplentes)	928	938	Aumentó
Concejales de distrito (propietarios y suplentes)	3.648	3.688	Aumentó
Intendentes	8	8	Igual
Concejales municipales de distrito (propietarios y suplentes)	64	64	Igual

Fuente: Elaboración propia, con información del TSE.

Desde la perspectiva de fortalecimiento de la democracia, las elecciones de alcaldes municipales y otras autoridades locales pueden ser consideradas como un avance democrático. Sin embargo, la presencia de al menos cuatro factores estructurales determinan los alcances de estos procesos democráticos. En primer lugar, el carácter centralista del Estado costarricense ha relegado a las municipalidades a un rol menos protagónico en la vida nacional. Actualmente, la mayor parte de los servicios y de los fondos públicos continúan administrados por entidades de Gobierno Central o instituciones autónomas.

Por otra parte, al tratarse de una elección desprovista por completo de financiamiento estatal, los partidos y sus candidatos y candidatas se ven en la obligación de hacerle frente a la campaña con sus propios fondos, o en el peor de los escenarios, ser objeto de ofrecimientos de dinero “interesado” en la política local.

Un tercer aspecto relacionado con este tema es el debilitamiento que afrontan los partidos políticos actuales. En ese sentido, a diferencia de una elección nacional, el triunfo en los comicios locales es posible si se cuenta con una maquinaria electoral organizada en cada una de las comunidades. Sin embargo, la militancia partidaria es hoy día una especie política en extinción y los partidos carecen de sus principales capacidades para afrontar una contienda de carácter territorial y en la que los medios de comunicación no tienen un papel protagónico. Más adelante se hará alusión a estos factores en la sección sobre participación política.

Finalmente, las elecciones de alcaldes se efectúan 10 meses después de la elección presidencial. La cercanía entre estos eventos torna difícil la reactivación de las maquinarias partidarias, la búsqueda de fondos para financiar sus campañas e impide la integración de los ciudadanos a un nuevo proceso.

Desde una perspectiva comparada, en los países latinoamericanos los gobiernos locales están compuestos por un órgano ejecutivo (alcalde) y un órgano deliberativo (concejo municipal) en el que se toman las decisiones. El período para el que son elegidas las autoridades municipales en estos países varía entre 3 y 5 años. En Costa Rica esa duración es de cuatro años, semejante a lo que sucede en Ecuador, Colombia, Chile, Guatemala y Honduras. Por su parte, la

cantidad de concejales por ayuntamiento en nuestro país (mínimo 5 y máximo 13) es similar al número de representantes municipales en Bolivia, pero menor a la cifra de concejales en los municipios colombianos. De igual forma, los alcaldes y regidores municipales costarricenses pueden postularse a la reelección en sus cargos de manera indefinida tal y como sucede en El Salvador, Ecuador y Chile. Asimismo, en la papeleta de alcalde se incluyen dos aspirantes al cargo de alcalde suplente, una figura inexistente en el resto de países, con excepción del vicealcalde hondureño.

A pesar de que los gobiernos locales costarricenses comparten características con sus homólogos en la región latinoamericana, existen tres elementos diferenciadores importantes. Por un lado, un número considerable de naciones cuenta con autoridades políticas de nivel intermedio con atribuciones en las regiones, provincias o departamentos. Estas autoridades (gobernadores o prefectos) sirven de enlace entre el Gobierno Central y los ayuntamientos. Por el contrario, en Costa Rica no existen cargos en dicho nivel desde la eliminación de la figura de gobernador de provincia (que no era de elección popular), pues sus responsabilidades reñían con las de los alcaldes. No obstante, los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país eligen representantes políticos a una escala aún menor que el municipio; es decir, nombran autoridades a escala distrital, las cuales poseen similitudes con las juntas parroquiales que se designan en Ecuador. Esta particularidad costarricense torna compleja una elección popular en la que es necesario elaborar 469 papeletas distritales diferentes y en la que se nombran concejales de distrito cuya labor es poco reconocida por la ciudadanía y de escaso protagonismo en las comunidades.

En segunda instancia, no existe ningún país en la región en el que se designen autoridades municipales con desfases temporales como en Costa Rica. Actualmente, los regidores municipales son elegidos en febrero y los alcaldes en diciembre. En la práctica, esto origina que el alcalde municipal tome posesión de su cargo diez meses después de instalado el concejo municipal en gobiernos locales con representación de varios partidos políticos y sin mayorías. Por lo tanto, en la integración de los gobiernos locales se presentan desfases electorales, políticos, presupuestarios y administrativos, lo que dificulta las tareas de negociación y construcción de consensos.

Por último, dado que el nombramiento de todas las autoridades municipales no se efectúa en la misma fecha, existen desfases temporales importantes en la integración de los ayuntamientos. Más adelante se aborda este aspecto y sus principales efectos en materia de gobernabilidad municipal.

De manera que un conjunto de factores estructurales limitan los alcances que una elección directa de autoridades municipales como lo que se analiza en este documento, puedan generar en el sistema político y en materia de fortalecimiento de la democracia. El centralismo estatal, la ausencia de financiamiento y la crisis por la que atraviesan los partidos políticos, determinan los avances que originalmente las reformas políticas a escala local preveían.

2. Organización política municipal

Las municipalidades en Costa Rica son entidades estatales que poseen autonomía política, administrativa y financiera. Los gobiernos locales pertenecen a la esfera de lo que comúnmente se conoce como sector público, que reúne a los ministerios, poderes de la República e instituciones autónomas. Dentro de esta categoría, conforman el sector público descentralizado. Desde el punto de vista político, las autoridades políticas municipales (alcalde, regidores, síndicos, etc.) son nombradas mediante procesos electorales en los que participa la ciudadanía. El mandato de los representantes locales no está sujeto a autoridades de nivel central o regional. En lo que respecta a la autonomía administrativa, los gobiernos locales tienen la posibilidad de definir sus propias disposiciones para regular su organización y funcionamiento internos.

Para el desempeño de sus funciones, las municipalidades cuentan con recursos financieros y humanos propios. La jurisdicción territorial de los gobiernos locales es el *cantón*. El cantón (también conocido como municipio) es el territorio geográfico en el que los ayuntamientos ejercen su rol de administradores de los bienes y servicios comunales y gobierno local.

La división político-administrativa del país establece la existencia de *provincias*, *cantones* y *distritos*. Los *distritos* pertenecen a los *cantones*, y estos últimos a su vez, forman parte de

las *provincias*. Las *provincias* y los *cantones* son creados por la Asamblea Legislativa mediante la promulgación de una ley. Mientras que la potestad de creación de los *distritos* reside en el Poder Ejecutivo, por medio de la publicación de un decreto que modifica la División Territorial Administrativa. Para el año 2006, existen en Costa Rica 7 provincias, 81 cantones y 470 distritos. Las leyes costarricenses establecen que debe existir una municipalidad en cada uno de los cantones creados por ley, mientras que en el caso del distrito, las normas determinan la obligatoriedad de contar con un *concejo de distrito*.

Producto de la fundación de nuevos cantones y particularmente de la creación de distritos, la división administrativa costarricense ha sido objeto de importantes modificaciones. Para el año 1953 el país estaba dividido en 65 cantones. En 1962 los cantones sumaban 66, en 1970 eran 78 y en 1982 se llega a la cantidad de 81, cifra que permanece invariable hasta la fecha.

Por su parte, los principales aumentos en el número de distritos administrativos se han dado entre los años de 1966 y 1970, y más recientemente, entre 1998 y el 2002. El primer período de incremento mencionado, se debió al efecto de la creación de 12 nuevos cantones y sus respectivos distritos, mientras que el segundo (1998-2002) está relacionado exclusivamente con un mayor número de distritos, pues el número de cantones no ha sufrido variaciones desde el año 1982, año en el que se crea el municipio de Garabito.

3. Reglas para la conformación del gobierno municipal

La municipalidad cumple en los cantones una función de gobierno local. El Código Municipal de 1998 (Ley N.º 7794) establece que el gobierno y la administración de los intereses y servicios comunales están a cargo del gobierno municipal. Este gobierno está conformado por un conjunto de autoridades políticas, todas ellas de elección popular. La autoridad ejecutiva en los municipios la ejerce el **alcalde** o **alcaldesa**. Su función es esencialmente administrativa aunque también puede participar de la deliberación en el Concejo Municipal, pero sin derecho a voto (IFAM, 2002). Según la Ley 8611, también existen dos vicealcaldes,

cuya responsabilidad es sustituir de manera temporal o definitiva al alcalde o alcaldesa propietaria. El primer vicealcalde realizará las funciones administrativas que el alcalde le asigne (Asamblea Legislativa, 2007).

Actualmente, la elección de alcaldes se efectúa el primer domingo de diciembre cada cuatro años. No obstante, debido a una interpretación reciente del TSE, a partir del 2016 los comicios de todas las autoridades municipales (incluidos regidores) se efectuarán el primer domingo del mes de febrero, dos años después de las elecciones nacionales y tomarán posesión el primero de mayo siguiente. Esto significa que las elecciones de regidores municipales de febrero del 2010 y las de alcaldes y otras autoridades municipales en diciembre del mismo año, serán los últimos comicios municipales que se realicen por separado. Además, para dar paso a las elecciones de todas las autoridades locales en el año 2016, se nombrarán concejales por un período de seis años y alcaldes por cinco años.

Con este cambio las elecciones municipales pasan a ser coincidentes y de medio período. El mandato del alcalde y vicealcaldes es de cuatro años y podrán ser reelegidos en períodos sucesivos de manera indefinida. Ambas autoridades son elegidas en una misma papeleta aplicando el criterio de mayoría simple. El cargo es renunciable, puede ser objeto de cancelación de credencial y revocatoria de mandato.

El órgano deliberativo y de aprobación de las políticas municipales es el *Concejo Municipal*. Este Concejo está integrado por un número de *regidores* y *regidoras* municipales que varía entre 5 concejales como mínimo y 13 como máximo, según la cantidad de población cantonal (cuadro 3). El alcalde también forma parte del concejo municipal. Junto con los regidores municipales propietarios son elegidos regidores suplentes, con la finalidad de que puedan suplir a los primeros en ausencias definitivas u ocasionales. Los regidores municipales tienen voz y voto en las sesiones del concejo municipal, se designan por cuatro años, aplicando el principio de proporcionalidad y pueden ser reelegidos por períodos sucesivos. Internamente, los concejos municipales designan un *presidente* y un *vicepresidente* municipal por un período de dos años, con posibilidad de reelección.

Cuadro 3:
Criterio poblacional para la asignación
del número de regidores municipales
por cantón. 2006

Criterio poblacional	Número de regidores	Cantidad de cantones que cumplen el criterio	Porcentaje
Menos del 1% de la población total del país	5	48	59,3
Más del 1% pero menos del 2%	7	21	25,9
Más del 2% pero menos del 4%	9	9	11,1
Más del 4% pero menos del 8%	11	2	2,5
Más del 8% de la población total del país	13	1	1,2
Total		81	100,0

Fuente: Código Municipal.

El presidente municipal tiene entre sus potestades, la de nombrar a los miembros de las *comisiones ordinarias y especiales del municipio*, integrando en ellas a los concejales representantes de los partidos políticos que integran el Concejo. En cada municipalidad se integran como mínimo siete comisiones permanentes para atender los siguientes temas: *hacienda y presupuestos, obras públicas, asuntos sociales, gobierno y administración, asuntos jurídicos, asuntos ambientales, asuntos culturales y condición de la mujer*. Los funcionarios municipales y la ciudadanía pueden participar de las sesiones de estas comisiones en calidad de asesores. Los concejos municipales se reúnen periódicamente en las localidades de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones ordinarias son semanales y las extraordinarias son convocadas para conocer asuntos especiales.

Los candidatos y candidatas a la alcaldía municipal y a los concejos municipales únicamente pueden ser postulados por los partidos políticos a escalas nacional, provincial y cantonal, debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entre los requisitos que deben cumplir quienes optan por estos cargos están: ser ciudadano costarricense, no formar parte de algún clero religioso (pertenecer al estado seglar) y estar inscrito electoralmente en la localidad a la que aspiran representar al menos dos años antes

de la elección respectiva. Por su parte, quienes mediante sentencia judicial hayan sido inhabilitados para ocupar cargos públicos o estén ejerciendo un cargo de representación, no podrán postularse al gobierno municipal.

Además del alcalde y los regidores, existen representantes políticos de los distritos administrativos. Se les denomina *síndicos* y *síndicas* municipales a aquellos ciudadanos electos popularmente, cuya misión es representar en las municipalidades los intereses de los vecindarios y los barrios que conforman los distritos. Los *síndicos* (propietarios y suplentes), al igual que el resto de integrantes del gobierno municipal, son nombrados para un período de cuatro años. En el concejo municipal los *síndicos* únicamente cuentan con voz, pero no pueden votar en los asuntos sometidos a consideración del concejo.

A partir de la elección de diciembre de 2002 se estableció la elección directa de los *síndicos*, ya que anteriormente eran designados considerando los resultados de la elección de regidores y pertenecían al partido que ganaba dicha elección en el distrito. Los *síndicos* son elegidos el mismo día en que se eligen los alcaldes y se asignan siguiendo el principio de representación mayoritaria. A su vez, los *síndicos* municipales forman parte de los *Concejos de distrito* (CD) y los presiden. Los CD constituyen la instancia de gobierno más cercana a las comunidades y sus antecedentes históricos se remontan a 1970 solo que su nombramiento pasó de manos del Concejo Municipal a la elección directa.

En cada distrito administrativo existe un concejo de distrito. Cumplen la función de enlace entre el distrito y el gobierno municipal. Están integrados por cinco miembros propietarios (uno de ellos es el *síndico* propietario) y cinco suplentes (de los cuales uno será el *síndico* suplente). La asignación de los escaños se efectúa aplicando los mismos procedimientos que en la asignación de diputados y regidores municipales, establecido en el Código Electoral (principio de representación proporcional mediante cociente, subcociente y cifra residual). Los *síndicos* y los miembros restantes de los CD son elegidos popularmente para un período de cuatro años. Su principal responsabilidad es vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas

municipalidades. Recientemente, se les asignó la obligación de promover la eficiencia de la actividad del sector público y su fiscalización (Ley N.º 8499, de noviembre de 2005).

Otro de los órganos municipales de reciente elección popular lo constituyen los ***Concejos municipales de distrito*** (CMD). Según la Ley N.º 8173, los CMD son instancias de gobierno local establecidas en comunidades que, por su lejanía con el distrito cabecera del cantón (en el que se ubica la municipalidad), han desarrollado una administración local con grados importantes de autonomía financiera, política y administrativa. Los concejales municipales de distrito propietarios municipales de distrito tienen los mismos deberes y atribuciones que los regidores municipales. Uno de sus miembros es el síndico propietario del distrito, quien presidirá y será sustituido por el síndico suplente.

Estas instancias son una especie de gobierno local “en pequeña escala”, que ejercen su jurisdicción territorial en el distrito. En términos de gobierno municipal, los CMD cuentan con una figura ejecutiva llamada ***Intendente*** y con un ***concejo de distrito***. El intendente cumple funciones de alcalde, pero a escala distrital, y el concejo de distrito efectúa las labores de órgano de deliberación. Estos representantes políticos mencionados son nombrados popularmente en la misma elección de alcaldes y síndicos municipales del mes de diciembre. Actualmente, existen en el país un total de ***ocho concejos municipales de distrito*** en las localidades de Cervantes, Tucurrique, Monteverde, Cóbano, Lepanto, Paquera, Colorado y Peñas Blancas.

4. Bajos niveles de participación política en elecciones municipales

El nivel de participación política en las elecciones de alcaldes municipales en 2006 (23%) se mantuvo estable en comparación con el 2002 (24%). Estas cifras siguen siendo muy bajas con respecto a los niveles de participación en las elecciones nacionales de febrero y cuando se le compara con eventos electorales similares en otros países. Por lo tanto, frente al llamado al voto de diferentes sectores de la sociedad, prevalece la indiferencia y el desinterés ciudadano reflejado por el 76% de los abstencionistas.

La existencia de un conjunto de factores permite contextualizar los altos índices de abstencionismo en estos comicios. Algunos de estos elementos por considerar son:

- Las elecciones municipales de diciembre 2006 fueron los segundos comicios de este tipo en el país y los primeros que se celebran en la época posbipartidista.
- La contienda municipal es básicamente territorial; es decir, se gana con una maquinaria electoral bien organizada en las comunidades. Sin embargo, los partidos políticos costarricenses encararon estas elecciones en una época de profundo debilitamiento y pérdida de simpatía.
- Se trata de una elección en la que se designan parte de las autoridades municipales (autoridad ejecutiva y órganos consultivos en los distritos).
- El carácter fundamentalmente centralista de la organización estatal costarricense relega a los gobiernos locales y a los servicios públicos que estos prestan.
- Por último, no hubo modificaciones en materia de acceso al financiamiento estatal. Por lo tanto, las elecciones municipales siguen desprovistas por completo de recursos públicos.

De los 81 municipios existentes en el país, en 28 de ellos (el 35%) el abstencionismo aumentó en términos relativos entre las elecciones del 2002 y el 2006. Los mayores aumentos se presentaron en Hojancha (en donde únicamente hubo un candidato en la elección de alcaldes), Alvarado y Upala. Por el contrario, en las restantes 53 localidades (65%) se redujo la cantidad de electores que no participó

de la última elección. Las disminuciones más significativas se dieron en Turrubares (el cantón con la más alta participación), León Cortés, Los Chiles y Puriscal.

Aunado a lo anterior, el comportamiento del abstencionismo en las dos elecciones municipales realizadas (2002 y 2006) es más urbano que el que se registra en los comicios nacionales. De hecho, cuatro de los siete cantones cabecera de provincia (San José, Alajuela, Heredia y Limón) están entre las diez localidades con mayor ausentismo en las urnas. Dentro de este grupo se incluyen comunidades densamente pobladas como Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Tibás y Moravia. En el grupo de los diez cantones con mayor abstencionismo todos superan el 82%.

En lo que respecta a los diez cantones de menor abstencionismo, estos son principalmente rurales. Cinco de los diez pertenecen a las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón. Del total sobresalen Turrubares, Nandayure, Montes de Oro y Talamanca, cuyos porcentajes de ausentismo son menores al 50% (cuadro 4).

Cuadro 4:
Abstencionismo electoral por cantón.
Elecciones Municipales 2002 y 2006.

Cantón	2002	2006	Cantón	2002	2006
San José	82,9	88,1	Oreamuno	80,3	71,8
Escazú	79,2	77,6	El Guarco	75,6	75,9
Desamparados	87,4	84,9	Heredia	88,9	85,1
Puriscal	70,8	60,4	Barva	72,7	66,8
Tarrazú	71,9	65,9	Santo Domingo	80,0	76,7
Aserri	77,5	76,9	Santa Bárbara	82,2	75,2
Mora	71,9	68,9	San Rafael	83,3	82,6
Goicoechea	87,7	84,8	San Isidro	80,0	74,9
Santa Ana	72,6	64,4	Belén	71,1	67,7
Alajuelita	86,8	83,2	Flores	73,2	69,1
Coronado	75,2	74,2	San Pablo	77,4	72,6
Acosta	66,1	66,8	Sarapiquí	69,3	67,8
Tibás	86,1	87,3	Liberia	82,2	75,7
Moravia	85,4	82,6	Nicoya	59,6	64,5
Montes de Oca	83,8	80,9	Santa Cruz	56,5	60,6
Turrubares	37,7	22,3	Bagaces	75,0	66,7
Dota	75,1	65,7	Carrillo	59,0	65,0
Curridabat	82,0	81,8	Cañas	64,9	75,5
Pérez Zeledón	76,4	71,9	Abangares	64,2	54,5
León Cortés	59,4	47,6	Tilarán	57,7	60,9
Alajuela	80,0	83,1	Nandayure	45,8	39,0
San Ramón	74,1	72,9	La Cruz	55,4	55,4
Grecia	77,8	70,8	Hojancha	32,7	74,9
San Mateo	61,3	51,8	Puntarenas	79,1	73,8
Atenas	70,4	65,1	Esparza	60,1	60,8
Naranjo	70,1	73,4	Buenos Aires	69,2	73,6
Palmares	61,0	65,0	Montes de Oro	50,1	42,9
Poás	60,0	70,0	Osa	71,6	73,7
Orotina	73,6	71,8	Aguirre	70,2	67,3
San Carlos	72,0	71,4	Golfito	76,8	76,9
Alfaro Ruiz	62,2	60,5	Coto Brus	71,0	72,3
Valverde Vega	59,3	52,8	Parrita	54,9	50,8
Upala	59,1	70,8	Corredores	74,0	78,7
Los Chiles	66,3	55,3	Garabito	47,9	56,3
Guatupo	60,0	60,7	Limón	85,0	81,9
Cartago	84,8	78,4	Pococí	79,6	76,4
Paraíso	74,2	76,9	Siquirres	75,7	78,2
La Unión	82,0	79,3	Talamanca	52,6	46,3
Jiménez	55,3	62,9	Matina	62,9	62,7
Turrialba	75,5	75,5	Guácimo	73,0	75,9
Alvarado	61,3	74,6	Todo el país	77,3	76,2

Fuente: Elaboración propia, con información del TSE.

5. La elección municipal del 2006

El padrón electoral para la elección municipal del 2006 fue de 2.603.770 electores, lo que representa un aumento del 11,7% en comparación con la cantidad registrada en el 2002. Los mayores incrementos en términos relativos entre elecciones se presentan en las provincias de Heredia y Limón (14%), seguidas de Alajuela (13%). De las siete provincias consideradas, solamente el incremento porcentual de San José se ubica por debajo del aumento global (cuadro 5).

Cuadro 5:
Padrón electoral elecciones municipales
2002 y 2006

	2002	2006	Aumento	%
Total	2.331.459	2.603.770	272.311	11,7
San José	871.949	952.561	80.612	9,2
Alajuela	421.540	476.942	55.402	13,1
Cartago	268.172	301.688	33.516	12,5
Heredia	220.983	251.999	31.016	14,0
Guanacaste	158.595	178.788	20.193	12,7
Puntarenas	210.252	236.660	26.408	12,6
Limón	179.968	205.132	25.164	14,0

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.

5.1 Partidos políticos

La tendencia identificada en elecciones municipales anteriores, relacionada con el incremento en el número de partidos políticos que participan, mostró en 2006 un nuevo capítulo. En los comicios analizados participó un total de 43 partidos políticos, 9 más que en la elección del 2002. 11 de cada 20 agrupaciones inscritas pertenecen a la categoría de partidos cantonales, una categoría que como se ha mencionado en otras oportunidades, continúa una tendencia creciente. Además, en comparación con los comicios anteriores concurren 2 agrupaciones nacionales y provinciales más así como

5 partidos cantonales. Respecto de estos últimos, se inscribieron nuevas agrupaciones en los cantones de Santa Ana, San José, San Ramón, Santa Bárbara y Poás (cuadro 6).

Otro fenómeno interesante de analizar es la existencia de algunas comunidades (San José, Aguirre, Santa Ana y Curridabat) en las que participan dos partidos cantonales. En cuanto a los partidos provinciales, sobresale la participación de 3 agrupaciones en la provincia de Cartago. Por otra parte, un total de 14 agrupaciones que estaban habilitadas para inscribir candidatos a los diferentes cargos municipales optaron por no presentar aspirantes. Más de la mitad de estas agrupaciones (9 casos) son partidos provinciales, algunas de ellas incluso con representación en la Asamblea Legislativa. Otras 4 son cantonales y únicamente una agrupación nacional no participó de las elecciones.

Cuadro 6:
Cantidad de partidos políticos que participan,
elecciones municipales 2002 y 2006

Tipo de partido	2002	%	2006	%
Nacional	11	32,4	13	30,2
Provincial	4	11,8	6	14,0
Cantonal	19	55,9	24	55,8
Total	34	100,0	43	100,0

Fuente: Elaboración propia, con base en información del TSE.

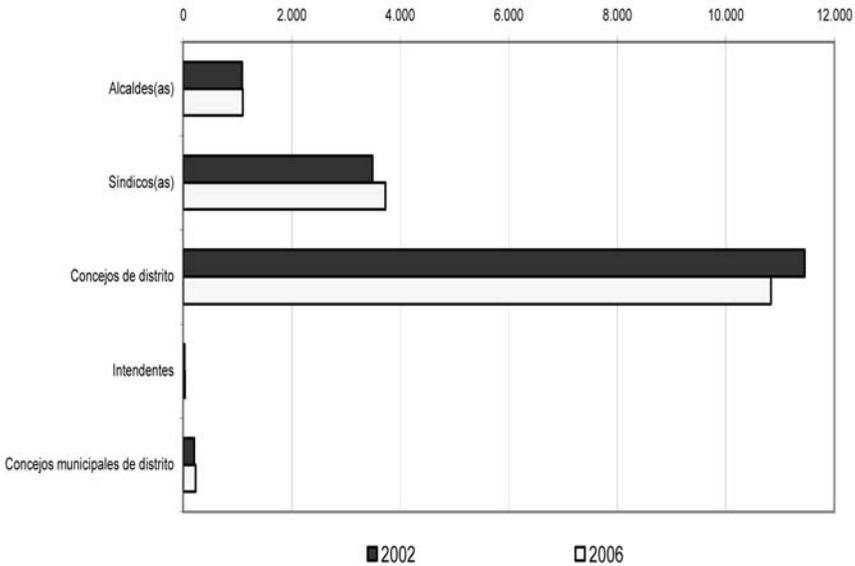
5.2 Candidaturas inscritas

En total, se inscribieron a los diferentes cargos municipales 15.919 candidatos y candidatas. Esta cifra es menor a la registrada en 2002 en 342 casos. Sin embargo, en 3 de los 4 tipos de cargos por elegir en el 2006, la cantidad de aspirantes aumentó en comparación con el 2002, únicamente disminuyeron los candidatos a concejales de distrito (incluyendo los concejales municipales de distrito) (gráfico 1).

Si se consideran las cifras totales, es posible afirmar que para cada cargo municipal se inscriben 3 aspirantes, una cifra baja en comparación con la cantidad de partidos políticos que participan de

la contienda. Desglosadas esas cifras por tipo de cargo, se tiene que para cada escaño de alcalde (propietarios y suplentes) se registraron 4,5 aspirantes. Le siguen en cantidad los 4,3 aspirantes por cada escaño de intendente. En el caso de los síndicos, la cifra es de 4 candidatos por cada cargo por elegir. Por último, se ubican los 3 aspirantes por cada concejal de distrito por designar.

**Gráfico 1:
Candidatos inscritos según cargo municipal,
por elección**



Fuente: Elaboración propia, con base en información del Tribunal Supremo de Elecciones.

Desde la perspectiva de equidad de género, se concluye que la composición de las papeletas estuvo equilibrada. De los 15.919 aspirantes en 2006 el 51,8% fueron mujeres (8.241). Sin embargo, si se analizan esas mismas cifras por cada cargo, sobresalen diferencias importantes. Los hombres predominan en las candidaturas a aquellos cargos en los que se designa al ganador por el principio de mayoría tales como alcaldes e intendentes (61% y 82,1%). Mientras que las candidatas mujeres son mayoría en aquellos cargos que se designan en proporción a los votos obtenidos. A los cargos a los que nos

estamos refiriendo son: síndicos (52%) y concejales de distrito (53%). Una situación similar se había presentado en la elección del 2002 (Alfaro, 2003).

Situación diferente se presenta cuando se examina la composición por género de los que resultan electos, más adelante se enfatizará en estos aspectos.

Por partidos políticos, las cinco agrupaciones que inscribieron más candidatos a los puestos municipales en el 2006 fueron Liberación Nacional (4.550), Acción Ciudadana (3.325), Unidad Social Cristiana (2.794), Movimiento Libertario (1.766) y Unión Nacional (597)². Esto quiere decir que ninguna agrupación política fue capaz de inscribir candidatos a todos los puestos en disputa. Los partidos que inscribieron menos candidatos fueron Moravia Progresista (7), Acción Laborista Agrícola (9), Vanguardia Popular (11) e Independiente Belemita (13). Por último, la nota sobresaliente de los 4 partidos cantonales que inscribieron más candidatos es que todos ellos participaban por primera vez en unas elecciones municipales (cuadro 7).

En resumen, los partidos nacionales inscribieron 14.305 candidatos (90%), seguidos de las agrupaciones cantonales con 1.005 (6%) y, finalmente los provinciales postularon a 609 aspirantes (4%).

Cuadro 7:
Partidos políticos con más candidatos inscritos
según tipo de partido

Nacionales		Provinciales		Cantoniales	
Liberación Nacional	4.550	Guanacaste Independiente	259	Solidaridad Ramonense	134
Acción Ciudadana	3.325	Verde Ecologista	156	Goicoechea en Acción	69
Unidad Social Cristiana	2.794	Integración Provincial Tres	64	Unión Palmareña	67
Movimiento Libertario	1.766	Frente Amplio	45	Integración Barbareña	62

Nota: La cantidad de candidatos que inscriben los partidos provinciales y cantonales no es comparable con el número de aspirantes de los partidos nacionales, debido a que el número de cargos con disputa es variable en las diferentes provincias y cantones en las que los primeros participan.

Fuente: Elaboración propia con información del TSE.

2 Estas cifras incluyen aspirantes a puestos en propiedad y suplencias.

5.3 Candidaturas repitientes 2002 y 2006

En esta oportunidad además de la descripción de la cantidad de candidatos inscritos por tipo de cargo, por partido político y por género, se añade una nueva dimensión. Se trata del análisis de la cantidad de aspirantes a cargos que repiten en las elecciones municipales del 2002 y el 2006. Según los registros del TSE, un total de 2.820 aspirantes repitieron su postulación. El 51% de estos fueron mujeres.

Por tipo de cargo, la mayor cantidad de aspirantes repitientes se postularon para ocupar los cargos de concejal de distrito y síndico, seguido por el de alcaldes. En términos generales, aquellos candidatos que aspiran por segunda ocasión lo hacen para los mismos cargos, excepto en el caso de quienes fueron candidatos a síndicos en el 2006, pues la mayor parte de estos habían sido aspirantes a concejales de distrito en el 2002 (cuadro 8).

En el caso de la alcaldía -el cargo de mayor relevancia-, de los 238 aspirantes que repiten en ambas elecciones, 148 lo hacen por el mismo cargo y 90 optaron por variar su aspiración.

Cuadro 8:
Candidatos a cargos municipales que repiten
según tipo de cargo y elección

Candidatura	Elección 2006	Elección 2002				
		Alcalde	Concejo de distrito	Concejo municipal de distrito	Intendente	Síndico
Total	2.820	218	1.766	46	8	782
Alcalde	238	148	54	1	-	35
Intendente	14			4	5	5
Concejo de distrito	1.550	39	1.195	-	1	315
Concejo municipal de distrito	41	-	-	34	1	6
Síndico	977	31	517	7	1	421

Fuente: Unidad de Estadística, Tribunal Supremo de Elecciones (2007).

Por partido político, el mayor número de aspirantes repitientes pertenece al PLN con 821, el PUSC con 516 y el PAC con 346. En los casos del PLN y el PAC, un número considerable de quienes se inscriben como candidatos en ambas elecciones lo hacen por el mismo partido. En las filas del PLN el 83% de los candidatos repitientes no cambió de partido y en el PAC ese mismo porcentaje es de un 77%.

Por otro lado, el PUSC y el Libertario experimentaron importantes fugas de candidatos a cargos municipales, pues de los que fueron candidatos socialcristianos en 2002, el 43% se inscribió como aspirante en 2006 pero en otra agrupación política diferente, principalmente se pasaron a engrosar las filas del PAC (97 casos) y el Libertario (72). Por su parte, un número considerable de los libertarios que compitieron en 2002, en 2006 lo hicieron por el PAC (20 casos) y el PUSC (17) (cuadro 9).

Cuadro 9:
Cambios ocurridos en las candidaturas a cargos municipales
del 2006 con respecto al 2002
por partido político

Candidaturas 2002	Candidaturas 2006					
	PUSC	PLN	PAC	ML	Otros	Total
PUSC	516	45	97	72	174	904
PLN	15	821	36	31	82	985
PAC	24	39	346	13	25	447
ML	17	13	20	46	12	108

Fuente: Elaboración propia, con información del TSE.

En cuanto a los cantones con más candidatos repitientes sobresalen las localidades de Puntarenas (108 casos), San Carlos (96), Desamparados (85), Alajuela (85) y San Ramón (80). Estos cantones se caracterizan por estar formados por un número elevado de distritos, lo que aumenta la cantidad de candidaturas. En sentido inverso, San Pablo (4 casos), Bagaces (7), Dota y Parrita (10), y Acosta (11) son los de menor presencia de aspirantes repitientes.

En síntesis, las candidaturas repitientes representan el 18% del total. La mayoría de los aspirantes a cargos municipales por segunda ocasión son mujeres y aspiran a ocupar fundamentalmente los mismos cargos en ambas elecciones. En el PUSC y el Movimiento Libertario hubo fuga de candidatos hacia otras agrupaciones, mientras que en el PLN y el PAC la tónica fue la permanencia de sus aspirantes.

6. Partido ganador en la elección de alcaldes municipales

El Partido Liberación Nacional ganó por un amplio margen la elección municipal del 2006 pues obtuvo 277.589 votos en todo el país (45,9%). En segundo orden de preferencia electoral se ubicó la Unidad Social Cristiana con el 17,7% de los votos. En tercera posición se situó el Partido Acción Ciudadana que reunió el 14,6%. En cuarta posición y muy por debajo de las agrupaciones anteriores aparece el Movimiento Libertario con el 5,6% de los sufragios. En términos generales el PLN ganó 59 cantones, el PUSC 11, el PAC 5, el Movimiento Libertario 1 y otras 5 agrupaciones obtuvieron la victoria en igual número de localidades: Organización Laborista Agrícola, Curridabat Siglo XXI, Acción Cantonal Siquirres Independiente (agrupaciones cantonales), Unión Nacional y Unión para el Cambio. Sobresale de este grupo el caso de Curridabat Siglo XXI, pues el partido cantonal logró prolongar su control en la alcaldía por dos períodos consecutivos, algo que no había logrado ningún otro partido cantonal.

El principal acontecimiento de la elección estudiada es que el PLN recupera su hegemonía en las elecciones municipales que estaban bajo el control socialcristiano desde 1998. Vale la pena recordar que el PUSC cuyo origen se remonta a 1983, fue la principal agrupación política en el período 1990-2002 pues ganó 3 de los 4 procesos electorales realizados, encabezaba el Poder Ejecutivo desde 1998 y constituía la fracción legislativa más numerosa en 1998-2006.

A diferencia de lo acontecido en la elección nacional, el PLN ganó por un amplio margen de diferencia con respecto a sus contendientes. En los 59 cantones en los que ganaron alcaldes liberacionistas, 24 de ellos ya pertenecían a esa misma agrupación en

el período anterior y 33 pertenecían al PUSC. Por su parte, la Unidad Social Cristiana pasó de 48 alcaldes en el período 2003-2007 a 11. De estos 11 casos, 10 alcaldías ya estaban bajo su control y únicamente le arrebató al PLN la alcaldía de Belén (cuadro 10). En estas 10 localidades en las que las alcaldías continúan bajo control del PUSC, 6 alcaldes ganaron su reelección.

En lo que respecta al Partido Acción Ciudadana, esta agrupación pasó de 1 alcalde a 5. Sin embargo, su respaldo disminuyó considerablemente en comparación con el registrado en las elecciones presidenciales (14,6% *versus* 38,9%).

Cuadro 10:
Cambio en las alcaldías por partido político según elección

Alcaldes 2003-2007	Alcaldes 2007-2011									
	ML	PAC	Acción Cantonal Siquirres Independiente	CSXXI	PLN	Organización Laborista Aguirre	PUN	PUSC	UPC	Total
Acción Ciudadana									1	1
Auténtico Paraisiense	1									1
Curridabat Siglo XXI (CSXXI)				1						1
Guanacaste Independiente							1			1
Independiente Obrero					1					1
Liberación Nacional		2			24			1		27
Renovación Costarricense (PRC)					1					1
Unidad Social Cristiana		3	1		33	1		10		48
Total	1	5	1	1	59	1	1	11	1	81

Fuente: Elaboración propia, con información del TSE.

Desde la perspectiva de género, la mayoría de los cargos municipales en 2007-2011 en propiedad serán ocupados por hombres. Además, en tres de los cinco cargos en disputa la cantidad de mujeres electas es menor al 40%. En sentido inverso, en las suplencias las mujeres superan a los hombres en dos de los cuatro cargos. Aun así, en términos generales, el 42% de los candidatos electos son mujeres (cuadro 11).

Cuadro 11:
escaños municipales en propiedad por género,
elecciones 2006

Cargo	Total	Mujeres	%	Hombres	%
Alcalde(sa)	81	9	11,1	72	88,9
Síndicos(as)	469	132	28,1	337	71,9
Intendentes	8	2	25,0	6	75,0
Concejales de distrito	1.844	861	46,7	983	53,3
Concejales municipales de distrito	32	13	40,6	19	59,4
Total	2.434	1.017	41,8	1.417	58,2

Fuente: Elaboración propia, con información del TSE.

El Partido Liberación Nacional obtuvo 340 de los 469 escaños de síndicos municipales en propiedad (72%), seguido de la Unidad Social Cristiana con 66 (14%) y Acción Ciudadana con 23 (5%). Siete agrupaciones cantonales lograron elegir a 15 síndicos (3,2%) en todo el país. En este grupo destacan Curridabat Siglo XXI, Organización Laborista de Aguirre, Yunta Progresista Escazuceña y Solidaridad Ramonense. El primero de ellos obtiene todos los síndicos del cantón, el segundo dos de los tres síndicos en disputa, la Yunta se adueñó de uno de los tres escaños, y por último, Solidaridad Ramonense alcanza cuatro de los trece síndicos.

En cuanto a los concejales de distrito, 925 de los 1.844 (50,2%) pertenecen al PLN, 353 (19%) al PUSC y 271 al PAC (15%). Mientras que 16 agrupaciones cantonales obtuvieron 82 escaños de concejales distritales, lo que representa un 4,4% del total.

6.1 Control electoral partidario en las elecciones de alcaldes municipales

Este indicador se construye a partir de la sumatoria de los porcentajes de votos de los partidos políticos en cada uno de los 81 cantones del país. Se suman los porcentajes de votos en dos bloques. El primer bloque corresponde a la suma del porcentaje de votos del

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN); y el segundo suma los porcentajes de votos del resto de partidos políticos.

El control electoral partidario pone de manifiesto el cambio en los porcentajes de votos que reciben los partidos políticos en los cantones del país y se comparan sus resultados con los datos registrados en la elección de diciembre del 2002. En el cuadro 12 aparecen las categorías de análisis utilizadas.³

Este indicador muestra cómo ganan los partidos políticos en los cantones del país agrupados en los dos bloques mencionados. Es decir, si reciben menos votos que elecciones anteriores, o si, por el contrario, ganan con un mayor porcentaje de votos. En ese sentido, tal y como lo dice su nombre, es un indicador del tipo de control electoral (fuerte o débil) de los dos bloques de agrupaciones: PLN-PUSC por un lado y las restantes agrupaciones por el otro.

Cuadro 12:
Categorías de control electoral partidario
en las elecciones de alcaldes municipales
2006

Categorías	Valor
Fuerte predominio del control electoral bipartidista (FPCB)	Suma de los porcentajes de votos del PUSC y el PLN es mayor al 85% del total de votos.
Predominio del control electoral bipartidista (PCB)	Suma de los porcentajes de votos del PUSC y el PLN están entre el 70 y el 85% del total de votos.
Control electoral en disputa (CED)	Suma de los porcentajes de votos del PUSC y el PLN están entre el 50 y el 69% del total de votos.
Control electoral de partidos emergentes (CPE)	Suma de los porcentajes de votos de los partidos políticos emergentes es menor al 50% del total de votos.

Fuente: Alfaro (2003).

3 A pesar de que los resultados de las elecciones generales de 2006 pusieron fin a la era bipartidista PLN-PUSC, producto de cambios importantes en la correlación de fuerzas políticas, en este trabajo se utilizan las categorías mencionadas dado que el PLN y el PUSC fueron el primer y el segundo partido más votado en las elecciones de alcaldes municipales en 2006.

Si se comparan los resultados del control electoral partidario en ambas elecciones de alcaldes municipales, el número de cantones en los que la suma de los porcentajes de votación del PLN-PUSC supera el 70% disminuyó de 43 a 31. Por el contrario, las localidades en las que el control electoral es disputado por los dos grandes bloques de agrupaciones aumentaron de 30 a 34. Por último, la cantidad de municipios que son controlados por agrupaciones emergentes se duplicó al pasar de 8 a 16 (cuadro 13).

Cuadro 13:
Número de cantones según categorías del control electoral partidario en las elecciones de alcaldes municipales 2006

Categorías (siglas)	2002		2006	
	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos
Fuerte predominio del control electoral bipartidista (FPCB)	13	16	10	12,3
Predominio del control electoral bipartidista (PCB)	30	37	21	25,9
Control electoral en disputa (CED)	30	37	34	42,0
Control electoral de partidos emergentes (CPE)	8	9,9	16	19,8
Total	81	100,0	81	100,0

Fuente: Alfaro (2003).

6.2 Desfases en la integración del gobierno municipal y sus efectos

Una de las particularidades del régimen municipal costarricense de inicios del siglo XXI, es el desfase temporal de la integración del gobierno municipal, con las dificultades e implicaciones que esta situación genera en materia de gobernabilidad local.

Como se mencionó anteriormente, el proceso electoral en el que se designan los *regidores* y los *alcaldes* no se efectúa en la misma fecha. Por lo tanto, a pesar de que el período para el cual son nombrados ambos funcionarios es de cuatro años, existe un desfase temporal entre la elección de los regidores que asumen su cargo primero, y el alcalde, pues este último toma posesión 10 meses

después de instalado el Concejo Municipal respectivo, por lo que el desfase mencionado afecta significativamente la gobernabilidad en el ayuntamiento.

En ese sentido, los alcaldes llegan a un gobierno municipal previamente integrado, pluripartidista y sin mayorías, lo cual dificulta su gestión. Basados en los resultados de las elecciones de regidores y de alcaldes en 2006, en 55 de los 81 municipios (68%) ninguna agrupación política posee mayoría en el concejo.⁴

El número de aliados del alcalde en el gobierno municipal varía según la localidad y la composición partidaria del concejo. En teoría, un regidor del mismo partido político al que pertenece el alcalde es su aliado en el concejo, lo cual quiere decir que una mayor cantidad de regidores afines facilita la gobernabilidad del concejo y de las relaciones alcalde-concejo.

Los alcaldes electos en diciembre del 2006 tienen una mejor situación en materia de composición del concejo municipal respecto de sus antecesores. El número de cantones en los que el alcalde no cuenta con aliados o aquellos en los que posee únicamente a un regidor afín disminuyeron de 2002 a 2006. Mientras que la cantidad de comunidades en las que dos, tres o cuatro regidores pertenecen a la misma agrupación política que la del alcalde, aumentó significativamente en el mismo período (cuadro 14).

Cuadro 14:
Cantidad de cantones con regidores afines
al alcalde según elección

Categoría	2002	Porcentaje	2006	Porcentaje
Sin regidores afines	15	18,5	3	3,7
Un regidor	31	38,3	11	13,6
Dos regidores	16	19,8	26	32,1
Tres regidores	13	16,0	28	34,6
Cuatro regidores	4	4,9	11	13,6
Cinco regidores	2	2,5	2	2,5
Total	81	100,0	81	100,0

Fuente: Elaboración propia, con información del TSE.

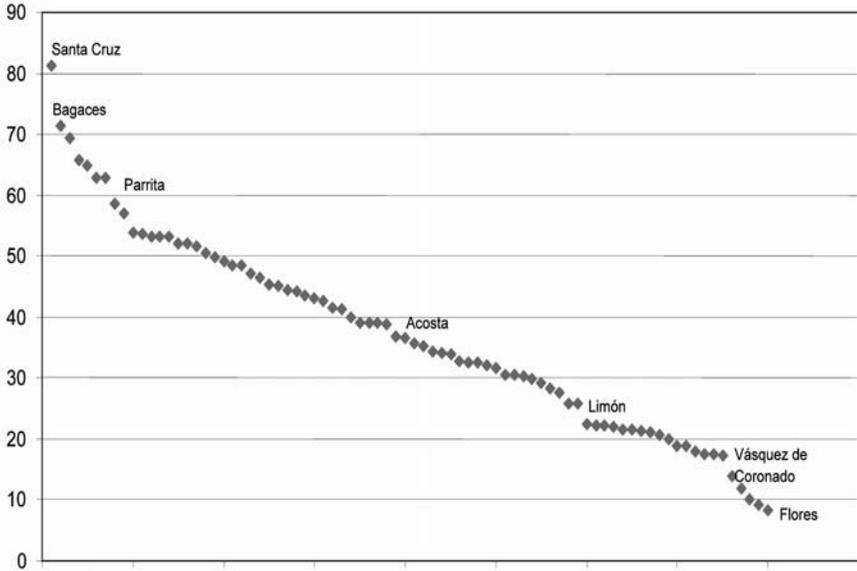
4 En la elección municipal del 2002 la situación fue más complicada pues en 75 de los 81 cantones (93%) ninguna agrupación política contaba con la mitad más uno de los regidores en el concejo municipal.

7. Volatilidad y nacionalización partidaria en las elecciones municipales

Este trabajo aborda el tema de la fortaleza electoral de los partidos en las elecciones de alcaldes municipales mediante dos indicadores: la volatilidad electoral y el índice de nacionalización partidaria. La volatilidad electoral mide el grado en que el electorado es fiel a los partidos y, en particular, el desplazamiento del voto entre los distintos partidos, en dos o más elecciones sucesivas. Este indicador estima la diferencia neta entre las proporciones de votos obtenidos por los partidos políticos.

Según los resultados de ese análisis, los cambios en la preferencia de los electores en elecciones de alcaldes municipales son mayores comparados con los registrados en las presidenciales y parlamentarias del mismo período. En promedio, un 38% de los ciudadanos cambió de preferencia partidaria entre ambos comicios. Además, en 54 de los 81 cantones (67%) los niveles de volatilidad fueron superiores al 30%. Este aspecto propició una reconfiguración del escenario político local con el PLN como la principal agrupación en sustitución del PUSC. En los cantones en los que se registran mayores niveles de volatilidad son Santa Cruz (81%), Bagaces (71%), Nandayure (69%) y Orotina (68%). Mientras que Flores (8%), Aserri (9%), Turrubares (10%) y Pérez Zeledón (12%), se caracterizan por ser localidades con patrones de preferencia partidaria estables (gráfico 2).

Gráfico 2:
Índice de volatilidad en las elecciones de
alcaldes municipales 2006 en los 81 cantones del país (en
porcentaje, escala 0-100)



Nota: Cada marca es un cantón.
 Fuente: Elaboración propia (2007).

La segunda medida de la fortaleza relativa de los partidos es el índice de nacionalización partidaria, que estima las diferencias territoriales del apoyo electoral. En este sentido, dos agrupaciones pueden tener el mismo porcentaje de votos, pero mostrar disparidades importantes en su nivel de nacionalización. Un sistema de partidos “nacionalizado” es aquel en que los niveles de apoyo electoral de la mayor parte de las agrupaciones políticas no varían, significativamente, entre una provincia y otra. Por el contrario, a mayores diferencias territoriales en el apoyo partidario, menor es el grado de nacionalización (Alfaro, 2006).

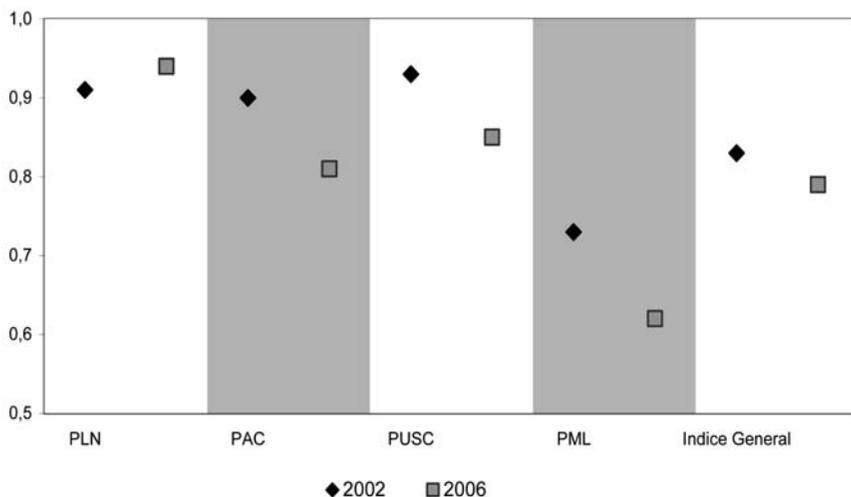
Por *nacionalización partidaria* se entiende el grado en que los partidos reciben niveles similares de apoyo electoral en las diferentes provincias. La nacionalización partidaria se mide con un índice que se calcula individualmente para cada agrupación política (*party*

nationalization) y para el sistema de partidos políticos en general (*party system nationalization*). Su estimación se basa en el coeficiente de Gini y permite efectuar comparaciones entre partidos, entre sistemas de partidos, entre elecciones y a lo largo del tiempo. La escala del índice es de 0 a 1. Un nivel de nacionalización partidaria cercano a 0 significa que el partido recibe un 100% de votos en una provincia y un 0% de respaldo en el resto. Mientras más se acerque el valor a 1, más “nacionalizado” será el partido o sistema de partidos.

Para el cálculo del índice de nacionalización partidaria en las elecciones de alcaldes municipales, se consideraron 34 agrupaciones políticas en 2002 y 41 en 2006. En este sentido, la cantidad de agrupaciones puede afectar los resultados del índice si hay mayor o menor dispersión en los votos, pues menor dispersión permitiría en teoría mayores niveles de nacionalización. Respecto de los resultados del indicador, el sistema de partidos políticos alcanza en la elección municipal 2006 menores niveles de nacionalización que los registrados en los comicios de 2002 (0,79 *versus* 0,83), lo cual quiere decir que el respaldo de las agrupaciones políticas que participaron de la contienda de 2006 es menos “nacionalizado” que hace cuatro años.

Como se mencionó en otra oportunidad, las disminuciones de nacionalización partidaria no están necesariamente asociadas a la obtención de una menor proporción de votos entre una elección y otra (aunque esos factores se pueden combinar), sino a la incapacidad de los partidos para constituir un respaldo distribuido de una forma equilibrada en el territorio (Alfaro, 2006).

Gráfico 3:
Nacionalización partidaria en las elecciones municipales
2002 y 2006
(partidos políticos seleccionados)



Fuente: Elaboración propia (2007).

Por otra parte, al analizar los partidos políticos en forma individual se observan diferencias significativas en materia de nacionalización. En tres de las cuatro agrupaciones que obtuvieron los mayores porcentajes de votación, sus niveles de nacionalización disminuyeron en comparación con los de 2002. Las reducciones más significativas se dan en los casos del Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana. Por el contrario, Liberación Nacional fue el único partido político que experimentó un aumento de su nivel de nacionalización entre ambas elecciones (0,91 versus 0,94) (gráfico 3).

En síntesis, los bajos niveles de participación política y los resultados de volatilidad y nacionalización partidaria en los comicios de alcaldes municipales, reflejan la apatía política del electorado a escala local, la fragilidad del apoyo a los partidos políticos y, a su vez, ponen de manifiesto la debilidad de las agrupaciones políticas para alcanzar un respaldo homogéneo en el territorio en una elección que, irónicamente, es la más territorial de todas las que se realizan en el país.

Conclusiones

Como parte de una serie de innovaciones políticas a escala local, la sociedad costarricense se unió tardíamente al resto de naciones latinoamericanas que celebran elecciones directas de autoridades locales. Esta decisión produjo una considerable ampliación de la base de cargos de representación política por elegir.

Las dos primeras elecciones municipales directas del presente siglo fueron ganadas por el PUSC en el 2002 y el PLN en el 2006. En ambas oportunidades estos mismos partidos se habían adueñado de la elección presidencial celebrada unos meses antes. Por lo tanto, prevalece la situación de que el partido en el Gobierno controla la mayoría de ayuntamientos. Ahora bien, si se comparan los resultados del control electoral partidario en ambas elecciones de alcaldes municipales, el número de cantones en los que la suma de los porcentajes de votación del PLN-PUSC supera el 70% disminuyó, al tiempo que la cantidad de municipios que son controlados por agrupaciones emergentes se duplicó.

En términos de los alcances de las elecciones de alcaldes municipales, cabe señalar que el fuerte centralismo del Estado costarricense, la carencia de financiamiento estatal de las campañas municipales, la debilidad de las agrupaciones políticas y el corto período que separa los actuales comicios locales de los nacionales, dan al traste con una de las más importantes medidas de descentralización política que ha tomado el país.

Como se señaló, los gobiernos locales costarricenses comparten características con sus homólogos en la región latinoamericana; no obstante, sobresalen elementos diferenciadores importantes. Uno de ellos es el desfase temporal en la designación de autoridades locales, producto de la celebración separada de elecciones del concejo municipal y del alcalde. Afortunadamente la elección municipal del 2010 será la última de este tipo, pues a partir del 2016 todos los cargos municipales serán designados en un mismo evento electoral.

En términos de la participación política, prevalece una baja asistencia en las urnas, en una cifra muy similar a la del 2002. De los 81 municipios existentes en el país, en 28 de ellos el abstencionismo aumentó en términos relativos entre ambas elecciones. Los mayores

aumentos se presentaron en Hojancha, Alvarado y Upala. En las restantes 53 localidades se redujo la cantidad de electores que no participó de la última elección. Las disminuciones más significativas se dieron en Turrubares, León Cortés, Los Chiles y Puriscal. El principal hallazgo al analizar el comportamiento del abstencionismo es su carácter marcadamente urbano, en total contraste con lo que sucede en la elección presidencial.

Finalmente, dos indicadores reflejan el grado de fluidez e inestabilidad del sistema de partidos costarricense. Por un lado, los cambios en la preferencia de los electores en elecciones de alcaldes municipales, medidos mediante el indicador de volatilidad, son mayores que los registrados en las presidenciales y parlamentarias del mismo período. En promedio, un 38% de los ciudadanos cambió de preferencia partidaria entre ambos comicios. Y, por otra parte, los partidos alcanzaron en la elección municipal 2006 niveles de nacionalización de su respaldo electoral menores que los registrados en los comicios de 2002, lo cual quiere decir que el respaldo de las agrupaciones políticas que participaron de la contienda de 2006 es menos “nacionalizado” que hace cuatro años. En términos de los partidos políticos, las reducciones más significativas se dan en los casos del Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana.

Bibliografía

Asamblea Legislativa (2007): “Ley 8611: Modificación de los artículos 14, 19 y 20 del Código Municipal, Ley N.º 7794”. (San José, Asamblea Legislativa).

Alfaro, R. (2002): “Elecciones municipales y debilitamiento del respaldo electoral bipartidista en Costa Rica. Período 1986-2002”. *Anuario de Estudios Centroamericano*, V. 28, N.os 1-2.

Alfaro, R. (2006): “Elecciones nacionales 2006 en Costa Rica y la recomposición del sistema de partidos políticos”. *Revista de Ciencia Política*, V. 26, N.º 1.

Alfaro, R. (2007): “El régimen municipal costarricense a inicios del siglo XXI”. *En Prensa*.

Alfaro, R. (2008): “Comportamiento electoral y factores asociados a la participación en las elecciones municipales del 2006”. *En Prensa*.

Jones, M.; Mainwaring, S. (2003): “The nationalization of parties and party systems: an empirical measure and an application to the Americas”. *Party Politics*. V. 9, N.º 2.

Programa Estado de la Nación. (2006). *XII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible* (San José/Programa Estado de la Nación).

Sánchez, F. (2001): “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, V. 27, N.º 1.

Sánchez, F. (2004): “Desalineamiento electoral en Costa Rica”. *Revista de Ciencias Sociales*, V4, N.º 98.

Tribunal Supremo de Elecciones (2008): Resolución N.º 405-E8-2008. Interpretación del artículo 14 del Código Municipal, Ley N.º 8611, publicada en *La Gaceta* N.º 225 del 22 de noviembre del 2007 y artículos 97 y 98 del Código Electoral. (San José/Tribunal Supremo de Elecciones).

ENCUENTROS

¿Es posible la cooperación en una comunidad rural que comparte un recurso común?

*Roger Madrigal¹
Francisco Alpizar²*

La confianza que un individuo tenga en otros, la inversión en generar una reputación de cooperación, la probabilidad de utilizar normas de reciprocidad y la existencia de mecanismos de monitoreo y sanciones, son aspectos fundamentales que condicionan el comportamiento de los individuos en escenarios donde la acción colectiva es deseable (Ostrom, 2003). No obstante, la dificultad de observar el comportamiento social de los individuos en distintos escenarios y la ausencia de una historia precisa de las experiencias de organización en un sitio, limitan la capacidad del analista para predecir el surgimiento de instituciones locales de manejo en dichos contextos. Este artículo pretende explorar algunos determinantes de la acción colectiva por medio de experimentos económicos.³

1 Efd Central America, CATIE, Turrialba, Costa Rica.

E-mail: rmadriga@catie.ac.cr

2 Efd Central America, CATIE, Turrialba, Costa Rica.

E-mail: falpizar@catie.ac.cr

3 Los autores agradecen los comentarios de María Claudia López a las versiones preliminares de este artículo. Los errores u omisiones del artículo son responsabilidad única de los autores.

Los experimentos económicos son un mecanismo de análisis empírico y de integración de varias ciencias sociales. Estos experimentos son simplemente juegos en donde los participantes toman decisiones con base en una serie de reglas definidas por el investigador. Por esta razón, los experimentos económicos pueden ser una herramienta poderosa para analizar y predecir los elementos constitutivos del comportamiento de los individuos en distintos esquemas institucionales o de reglas de juego. Para ello, el investigador puede controlar o cambiar las reglas según los objetivos de la investigación y además puede *replicar* cuantas veces sea necesario el juego. Para lograr estos objetivos, el investigador debe ser muy cuidadoso en evitar sesgos o errores durante las fases de diseño, aplicación y análisis de los juegos (Friedman y Sunder, 1994)

No obstante, la mayoría de los experimentos económicos realizados hasta la fecha han sido aplicados a grupos de estudiantes universitarios, lo cual ha limitado la capacidad de generalizar los hallazgos y de entender cómo el entorno socioeconómico y cultural afecta los resultados. Por esta razón, en los últimos años la economía experimental está siendo aplicada en el campo; es decir, utilizada en poblaciones humanas diferentes a las de estudiantes (Henrich *et al.*, 2004). En este sentido, la evidencia reciente demuestra que el comportamiento de los participantes en estos ejercicios se aleja consistentemente del supuesto de actuación egoísta (*homo economicus*) argumentado por modelos económicos tradicionales, y más importante aún, los resultados reflejan en muchos casos patrones de la toma de decisiones en la vida cotidiana de los participantes (Cárdenas y Ostrom, 2004; Henrich *et al.*, 2004).

El Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), localizado en el Pacífico norte de Costa Rica, es un sistema de 30.000 ha de riego, cuya administración es estatal. A inicios de los años noventa, hubo interés por parte de los usuarios y los administradores gubernamentales por trasladar algunas funciones, relacionadas principalmente con el mantenimiento del sistema, a una sociedad de usuarios. Este intento fracasó y desde entonces la administración está completamente centralizada en manos de una empresa del Estado; no obstante, aún se mantiene el interés de descentralizar algunas de sus funciones (Madrigal, 2004). La razón de esto radica en la ineficacia

actual del monitoreo del uso adecuado del agua por parte de los usuarios y la escasa participación de estos en la toma de decisiones. Por este motivo, esta investigación pretende realizar un diagnóstico rápido de las posibilidades de establecer un modelo de gestión descentralizado, donde la participación de los usuarios de riego tenga un rol preponderante. De esta manera, las características del DRAT ofrecen una excelente oportunidad para utilizar los experimentos económicos como una herramienta que, complementada adecuadamente con un estudio cualitativo⁴, faculta abordar de manera novedosa el estudio de un proceso probable de descentralización del manejo de un recurso común. En este sentido, el uso simultáneo de ambas herramientas permite una validación mutua y una mayor riqueza y solidez al estudio.

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se utilizan tres experimentos económicos, ampliamente conocidos en la literatura, los cuales se denominan como el juego de provisión, el juego del dilema del prisionero y el juego de ultimátum. Estos juegos fueron seleccionados porque permiten aislar el estudio de algunos elementos claves en relación con las posibilidades de manejo del sistema de riego por parte de los usuarios del DRAT, a saber, las normas sociales referentes a la confianza, la reciprocidad y la reputación que caracterizan a las comunidades, así como la forma en la cual estos grupos resuelven problemas relacionados con la provisión de bienes públicos.

En muchos espacios relacionados con las tareas de riego y la organización alrededor de esta actividad, los productores deben usar y construir normas sociales. La existencia de estas es un factor muy importante para explicar las posibilidades de establecer los acuerdos formales e informales necesarios para mantener un conjunto de reglas efectivas que permitan sobrevivir y evolucionar a una organización de regantes. Por otro lado, hay varias actividades en un sistema de riego que presentan problemas típicos de bienes públicos. Estos problemas están asociados con la dificultad para excluir a las

4 La mayoría de la información cualitativa que se reporta en este artículo se encuentra documentada en extenso en Madrigal (2003) y Madrigal (2004). De hecho, estos estudios motivaron la realización de los experimentos económicos en el DRAT.

personas de los beneficios derivados del sistema, lo cual provoca que algunos esperen recibirlos sin incurrir en costo alguno. Así, por ejemplo, si el canal principal de riego se encuentra en buen estado gracias al mantenimiento realizado, algunos de los regantes podrían beneficiarse de ello pese a que no incurrieron en costo alguno. Si este problema no se resuelve adecuadamente, este puede convertirse en una fuente de conflictos graves para la organización local.

De esta forma, la información *ex ante* que los experimentos pueden brindar constituye un insumo útil para determinar las posibilidades de cooperación en la colectividad en estudio y pueden, a su vez, ayudar a delinear los principales elementos de diseño de una institución local de manejo efectivo del sistema de riego. No obstante, debido a lo novedoso que resulta el uso de estos juegos para los propósitos descritos anteriormente, las posibles implicaciones para la toma de decisiones públicas deben hacerse con mucha cautela y en ningún caso se pueden extrapolar libremente.

Estos tres juegos fueron aplicados de forma separada a un grupo de 30 pequeños productores del DRAT y a un grupo control de 20 estudiantes de nivel de maestría del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica. Los estudiantes eran de nivel de maestría en varias áreas relacionadas con la agricultura y los recursos naturales. Estos eran originarios de varios países de América Latina y la mayoría se encontraba en el final de su segundo año de estudios. Por otra parte, los productores poseían, en promedio, menos de 10 hectáreas de cultivos, principalmente arroz y caña. El nivel económico de estos es bajo, así como su nivel educativo, el cual no superaba en la mayoría de casos la educación primaria.

Cabe anotar que el énfasis del presente estudio es el uso potencial de los experimentos económicos como herramienta efectiva para recolectar información *ex ante* sobre el comportamiento de los usuarios de un recurso común. El desarrollo y aplicación de juegos más novedosos es una extensión obvia del presente estudio y representa a su vez una oportunidad más interesante para profundizar en aspectos teóricos. Por otro lado, debido a que los experimentos económicos resultan ser experiencias muy entretenidas y que generan mucho interés de discusión posterior de los resultados (Friedman y

Sunder, 1994), un futuro estudio podría explorar con mayor énfasis su potencial como herramientas de diagnóstico rural participativo, así como la forma en la cual se puede triangular la información obtenida con otras técnicas participativas para el estudio de problemas asociados al ámbito rural y de los recursos naturales en general.

1. Descripción de los juegos

Los tres experimentos utilizados se describen a continuación:

i. Juego de provisión o mecanismo de contribuciones voluntarias. Este modelo, en su forma tradicional, es un juego repetitivo simple cuya forma básica incluye un grupo de personas que realizan decisiones de inversión de forma individual pero simultánea. Este juego permite analizar el nivel de contribución a la oferta de bienes caracterizados por la dificultad de excluir a los agentes económicos del disfrute de estos. En cada ronda de decisión, los jugadores deben asignar una dotación fija de recursos entre una cuenta privada y una cuenta común a todos los participantes. Las ganancias totales provienen de esta decisión, específicamente, los beneficios de la cuenta privada dependen exclusivamente de la decisión individual, mientras que las ganancias de la cuenta común dependen de la suma de las decisiones de todos los participantes. La cuenta común representa el bien público, ya que esta es no exclusiva y no rival en el consumo. De esta forma, los incentivos que enfrentan los participantes los motivan a utilizar el *free-riding*⁵ como estrategia de actuación, a pesar de que la alternativa en la cual todos contribuyen con el bien común redonda en beneficios sociales y privados claramente superiores.

Los resultados empíricos de la aplicación de este juego son variables, aunque la tendencia es hacia niveles cooperativos relativamente altos al inicio, los cuales decaen conforme el juego se

5 El *free-riding* es un concepto económico que se refiere a una estrategia de comportamiento oportunista, en donde los individuos pretenden obtener beneficios gratis a partir de la acción de otros. Este problema es particularmente importante para la provisión de bienes públicos donde las contribuciones y nivel de esfuerzo individual es difícil de observar.

acerca a las rondas finales (Ledyard, 1995). No obstante, la comunicación sí parece ser un tratamiento que eleva significativamente las contribuciones grupales (Ledyard, 1995; Davis y Holt, 1993). Estos resultados contradicen las predicciones teóricas que establecen contribuciones grupales iguales a cero para juegos repetitivos con final conocido.

ii. Juego de Dilema del Prisionero. La estructura del Dilema del Prisionero (DP) es la forma más utilizada para explicar dilemas sociales; es decir, aquellas situaciones donde existen conflictos entre el interés individual y el interés grupal (Ostrom, 2003). Estos escenarios plantean el problema de la acción colectiva, ya que es necesario algún tipo de acuerdo entre los participantes para lograr los beneficios de la colaboración.

La solución de la teoría de juegos no cooperativos al DP establece que en el equilibrio de Nash⁶ los individuos seleccionarán no cooperar como su estrategia dominante. Esto implica un resultado subóptimo para ambos ya que si la colaboración fuera posible, ambos estarían mejor. Los resultados empíricos del juego del DP para una o varias repeticiones parecen contradecir a la teoría, lo cual sugiere que, además de las retribuciones monetarias, las decisiones de los individuos están influidas por factores como la percepción de justicia, la confianza y la reciprocidad, por citar algunos factores (Ahn *et al.*, 2003). Adicionalmente, cuando el DP se juega repetidamente, aumentan las oportunidades para que los individuos actúen estratégicamente y formen una reputación que los permita alcanzar mejores resultados.

iii. Juego de ultimátum. La existencia de reciprocidad y las consideraciones de justicia y altruismo en las decisiones de los individuos han sido investigadas en contextos experimentales por medio de los juegos de ultimátum. Estos juegos se realizan en parejas, donde uno de los miembros debe dividir un monto de dinero entre ambos jugadores y el otro solo puede aceptar o rechazar la

6 El equilibrio de Nash se caracteriza porque las acciones de cada participante son la mejor estrategia de respuesta, dadas las acciones esperadas de los demás agentes, los cuales se espera que también se comporten de esta forma (Bierman y Fernández, 1998).

propuesta del primero, pero no la puede cambiar. En caso de que la acepte, cada jugador obtiene el monto propuesto por el primero. En caso de que la rechace, ninguno de los dos jugadores obtiene dinero.

Si existen funciones de utilidad independientes entre los individuos y se cumple el supuesto de la teoría neoclásica del consumidor que establece que más es siempre preferible a menos, la solución del juego de ultimátum indica que el individuo que recibe la oferta debería aceptar cualquier monto por encima de cero, no importa lo pequeño que este sea, ya que en otro caso el no obtendría ninguna cantidad de dinero. Sabiendo esto, el primer individuo entregará una cantidad mínima al otro jugador.

La solución teórica anterior no corresponde a la que se encuentra en estudios experimentales, donde los individuos suelen rechazar aquellas ofertas que se pueden considerar no equitativas, aun cuando esto les representa quedarse sin dinero. Aunque lo más frecuente en estos estudios es que los individuos dividan el dinero en partes iguales (Davis y Holt, 1993), la experiencia reciente en experimentos de campo demuestra una alta variabilidad de resultados, tanto para ofertas como para tasas de rechazo (Henrich *et al.*, 2004).

2. Diseño del experimento

Los juegos fueron aplicados en una sola sesión, a ambos grupos por separado, en el orden en que fueron presentados anteriormente. No obstante, con el propósito de adaptarse a las características de cada grupo, se realizaron algunas variantes en el diseño de cada sesión. Esto es necesario debido a que los experimentos de campo, en contraposición a los experimentos de laboratorio realizados con estudiantes universitarios, requieren un diseño más cuidadoso que garantice que el investigador mantenga el control del ejercicio y minimice los sesgos que pudieran generarse por una aplicación poco rigurosa y no adaptada al tipo de población bajo estudio.

La diferencia del diseño de las sesiones radicó principalmente en la forma de presentar las instrucciones. En el caso de los 20 estudiantes de CATIE, cada uno de estos tenía una hoja con las instrucciones escritas, las cuales fueron leídas ante todo el grupo en voz alta por el organizador, se hicieron ejemplos y se atendieron

dudas en voz alta. En el caso de los 30 productores, debido al bajo nivel académico de estos, se decidió dar una explicación oral del organizador ante todo el grupo. Además de los ejemplos y la atención pública de las dudas, en los dos primeros juegos se hizo una ronda de prueba con este grupo, con el fin de asegurarse el entendimiento de las instrucciones. El organizador tuvo el cuidado de minimizar los sesgos que pudieran generarse al dar las instrucciones orales.

Con el propósito de facilitar el entendimiento de dos primeros juegos, estos hacían uso de cartas de naípe. Las cartas rojas representaban la dotación de recursos, mientras que las cartas negras no tenían valor en ningún caso, solo servían para mantener las decisiones de los participantes en secreto. Los pagos asociados a las decisiones eran reales, en efectivo y se entregaban en privado al final de los tres juegos. Las ganancias de un juego no afectaban las ganancias de los siguientes juegos y las personas asistieron voluntariamente a las sesiones. Las hipótesis que se plantean para los juegos es que ambos grupos se comportan de acuerdo con las predicciones teóricas y por lo tanto, no existen diferencias de comportamiento entre ambos.

A continuación se describen las instrucciones básicas de cada uno de los juegos:

i. Juego de provisión. En este juego repetitivo, cada jugador tiene cuatro cartas de naípe, dos negras y dos rojas. En cada ronda, el jugador debe decidir si coloca las cartas rojas en una cuenta privada o lo hace en una cuenta común a todos los participantes. Las ganancias totales provienen de esta decisión, la cual debe ser secreta y simultánea al resto de participantes, los cuales no pueden hablar entre sí o mostrarse las cartas.

Tanto al grupo de estudiantes como al de productores se les aplicó el mismo experimento, la única variante en el diseño fue que los primeros jugaron 9 rondas mientras que los segundos 12. La razón de ampliar el número de rondas a los productores fue para observar mejor su comportamiento. El pago que recibía cada individuo era igual al promedio de todas las rondas jugadas.

El total de rondas del ejercicio se dividió en tres series iguales. En la primera serie de rondas, el valor de las cartas rojas depositadas en

la cuenta privada era de 200 colones mientras que la contribución a la cuenta pública era de 50 colones⁷. Por lo tanto, la razón de la rentabilidad relativa de la cuenta pública en la primera serie de rondas era $50/200=0.25$. Para la segunda serie de rondas el valor de las cartas rojas puestas en la cuenta privada era 100 colones mientras el valor de las cartas rojas colocadas en la mesa común se mantuvo constante.⁸

Finalmente, la variante que se introdujo en la tercera serie fue que se permitió un período de 5 minutos para que los participantes discutieran entre sí el juego y las estrategias más convenientes según su criterio. Durante este tiempo, los organizadores salían de la sala y no existía ningún tipo de restricción al tipo de comunicación que podían tener. Luego de este período, se jugó con las mismas reglas de la segunda serie. El objetivo de este tratamiento era observar el efecto de la comunicación cara a cara sobre los niveles cooperativos del grupo y por ende sobre la promoción de estrategias que disminuyan la tendencia al *free-riding*.

ii. Juego del dilema del prisionero. Los participantes fueron divididos al azar en dos grupos. Luego, fueron asignados al azar en parejas anónimas formadas por un miembro de cada grupo. A cada uno de los miembros de las parejas se les entregó cuatro cartas de naipe, dos rojas y dos negras. Cada jugador recibía un pago que correspondía a la mitad de la suma de lo ganado por él en cada una de las tres rondas.

Los jugadores fueron informados al inicio del juego que se realizarían tres rondas idénticas, donde cada pareja debía intercambiarse dos cartas simultáneamente, de forma secreta y sin posibilidades de comunicarse entre sí o con otro miembro de las parejas restantes. El valor de las cartas era el siguiente: Por cada carta roja que se dejaran en su poder, recibirían 200 colones. No obstante, si decidían entregar una carta roja, esta tendría un valor de 400

7 Al momento del juego el tipo de cambio prevaleciente era aproximadamente de 400 colones por dólar estadounidense.

8 El efecto positivo de cambios en la rentabilidad relativa de la cuenta pública sobre las tasas de cooperación está bien documentado en la literatura (Davis y Holt, 1993; Holt y Laury, 2002; Isaac y Walter, 1988; Ledyard, 1995).

colones para el que la recibía. Si un participante no se dejaba cartas rojas en su poder y no recibía cartas rojas del otro, no recibía ningún pago. Esta estructura de pagos se representa en la siguiente matriz, donde los pagos del jugador 1 se encuentran a la izquierda de cada celda, mientras que los del jugador 2 se encuentran a la derecha de esta.

Cuadro 1.
Pagos asociados al número de cartas rojas
que entregan los jugadores

		Jugador 2		
		0	1	2
Jugador 1	0	400 , 400 ^{E.Nash}	800 , 200	1200 , 0
	1	200 , 800	600 , 600	1000 , 400
	2	0 , 1200	400 , 1000	800 , 800

iii. Juego de Ultimátum. Los individuos fueron separados al azar en dos grupos, denominados grupo rojo y grupo negro ⁹. Se formaron parejas anónimas al azar, tomando un participante de cada grupo. A los jugadores se les advirtió que jugarían con una persona diferente a la del juego previo.

El jugador rojo tenía que dividir 1000 colones entre ambos, sin ninguna restricción en esta decisión. El jugador negro podía aceptar la oferta o rechazarla, pero no modificarla. En caso de aceptarla, cada uno recibía el monto de la propuesta. Si la rechazaba, ninguno de los jugadores obtenía dinero. El pago efectivo que recibía cada jugador era igual al que determinaba el jugador negro con su decisión.

9 Los colores no tenían ninguna relevancia, solo servían para identificar los grupos.

3. Resultados

i. Juego de provisión. La Figura 1 presenta las tasas de cooperación agregada de los grupos en cada ronda. En términos generales, se observa que las predicciones teóricas de Nash que establecían una contribución agregada a la cuenta común ¹⁰ igual a cero no se cumplen para ninguno de los grupos, e incluso, las contribuciones promedio para todas las rondas son relativamente altas, 63% para los estudiantes y 43% para los productores. Este resultado es consistente con lo encontrado en estudios previos del MCV¹¹ en contextos experimentales con estudiantes, así como en contextos de experimentos de campo (Henrich *et al.*, 2004).

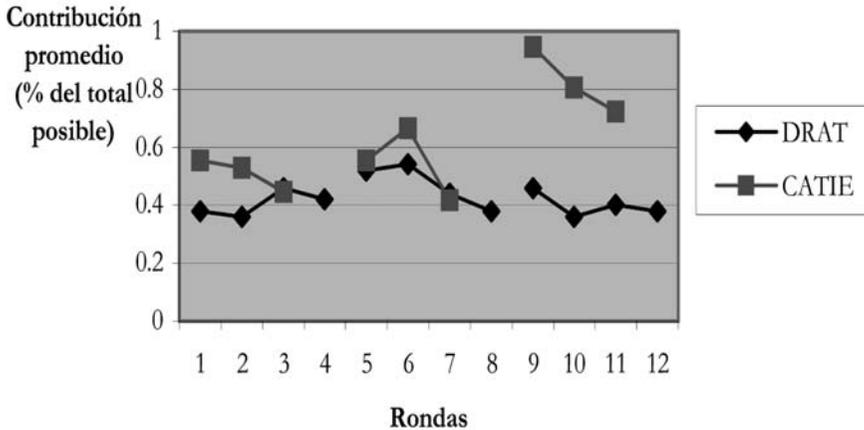
Se nota también, como era de esperarse, una tendencia a que la cooperación agregada disminuya hacia el final de las series .¹²

10 Resulta de dividir el total de cartas colocadas en la cuenta común por el máximo número posible por colocar en esta cuenta.

11 Usualmente, en juegos de 10 rondas, los individuos colocan inicialmente el 50% de sus recursos en la cuenta común (Andreoni 1995; Holt y Laury 2002). Luego disminuyen esta contribución hasta el 15% o 20%, pero sin llegar al 0% predicho por el equilibrio de Nash (Isaac y Walker, 1998). Las disminuciones en las contribuciones públicas no son necesariamente decrecientes de manera monótona y no desaparecen incluso hasta 60 rondas después (Holt y Laury, 2002). En el presente juego no se puede hacer afirmaciones sólidas del efecto de la repetición sobre los resultados cooperativos. Aunque se trataba de un juego de rondas múltiples, los cambios introducidos en el valor marginal de la cuenta pública (RPCM) y la comunicación en la última serie no permiten aislar el efecto de la repetición con precisión.

12 Desde el punto de vista teórico, este resultado no debería ocurrir si acepta el argumento de la inducción hacia atrás. El problema con este razonamiento teórico es que supone información perfecta de todos los participantes, lo cual implica que cada quien conoce que el otro es un individuo racional egoísta. No obstante, si este supuesto no se mantiene, es posible que en las rondas previas al final, los niveles cooperativos sean más altos porque los individuos intentan conocer la forma de pensar de sus compañeros (Kreps *et al.*, 1982, citado por Ledyard, 1995). En la última ronda este efecto desaparece puesto que los individuos no volverán a interactuar.

Figura 1.
Tasas de contribución promedio



Nota: Los puntos de la figura unidos por líneas representan una serie o tratamiento particular.

Los tratamientos aplicados dentro de cada uno de los grupos no tuvieron efecto significativo sobre los niveles de cooperación, excepto para el caso de la comunicación en los estudiantes. En la tercera serie, la contribución promedio de los estudiantes (82%) es significativamente ($Pr > t = 0.0004$) más alta que la de los productores (40%)¹³. El efecto significativo de la comunicación sobre las contribuciones del grupo de estudiantes es similar al señalado en varios estudios previos (Ledyard 1995, Davis y Holt

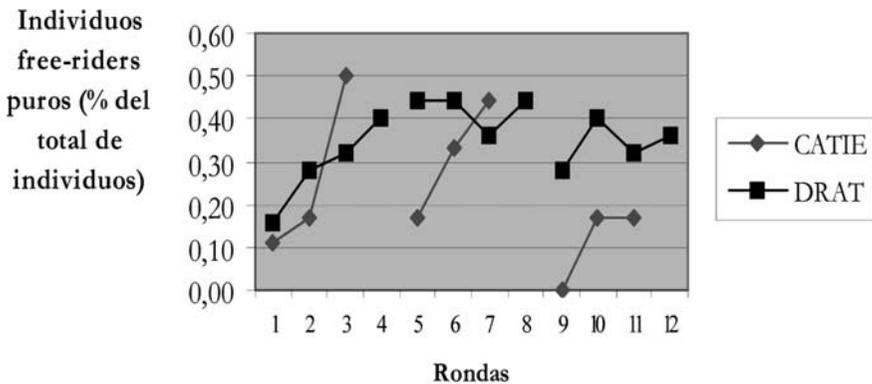
13 La explicación de estas diferencias no es conclusiva porque hay dos efectos simultáneos que marcan diferencias importantes entre ambos grupos. El primer efecto se refiere al número de participantes, mientras que el segundo lo constituye la conformación de cada grupo. Conforme aumenta el tamaño de grupo, el efecto marginal de las contribuciones individuales a la cuenta común se incrementa linealmente. Por ello, se esperaría una tendencia a mayor cooperación en el grupo más grande; es decir, el de los productores. No obstante, los resultados del juego indican lo contrario, lo cual sugiere que el efecto de la conformación del grupo de estudiantes ejerce un fuerte efecto positivo sobre los niveles de cooperación de este grupo.

1993). Este resultado destaca la importancia de la comunicación cara a cara en el alcance de objetivos comunes y cómo esta parece estar condicionada por los atributos del grupo de personas que la realizan. Se debe recordar que la conformación de ambos grupos es distinta, sobre todo respecto a la interacción previa en otros espacios sociales que permitieran el conocimiento mutuo y el fortalecimiento de normas sociales. La cohesión e identidad de grupo es más fuerte en los estudiantes, ya que estos comparten experiencias diarias en escenarios múltiples y recurrentes. En contraposición, los productores provenían de distintos lugares del DRAT, tenían poco conocimiento mutuo y escasos espacios de comunicación diaria. Este efecto puede incidir en que los niveles de confianza mutua y solidaridad sean más fuertes en los estudiantes, lo cual los motiva a tener niveles de cooperación promedio más altos. Por último, esta misma cohesión o identidad de grupo pudo influir en que el efecto de la comunicación sobre los niveles de cooperación fuera tan acentuado en el caso de los estudiantes. La confianza mutua pudo incidir sobre la creencia de que los miembros del grupo mantendrían los acuerdos de cooperación, lo cual se tradujo en un nivel de cooperación agregada de más de 90% en la ronda inmediata al período de comunicación. Sin embargo, la caída posterior en la tasa de cooperación indica que la cohesión de grupo y la comunicación no son factores suficientes para aliviar los problemas de *free-riding*, sino que además es necesario el monitoreo y control efectivos para asegurar que los individuos mantengan los pactos.

Por otra parte, al analizar el comportamiento individual se destaca que en cada una de las rondas hay un grupo de individuos que eligen ser *free-riders* puros; es decir, individuos que no entregan cartas rojas en una ronda particular (véase figura 2). El impacto de la comunicación sobre el porcentaje de presencia de estos individuos es particularmente interesante, sobre todo para el caso de los estudiantes. El porcentaje de *free-riders* puros cae a 0 en la ronda inmediata a la comunicación y luego sube a un 10% promedio para

las siguientes rondas. Estos montos son significativamente menores a los observados en las otras series, lo cual destaca que el surgimiento de niveles de cooperación relativamente altos depende de la apertura de canales de comunicación efectivos; no obstante, el mantenimiento de estos niveles depende de las posibilidades de incentivar el cumplimiento de los acuerdos .¹⁴

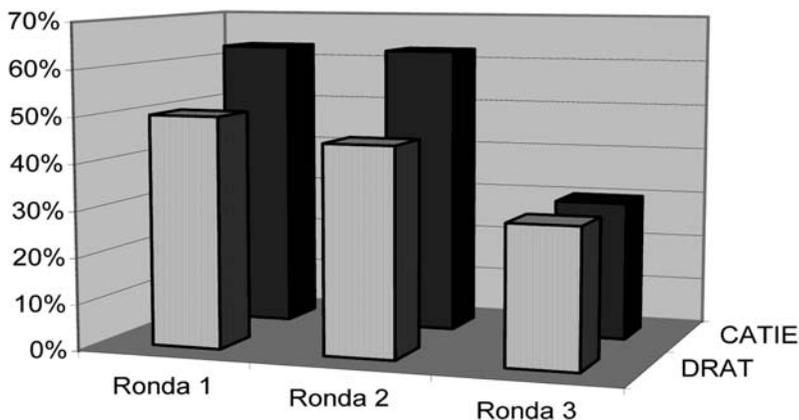
Figura 2.
Comparación de tasas de individuos *free-riders* puros



ii. *Juego del Dilema del Prisionero*. Como cada jugador tenía dos cartas rojas, el grupo de CATIE podía intercambiar un máximo de 40 cartas rojas por ronda mientras que el grupo del DRAT podía intercambiar hasta 60 cartas rojas. La figura 3 muestra los resultados agregados para cada grupo.

¹⁴ Para el caso del número de individuos que tomaron la estrategia de *free-riders* puros, desde el punto de vista estadístico no se encontraron diferencias significativas entre grupos, excepto para el caso de la serie 3. En esta última la prueba de t demuestra que la media de los productores es significativamente más alta que la de los estudiantes ($Pr > t$ de 0.005). Este mismo resultado fue respaldado por la prueba Mann-Whitney ($Pr > 0.0249$).

Figura 3.
Intercambio total de cartas rojas



Ronda	1	2	3	Promedio
DRAT	50%	45%	30%	42%
CATIE	63%	63%	30%	52%

Lejos de la solución teórica, ambos grupos intercambiaron un porcentaje importante de sus cartas rojas en la primera y segunda rondas. Luego, en la última ronda, el nivel de cooperación agregado cayó significativamente. Este comportamiento sugiere que los niveles de cooperación iniciales pueden ser una estrategia para formar reputación de cooperadores y/o para observar el comportamiento del otro, esperando lograr resultados que son más favorables para los dos miembros de la pareja. Sin embargo, en la última ronda no parece haber la misma confianza de que los niveles de cooperación se mantengan, debido probablemente a que los jugadores no volverán a enfrentarse más. Este resultado es previsible y consecuente con la importancia de la interacción y la comunicación observada en el juego previo.¹⁵

15 Este resultado parece contradecir un comportamiento racional basado en la inducción hacia atrás, ya que si aceptáramos este supuesto, dado que en la última ronda se sabe que los niveles de cooperación son bajos, no hay razón por la cual la cooperación sea relativamente alta en las rondas previas.

Para tratar de entender el comportamiento individual se hizo una clasificación del tipo de estrategias tomadas por cada uno de los jugadores. De esta forma, una estrategia tipo *jugador individualista* es aquella donde el individuo prefiere no confiar en la otra persona y por lo tanto, se deja las dos cartas rojas (esta estrategia es la que, según la solución teórica de juegos no cooperativos, todos los jugadores debían seguir). Una estrategia tipo *jugador precavido* es aquella donde el jugador solo entrega la mitad de la dotación de sus recursos; es decir, una carta roja. La estrategia tipo *jugador confiado* es donde el participante entrega las dos cartas rojas a su compañero de pareja. Con base en estas definiciones, el porcentaje de cada una de las estrategias que se encuentra en cada ronda es la que se presenta en el cuadro 3 a continuación.

Cuadro 3.
Tipos de estrategia de cada jugador

Tipo de estrategia	Experimento en CATIE			Experimento en el DRAT		
	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
<i>Individualista</i>	0%	25%	55%	20%	40%	50%
<i>Precavido</i>	75%	25%	30%	60%	30%	40%
<i>Confiado</i>	25%	50%	15%	20%	30%	10%
Total de jugadores	20	20	20	30	30	30

Conforme avanzan las rondas, el número de estudiantes y productores que eligen ser individualistas crece, lo cual reafirma la idea de que hacia el final del juego los individuos intentan aprovecharse del otro. Adicionalmente, en la primera ronda, un alto porcentaje de estudiantes (75%) y productores (60%) tomaron una estrategia de indecisos, lo cual puede sugerir que aunque estos

jugadores entienden los beneficios de cooperar, su confianza en el otro no es absoluta, por lo que prefieren arriesgar poco y observar el comportamiento de la pareja. Lo interesante es que en las siguientes rondas, las estrategias varían significativamente, lo cual podría indicar que las decisiones de los individuos están condicionadas por los resultados previos.

Con el propósito de determinar la influencia de los resultados previos sobre la decisión actual de los participantes, se decidió clasificar el total de individuos de cada grupo en tres subgrupos. El primer subgrupo corresponde a los participantes que recibieron la misma cantidad de cartas rojas que entregaron en la ronda previa. El segundo subgrupo son aquellos jugadores que recibieron más cartas rojas de las que enviaron. Finalmente, el tercer subgrupo incluye a aquellos individuos perjudicados porque entregaron más cartas rojas de las que les dio su pareja.

El cuadro 4 presenta los resultados del efecto de la primera ronda sobre las decisiones de los jugadores en la ronda 2. Se reporta el porcentaje de individuos que eligió entregar menos, igual o más que en la ronda previa.

Cuadro 4.
Comportamiento de jugadores en ronda 2,
con base en resultados de ronda previa

Resultado	CATIE				DRAT			
	N.º de jugado res	Igual que ronda 1	Más que ronda 1	Menos que ronda 1	N.º de jugado res	Igual que ronda 1	Más que ronda 1	Menos que ronda 1
I. Recibieron lo que entregaron	14	36%	36%	29%	10	70%	30%	0%
II. Recibieron más de lo que entregaron	3	0%	100%	0%	10	50%	30%	20%
III. Recibieron menos de lo que entregaron	3	33%	0%	67%	10	40%	0%	60%

La clasificación anterior parece incidir en el comportamiento de los jugadores en la ronda 2. El comportamiento del subgrupo I muestra que el 29% de los estudiantes decidió entregar menos cartas que en la ronda previa. Esto sugiere que los incentivos para aprovecharse del otro siguen presentes, sobre todo cuando este demostró su intención de colaborar. Sin embargo, del total de jugadores de este grupo, el 72% decidió entregar al menos la misma cantidad de cartas que en la ronda previa. Lo anterior refuerza la idea de que la cooperación depende positivamente de las experiencias pasadas. Por otra parte, los resultados de los 10 productores del subgrupo I sugieren que la mayoría de estos se sentía satisfecho con las estrategias elegidas, dado el comportamiento de su pareja.

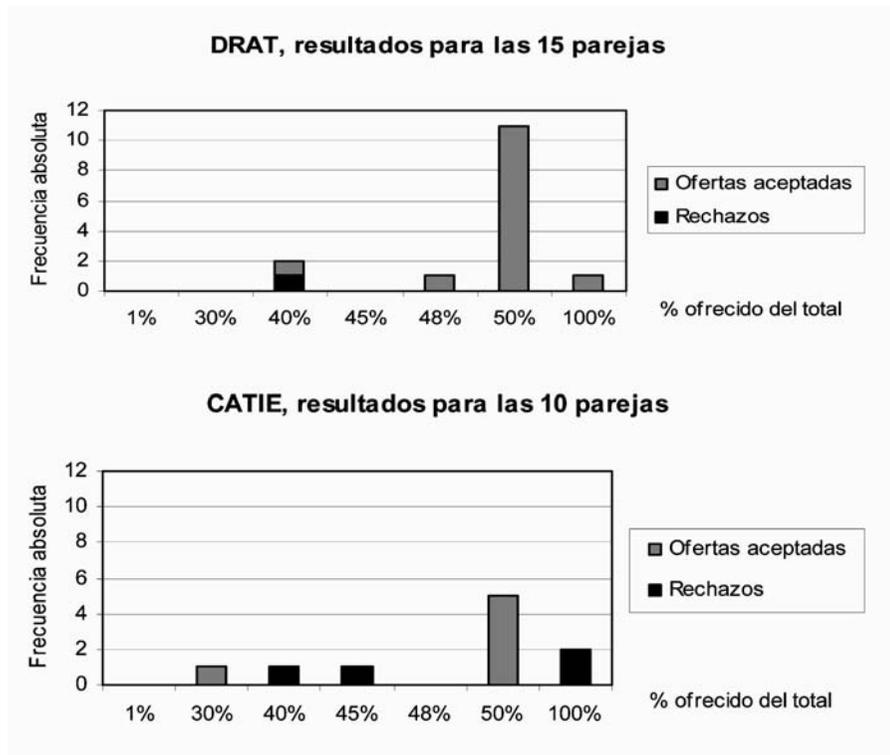
Para el caso del subgrupo II, se destaca como el 100% aumentó su nivel de colaboración en la segunda ronda. Esto sugiere dos explicaciones. Los jugadores de este subgrupo pueden haberse sentido en deuda con su compañero, ya que este les entregó más de lo que ellos le dieron. La otra razón puede ser que el jugador percibe que el otro tiene deseos de cooperar y, ante esta buena señal, responde entregándole más cartas rojas en la segunda ronda. De forma contraria, la mayoría (70%) de los productores de este subgrupo muestran una tendencia a aprovecharse de la situación.

Finalmente, la presencia del castigo es notoria tanto para estudiantes y productores ubicados en el subgrupo III. La desconfianza generada en la ronda inicial, así como el deseo de castigar la conducta del otro pueden ser factores que influyen decididamente sobre los niveles de cooperación futura. De hecho, ningún jugador del tercer subgrupo entregó más cartas en la ronda 2 de las que había recibido previamente.

Los resultados observados en la ronda 3, con base en el comportamiento en la ronda 2, reflejan patrones similares a los anteriores y en algunos casos más acentuados, lo cual es predecible por el hecho de tratarse de la última ronda.

iii. Juego de Ultimátum. La figura 4 presenta la frecuencia con la cual los jugadores rojos de cada grupo ofrecieron distintos montos al jugador negro correspondiente. Asimismo, esta figura presenta la frecuencia con la cual dichas ofertas fueron aceptadas o rechazadas.

Figura 4.
Comportamiento de jugadores en juego de ultimátum



Los resultados de ambos grupos son similares, aunque los productores del DRAT tienen una mayor frecuencia de resultados donde los 1.000 colones se dividieron en partes iguales. De hecho, en el 73% de los casos los jugadores rojos del DRAT eligieron repartir el dinero en partes iguales mientras que en CATIE, el 50% se decidió por este resultado.

La figura 4 también dejar ver que ninguno de los grupos se acerca a ofertas ligeramente superiores a cero colones, con lo cual ambos grupos demuestran que la solución teórica sugerida no tiene validez en ningún caso. La oferta más baja que hizo un jugador rojo fue 300 colones (o sea, que lo máximo que propuso dejarse el jugador rojo fue 700 colones) e incluso, hubo varios ofrecimientos de la totalidad de los 1000 colones de parte del jugador rojo al jugador negro. Aunque este último resultado parece ser muy extraño, estos

jugadores revelaron en privado y luego de la sesión experimental que la razón de esta decisión fue que no creían que otras personas en la sala podían necesitar más el dinero que ellos.

En el caso de los rechazos, las diferencias entre grupos parecen ser más marcadas. Los estudiantes rechazaron casi todas las ofertas diferentes a la división 50-50 (la única excepción fue un jugador negro que aceptó una oferta de 300 colones por parte del jugador rojo). Asimismo, es importante destacar que en ninguno de los dos grupos de participantes hubo rechazos de las ofertas 50-50 del jugador rojo.

Es claro que debido a la baja cantidad de observaciones de rechazo, es muy difícil conocer con certeza si existen tasas de rechazo significativamente diferentes entre ambos grupos. No obstante, la mayor tasa de rechazos observada en los estudiantes lleva a la conjeturar acerca de la razón de tal diferencia. Algunos motivos pueden ser las diferentes aversiones al riesgo, la expectativa de comportamiento de los otros, o bien, una mayor disposición a castigar tratos desiguales. Estas razones se explorarán en la siguiente sección.

4. Análisis y conclusión general de los resultados experimentales

Los resultados de las sesiones experimentales contradicen algunos modelos de racionalidad que enfatizan en la importancia de las retribuciones monetarias individuales en la toma de decisiones y adicionalmente, demuestran la variabilidad de las decisiones acerca de cooperar, las cuales parecen estar condicionadas por el entorno socioeconómico y las normas relacionadas con la reputación, la reciprocidad y la confianza mutua. De esta forma, los resultados parecen reproducir algunos patrones de comportamiento social de la vida de los productores, los cuales han sido desarrollados a través de los años. Aunque estos resultados respaldan los hallazgos encontrados en estudios similares (Henrich *et al.*, 2004), la utilidad principal del estudio está en función del uso de los experimentos como herramientas de diagnóstico de las condiciones que favorecen la cooperación en una comunidad y de los principales elementos de diseño que se deben considerar para el manejo efectivo de un recurso

común para parte de la comunidad beneficiaria. En esta sección se discuten los resultados en este sentido.

La aplicación del juego de provisión demostró que los niveles cooperativos de los agricultores son relativamente bajos, a pesar de la comunicación cara a cara. La importancia de este tipo de comunicación radica en su efecto sobre el alcance de objetivos comunes, ya que permite la transferencia de información acerca de las estrategias óptimas, favorece el intercambio de promesas y el incremento de la confianza mutua y por ende, de las expectativas de comportamiento de otros, el refuerzo de valores normativos y el desarrollo de una identidad de grupo (Ostrom, 2003).

La ineficacia de la comunicación en los agricultores parece indicar que los niveles de confianza mutua y de normas compartidas son relativamente bajos, lo cual incide negativamente sobre las expectativas de comportamiento futuro. Es probable que los fracasos organizacionales previos en torno al riego, sumado a otros intentos fallidos de organización productiva y de comercialización agrícola, constituyen un elemento de información utilizado a la hora de tomar decisiones en los juegos, los cuales obligan a establecer expectativas de cumplimiento de promesas de cooperación de otros¹⁶. Este hallazgo es fundamental para destacar la dificultad de que los productores del DRAT se organicen entre sí para alcanzar objetivos comunes. Recuperar la confianza mutua en el trabajo cooperativo parece ser una condición *sine qua non* para establecer organizaciones y fomentar la creación de capital social en el lugar; sin embargo, esto es inevitablemente un proceso costoso, cuyos resultados se vislumbrarían en el mediano y largo plazo.

Es interesante destacar que el juego del DP también reflejó que los niveles de confianza mutua de los productores eran relativamente bajos, pero, además, este experimento también hizo evidente la

16 Hay evidencia que indica que los individuos sienten obligación de responder recíprocamente, dependiendo de los vínculos sociales preexistentes con la persona con la cual juegan (Kollock, 1998, citado por Ahn *et al.* 2003). En el caso de CATIE, es más probable que los individuos tengan vínculos sociales previos, lo cual podría afectar significativamente sobre las decisiones tomadas en el juego.

existencia de normas relacionadas con la reciprocidad y el castigo para aquellas acciones consideradas como agravios, lo cual sugiere que los individuos que interactúan repetidamente toman decisiones contingentes al pasado reciente y a la creencia de las posibles acciones de otros. Recuérdese que en el juego del DP, los individuos optan por mantener o aumentar los niveles cooperativos previos si el otro participante se mostró cooperativo, pero no dudan en castigar al otro si este entregó menos de lo que ellos dieron. Para finalizar con este tema, es importante destacar que aunque la falta de confianza es un factor determinante de las posibilidades de cooperación, debe evitarse pensar que una mejora en esta es una condición suficiente para lograr un arreglo institucional de manejo efectivo del sistema de riego. Lo mismo se aplica para otros factores determinantes de la acción colectiva.

La presencia del castigo para aquellas acciones consideradas como perjudiciales puede explicar los bajos niveles de cooperación que se observan actualmente en el DRAT y llama la atención sobre la dificultad de elevar estos en el corto plazo. En términos generales, el DRAT es un escenario donde existen muchas posibilidades para que algunos usuarios obtengan más beneficios que otros, por ejemplo, al usar más agua de la debida de medios ilegales, o bien, al sembrar cultivos de una alta demanda hídrica y pagar una tarifa no volumétrica, algunos terminan pagando menos por metro cúbico de agua utilizado (Madrigal, 2003). Esta situación puede motivar el deseo de castigo de los usuarios que se sienten afectados, lo cual se expresa en la negativa de entregar recursos para objetivos colectivos, mientras esta repartición de beneficios se mantenga. Esta reacción, desarrollada a través de los años, pudo iniciar un proceso circular donde menores niveles cooperativos agravan las desigualdades y estas, a su vez, motivan una menor cooperación.

Para salir del círculo descrito anteriormente, no solo es preciso mejorar la repartición de los beneficios en el sistema, sino, además, proponer una mejora integral en los niveles de capital social y cooperación en general. Esto debería iniciar con la apertura de espacios de diálogo y organizaciones de pequeña escala, que permitan el intercambio de experiencias, así como el conocimiento y el desarrollo de confianza mutua entre los productores. En este caso,

el Estado, sin llegar a un modelo paternalista, podría tener un rol proactivo en el fomento de estos espacios, en el desarrollo de infraestructura rural y en la capacitación de los agricultores en aspectos básicos de organización comunal y creación de redes de intercambio de información y experiencias participativas. Esta estrategia permitiría recobrar, de forma gradual, la confianza en el trabajo de las organizaciones en la zona y preparar el terreno para un futuro donde los pequeños productores sean capaces de crear y mantener una sociedad de usuarios que administre el sistema de riego.

Por otra parte, en el juego de ultimátum también se evidencia el uso del castigo y la reciprocidad. Una de las explicaciones más fuertes que se encuentran en la literatura para este juego es la hipótesis del castigo¹⁷, la cual se basa en las normas de reciprocidad. La idea es que el segundo jugador rechazará una oferta desigual del primero (donde el primero obtendría más de la mitad) en señal de castigo contra esta acción, lo cual refleja una actuación recíproca del segundo ante lo que considera un perjuicio. Si el primer jugador supone que el otro tendrá este comportamiento, lo mejor que puede hacer es ofrecer un trato 50-50.¹⁸

17 Esta hipótesis ha tenido apoyo en otro experimento llamado juego dictatorial. Este ejercicio es semejante al de ultimátum, la única variante es que el segundo jugador no tiene posibilidad de rechazar o modificar la oferta. En este escenario, Forsythe *et al.* (1994) encontraron una reducción significativa de las ofertas del primer jugador. Este resultado llevó a los autores a concluir que la presencia de un posible castigo del segundo jugador es lo que motiva la alta frecuencia de ofertas 50-50. No obstante, el hecho que aún en este juego los primeros jugadores ofrecen un monto positivo a los otros, lleva a pensar que el miedo al castigo sea la única explicación (Camerer y Fehr 2004).

18 Se puede sugerir una hipótesis alternativa relacionada con la riqueza relativa. Aunque en términos absolutos, cualquier oferta mayor de cero incrementaría la riqueza del segundo jugador, a este no le parece importar, porque en el fondo lo que sucede es una desmejora relativa de su riqueza respecto a la del otro. Si el primer jugador supone que al otro le importa la riqueza relativa y que reaccionará castigando cambios relativos de la riqueza que le perjudiquen, la mejor alternativa para no quedarse sin dinero es ofrecer un trato 50-50.

Si se acepta la hipótesis del castigo y la de una relativa aversión al riesgo, los productores deberían elegir aquella alternativa que aunque posiblemente les genere menos ingresos que otras, tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. En otras palabras, si existe paralelismo entre la toma de decisiones diarias de un productor y la forma en que este toma decisiones en el experimento, el productor debería elegir aquella estrategia que le brinde el mayor ingreso posible seguro, esto es, debería elegir la estrategia 50-50. Esto parece tener respaldo en este ejercicio ya que el 73% de los productores eligió una estrategia de 50-50, mientras que el 50% de los jugadores rojos del grupo de estudiantes tomaron esta alternativa.¹⁹

Las sesiones experimentales dejan una enseñanza adicional. A pesar de que la confianza, la reciprocidad y la identidad de grupo son condiciones necesarias para obtener niveles cooperativos altos, el efecto de estas variables se desvanece sin la presencia de mecanismos efectivos de control y sanciones que permitan frenar el comportamiento de aquellos individuos que pretenden disfrutar gratis del esfuerzo de otros. Esto se justifica por la cooperación extraordinariamente alta que mostraron los estudiantes en la ronda inmediata a la comunicación, la cual, en rondas posteriores se desvaneció.

En ausencia de mecanismos que permitan identificar y castigar de forma efectiva y a un bajo costo a los infractores de las reglas o acuerdos implícitos, es difícil lograr acuerdos creíbles y duraderos que sirvan de base para la construcción de institucionalidad en un sitio. En estos escenarios es muy probable que si los resultados cooperativos no son los esperados, debido a la aparición del *free-riding*, algunos individuos imitarían este comportamiento con el único propósito de castigar a los que se salieron del acuerdo, con la consecuencia, ya discutida, de una reacción en cadena que deteriora

19 En este caso se realiza una argumentación con base en razonamientos intuitivos. De forma más rigurosa se debería cuantificar la función de probabilidad de rechazo para cada grupo; no obstante, la cantidad de observaciones no permite realizar este cálculo.

aún más los niveles cooperativos²⁰ . Esto es consistente con la existencia de individuos cooperadores condicionales (Camerer y Fehr, 2003); es decir, individuos que cooperan siempre y cuando los demás lo hacen, pero en el momento en que detectan a los *free-riders* deciden castigarlos, aunque ello les pueda representar un costo.

La identidad de grupo, la confianza, la reciprocidad, las posibilidades de comunicación y la ausencia de monitoreo y sanciones fueron relevantes en las sesiones experimentales, pero también lo son para la historia reciente del DRAT. A principios de la década de los noventa, cuando el asentamiento campesino de Bagatzí, ubicado en el DRAT, evolucionó hacia una situación de mayor diversidad de productores, con un menor conocimiento mutuo entre ellos, una menor cantidad de expectativas y normas de comportamiento comunes y por último, una menor necesidad de organizarse, debido a la abundancia relativa del agua, los incentivos por invertir en capital social y soluciones cooperativas a los problemas colectivos cotidianos disminuyeron. Esta pérdida de interés en las actividades conjuntas se agravó aún más dada la incapacidad legal y social de los miembros de la organización local para reprimir el comportamiento de aquellos productores que salían de los acuerdos de cooperación establecidos inicialmente. Esta serie de factores motivó la caída de la organización local dedicada al mantenimiento de los canales de riego y la inversión en obras comunales (Madrigal, 2003).

Esta experiencia reciente destaca que los intentos serios de descentralización estatal del sistema de riego del DRAT deben basarse en un marco institucional flexible, que incluya mecanismos de monitoreo y sanciones efectivas, reconocidos y aceptados por los propios usuarios. El apoyo estatal no puede menospreciarse en este proceso, sino que debe expresarse en un reconocimiento real de los derechos de los regantes para diseñar y manejar sus propias instituciones de autogobierno. Asimismo, el apoyo estatal sigue

20 Este razonamiento se basa en parte en la hipótesis del *grim-trigger* (Ostrom, 2003), la cual refleja el principio de reciprocidad, ya que los individuos que intentan castigar a los infractores, lo que buscan en última instancia es devolver el perjuicio que estos les han causado.

siendo válido en términos de la creación en un entorno favorable para la organización local, lo cual incluye capacitación adecuada, apoyo a iniciativas comerciales, apertura de canales de comunicación social y acceso a servicios básicos.

Finalmente, aunque el énfasis del artículo es la utilidad de los experimentos como herramienta de diagnóstico, conviene hacer algunas observaciones teóricas. Los resultados de los experimentos concuerdan con la evidencia reciente en experimentos de campo (Henrich *et al.*, 2004), donde se encuentra una amplia variabilidad de resultados entre grupos sociales y donde el desempeño agregado de los participantes se aleja consistentemente del axioma egoísta (*homo economicus*), reflejando, más bien, patrones de comportamiento diario, donde la reciprocidad, el altruismo y las reglas específicas de participación de beneficios y costos tienen un rol preponderante.

Adicionalmente, se destaca la consistencia del comportamiento de los individuos en los tres juegos aplicados. Así, por ejemplo, los agricultores mostraron un nivel de cooperación relativamente bajo en el juego de provisión, aun cuando se permitió la comunicación cara a cara. Si este comportamiento refleja los bajos niveles de confianza mutua y por ende, la ineficacia de acuerdos informales, las decisiones en el juego del dilema del prisionero deberían ser consistentes con estas normas²¹. En concordancia con el argumento anterior, los agricultores mostraron escasa cooperación, baja confianza en las decisiones cooperativas del otro y el uso de normas de reciprocidad para otorgar castigo. Estas últimas también parecen ser importantes para explicar el comportamiento de los productores en el juego de ultimátum, sobre todo una vez que ya se había detectado la presencia de esta norma en los juegos anteriores.

21 Existe la posibilidad de que los resultados del primer juego sirvieran para detectar la presencia de *free-riders* en el grupo, lo cual puede incrementar la probabilidad percibida de que algunos individuos se enfrentaran a este tipo de jugadores. Esto los motivaría a intercambiar menos cartas rojas para evitar que otros se aprovechen de su cooperación.

Para finalizar, los resultados descritos en este artículo deben ser manejados con mucha cautela, debido a que la poca cantidad de observaciones puede ser engañosa en el manejo de porcentajes y la validez general del trabajo. No obstante, el análisis sugiere respuestas al comportamiento de los individuos, los cuales se deberían verificar en grupos más grandes y con mayor número de repeticiones. Un futuro estudio experimental con más repeticiones y participantes podría ser útil para determinar la influencia de las variables socioeconómicas individuales sobre las decisiones individuales y los niveles cooperativos agregados.

Bibliografía

Ahn, T.K; Ostrom, E; Schmidt, D; Walker, J. (2003). Trust in two-person games: game structures and linkages, en Ostrom, E; Walker, J (eds.): **Trust and reciprocity**, (New York, The Russell Sage Foundation), pp. 323-351.

Bierman, S; Fernández, L. (1998). **Game theory with economic applications**, (Segunda Edición, Addison-Wesley), 451 pp.

Camerer, C; Fehr, E. (2004). Measuring social norms and preferences using experimental games: a guide for social scientists, en Henrich, J; Boyd, R; Bowles, S; Camerer, C; Fehr, E; Gintis, H. (eds): **Foundations of human sociality: Economic experiments and ethnographic evidence from fifteen small-scale societies**, (Oxford University Press), pp. 55-95.

Cárdenas, JC; Ostrom, E. 2004. What do people bring into the game? Experiments in the field about cooperation in the commons. **Agricultural Systems**. 82 (3): 307-326.

Davis, D; Holt, Ch. (1993). **Experimental economics**, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press), 572 pp.

Forsythe, R; Horowitz, J; Savin, N.E; Sefton, M. (1994). Replicability, fairness and play in experiments with simple bargaining games. **Games and Economic Behavior** 6(3):347-369.

Friedman, D; Sunder, S. (1994). **Experimental Methods. A primer for economists**. (Cambridge University Press). 229 pp.

Henrich, J; Boyd, R; Bowles, S; Camerer, C; Fehr, E; Gintis, H. (eds.) (2004). **Foundations of human sociality: Economic experiments and ethnographic evidence from fifteen small-scale societies**, (Oxford University Press), 451 pp.

Holt, Ch; Laury, S. (2002). **Theoretical explanations of treatment effects in voluntary contribution experiments**. Forthcoming in Plott, Ch; Smith, V. *The Handbook of Experimental Economics*.

Isaac, M; Walker, J. (1988). Group size effects in public goods provision: The voluntary contribution mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**. 103: 179-199.

Ledyard, J. (1995). Public goods: A survey of experimental research, en Kagel, J y Roth, A.(eds.): **The Handbook of Experimental Economics**, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press), pp. 111-194.

Madrigal, R. (2003). **Efecto de la acción colectiva y los incentivos económicos sobre el uso del agua de irrigación en el Distrito de Riego Arenal Tempisque, Costa Rica**. (Turrialba, Tesis de Maestría, CATIE), 209 pp.

Madrigal, R. (2004). La gestión local de agua de riego en el Asentamiento Campesino de Bagatzí, Costa Rica. **Revista de Ciencias Sociales**. 106 (4):181-190.

McElreath, R. (2004). Community structure, mobility and the strength of norms in an African Society: The Sangu of Tanzania, en Henrich, J; Boyd, R; Bowles, S; Camerer, C; Fehr, E; Gintis, H. (eds.): **Foundations of human sociality: Economic experiments and ethnographic evidence from fifteen small-scale societies**, (Oxford University Press), pp. 335-355.

Ostrom, E. (2003). Toward a behavioral theory linking trust, reciprocity and reputation, en Ostrom, E; Walker, J. (eds.): **Trust and reciprocity**, (New York, The Russell Sage Foundation), pp. 19-79.

VOCES NUEVAS

Vinculaciones vecinales en el proceso de conformación y disfrute del capital social comunitario. Caso de la comunidad Lagos de Lindora, Santa Ana, Costa Rica.

Ana María Soto Blanco¹

En el marco de la globalización y aplicación de políticas de corte neoliberal en los países latinoamericanos, diversos estudios han observado la tendencia creciente de las desigualdades sociales según el ingreso de los hogares. Datos del Banco Mundial muestran que América Latina y el Caribe es más desigual en los años noventas en relación con los años setenta (Ferranti, Perrey, Ferreira y Walton, 2004). El último Informe del Estado de la Región señaló también que en todos los países centroamericanos aumentó la desigualdad social por ingreso entre los años 2000 y 2006 (2008).

Esta tendencia al aumento en la desigualdad por ingresos se presenta de manera más fuerte en las zonas urbanas, donde se concentra más de la mitad de la población de los países centroamericanos. En Costa Rica, donde un 15,7% de la población urbana se encuentra bajo la línea de pobreza y un 2,6% vive en pobreza extrema (INEC, 2007), el coeficiente de Gini urbano alcanzó durante el 2006, el nivel más alto de la década (0,49), igualándose a lo alcanzado a escala nacional (Estado de la Región, 2008:603). Al

1 Licenciada en Sociología, graduada de la Universidad de Costa Rica. E-mail: anambs@gmail.com

respecto, el Programa del Estado de la Nación señaló que en Costa Rica hay una clara expresión territorial de la pobreza urbana y la desigualdad, que dejan a la vista el fenómeno de la segregación socio-residencial como uno de los problemas del desarrollo urbano en el país (2004).

En las últimas décadas, en Costa Rica, el proceso de crecimiento urbano ha sido intenso; no obstante, el Décimo Informe del Estado de la Nación ha mostrado la paradoja que encierra este proceso. En la Gran Área Metropolitana (GAM), territorio de solo 1.778 km², conviven importantes concentraciones de familias de altos ingresos y de familias de bajos ingresos (2004). Este panorama muestra la persistencia de fuertes desigualdades sociales, que hace vulnerables a las familias de escasos recursos ante formas de exclusión social, por ejemplo, en relación con el acceso a la vivienda y a la ciudad .²

En este contexto, hemos analizado la experiencia de la comunidad Lagos de Lindora, ubicada en Santa Ana, Costa Rica. La experiencia se analiza a partir del concepto de capital social comunitario, reconociendo la lucha de las familias por acceso a vivienda social y su proceso de conformación como comunidad. Procesos durante los cuales la comunidad ve la fortaleza de los vínculos vecinales, como recursos fundamentales para el alcance de ciertas necesidades y bienestar comunitario .³

Es importante resaltar que el concepto de capital social ha sido aplicado en América Latina en estudios (teóricos y empíricos) a nivel individual, comunitario y societal, así como en contextos urbanos y rurales. La producción se ha desarrollado principalmente por representantes de agencias internacionales en el marco del desarrollo de estrategias de lucha contra la pobreza (Atria, 2003; Durston, 2001;

2 En el país hay aproximadamente 40.000 familias habitando en tugurios y precarios (MIDEPLAN, 2007). Existe un registro de unos 366 precarios y de ellos, un 64,7% se ubican en la Gran Área Metropolitana (GAM) (MIVAH, 2006).

3 Aunque no así para la eliminación de la desigualdad estructural de la que son parte.

Fordi, Siles y Barreiro, 2004), estudios sobre el campesinado rural (Durston, 1999; Durston, 2002), análisis de desarrollo humano (Lechner, 1999; Güell y Márquez en Durston y Miranda, 2001) y otros.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede Costa Rica, ha sido el centro de estudios que ha desarrollado investigaciones relacionadas con el concepto de capital social en el país. Algunos de los trabajos se han orientado al análisis de gestiones de redes comerciales y empresariales a escala local, como las familias artesanas en Sarchí (Pérez y Cordero, 1994) y las dinámicas de gestión local-empresarial en el cantón de Belén (Pérez, Rivera, Cordero y Morales, 2000). También se ha trabajado el concepto de capital comunitario relacionado con la configuración de redes empresariales en el marco de un estudio que interrelaciona el tema de lo local y la globalización (Pérez, 2006).

En este artículo se conceptualiza el capital social en una propuesta de abordaje para el análisis de vinculaciones vecinales en una comunidad local, la comunidad Lagos de Lindora, enfatizando en la manera en que los aspectos socioculturales de la vida cotidiana, favorecen al desarrollo de un tejido social capaz de producir e incluso potenciar, beneficios comunitarios.

La investigación realizada fue de tipo cualitativo, desarrollada en el marco de un trabajo final de graduación para optar por el título de licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica. La información se obtuvo a partir de revisiones bibliográficas especializadas, observaciones no participantes, entrevistas a profundidad aplicadas a líderes de la comunidad Lagos de Lindora, y entrevistas estructuradas aplicadas a vecinas y vecinos habitantes de dicha comunidad.

1. Precisiones teóricas sobre el concepto de capital social y propuesta de abordaje aplicada en el análisis

El debate académico en relación con el concepto de capital social comienza a desarrollarse alrededor las décadas ochenta y noventa del siglo XX, en disciplinas como la Economía, la Ciencias Políticas, la Sociología y la Antropología. El concepto “capital”, acompañado por el adjetivo de “social” fue utilizado inicialmente por Pierre Bourdieu

en el marco de la teoría social que desarrolla (1999), James Coleman (1988), y Robert Putnam (1993). No obstante, anteriormente, varios autores ya habían referido a aspectos de lo que hoy se contempla dentro de tal término, entre ellos, Lyda J. Hanifan a inicios del siglo XX, George C. Homans y Jane Jacobs para mediados de siglo XX y unas décadas más tarde Glenn Loury.

A escala latinoamericana, el debate se ha inscrito en investigaciones dirigidas al desarrollo de estrategias de combate a la pobreza, fomentadas principalmente por agencias internacionales de corte liberal, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con John Durston, el Banco Mundial (BN), con Bernardo Kliksberg, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con Norberto Lechner.

1.1. Puntos de debate: Capital social como concepto controversial

Es importante resaltar que el desarrollo teórico del concepto capital social, ha sido objeto de numerosas críticas, algunas de ellas han permitido la realización de ajustes teóricos por parte de los investigadores e investigadoras. Sin embargo, la crítica ha sido persistente. Al respecto, se considera importante referir a algunas de estas críticas que no deben pasar inadvertidas, ya que resultan definitorias del enfoque abordado en el estudio realizado.

- **Crítica por la postura política-ideológica liberal y reduccionismo económico del concepto:** críticos plantean que el concepto capital social se origina en marcos políticos de tendencia neoliberal. Se afirma que su utilización favorece el desarrollo de estrategias que plantean el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de diversos grupos sociales, como “los pobres”, y esto permite que se cubra la función y responsabilidad estatal de canalizar estrategias de acción que procuren el acceso a bienestar social (Montaño en Miranda, 2003: 295-296). Además, se apela que el concepto, proveniente de la economía, reduce el universo de los intercambios al intercambio mercantil, orientado a la maximización de las ganancias (Bourdieu, 1999).

Ante estas críticas y conscientes de la tendencia ideologizada de las intenciones políticas del concepto, se considera que la

reproducción de esta dependerá del marco político-ideológico desde la cual se inscriban las investigaciones. Es central reconocer que el Estado debe garantizar el acceso equitativo e igualitario al bienestar e integración social; no obstante, existen fuertes desigualdades sociales en el uso del poder que condicionan el acceso al bienestar social de grupos sociales política y económicamente vulnerables. Ante ello, aunque se coincide con las críticas expuestas, se considera que el concepto puede ser operativamente utilizado, teniendo en cuenta que:

- Permite identificar que algunos grupos sociales tienen capacidades, no de tipo económico, ni de poder, sino otras propias de su dinámica relacional que suelen ser poco valoradas y que con ellas, aunque no se eliminan las condiciones de desigualdad, pueden representar recursos que faciliten el alcance de beneficios específicos.

- El concepto capital, en términos simples, plantea recursos materiales (como dinero, maquinaria, etc.) y de esfuerzo (como el trabajo) que se invierten para generar plusvalía. El capital social, aunque refiere a un proceso similar, los recursos que se “invierten” son recursos asociativos intangibles, generados a partir de una sociabilidad constante por la pertenencia a estructuras sociales (Atria y otros, 2003; Bourdieu, 1999; Coleman, 1988; Putnam, 1993; Durston, 2002; Arriagada, Miranda y Pavez, 2004).

- La lectura de los recursos asociativos que se propone no busca respaldar la inversión de estos para la obtención de plusvalía, sino destacar la existencia de otros beneficios no económicos. Al respecto, cabe señalar que el capital social puede conllevar a la obtención de distintos beneficios, como beneficios socioemocionales (como sentimientos de seguridad en una comunidad) (Coleman, 1988: S99-S100); beneficios individuales que favorecen la movilidad social (como acceso a conocimiento, empleo) (Bourdieu, 1999); y beneficios que favorecen la producción de plusvalía (como la creación de un negocio que gracias a los recursos asociativos funciona de manera armoniosa) (Granovetter, 2005:35).

- Finalmente, el capital social, como todos los capitales, puede ser acumulado (Durston, 2001), pero conforme se usa, no se agota sino que se fortalece, porque, de lo contrario, los vínculos sociales se debilitarían (Kliksberg, 2000). Desde esta postura, el énfasis que se rescata resalta la importancia de tejidos sociales densos como promotores de beneficios colectivos.

Aclarando estas diferencias, en este artículo se hace una propuesta operativa del concepto, que muestra una alternativa de análisis de las formas de intercambio vecinal, *no económicas*, en una comunidad. Desde esta perspectiva, se delimita el uso del concepto a dinámicas de intercambio referidas, específicamente, a la convivencia vecinal que no consideran “negocios” o intercambios comerciales (por ejemplo, las conversaciones entre vecinas/os, las bromas, las prácticas religiosas), y a beneficios no económicos como la seguridad comunitaria, el apoyo social, el trabajo conjunto para la mejoría de espacios de recreación, entre otros.

• **Crítica por el enfoque homogéneo y la cara oscura del concepto:** Por un lado, Portes y otros autores han destacado que el discurso teórico sobre el capital social, mantiene una postura muy positiva de la existencia de este en las distintas sociedades, sin tomar en cuenta que también existe un lado negativo que poseen formas de organización social consideradas nocivas para las sociedades, tales como las mafias o grupos religiosos y nacionalistas fundamentalistas (Durston, 1999:104); (Portes y Landolt, 1996); (Lechner, 1999:9).

Respecto de esta crítica, se considera que compete, principalmente, a investigaciones que buscan estudiar el capital social en la sociedad, ya que reconocer este “lado negativo”, permitiría resaltar limitaciones para la integración social, al mostrar tejidos sociales excluyentes, excluidos y perjudiciales para otros. No obstante, en investigaciones en el ámbito microsocial, por su delimitación y objetos de análisis, el concepto de capital social puede ser de mucha utilidad a pesar de estas críticas. En este sentido, aunque se analicen redes criminales u otras consideradas perjudiciales, se pueden identificar fortalezas en la creación de redes tejidos sociales densos.

Por otra parte, se ha criticado también que el enfoque del capital social asume una posición neutra, sin considerar en el discurso y

análisis las relaciones de género (Miranda, 2003: 299). En relación con el tema, cabe agregar además que la neutralidad del concepto puede atropellar la heterogeneidad de las realidades sociales, y que si bien en las investigaciones no se pueden considerar todas las variables de una realidad social, es preciso delimitarlas observando las particularidades de los sociales grupos en estudio. Por ello, resulta esencial considerar variables como la edad, el origen nacional y otras (la escogencia de variables depende de la estructura social en estudio)⁴.

• **Debilidades de contenido teórico:** ciertos autores han señalado que las elaboraciones teóricas sobre el concepto de capital social no se han limitado a responder ¿qué es el capital social?, mezclando sin la suficiente claridad otras preguntas como ¿dónde reside el capital social? y ¿cómo se usa? (Robinson, Sumid y Siles, 2000). Al respecto, interesa solamente resaltar tres debilidades:

Primero, ha quedado confuso si el capital social refiere a recursos asociativos no necesariamente movilizados para la consecución de beneficios, o a aquellos que han sido aprovechados para adquirir beneficios específicos; es decir, que son movilizados. En ese sentido, se asume que ambas situaciones pueden ser capital social, uno con beneficios demostrados y otros con beneficios potenciales.

Lechner plantea que el capital social es un flujo que cambia según las variaciones históricas, las cuales impactan tanto en la composición de la estructura social, como en su dinámica interna y en la dinámica del contexto mediato e inmediato de dicha red. En este sentido, el capital social puede encontrarse en diferentes expresiones a lo largo de la historia. La identificación de este dependerá entonces del momento histórico, teniendo en cuenta que las comunidades poseen disposiciones para el capital social diferenciadas, mostrando la existencia de un tipo de recursos asociativos más que de otros.

Segundo, queda claro que el capital social surge de una interacción relativamente constante, o como dice Bourdieu, surge en

4 El estudio en el que se basa este artículo propone el abordaje de las vinculaciones vecinales en la comunidad Lagos de Lindora, considerando un enfoque de género y edad, debido a las particularidades sociodemográficas de esta comunidad.

las relaciones sociales que están relativamente institucionalizadas (1999: 14). Sin embargo, entre los principales teóricos del concepto, hay énfasis distintos sobre las fuentes de capital social.

Bourdieu, por un lado, enfatiza que el capital social surge mediante el intercambio social legítimo entre los agentes de una estructura, y por herencia (1999: 16-18); Putnam plantea la existencia de lazos fuertes y lazos débiles; y Durston destaca la existencia de “precursores”⁵ de capital social, que aunque no son capital social en sí, promueven su desarrollo (2001: 13). El estudio desarrollado asume tanto la postura de Putnam como la de Durston, y se rescató la existencia de formas de intercambio social legítimo de las que hablaba Bourdieu.

Finalmente, existen divergencias sobre lo que motiva el surgimiento de capital social. Bourdieu considera que la motivación puede ser consciente o inconsciente (1999: 15); Coleman (y Durston, siguiendo a Coleman) que tanto las acciones racionales de los individuos, como los condicionamientos contextuales, y el marco relacional que le da sentido y forma, a las acciones de los individuos, conlleva al surgimiento de capital social; y Putnam, plantea que hay valores preexistentes acumulados históricamente (Lechner, 1999: 10).

Frente a estas divergencias, se considera que en el análisis de dinámicas en el ámbito comunitario, el surgimiento y desarrollo del capital social responde: a un proceso histórico (conformado por experiencias pasadas y presentes influidas relativamente por un contexto físico y social y político económico), y a la dinámica de la estructura social conformada por personas con características etarias y de género específicas, que dan un particular matiz al capital social existente en una comunidad.

5 Para Durston, los precursores son aspectos socioculturales que facilitan la existencia de capital social y que existen en casi todos los grupos sociales (de manera diferenciada) como: visiones comunes del comportamiento probable de las personas; la memoria común, la religión, mitos; identidad común; reglas de parentesco; rituales y otros (2002: 39).

1.2. Precisiones teóricas de los ejes centrales propuestos para el análisis de vinculaciones vecinales

El marco de análisis propuesto se elaboró con el objetivo de estudiar, desde el concepto de capital social, las vinculaciones vecinales de una comunidad, entendida como “una colectividad de personas que ocupan una zona geográfica, se dedican en conjunto a actividades económicas y políticas y constituyen, en esencia, una unidad social de autogobierno, con valores comunes y un sentimiento de pertenencia” (Mitchell en Durston, 2002: 30).

El concepto específico acogido para el desarrollo del análisis fue el de capital social comunitario, desarrollado por Durston, quien lo entiende como “estructuras e instituciones sociales de cooperación del conjunto de personas de una localidad” (2002:31). La elección de este concepto como eje central del análisis convino porque: contempla la existencia de recursos asociativos, no solo en términos individuales, sino como una institucionalidad social del conjunto (Durston, 2002:27-31); considera que las mujeres y los hombres con capital social comunitario se plantean “como objetivo, en forma explícita o implícita, el bien común” (Durston, 2002:27), y por ello, los beneficios que podrían ser obtenidos, son propiedad de la comunidad en general (Durston, 2002:41), aun cuando esto también beneficie individualmente las personas.

El concepto de vinculaciones vecinales fue construido únicamente con fines operativos para conceptualizar el objeto específico de la investigación, entendiéndolo como “relaciones de conexión (unión, encuentro) que presentan o han presentado cierta consistencia y constancia, entre dos o más personas o grupos de personas cuyas residencias se encuentran espacialmente cercanas entre sí” (Soto, 2008).

Considerando estos elementos teóricos, se desarrolló una propuesta de abordaje, que fuera aplicable al caso de la comunidad Lagos de Lindora, para el análisis de las vinculaciones vecinales a escala comunitaria y las potencialidades de estas para el acceso a beneficios comunes. La propuesta se basó en tres dimensiones de análisis:

- La primera dimensión propuesta, *dinámica de intercambio comunitario*, reconoce la disposición física y relacional que una comunidad tiene para favorecer el contacto e intercambio comunitario. Esta dimensión considera un tipo de precursores del capital social porque facilitan la existencia de intercambios entre vecinas y vecinos, pero sin asegurar el establecimiento de una relación entre ellos. Para la identificación de esta dimensión definieron las siguientes variables:

Primero, *la ubicación de los lugares donde se satisfacen las necesidades cotidianas de acceso a empleo (ocupación principal), comercio, servicios básicos, recreación, centros político-administrativos*, etc.: esta variable permite observar el tiempo que las personas de una comunidad pasan en ella durante su vida cotidiana, y con ello reconocer si tienen disposición favorable o no al intercambio comunitario. El supuesto detrás de esta variable es que si se pasa poco tiempo en la comunidad, hay poca disposición para el intercambio comunitario y viceversa.

Segundo, la existencia de *lugares, prácticas y ocasiones de intercambio vecinal*, o bien, lo que Bourdieu ha llamado formas institucionalizadas de intercambio social legítimo (1999:16-18), que son observables y permiten favorecer el intercambio entre vecinas y vecinos.

Y tercero, las *estrategias de comunicación comunitaria* para identificar cómo las vecinas y vecinos se informan sobre asuntos de interés comunitario, y si estas formas son inclusivas a los distintos grupos poblacionales que existen en la comunidad.

Así como los precursores que plantea Durston, los que se contemplan en esta dimensión son variables según las características de cada comunidad. Por ello la dimensión propuesta permite destacar las particularidades de distintos contextos y dinámicas siendo aplicable a comunidades no solo urbanas, como Lagos de Lindora, sino, también, rurales.

- La segunda dimensión, *calidad de las vinculaciones vecinales*, permite caracterizar la densidad del tejido social de una comunidad, identificando la presencia de lazos fuertes; es decir, aquellos que incurren en intercambios frecuentes y cercanos como las relaciones

de amistad o familiares (Putnam, en Millán y Gordon, 2004: 728-729), para ello fue de interés que en esta dimensión se incluyeran las siguientes variables:

Primero, las *distinciones que las personas de una comunidad reconocen de la misma y la satisfacción que tienen por la comunidad*, que muestren si existe identidad comunitaria, entendida como “la identidad cultural característica de un núcleo más cohesionado, más denso de interrelaciones, que constituiría una comunidad. (...) Los individuos que se consideran integrantes de una comunidad se sienten subjetivamente como individuos con características comunes” (Aulas Unidas de Argentina, 2005).

Segundo, *actitudes de confianza*, “una actitud que se basa en el comportamiento que se espera de la otra persona que participa en la relación que se establece entre ambas... (que implica) la disposición a entregar el control de bienes (y seres queridos) propios al otro” (Durston, 2002: 16). Cabe señalar que la disposición de entregar control sobre algo propio o querido depende del tipo y frecuencia del intercambio. Por un lado, porque la confianza suele presentarse a partir de la existencia de lazos fuertes como “...de parentesco, la vecindad, la amistad o la pertenencia a un mismo grupo étnico” (Putnam y North en Durston, 2002: 20). Y por otro, porque se basa en el principio de reciprocidad, que permite observar disposiciones confiables y acumular experiencias:

“Tal actitud se expresa en conductas reiteradas y reforzadas con expresiones que comunican esa confianza en discursos y en acciones de entrega del control sobre determinados bienes” (Durston, 2002).

Tercero, *comportamientos solidarios*, entendidos como “la simpatía de una persona o un grupo hacia otra persona o grupo que puede producir un beneficio potencial, una ventaja y un tratamiento preferencial para otra persona o grupo de personas más allá del esperado en una relación de intercambio” (Forni, Siles y Barreiro, 2004). Los comportamientos solidarios reflejan lealtad, fundada en cierta identificación de grupo, que potencia tratos preferenciales.

Tanto las actitudes de confianza como los comportamientos solidarios permiten hablar de capital social, si se observan dentro de la categoría de análisis apoyo social, la cual plantea la existencia de recursos asociativos que surgen en relaciones cercanas y que dotan a

las personas de un cierto respaldo emocional. Pérez y Martín, han reconocido como un tipo de apoyo social lo que llaman la ayuda percibida, aquella percepción que en situaciones problemáticas permite reconocer que hay en quien confiar y pedir apoyo (s. f.). La existencia de apoyo social en una comunidad permite analizar si existe integración comunitaria; o en el caso contrario, si prevalecen tendencias individualistas.

• Finalmente, la tercera dimensión, *capacidad para la gestión de beneficios comunitarios*, pretende identificar la capacidad de las y los vecinos de la comunidad para organizarse y gestionar conjuntamente beneficios comunes, considerando:

Primero, la *capacidad organizativa* de la comunidad, determinada por existencia de experiencias organizativas concretas, sus características, e impacto en la comunidad. Segundo, la *capacidad de influencia* de observar los nichos de influencia en una comunidad, considerando la percepción de las personas respecto de su capacidad de influencia y el tipo participación que ejecutan en la comunidad.

Tercero, la *disposición para el desarrollo de acciones cooperativas y experiencias concretas de cooperación*, entendiendo por cooperación la “*acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos de un emprendimiento común...*” (Durston, 2002:18), la cual, por una parte, enfatiza en la coordinación de esfuerzos colectivos, al reconocerse intereses comunes y desarrollarse una estrategia coordinada para el alcance de estos, y por otra parte, se reconoce la unión como la estrategia que facilita acciones y logro de objetivos comunes.

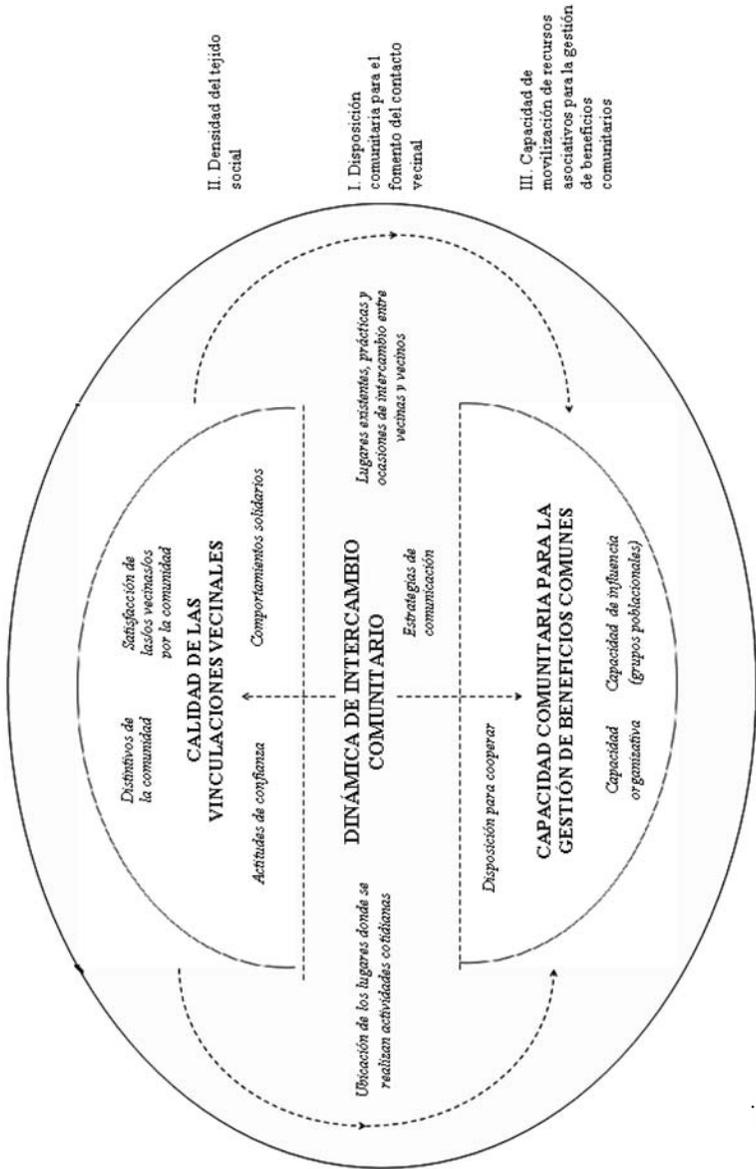
Esta última variable representa el recurso asociativo que más se destaca cuando se habla de capital social comunitario, porque es la que expresa exactamente estrategias de coordinación colectiva para el logro de beneficios comunes.

Las tres dimensiones propuestas para el análisis de las vinculaciones vecinales a escala comunitaria y sus potencialidades para el acceso a beneficios comunes, buscan brindar una perspectiva más integral de la conformación de capital social comunitario. Primero, se observa la disposición física y relacional de una comunidad para propiciar intercambios comunitarios; segundo, se

caracteriza la calidad de los vínculos para analizar la densidad del tejido social; y finalmente, se indaga la capacidad de movilización de estos recursos asociativos en la generación de acciones cooperativas que permitan finalmente el alcance de ciertos beneficios comunitarios.

A continuación, se presenta un diagrama que resume la propuesta de dimensiones para el análisis de las vinculaciones vecinales en la conformación de capital social comunitario.

Diagrama 1.
Propuesta de dimensiones de análisis de las vinculaciones vecinales desde el capital social comunitario



II. Densidad del tejido social

I. Disposición comunitaria para el fomento del contacto vecinal

III. Capacidad de movilización de recursos asociativos para la gestión de beneficios comunitarios

Fuente: Elaboración propia.

2. De la necesidad de vivienda a una comunidad. Caso de la comunidad Lagos de Lindora

La comunidad Lagos de Lindora surgió a partir de la necesidad de vivienda de varias familias provenientes (agrupadas en cinco comités de vivienda) del cantón de Santa Ana, en el contexto de la crisis habitacional que se vivió en Costa Rica a partir de los años ochenta. Entre finales de los ochenta e inicios de la década de los noventa, los cinco comités trabajaban de manera separada; no fue hasta después de que uno de ellos logró que la municipalidad del cantón les otorgara el terreno en Pozos de Santa Ana, que llegan a constituirse en una asociación, la Asociación de Desarrollo Específico de Vivienda y Mejoramiento Habitacional de Santa Ana.

Desde la obtención del terreno y la integración de la asociación, el grupo de familias, unas 250 aproximadamente, empezó a buscar opciones y gestionar acciones para acceder a vivienda social. Durante este proceso, por un lado, negociaron apoyos gubernamentales y políticos “tocando puertas”, sin recibir respuesta. También contrataron varios abogados y un topógrafo. Por el otro lado, desarrollaron actividades para la recolección de fondos, en las cuales no solo participaban todas las familias del proyecto, sino, también, vecinas y vecinos de todo el cantón de Santa Ana.

Había mucha gente que le gustaba participar y dar ideas... (Además la participación en las reuniones) era buena, a veces llevaban a los chiquitos, yo digo que era buena porque a veces eran reuniones desde las 7 de la mañana y toda la familia llegaba era como una fiesta... (Fabiola, antigua líder comunitaria, enero/2007).

A la gente le gustaba mucho venir aquí, gente de Santa Ana, de todo el cantón de Santa Ana, Piedades, todos venían, claro que hacíamos carteles y pegábamos, además pagábamos un megáfono que anunciara las fiestas... y había que sacar permiso de la municipalidad para hacer las fiestas. Íbamos a las pulperías y pegábamos carteles, pedíamos permiso en los buses de Santa Ana y como había gente que vivía por Desampa, llevaban y ponían, y se traía familiares, porque ellos tenían que participar (Flor, antigua líder comunitaria, diciembre/2006).

Puede observarse que, desde entonces, si bien la principal necesidad del grupo era el acceso a vivienda propia, alrededor de ella comienzan a tejerse un sinnúmero de expectativas y relaciones, tanto a nivel individual como grupal.

Después de casi diez años de gestiones en el caso de algunas familias, en 1995 logran iniciar el proyecto de vivienda con el apoyo de una organización no gubernamental, la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). El proceso constructivo fue ejecutado con la metodología de autoconstrucción asistida⁶, la cual requería la participación directa y organizada de las familias en el proceso, tanto en la construcción de la infraestructura de la urbanización, como de las 385 viviendas del proyecto.

“Las familias aportaban más o menos 30 horas a la semana, y se hacía un rol según quienes podían aportar y cubrir las horas. A veces el proyecto estaba abierto las 24 horas del día, porque había quienes su aporte era en la noche. Alguna gente aportaba sus horas cuidado a los niños de los que estaban trabajando, otros haciendo gestiones a fuera (...). Por ejemplo, algunos eran poco eficientes en la parte constructiva, como un muchacho que era terrible, pero era un experto en pedir plata, era limosnero, entonces lo convirtieron en gestor de recursos. Ahí (...) cada uno tenía en la empresa comunal, todo un paquete” (Antonio Benavides, ex-funcionario de FUPROVI, agosto/2006).

La construcción del proyecto duró tres años, un período muy intenso que requirió gran esfuerzo por parte de las familias y un fuerte relacionamiento entre ellas, lo cual favoreció la configuración de relaciones de vecindad.

Después de finalizado el proyecto, las familias se trasladaron a sus nuevas viviendas. Este hecho se caracterizó como un período de enfriamiento después del intenso proceso de la construcción, el cual mermó el grado de relacionamiento entre las familias y la actividad de la organización comunitaria, debido al logro de su objetivo principal.

6 “La autoconstrucción asistida (es) aquella que implica un proceso de cogestión (...), “en donde las familias, junto con FUPROVI y otros actores, de ser posible, organizan y ejecutan el proceso de autoconstrucción de sus viviendas” (FUPROVI, 2004: 5).

A continuación, se muestran algunos resultados de la aplicación del análisis de las vinculaciones vecinales en la conformación de capital social comunitario en la Lagos de Lindora, considerando los impactos del proceso constructivo del proyecto habitacional y la convivencia comunitaria ocho años después de concluido este proceso.

2.1. Cimientos del capital social comunitario en Lagos de Lindora (1995-1998)

A partir del proceso experimentado por las familias de Lagos de Lindora para la obtención de vivienda, comienzan a gestarse formas de capital social comunitario. Seguidamente, se resaltan los factores más importantes que intervinieron en su desarrollo:

Primero, durante la gestión y construcción del proyecto, el acceso a vivienda estaba condicionado a que las familias trabajaran en conjunto, lo que implicó la existencia de variadas formas de intercambio entre las familias. Durante la etapa de gestión del proyecto, las familias participaban en reuniones de la asamblea, capacitaciones preparativas para la construcción del proyecto, bailes, quioscos para venta de comida y diversas actividades para recoger fondos.

En la fase de construcción, basada en una metodología de autoconstrucción asistida, los intercambios fueron más intensos, determinados principalmente por el cumplimiento de las horas de trabajo en el terreno, prácticas religiosas y de recreación. Por ejemplo: las personas se encontraban en el bus que los trasladaba al proyecto, el comedor, las reuniones, compartían en las misas, los rezos, “las posadas”⁷. Esto generaba una dinámica de intercambio favorable al desarrollo de lazos de simpatía y amistad: *uno conoció gente ahí, era ameno, dinámico, chistoso; todo era como en familia, todos nos llevábamos bien* (Vecinas y vecinos de la comunidad, 2006).

7 Las posadas se realizan en épocas navideñas en honor de la creencia religiosa-católica sobre el recorrido de la Virgen María y José antes del nacimiento de Jesús. Las personas recorren las calles cantando villancicos y otras ofrecen bocadillos, dulces, refrescos, etc.

Segundo, aunque la organización del grupo y las vinculaciones vecinales durante las gestiones del proyecto y la construcción de este, en primera instancia, fueron motivadas por el objetivo único de obtener vivienda propia, durante el proceso constructivo las experiencias compartidas y la dinámica de intercambio favorable al desarrollo de lazos de simpatía y amistad, refuerzan el sentido de grupo configurando cierta identidad comunitaria.

Entre los datos recolectados en el estudio, se pudo observar que las familias participantes del proyecto, se identifican como familias que después de no tener vivienda propia, llegan a acceder a una solución habitacional por esfuerzos propios. Esto representa para las familias un distintivo de su comunidad, ya que durante el proyecto, el grupo no solo experimenta directamente la creación material de su urbanización y viviendas, sino que además, genera una dinámica de convivencia muy propia de grupo: *había mucha unidad; se ayudaban unos a otros; había mucho compañerismo y solidaridad; nos llevábamos bien y todo era para todos* (Vecinas y vecinos de la comunidad, 2006).

Tercero, las experiencias compartidas y la dinámica que se genera, favorecen el surgimiento de formas de apoyo social entre las personas del proyecto, como la solidaridad y la confianza. Estas formas de apoyo social crean un soporte emocional positivo (la configuración de la identidad y las relaciones de amistad por ejemplo) que facilita el desarrollo de acciones solidarias, como por ejemplo, cubrir algunas horas de trabajo.

Cabe agregar que quienes participaron del proceso llegan a ver el trabajo y compromiso de sus compañeras y compañeros para con el proyecto, delegando a las y los líderes la responsabilidad ante el proceso de gestión, y al resto de familias participantes la ejecución de la construcción del proyecto. Esto sienta las bases de una confianza difusa, que se establece en una “relación permanente y continua de intercambio y, aunque en un momento dado puede no ser equivalente, mantiene la expectativa de que los beneficios serán mutuos y, a largo plazo, equiparables” (Millán y Gordon, 2004: 726).

En cuarto lugar, la participación en el proyecto muestra a las personas que deben desarrollarse esfuerzos conjuntos para lograr los intereses comunes; es decir, se reconoce la cooperación como la

estrategia para alcanzar objetivos comunes: la vivienda. Por un lado, el grupo identifica la vivienda propia como un objetivo común, ante ello, la unión es considerada como la estrategia de acción que facilita el proceso y el logro de los objetivos, tanto desde la gestión del proyecto y la conformación de una asociación de vivienda, como durante la construcción del proyecto fundamentado en una metodología autoconstructiva.

la unión la hacemos todos, nosotros los necesitábamos a ellos, y ellos a nosotros. La gente responde bien, lo que pasa es que siempre tiene que haber una cabeza que inventa las cosas (Flor, antigua líder comunitaria, diciembre/2006)

Cabe señalar que las acciones cooperativas desarrolladas durante la construcción, se caracterizaron por la unión efectiva de esfuerzos, manifiesta en la capacidad de descentralización del liderazgo lograda en esta fase. Durante este período había una dirección global del proyecto y gestión política, también se integraron comisiones de construcción, de administración y la comisión social, y existía además la organización de quienes ejecutaban las obras constructivas. Esto fomentó la participación activa de quienes representaban a las familias durante el proyecto.

Finalmente, en quinto lugar, es importante destacar que el proyecto Lagos de Lindora se caracterizó por la fuerte presencia de mujeres durante la gestión y construcción del proyecto. Este protagonismo femenino las hace enfrentarse con marcos patriarcales que suelen no reconocer la capacidad de ellos en distintos ámbitos de acción, como el proceso constructivo y el ejercicio del liderazgo en un proyecto de vivienda. El proceso les permitió empoderarse y asumir un papel central en la satisfacción de su necesidad de vivienda propia; pero además, las hace protagonistas de la dinámica comunitaria creada más allá del proceso constructivo. De esta forma, las mujeres son las que tienen mayor disposición para generar capital social comunitario, no solo porque establecen mejores y más frecuentes intercambios, sino que además son las que adquieren durante el proceso mayor capacidad de gestión .⁸

8 Durante el proyecto, las mujeres tuvieron liderazgos importantes, participaron en la construcción y otras actividades como la creación de una panadería. Además, fueron las principales reproductoras de prácticas religiosas favorables al intercambio comunitario.

Estos antecedentes del proceso resultaron clave para sentar las bases y desarrollo de capital social comunitario. Demuestran, además, el logro de la vivienda y configuración de la comunidad como el beneficio resultante de la movilización de capital social comunitario de 1995-1998.

3. Lagos de Lindora ocho años después

El proyecto habitacional fue elaborado para 385 familias y considerando un promedio de 4,6 miembros por hogar habría 1.771 personas en el 2003 (Grundström, 2006); no obstante, algunas familias extendieron su vivienda y han alquilado secciones de esta. Según Grundström⁹, en el 2003, un 50,6% de la población de Lagos de Lindora eran mujeres; las niñas y niños de 12 años o menos, representaban un 25% de la población; un 13% eran adolescentes y 13,4% jóvenes mayores de 18 años (2006). Además, según datos recogidos por una de las líderes comunitarias, actualmente hay en Lagos de Lindora más de 100 personas adultas mayores (Guzmán, 2006).

Los ingresos de las familias continúan siendo bajos. Se registraron en promedio ingresos menores a dos salarios mínimos¹⁰ (¢100.000 la media), con extremos de entre ¢20.000 y ¢500.000 (Grundström, 2006:79-80). Este ingreso registrado parece estar influido por el bajo grado de escolaridad de muchas de las personas jefas de hogar, ya que un 59% tiene solo estudios primarios (Grundström, 2006:77-78). Además, la mayoría de las mujeres de la comunidad trabajan en el hogar sin salario (52,3%) y un 11,33% se desempeñaba en servicios de oficio doméstico. Los hombres, por su parte, se ocupaban principalmente en construcción (22%), como transportistas/choferes (17%), en servicios de seguridad (12%), y trabajo técnico (12%) (Grundström, 2006:79).

9 Grundström censa, en el 2003, 300 familias en Lagos de Lindora y ante esto se estiman los datos de población e ingreso señalados en este artículo.

10 El salario mínimo en el 2003 fue de ¢85.385 (Programa Estado de la Nación, 2004).

Ocho años después de finalizado el proyecto Lagos de Lindora, se analizaron de nuevo las formas de vinculación vecinal y las potencialidades de estas en la obtención de beneficios comunitarios; teniendo en consideración que, aunque las familias de la comunidad mejoraron su calidad de vida por el acceso a una vivienda propia, continuaron siendo vulnerables por el bajo ingreso e inestable acceso laboral.

3.1. Transformaciones en el capital social comunitario

Ocho años después de finalizada la construcción del proyecto, se encuentra que los intercambios entre vecinas y vecinos ya no están determinados por el proyecto de vivienda, sino que ahora se definen por las características de la vida cotidiana. Estos cambios determinan las diferencias en la forma en que se presenta el capital social comunitario en Lagos de Lindora, debido a que, como decía Lechner, el capital social es un flujo que cambia según las variaciones históricas, las cuales impactan tanto en la composición de la estructura social, como en su dinámica interna y en la dinámica del contexto mediato e inmediato de dicha red.

• Nuevos determinantes del capital social comunitario

La dinámica de intercambio y por consiguiente el capital social comunitario en Lagos de Lindora, ocho años después de finalizar la construcción del proyecto, se encontraba condicionada principalmente por cuatro factores.

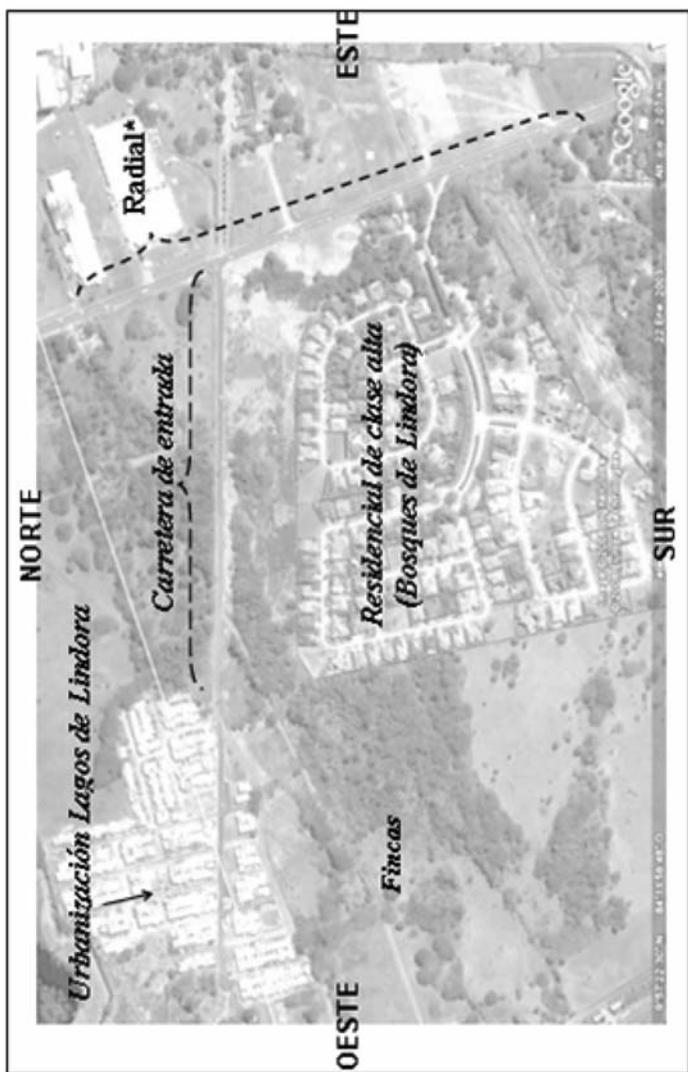
Primero, el contexto inmediato en el que se inserta la comunidad se ve determinado por un creciente desarrollo urbano, ya que esta se ubica a un costado de la radial que conecta el cantón de San Antonio de Heredia, con el de Escazú, cantón de San José. Esta zona se ha caracterizado por el desarrollo relativamente reciente de amplias zonas francas de la venta de servicios, comerciales y residenciales, principalmente dirigidos a familias de ingresos medios altos y altos, nacionales y extranjeros.

Los servicios de salud, educación, el comercio, la iglesia y las sedes de entidades gubernamentales más accesibles a la población de

Lagos de Lindora está a unos tres kilómetros, en los centros de los cantones de Santa Ana y Belén. La accesibilidad a estos depende en su mayoría del transporte público, cuyo servicio es constante.

Estas características del contexto han definido límites físicos y subjetivos-identitarios entre el este y la comunidad. Por un lado, el crecimiento del espacio físico mantiene de cierta forma aislada a la comunidad. La carretera, de aproximadamente más de 300 metros, que entra en la urbanización, es la única que conecta a Lagos de Lindora con la radial donde se encuentran estas actividades. Por otro lado, las actividades comerciales y de servicios que prevalecen en el contexto promocionan prácticas de consumo orientadas a sectores de altos ingresos, por lo que las familias de la comunidad tienen un acceso limitado a estas, perfilándose así los límites subjetivos-identitarios. En el siguiente mapa puede observar la ubicación de la comunidad en su contexto inmediato.

Mapa del contexto del contexto inmediato donde se ubica la comunidad Lagos de Lindora (2003)



* Las actividades comerciales (supermercados, bancos, comercios, restaurantes, bares), el Forum 2 (zona franca) se encuentran a ambos extremos de la radial, camino a Escazú.

Fuente: Google Earth. Enero, 2003. Anotaciones de elaboración propia.

Como consecuencia de lo anterior (la delimitación física y subjetiva de la comunidad), y de la poca oferta de servicios y comercio que hay en la comunidad (la cual solo cuenta con una escuela primaria, y pequeños comercios como pulperías, salones de belleza, etc.) en Lagos de Lindora hay muy poca entrada de personas ajenas a la comunidad. Estos aspectos propician que en la comunidad se genere una dinámica interna particular, sin la intervención de muchos factores externos a esta. Además, este cierre facilita la comunicación comunitaria: *todo se sabe aquí en Lagos de Lindora; es muy pequeña* (Vecinas y vecinos de la comunidad, 2006).

Segundo, la dinámica de la comunidad era fuertemente condicionada por la presencia de mujeres, población joven, adolescente y adulta mayor, debido a que son quienes permanecen más tiempo en la comunidad. Por un lado, según Grundström, en Lindora solo aproximadamente un 33% de las personas adultas censadas trabajaban, en el 2003, fuera de la comunidad, mientras que un 12,6% tenía su trabajo (renumerado) en Lagos de Lindora, lo cual se suma a un 55% que dijo no trabajar renumeradamente (casi todas mujeres amas de casa no renumeradas) y que por ello permanece principalmente en la comunidad; por otro lado, las niñas, los niños y adolescentes, después de los estudios regresan a la comunidad; y las personas adultas mayores gastan la mayoría de su tiempo en ella. Por tales motivos, destaca que son las mujeres, adolescentes, niñas, niños y personas adultas mayores las que más disposición tienen para el capital social comunitario.

Tercero, ocho años después de finalizada la experiencia de la construcción del proyecto habitacional, en Lagos de Lindora permanece el reconocimiento de una historia común, relacionada con el proceso de autoconstrucción. Cabe destacar que la memoria histórica que prevalece en la comunidad, cargada del significado del proceso experimentado desde hace más de ocho años, logró ser legada oralmente, a las personas jóvenes, adolescentes y otras que no participaron del proceso autoconstructivo, gracias a la existencia de una comunicación oral. Esto se mantiene por lo tanto como distintivo de esta comunidad, y continúa siendo un referente de la capacidad comunitaria para el trabajo conjunto.

Cuarto, en la comunidad hay contactos frecuentes entre las y los vecinos, a partir de las muchas y variadas prácticas, lugares y ocasiones de intercambio social legítimo que existen, las cuales se muestran en la siguiente tabla.

Cuadro 1.
Formas institucionalizadas de intercambio
de la dinámica cotidiana de las y los vecinos
de la comunidad, 2006.

Momento	Formas institucionalizadas de intercambio	Clasificación
Ocho años después del proyecto habitacional	Misas y cultos	Lugar/práctica
	Rezos en casa de vecinas	Lugar/práctica
	Andar con <i>compas</i> por el vecindario	Lugar/práctica
	Fiestas del adulto mayor	Práctica
	Conversar, chismear, vacilar	Práctica
	Jugar <i>fut</i> , <i>play station</i>	Prácticas
	Bingos	Ocasión
	Actividades del 15 de Septiembre	Ocasión
	Fiestas patronales	Ocasión
	Chicharronadas	Ocasión
	Viaje en bus	Práctica
	Salón comunal	Lugar
	Calle principal	Lugar
	Esquinas de las casas	Lugar
	Parada de autobuses	Lugar
	Parques	Lugar
Escuela	Lugar	
Colegio	Lugar	

Fuente: Soto (2008). *Vinculaciones Vecinales y Capital Social: el caso de la comunidad Lagos de Lindora, Pozos de Santa Ana. (1995-2006)*. Tesis de Licenciatura en Sociología. Universidad de Costa Rica.

Esto demuestra la existencia de una disponibilidad positiva para el intercambio en la comunidad, porque favorece el desarrollo el contacto entre vecinas y vecinos, y la vivencia de experiencias compartidas (como el diálogo y saludo cotidiano, los pequeños favores, proyectos como el asfaltado de las calles, etc.), reproduciéndose así sentimientos de simpatía.

Y quinto, en la comunidad existen diversas organizaciones comunitarias que demuestran la capacidad organizativa que hay. En ellas se gesta capital social grupal, que fomenta la existencia de capital social comunitario, no solo porque muestra capacidad de organización y gestión comunitaria, sino, además, porque permiten el reconocimiento de la unión de esfuerzos para el logro de objetivos comunes. Cabe señalar además que las agrupaciones favorecen la comunicación comunitaria, y constituyen motores de proyectos comunitarios, principalmente la Asociación del Adulto Mayor, la escuela y la Asociación de Desarrollo. En el siguiente cuadro se muestran algunas de las organizaciones que existen en Lagos de Lindora:

Cuadro 2.
Agrupaciones comunitarias existentes
en Lagos de Lindora

Agrupación	Actividades
<i>Asociación del Adulto Mayor</i>	Liderada por mujeres hacen actividades recreativas para personas adultas mayores cada quince días, como paseos, bingos, fiestas; les toman la presión; promocionan la participación en actividades cantonales, como las Olimpiadas del adulto mayor.
<i>Asociación de Desarrollo Específica Pro-mejoras Lagos de Lindora</i>	Es la encargada de gestionar y desarrollar mejoras para la comunidad. En el 2006 gestionaron con la municipalidad la construcción de una guardería y un polideportivo; terminaron el salón comunal; gestionan con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el tratamiento de aguas negras, e impulsaron una banda comunal.
<i>Escuela y grupos relacionados con ella</i>	Recolectan fondos para la escuela (bingos, rifas). Promueven actividades donde participa la comunidad y es un canal de información comunitaria.
<i>Agrupaciones religiosas:</i>	
- Asociación pro construcción del templo	Gestiona la construcción de un templo católico en la comunidad.
- Comité de la iglesia (Divino Niño), Comité de pastoral social, Matrimonios de Cristo	Unos administran la capilla de Lagos de Lindora y propician la reunión de vecinas y vecinos creyentes para trabajar temas específicos de su competencia.
- Grupos de oración (<i>cenáculos (oración en casa), grupo de muchachas REDIL, Grupo AGLOW, y un grupo de oración adventista</i>)	Se reúnen en casas para orar y propician la reunión principalmente de vecinas de la comunidad.
- Una iglesia bautista	Convoca a veces a toda para discutir temas de interés común.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Soto (2008).

• **Expresiones de capital social comunitario y beneficios comunitarios**

Considerando los cinco factores reseñados como determinantes del desarrollo de capital social comunitario, ocho años después de finalizada la urbanización y las viviendas, el capital social comunitario puede verse expresado: por un lado, en la calidad de las vinculaciones vecinales, las cuales dotan a las y los vecinos de cierto apoyo social; y por otro lado, en la disposición hacia la cooperación y experiencias concretas que les permitieron acceder a beneficios comunitarios.

En primer lugar, entre los resultados del estudio se halló que la mayoría de las y los informantes mostraban actitudes de confianza hacia sus vecinas y vecinos, las cuales estaban determinadas principalmente por la cercanía de la residencia, la existencia de sentimientos de simpatía, la existencia de grupos de referencia como las amigas, el grupo de personas adultas mayores, y el desarrollo de actitudes solidarias entre vecinas y vecinos. Estos determinantes facilitan la confianza porque propician interacción, y por lo tanto el comportamiento de las otras personas vecinas puede ser más fácilmente reconocido.

Estas actitudes se hallaban sobre todo en relaciones unidireccionales, cuyos beneficios son principalmente individuales. No obstante, la confianza como un recurso individual constituye bases esenciales para el desarrollo de actitudes de confianza a nivel comunitario porque: favorece el mantenimiento de relaciones vecinales armoniosas, creándose así un ambiente comunitario, el cual se reafirma al identificar en el estudio que más de la mitad de las y los informantes se sienten seguros en la comunidad a toda hora, y que la inseguridad que se comienza a presentar un asunto de eventos puntuales, recientes y que provienen de “afuera” (Soto, 2008):

En Lagos de Lindora hay como una seguridad interna, como ahí todos se conocen, reconocen al extraño (Antonio Benavides, ex funcionario de FUPROVI, agosto/2006).

Los que roban no son de aquí; es gente que viene a hacer daño, pero no son de aquí (Vecinas y vecinos de la comunidad, 2006).

En segundo lugar, los sentimientos de simpatía, actitudes de confianza y memoria histórica que reflejan el mantenimiento de cierta identidad comunitaria, y esto contribuye a que las y los vecinos ejerzan entre ellos acciones solidarias, las cuales, a su vez, retroalimentan la confianza, por medio de la presencia del sentido de reciprocidad. En el estudio se encontró que un 80% de mujeres y hombres de diferentes edades había hecho algún favor a sus vecinas y vecinos recientemente, tales como (Soto, 2008):

Regalan pan, zapatos; me prestan platilla; cuida la casa, las llaves de la casa, al niño de vecino; prestan herramientas, arroz, me regalan comida; recogen de la escuela al niño del vecino; vienen y me traen galletitas; me llevaron a la clínica cuando estaba enferma; hacen mandados; corrí unos ladrones; Ayudaron a pasarme de casa; me ayudan a estudiar (Vecinas y vecinos de la comunidad, 2006).

Estas acciones muestran una dinámica comunitaria armoniosa, cargada de un apoyo social entre vecinas y vecinos, durante momentos especiales y la vida cotidiana. Las y los vecinos de a la par, el grupo de amigas y amigos, el grupo del rosario, el grupo de adultos mayores, entre otros, se convierten de esta forma en espacios de seguridad emocional, porque al establecer lazos fuertes como la amistad, se sienten bien e identificadas con las otras y otros, favoreciendo la solidaridad entre ellos. Esto, aunque conlleva a beneficios individuales, difunde por la comunidad un sentido de apoyo social cotidiano, y por tanto, se considera una expresión del capital social comunitario.

En tercer lugar, el estudio mostró que en un 83,3% de las y los informantes había sentimientos de satisfacción por la comunidad, principalmente debido al ambiente comunitario, el tipo de vinculaciones vecinales, y la existencia de una historia común que permite recordar la experiencia de construcción del proyecto y con ella la capacidad de trabajo del grupo (Soto, 2008). Esto genera disposiciones positivas de parte de las vecinas y vecinos para trabajar por el bienestar de la comunidad: *Me gusta hacer algo para Lagos de Lindora* (Vecina adulta mayor, 2006).

Las formas de sentir mencionadas definen las bases de acciones cooperativas desarrolladas en la comunidad, y se han visto reflejadas

y reforzadas en emprendimientos específicos de trabajo conjunto a escala comunitaria, que a su vez han conllevado al acceso de beneficios comunitarios, tales como los que se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.
Emprendimientos específicos de trabajo conjunto
a escala comunitaria

Iniciativa	Acciones cooperativas
Construcción de la escuela	Dos mujeres líderes gestionaron apoyos, y muchas familias participaron construyéndola y pintándola.
El asfaltado de las calles	Años después del proyecto, por sectores las familias gestionaron apoyos externos, hicieron reuniones de coordinación, actividades de recolección de fondos, como chicharronadas para asfaltar calles. Las/los jóvenes participaron.
Cambio del servicio de buses	Ante la insatisfacción con el servicio de buses, identificaron posibilidades de solución, plantearon la queja y recolectaron firmas.
Arreglo del parquecito y limpieza de caños y de otros parques	Aunque no siempre atiende a una estrategia de acción sistemáticamente coordinada, pero las familias participan ocasionalmente, de manera conjunta (participan niñas y niños), para el mejoramiento del entorno barrial.
Planta de tratamiento	La junta directiva de la Asociación gestiona que el AyA se encargue de tratar las aguas residuales ¹¹ . El resto de vecinas y vecinos apoya dando cuotas mensuales para darle mantenimiento, en la limpieza y dando a conocer el problema.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Soto (2008).

En términos generales, la comunidad Lagos de Lindora se ha caracterizado por el emprendimiento de numerosos proyectos de trabajo conjunto, que les implicó el reconocimiento de la cooperación

11 El suelo arcilloso del terreno requirió de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual ha sufrido robos. Esto es problemático para la comunidad, porque contamina al río Virilla que pasa detrás de la urbanización, puede acarrear problemas de salud, y limita el desarrollo de actividades comunales.

como estrategia para el logro de los objetivos. Estas experiencias se ven reforzadas por la existencia de vinculaciones vecinales cargadas de lazos fuertes, una disposición positiva hacia la comunidad, tendiente a ser generalizada, pero principalmente percibida en las mujeres, las y los adolescentes, y las personas adultas mayores.

4. Consideraciones finales

La aplicación del modelo de desarrollo de apertura en el país ha llevado a que se dé cada vez más un traslapeo entre lo público y lo privado en la canalización de las demandas sociales, entre estas, la generación de soluciones de vivienda. Se ve así que al introducirse paulatinamente la lógica de mercado en el proceso de satisfacción de las necesidades sociales, las familias de bajos ingresos enfrentan importantes limitaciones. Ante ello, la organización para el desarrollo de estrategias de cooperación entre vecinas y vecinos, y la capacidad de gestión de alianzas y de recursos, se convierten en una de las principales herramientas para acceder a la satisfacción de las necesidades por parte de estos grupos, tal y como lo fue en el caso de la comunidad Lagos de Lindora.

El antecedente del desarrollo de un proyecto habitacional por autoconstrucción asistida conllevó en la comunidad Lagos de Lindora, no solo una disposición positiva de las y los vecinos para el desarrollo de acciones cooperativas, como estrategia para el logro de beneficios de interés comunal, sino, también, la configuración de un tejido social fuerte. Ambos aspectos han resultado determinantes ocho años después para la evolución del capital social comunitario, fortalecido por las experiencias de convivencia vecinal y la disposición física-espacial de la comunidad en su entorno inmediato, caracterizado por un cierto grado de segregación socioresidencial, económica y simbólica.

A partir del desarrollo y fortalecimiento del capital social comunitario en Lagos de Lindora, se logró reconocer la existencia de distintos tipos de beneficios para la comunidad. Por un lado, aquellos relacionados con el logro de objetivos específicos de un emprendimiento común, como la obtención de vivienda, la escuela, el asfaltado de las calles, el mejoramiento del servicio de transporte

y la mejoría de su entorno; y por otro lado, beneficios que no necesariamente fueron perseguidos intencionalmente como el desarrollo de relaciones vecinales armoniosas, un ambiente comunitario tranquilo, respaldo emocional que favorecen la existencia de sentimientos de seguridad, y la ayuda solidaria en la vida cotidiana.

Pudo observarse así que la utilización del concepto capital social, permitió enfatizar en la importancia de los vínculos sociales como medios que pueden facilitar la obtención de beneficios materiales y socioculturales a escala comunitaria, mostrando la existencia de beneficios no de orden económico que favorecen a la satisfacción de algunas necesidades comunitarias. Ahora bien, debe reconocerse que Lagos de Lindora, a pesar de su capital social comunitario, no logra superar la condición de vulnerabilidad y desigualdad social que experimenta, evidenciada en el contexto segregado donde se ubican.

Cabe agregar que la naturaleza económica de donde surge y se desarrolla el concepto, puede llevar a que no se reconozca la existencia de beneficios que no son cuantificables, y por lo tanto, no se consideren como beneficios aquellos que solo cualitativamente pueden ser percibidos, principalmente en el análisis de dinámicas comunitarias. En este sentido, se considera que en el análisis de estructuras sociales desde el concepto de capital social, el abordaje debe seguir principalmente un enfoque cualitativo, y si es de interés acompañarlo de un respaldo cuantitativo.

El análisis de las vinculaciones vecinales en Lagos de Lindora permitió constatar que el desarrollo de capital social comunitario está determinado por el contexto de la estructura social, las particularidades históricas de la comunidad, y la dinámica interna de intercambio que le permite acumular experiencias, como lo planteaba Coleman. No obstante, cabe agregar que la dinámica interna de intercambio requiere la identificación de los diferentes grupos sociales de una estructura social. Por ejemplo, en Lagos de Lindora por las mujeres, adolescentes y adultos mayores facilitan el desarrollo de capital social comunitario, no así los hombres. Por ello, es importante desarrollar abordajes que consideren al menos las variables poblacionales que más destacan en una comunidad.

Finalmente, debe señalarse que el marco de abordaje propuesto permitió reconocer el desarrollo de capital social comunitario de una manera un poco más integral. Por un lado, permite identificar la disposición física-relacional que tiene una comunidad para que se den intercambios vecinales, ya sea que los favorezca o por el contrario, favorezca al individualismo; por otro lado, facilita el análisis del tipo de vínculos vecinales que hay para determinar la calidad del tejido social y los beneficios que estos permiten alcanzar o potenciar; y finalmente, reconoce la capacidad de gestión comunitaria para el logro de objetivos comunes.

Bibliografía

Arriagada, Miranda y Pavez (2004): “Lineamientos de acción para el diseño de programas de superación de la pobreza desde el enfoque del capital social”. En **Guía conceptual y metodológica CEPAL**. Serie Manuales. N.º 36. Chile.

Atria (2003). “Capital social: concepto, dimensiones y estrategias para su desarrollo” en Atria, Siles, Arriagada, Robinson, Whiteford (comp.): **Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe.: en busca de un nuevo paradigma**. (Cap. XIX. Sexta Parte). CEPAL/Michigan State University.

Aulas Unidas de Argentina (2005). “Acerca de la identidad individual, social y comunitaria”. Documento de trabajo. Página de acceso: www.educared.org.ar/aua/2005/links_internos/propuesta2005/documentos/02_Sobre_la_identidad.pdf (Consulta febrero/2007). Inédito.

Bourdieu (1999): **Las formas de capital**. Traducido por Rubén Urbizagástegui. Editorial Piedra Azul. Perú.

Coleman (1988): “Social capital in the creation of human capital”. En *The American Journal of Sociology*. Volumen 94, Number s1, January 1988 Supplement.

Durston (1999). “Construyendo capital social comunitario”. En **Revista de la CEPAL**. N.º 69. Página de acceso: <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/5/19255/P19255.xml&xsl=/revista/tpl/p39f.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom.xsl> (Consulta marzo/2006).

Durston (2000). ¿Qué es capital social comunitario? En **Serie Políticas Sociales**. N.º 38. CEPAL. Santiago de Chile, Chile.

Durston (2001): “Parte del problema, parte de la solución: el capital social en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Inédito.

Durston (2002): **El Capital Social Campesino en la gestión del desarrollo rural: díadas, equipos, puentes y escaleras**. CEPAL. Santiago de Chile. Chile.

Durston y Miranda (2001): Capital Social y Políticas Públicas en Chile: Investigaciones recientes. Volúmenes 1 y 2. Serie 55 (Políticas Sociales). CEPAL/ECLAC. Santiago de Chile, Chile.

Página de acceso:

www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/6/LCL1606P/lcl1606_vol-I.pdf (Consulta enero/2006).

INEC (2007). **Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples**. Costa Rica.

Ferranti, Perrey, Ferreira y Walton (2004): **Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?** Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe.

Fordi, Siles y Barreiro (2004): “¿Qué es el capital social y cómo analizarlo en contextos de exclusión y pobreza. Estudios de caso en Buenos Aires, Argentina?” en **Research Report**. N.o 35, Dic. 2004. Página de acceso: <http://www.jsri.msu.edu/RandS/research/irr/r35.html> (Consulta enero/2006).

FUPROVI (2004): Sistematización y propuesta de fortalecimiento del modelo de intervención social. FUPROVI. San José, Costa Rica.

Google Earth (2007).

Granovetter (2005). The Impact of Social Structure on economic outcome. En **Journal of Economic Perspectives**. Vol. 19, N.o 1.

Página de acceso:

[http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.stanford.edu/dept/soc/people/faculty/granovetter/granovet.html&prev=/search%3Fq%3DGranovetter,%2BMark%2B\(1985\),%2B%25E2%2580%259CEconomic%2BAction%2Band%2BSocial%2BStructure:%2Bthe%2BProblem%2Bof%26hl%3Des%26lr%3D](http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.stanford.edu/dept/soc/people/faculty/granovetter/granovet.html&prev=/search%3Fq%3DGranovetter,%2BMark%2B(1985),%2B%25E2%2580%259CEconomic%2BAction%2Band%2BSocial%2BStructure:%2Bthe%2BProblem%2Bof%26hl%3Des%26lr%3D) (Consulta abril/2006).

Grundström (2005): *Space, activities and gender. Everyday life in Lindora, Costa Rica*. Lund Institute of Technology. Suecia.

Kliksberg (2000): “Capital social y cultura, Claves olvidadas del desarrollo”. En **Documento de Divulgaciones**. N.º 7. INTAL/BID. Página de acceso: <http://www.iadb.org/intal/publicaciones/kliksberg.pdf> (Consulta marzo/2006).

Lechner (1999): “Desafíos de un desarrollo humano: Individualización y capital social”. Contribución al Foro Desarrollo y Cultura organizado. Asamblea General del BID, Paris, Francia. Página de acceso: www.iigov.org/id/index.drt?edi=187626 - 28k (Consulta Febrero/2006).

Millán y Gordon (2004): “Capital social: una lectura de tres perspectivas clásicas”, en **Revista Mexicana de Sociología**, año 66, N.º 4, Oct.-Dic. 2004. Universidad Nacional Autónoma de México. México D. F.

Miranda (2003): “Relatoría final del seminario”. En Arriagada y Miranda (comp.) **Capital social: potencialidades analíticas y metodológicas para la superación de la pobreza**. Seminario “Capital social, una herramienta para los programas de superación de la pobreza urbana y rural” (8-9/enero/2003). Panel 5. CEPAL Serie: Seminarios y conferencias, N.º 31. Santiago de Chile. Página de acceso: http://www.cepal.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/9/LCL1969P/Panel5_SPS31.pdf (consulta febrero/2007).

MIVAH (2006): 2005-2006. Programa de Erradicación de Tugurios. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Página de acceso: <http://196.40.61.220/Habitat%20for%20Humanity%20Website%20Template/Manuals/Ministerio%20de%20vivienda%20por%20Rudy%20P..ppt> (Consulta septiembre/2006).

MIDEPLAN (2007): **Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010**. San José, Costa Rica.

Pérez y Martín (s. f.) “El apoyo social”. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Documento electrónico. Página de acceso: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_439.htm (Consulta abril/2007).

Pérez y Cordero (1994): **Sarchí: Artesanía y Capital Social**. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede Costa Rica. San José, Costa Rica.

Pérez, Rivera, Cordero y Morales (2000): **Encuentro inciertos: Globalización y territorios locales en Centroamérica**. 1.a ed. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Sede Costa Rica. Costa Rica.

Pérez (2006): “Globalización, comunidad de vecindad y desigualdades sociales. Propuestas analíticas desde las realidades centroamericanas”. Ponencia para el *Andrew W. Mellon Sawyer Seminar* sobre “*Globalizing the Americas: World Economies and Local Communities*”. Toronto, Canadá.

Portes y Landolt (1996): "The Downside of Social Capital". *En The American Prospect*. N.o 26. Página acceso: www.prospect.org/ (consulta febrero/2007).

Programa Estado de la Nación (2004): **Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible**. Décimo Informe. 1.a ed., San José, Costa Rica.

Programa Estado de la Nación (2008): **Informe del Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible**. Tercer Informe. San José, Costa Rica.

Putnam (1993) “*The Prosperous Community. Social Capital and Public Life*”. *In The American Prospect*. Volumen 4. N.o 3. Página de acceso: www.prospect.org/print/V4/13/putnam-r.html (consultada en diciembre del 2006).

Robinson, Sumid, y Siles (2000): *Is social capital really capital?* Conferencia regional de CEPAL y Universidad del Estado de Michigan: Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. Septiembre/2001. Página de acceso: <http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/3/7903/robison-siles2409.pdf> (Consulta marzo/2007).

Soto (2008): Vinculaciones vecinales y capital social: el caso de la comunidad Lagos de Lindora, Pozos de Santa Ana, 1995-2006. Tesis de Licenciatura en Sociología. Universidad de Costa Rica.

Entrevistas realizadas:

Entrevistas estructuradas aplicadas a 36 vecinas y vecinos de la comunidad Lagos de Lindora, en 2006.

Señor Antonio Benavides, ex funcionario de FUPROVI, agosto del 2006.

Señora María Luisa Chacón. Líder comunitaria, agosto de 2006

Señora Rosa Carmona. Líder comunitaria, diciembre de 2006.

Señoras Zayda Valverde y Rosaura Guzmán. Líderes comunitarias, diciembre de 2006.

Señora Felicia Céspedes. Ex líder comunitaria, enero de 2007.

RESEÑAS

Céspedes, Víctor Hugo y Jiménez, Ronulfo (Editores). 2007
*Distribución del Ingreso en Costa Rica:
1988 – 2004. IV Jornada anual de la Academia
de Centroamérica.* San José, Costa Rica

Cuando hablamos del tema de distribución del ingreso, no estamos hablando necesariamente de un tema de moda o de gusto generalizado, pero sí de un tema que levanta pasiones, y, sobre todo, que nos demanda la necesidad de discutir sobre la estrategia país. Esto, porque la distribución del ingreso es uno de los ejes fundamentales del desarrollo, al igual que las condiciones de inserción en el mercado laboral y la productividad. El análisis de sus indicadores permite entender efectos y causalidades del proceso de desarrollo.

En ese sentido, la reciente publicación de la Academia de Centroamérica sobre la distribución del ingreso en Costa Rica, en la cual se aprovechan los datos que arrojan las Encuestas de Ingresos y Gastos para los años 1988 y 2004, es un texto que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que como país se han venido tomando y que muestran unos resultados muy positivos en términos de creación de riqueza, pero otros no tan halagüeños en la distribución de esta.

Esta publicación es el resultado de la IV Jornada Anual de Reflexión y Análisis de la Academia de Centroamérica. Las otras tres jornadas versaron sobre el Cambio Demográfico, la Agricultura en el Desarrollo, y la Pobreza. Retos varios que se ha propuesto este centro de investigación, para conversar sobre algunos de los principales

problemas económicos y sociales del país. Asimismo, uno de los objetivos implícitos de estas jornadas, es crear y compartir conocimiento y generar una mayor ocupación resolutive sobre las diferentes temáticas.

El documento ha sido dividido en tres secciones, referentes a las sesiones de trabajo de la jornada. La primera de ellas integra tres diferentes capítulos, iniciando con un análisis de los principales rasgos del proceso de desarrollo de la economía costarricense. En este capítulo, Thelmo Vargas hace un esfuerzo de exposición con un gran contenido analítico, pero de fácil asimilación. Este nos deja un panorama claro de decisiones y caminos tomados en el proceso de desarrollo del país. Como parte de su análisis, destaca el rol de una buena política económica para coadyuvar en la competitividad del país y crear oportunidades de empleo bien remunerado.

En el siguiente capítulo, se realiza la presentación del abordaje teórico-conceptual, referente al tema de la distribución del ingreso. A partir de una exposición magistral, se va guiando a los lectores hacia un mejor entendimiento de la temática, sus alcances y limitación en términos de medición y análisis. Lo anterior es un gran logro dentro del documento y es un capítulo que aporta conocimientos muy valiosos para quienes deseen realizar una medición de la distribución del ingreso en otros países. De esta forma, Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez aportan su experiencia práctica en referencia a la medición del ingreso, la cual se hace patente en el capítulo tres, donde estos autores realizan un análisis de la desigualdad en la distribución del ingreso en Costa Rica durante el periodo 1988-2004. Entre sus principales hallazgos, se destaca el que la distribución del ingreso para los perceptores en el año 2004 es más desigual que en el 1988; situación a la que contribuye, en buena medida, la desigualdad generada por las diferencias de ingreso de los trabajadores según nivel de educación.

La segunda sección nos presenta un texto de Juan Diego Trejos, quien -con la rigurosidad metodológica que le caracteriza-, hace un análisis del impacto del gasto público en la distribución del ingreso en el país. Este capítulo, esta orientado a responder la pregunta sobre ¿A quién beneficia el gasto público social en Costa Rica? Este se inicia con una conceptualización del gasto público social y su

cálculo. Posteriormente, se ahonda en detalles la asignación de ese gasto público social, para terminar con el análisis de la distribución de este y su progresividad o regresividad. Como resultado de su análisis, se muestra la reducción de la desigualdad a partir del gasto social en los programas sociales; no obstante, este efecto es insuficiente para revertir el incremento de la desigualdad en la distribución de los ingresos de las familias costarricenses. A partir de los hallazgos, el autor propone algunas áreas de acción; una de ellas se refiere a la reducción del subsidio implícito en los sistemas de pensiones contributivas; otra tiene que ver con la necesidad de mejorar la cantidad y calidad del gasto social dirigido a la creación y protección de las capacidades básicas de las personas; y por último, el mejoramiento en el alcance de los programas dirigidos a los grupos vulnerables. Todas estas, dirigidas a tener un impacto estructural sobre la disminución de la desigualdad y la eficiencia del gasto público social.

El último capítulo de esta publicación se presenta como el resultado de la tercera sesión de análisis de esta jornada. En este, Mylena Vega procura atender un cuestionamiento a uno de los baluartes del proceso de desarrollo costarricense, el cual hace referencia a la desaparición de la clase media. A partir del análisis de la evolución de las clases sociales en Costa Rica, la autora revela una clase media que aumenta en tamaño y que no se hace más pobre. No obstante, ello se da en un marco de una sociedad cada vez más segmentada y polarizada en los ingresos.

Como un valioso aporte al documento y al análisis realizado en cada uno de los capítulos, se incorporan los comentarios de investigadores y estudiosos de la problemática nacional. Este ejercicio forma parte del formato de cada una de estas Jornadas de Análisis y Reflexión de la Academia de Centroamérica. Así, los tres capítulos de la primera sección incluyen los comentarios de Jorge Vargas Cullel y Ennio Rodríguez. Por su parte, el mismo Ennio Rodríguez junto con Eduardo Doryan, Ronulfo Jiménez y Eduardo Lizano, comentan el documento presentado por Juan Diego Trejos. En la última sección, la autora de ese capítulo, Mylena Vega, cuenta con los comentarios de Constantino Urcuyo, Eduardo Lizano y Kevin Casas. Los diferentes comentaristas, además de sus apreciaciones,

hacen un aporte particular en cuanto a nuevas preguntas y temas de investigación, referidos al estudio de la distribución del ingreso, que ampliarían el alcance de la temática y su dinámica e interrelaciones en el marco del proceso de desarrollo, así como generar aportes en términos de lineamientos de política.

Keynor Ruiz Mejías
CINPE – UNA
Costa Rica

CAMUS, Manuela (Editora) 2007. *Comunidades en movimiento. La migración internacional en el norte de Huehuetenango*. CEDFOG – INCEDES, Guatemala, 223 pp.

Me parece que lo central del libro es demostrar que las comunidades y la comunidad en sí, tienen movimiento. Si la etnografía de los años 30 y 40 reportaba un predominio de comunidades cerradas para el área mesoamericana, la etnografía de inicio del siglo 21 reporta todo lo contrario; comunidades que negocian todo el tiempo con sus fronteras, híbridas en sus referentes simbólicos e identitarios. De manera que surge la pregunta: ¿es acaso que las comunidades indígenas del norte de Huehuetenango están teniendo “nuevos” referentes en su construcción comunitaria por medio de nuevos procesos migratorios?, ¿cómo el flujo entre lo global y lo local está reconfigurando el marco simbólico de identidad tradicional de estas comunidades?

Para tratar de responder a esta interrogante, el libro está dividido en tres partes. Una primera que trata sobre las transformaciones en las “comunidades históricas”¹. Una segunda parte aborda las comunidades surgidas por la violencia² y; una tercera, que nos presenta casos de comunidades huehuetecas en dos Estados de la nación americana³. Además, una introducción que nos presenta claramente la clásica discusión antropológica sobre comunidad y el enfoque del proyecto sobre las transformaciones recientes que

-
- 1 Son los capítulos de: Stefanie Kron. *El estilo solomero no tarda mucho*. Negociando la frontera en la transmigración q’anjob’al. Y Ruth Piedrasanta Herrera. Apuntes sobre transmigración y remesas entre los chuj de Huehuetenango.
 - 2 Consiste en los capítulos de María Mateo y Manuela Camus. Una mujer q’anjob’al de Mamá Maquín. Y Verónica Ruiz Lagier. Las nuevas formas en los migueleños viven la juventud. El caso de La Gloria, Chiapas.
 - 3 Se trata de los capítulos de: Silvia Irene Palma, Carol Girón Solórzano y Timothy J. Steigenga. De Jacaltenango a Júpiter: negociando el concepto de familia en el espacio transnacional y el tiempo. Y Mary E. Odem. “Inmigración transnacional y organización maya en el sur de Estados Unidos.

algunas comunidades, principalmente indígenas; están experimentando. Ya con estas tres aristas del proceso tenemos la heterogeneidad de experiencias y dinámicas que el libro nos va a mostrar.

Además de los marcos subjetivos que puedan estar motivando la migración “transnacional”, es en esto en lo que podemos encontrar las novedades del tema, también el libro nos sugiere algunas constantes que puedan estar “forzando la identidad”⁴ transnacional de los huehuetecos en particular y latinoamericanos en general. El transnacionalismo como tal o la migración hacia otras naciones en búsqueda de “un mejor futuro” no es algo tan nuevo, pero ahora se ha vuelto más notorio, e incluso un problema para algunos Gobiernos y una mejoría para otros cuantos. Es más notorio porque los marginados de antes ahora están en los espacios informales del imperio, en los territorios centrales y marginales del mismo capitalismo, que sigue demandando campesinos como mano de obra barata. Aunque estos campesinos y/o indígenas o mayas migrantes hayan encontrado mejores salarios, el ascenso social no está del todo garantizado, y todavía está por hacerse el balance general entre mejoras y pérdidas; tanto en la dimensión social como en la cultural.

En este sentido, el capítulo de Palma, Girón y Steigenga muestra en detalle cómo se da la negociación del ámbito familiar para los jacaltecos en la Florida según el flujo migratorio de asilados, reunificados y trabajadores migrantes. Si bien la principal motivación para migrar sigue siendo el trabajo -asociada a ello la percepción de mejoría de la familia y que de esta manera haya una relativa mejoría en las condiciones de trabajo-, ¿hasta dónde los trabajadores agrícolas gozan de mayor marco de derechos? Al leer las historias de los pagos a los coyotes al menos ya no es la figura del “enganchador” de fincas el que está intermediando.

Me ha llamado la atención en el libro el uso de la historia de vida como un recurso para ilustrar las transformaciones, a escala tanto comunitaria como principalmente individual, que la migración

4 Como nos lo recuerda Judith Friedlander para el caso de Hueyapan, un pueblo bilingüe Nahuatl-Español en el centro de México.

transnacional ha traído consigo. Esto es especialmente notable en el capítulo de Mateo y Camus, en el que mediante una breve historia de vida, se recorren las circunstancias, vericuetos y peligros en los que María Mateo tuvo que iniciar y reiniciar la vida, tanto en asentamiento como en el espacio comunitario. Particularmente, el espacio organizativo que reivindica su condición de género. Los otros capítulos que hacen uso de esta técnica son el de Ruth Piedrasanta y el de Stefanie Kron. Quizás la primera sea más convincente con su ejemplo.

La introducción de Camus, la editora del libro, enmarca a la región huehueteca “como parte de un dinámico entramado mesoamericano” (19) a partir de los conceptos de “fronteras límites” y las “fronteras frentes”, siguiendo una tipificación de Jan de Vos, en donde la primera es la “raya que divide” y la(s) segunda(s) son movimientos en expansión que se “enfrentan” con un espacio no ocupado. Pero, además, aunque no parezca una anticipación a los capítulos posteriores, Camus nos presenta una aparente paradoja o contradicción de estos procesos migratorios, que, por un lado, generan una dinámica centrífuga, “reindigenización” de las identidades y los espacios comunitarios, siendo más notable el de la cabecera municipal; pero al mismo tiempo, aunque no se dé una sincronía con la dinámica anterior, está la dinámica centrípeta, que expulsa a la gente hacia fuera (37). ¿Cómo se explica esto? Me parece encontrar una constante en este tema que puede encontrarse en el modo en el que el sistema capitalista global reconfigura las relaciones entre capital y trabajo, como capta la mano de obra, barata y deportable; aunque los “pueblos de mozos” se estén convirtiendo en “pueblos de migrantes transnacionales” en medio de un entramado de “circuitos” de movilidad (33).

La segunda parte deja claro que para muchas personas, de aquella región, casi inmediatamente a la experiencia del refugio en México, se dio el paso a la migración a los Estados Unidos. Es más, como ya lo ha señalado Víctor Montejo, algunos jacaltecos aprendieron el inglés sin haber pasado por el español. Especialmente aquellos que se vieron forzados, por razones de la violencia de la guerra, a migrar a los Estados Unidos para buscarse la vida y sobrevivir al terror. Una de las voces que presenta Ruth Piedrasanta hace referencia al

incremento del flujo y de la cantidad de migrantes rumbo al Norte, pero: "...ahorita ya es muy diferente, ya es muy difícil, porque allá ahorita ya casi no hay mucho trabajo y si hay mucha gente también [...] ya no están dando los papeles. Porque antes sí. ¿Sabe [usted] por qué lo querían mucho antes?, porque cuando el 90 y... el 80, cuando pasaron la guerrilla pues, mataron muchos indígenas, mucha gente de aquí y todo, los que llegan allí les dan papeles rápido, el Gobierno" (111).

Todos los artículos coinciden en señalar esta característica de la migración transnacional, me refiero al elemento expulsor de gente, de mano de obra; ya sea por la violencia exagerada de la guerra o por la violencia sutil de "buscarse la vida". Creo que el libro deja abierta la puerta al análisis entre los cambios que puedan surgir a partir de la relación entre comunidad reconfigurada local y la comunidad nueva de Estados Unidos. En poder identificar las formas en que estas dinámicas migratorias están reconfigurando, reconstruyendo y reforzando los marcos de identidad étnica y de género, en espacios públicos como la comunidad y en espacios privados como la familia. Creo que el libro viene a hacernos una invitación a poner atención a una problemática que se desarrolla en aquella región norte de Huehuetenango pero que de manera muy similar puede estar experimentándose en lugares de Ecuador como en El Salvador o Nicaragua.

Ya para concluir, creo que el libro, como muchos de estos que son editados, cuenta con mejores artículos que otros, pero pretende ser un libro estructurado; que pone sobre la mesa viejos temas pero con nueva evidencia. A mi parecer, nos reta a entrar a la discusión profunda del tema, quizás con ella podamos aportar a una conclusión sobre este.

Felipe Girón
Antropólogo, CIRMA

La política fiscal en la encrucijada. El caso de América Central. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. ICEFI Guatemala. 2007. 207 pp.

Cuando se intenta caracterizar a Centroamérica, generalmente se señala que, a pesar de los avances en materia de pacificación y democratización en los últimos veinte años, continúa siendo una de las regiones más desiguales de América Latina. Más allá de los índices de Gini, o del análisis de la distribución del ingreso por segmentos poblacionales, las desigualdades sociales se observan y se viven, literalmente en las esquinas de las principales avenidas de sus ciudades. En Guatemala, por ejemplo, conviven vehículos de lujo con niños acróbatas que se ganan la vida arriesgándola; graduados de posgrado de las mejores universidades del mundo con analfabetas; empresas globalizadas y multinacionales con autoempleados; un grupo de la población con niveles de vida del primer mundo con decenas de miles de familias en el límite de la subsistencia.

Uno de los principales instrumentos con los que cuentan las sociedades y los Estados para reducir las desigualdades y, en alguna medida, redistribuir los ingresos es la política fiscal. El análisis de la política fiscal de Centroamérica es abordado por el libro *La política fiscal en la encrucijada. El caso de América Central*, elaborado por un equipo de investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, liderado por Juan Alberto Fuentes Knight.

El libro está construido a partir de tres capítulos, en los que analiza, con enfoque regional, el presupuesto y el gasto público, la política tributaria, así como la economía política de la tributación.

En el capítulo titulado **El presupuesto y el gasto público en América Central**, se hace un análisis riguroso y ponderado de los procesos presupuestarios de la región; se reconocen los avances ocurridos en los últimos 20 años, incluyendo cambios administrativos que mejoraron la recaudación y un aumento aún insuficiente en los ingresos tributarios. Esto ha permitido una tendencia al aumento del gasto público que, a pesar de su crecimiento, continúa teniendo uno de los promedios más bajos en América Latina. En países como El Salvador o Guatemala, las diferencias son aún mayores. En cuanto a la orientación del gasto, parece existir un mayor crecimiento en el gasto en educación antes que en salud.

A partir del diagnóstico se identifican una serie de desafíos para la gestión presupuestaria y el gasto público. Estos incluyen mejorar la transparencia, control del gasto público, evitar la corrupción; disminuir desequilibrios presupuestarios sin sacrificar la inversión, aumentar el gasto público social y determinar la base institucional y los mecanismos requeridos para aumentar la eficacia del gasto público social. De acuerdo con los datos presentados, en algunos países de la región se han dado avances en algunos de estos temas, mientras que, en otros, los temas de transparencia y lucha contra la corrupción están rezagados.

En **La política tributaria en América Central** se presenta un detallado análisis de la tributación en Centroamérica. De acuerdo con el libro, pueden identificarse siete tendencias recientes en la política tributaria de la región. Los ingresos tributarios de la región han subido, aunque lo que se recauda sigue siendo insuficiente para cumplir con las necesidades prioritarias de los países de la región. En cuanto a la composición de los ingresos tributarios, se demuestra el peso que tienen los impuestos a las ventas y al consumo, particularmente el IVA, representando más de un tercio de los ingresos tributarios; los ingresos provenientes de los impuestos al comercio exterior tienden a disminuir a partir de la desgravación arancelaria y la apertura económica, mientras que los impuestos específicos a determinados productos (tabaco, licores, combustibles y otros productos), se aplican ad valorem, y no a la cantidad física, lo cual dificulta la armonización regional.

Por su parte, los impuestos a los ingresos y utilidades aumentaron levemente, aunque muestran serias debilidades que no permiten que desarrolle su potencial distributivo. Siguiendo al informe, el impuesto sobre la renta aplicado en los países de la región tiene tasas diferenciadas, dependiendo del origen de los ingresos; se basa en los ingresos obtenidos por individuos o empresas en su país de origen, pero no del exterior; existe un amplio grupo de exoneraciones que en ocasiones se aplican discrecionalmente; los sistemas de recaudación no cuentan con instrumentos de regulación y control a las transferencias entre empresas vinculadas, y se carece de normas aplicables a transacciones de y hacia paraísos fiscales. Además, y en parte como consecuencia del sistema de incentivos, el gasto tributario resulta ser comparativamente alto según la información disponible.

Frente a estas tendencias, los desafíos de la reforma tributaria en Centroamérica parecen ser obvios, aunque políticamente difíciles de lograr: asegurar la suficiencia y progresión de los sistemas tributarios; fortalecer la tributación directa y particularmente el impuesto sobre la renta, aumentar la equidad de los sistemas tributarios, mejorar técnicamente la legislación; y lograr la armonización de la tributación en la región.

El tercer capítulo, **Economía Política de la Tributación en América Central**, desarrolla un recorrido histórico de la política tributaria de la región, considerando la economía agroexportadora (1860-1940); el período de sustitución de importaciones y la crisis y ajuste frente a la globalización. Esta revisión permite concluir que históricamente la política fiscal de la región ha estado condicionada por la oposición fuerte y concentrada de las élites económicas a reformas tributarias. Otros actores como los grupos subalternos y entidades internacionales han tenido influencia relativa en esta. Los primeros se han opuesto a algunas medidas, particularmente a los impuestos indirectos con poco éxito; los segundos han tenido una incidencia cambiante a favor o en contra de cierto tipo de tributos.

Además de la acción de los actores políticos, que impulsa o bloquea reformas tributarias, existe un entramado institucional –también resultado de procesos históricos– que favorece a determinados grupos en detrimento de otros. En Guatemala, la propia Constitución limita las posibilidades de cierto tipo de reformas, y, la Corte Constitucional desempeña el clásico papel de institución “contramayoritaria”, que, en muchos casos, contribuye a la continuidad del *statu quo*. Asimismo, el diseño del sistema político provoca una alta dependencia de los partidos políticos a los capitales privados, lo que refuerza el bloqueo señalado. Se presentan las experiencias de pactos fiscales, que muestra los resultados más o menos exitosos de estos, pero sus límites frente a una estructura de relaciones de poder opuesta a la distribución.

El libro concluye con una serie de reflexiones sobre temas por tomar en cuenta en el momento de pensar y diseñar una estrategia política dirigida a una reforma tributaria. Entre estos se destacan la necesidad de construir alianzas con partidos y organizaciones sociales; el acercamiento con grupos empresariales permeables a la

reforma, identificando fisuras y diferencias de intereses; acompañar las reformas con medidas dirigidas a lograr mayor transparencia y eficiencia del gasto público, impulsando no solo el gasto social, sino medidas dirigidas a mejorar el crecimiento y la competitividad; las reformas deben contribuir a la equidad horizontal y lograr, en la medida de lo posible, el apoyo y compromiso de organismos internacionales para alcanzarla.

El trabajo del INCEFI tiene las virtudes de un texto de divulgación concebido y realizado para tener una amplia distribución en Centroamérica (la primera edición es de 15.000 ejemplares) y llegar a un público no especializado en temas económicos y tributarios, así como el rigor de una investigación seria, que propone alternativas, soluciones y recomendaciones no sólo de carácter técnico sino también políticas. La contribución de este libro va más allá que esfuerzos anteriores sobre el mismo tema realizados por instituciones financieras internacionales, ya que se sustenta en una postura política definida por su compromiso con la equidad y la justicia social.

Como el libro lo indica, las reformas tributarias que estos países requieren no pueden ser sino el producto de cambios en las relaciones de poder que posibiliten amplios acuerdos que desbloqueen las políticas distributivas. Sin embargo, como la experiencia en marcha en Guatemala de una modernización fiscal, liderada por el coordinador del libro, actualmente ministro de Finanzas, muestra la capacidad de influencia de algunos grupos empresariales va más allá del control que pueden ejercer en los partidos políticos, llegando a construir corrientes de opinión pública opuestas por principio a cualquier cambio en la tributación que logran tener apoyo de otros grupos sociales. La crisis económica que se avecina y el imperativo de la integración regional, obligan al impulso de reformas tributarias en Centroamérica; el libro del INCEFI es una contribución importante para alcanzar este objetivo.

*Ricardo Sáenz de Tejada
Profesor Investigador
FLACSO Sede Guatemala*

RESÚMENES/ABSTRACTS

Refugiados guatemaltecos en Cuatro Destinos: Flujos Migratorios y Contextos de Recepción **Guatemalan Refugees in Four Destinations: Migration Flows and Contexts of Reception**

Leyla Rodríguez¹

Este artículo analiza cuatro comunidades guatemaltecas: en Costa Rica, Estados Unidos, México y Belice. Estos países fueron receptores de refugiados durante la guerra civil guatemalteca, y continúan siendo receptores de inmigrantes. Después de describir las políticas de refugiados que propició cada país receptor, y de perfilar cada comunidad guatemalteca, se intenta discernir cuáles de sus características son causa del

This article analyzes four Guatemalan communities in Costa Rica, United States, Mexico and Belize. These countries received refugees during the Guatemalan civil war, and continue receiving immigrants. After describing the refugee policies favored in each country and profiling each Guatemalan community, an effort is made to distinguish which of the characteristics are caused by the profile of the migration flow to each

1 Candidata a doctorado en antropología y demografía en la Universidad Estatal de Pennsylvania, EE.UU. E-mail: lilar@pop.psu.edu

perfil de cada flujo migratorio y cuáles de las políticas que los recibieron. Se concluye que en Costa Rica y Estados Unidos, las diferencias entre los guatemaltecos que migraron durante la guerra y los de posguerra se derivan de las diferencias de nivel educativo de los flujos. En México y Belice, sin embargo, los inmigrantes de posguerra se encuentran en desventaja por no contar con las políticas e instituciones que apoyaron a quienes llegaron durante la guerra.

country and which are caused by the policies that received them. In Costa Rica and the United States, the differences among the Guatemalans who migrated during the war and post-war are derived from differences in the educational levels of the migration flows. In Mexico and Belize, however, post-war immigrants are at a disadvantage by not having the policies and institutions that supported refugees during the war.

Movilidad social en Centroamérica³ Social Mobility in Central America

*Pablo Sauma*¹

*Guillermo Monge Guevara*²

Algunos estudios sobre movilidad social en América Latina han incluido países centroamericanos. Entre las diferentes variables relevantes para medir la movilidad social, los estudios identificados han enfatizado en la educación, y también en los ingresos. En términos generales, los países centroamericanos pueden separarse en dos grupos desde la perspectiva de la movilidad social: Costa Rica y Panamá por una parte, con mayor movilidad en Centroamérica (pero niveles intermedios en el contexto latinoamericano), y los demás

Some studies on social mobility in Latin America have included Central American countries. Among the different variables used to measure social mobility, the studies analyzed in this article have emphasized mainly on education, and also on income. In general terms, Central American countries can be classified in two groups from the perspective of social mobility: Costa Rica and Panama on one hand, with higher mobility at Central American level (but intermediate levels in the Latin-American context), and the rest of the Central American

-
- 1 Economista costarricense, especialista en política social. Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y consultor internacional en el tema de su especialidad. Correo electrónico: jsauma@cariari.ucr.ac.cr.
 - 2 Ingeniero civil y politólogo costarricense. Es investigador asociado de PROCESOS, una ONG especializada en análisis sobre desarrollo humano, y consultor en gestión institucional, política social y equidad de género. Correo electrónico: gmongeg@racsa.co.cr
 - 3 Este estudio fue patrocinado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Corporación de Estudios para América Latina (CIEPLAN); y presentado en el taller internacional *Cohesión social, movilidad social y políticas públicas en América Latina*, realizado en julio del 2007 en la ciudad de Antigua Guatemala.

países, con menores niveles tanto en el contexto centroamericano como en el latinoamericano. Los resultados de esas mediciones son consistentes con las percepciones sobre movilidad social que se desprenden del Latinobarómetro.

countries, with low levels of mobility not only in this region but also in Latin America. The results of these measurements are consistent with the perceptions on social mobility obtained from the Latinobarómetro.

Aproximación a un índice sintético de pobreza regional. An approximation to a synthetic index of regional poverty.

MACÍAS RUANO, Mirta¹

REYES CARDONA, Luis²

El presente trabajo caracteriza la pobreza en 16 departamentos de Honduras en el período 2000-2005, utilizando técnicas estadísticas multivariantes, en particular el Análisis de Componentes Principales, análisis que proporciona unos factores (componentes principales) que se caracterizan por ser indicadores (sintéticos) *no correlacionadas* con una capacidad explicativa similar al

This work tries to provide a representation of the poverty in 16 departments in Honduras in the period 2000-2005. For it, it is used multivariate statistical techniques, in particular, the Principal Component Analysis that puts in evidence the main factors of variability and describes the individuals (poor) by means of those factors. With this optics, an analysis of main component summarizes without

1 Becaria investigadora del Programa ALBAN, Universidad de Valladolid. E-mail: mirtamaru@hotmail.com

2 Programa de Doctorado en Sociología. Universidad de Valladolid. E-mail: lreyes64@hotmail.com

conjunto original de variables. La información estadística empleada procede de las "Encuestas permanentes de Hogares, correspondientes a los años 2000 y 2005", elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística de Honduras.

Los resultados obtenidos indican que las diferencias en términos de pobreza de los distintos departamentos de Honduras están caracterizadas por variables demográficas, económicas y educativas.

Palabras clave: pobreza, análisis de componentes principales

Área temática: Economía Internacional y Desarrollo

any correlation variables with explicative capacity similar of the variable groups original. The statistic information used comes from the "Permanent Household Survey for the years 2000 and 2005 ", prepared by the National Institute of Statistics of Honduras,

The results explain that the differences in poverty trends in Honduras are characterized for demographics, economics and education variables.

Key word: Poverty, Principal Component Analysis.

Thematic areas: International Economy and Development

Diez años de acciones colectivas **Ten years of collective actions**

*Sindy Mora Solano*¹

En el artículo se analizan las principales tendencias de la acción colectiva de protesta social en Costa Rica, en el periodo 1995-2004. Mediante el análisis del repertorio de las acciones colectivas, de los actores involucrados, las demandas y las respuestas reportadas por *La Nación* y *Diario Extra*, se exponen los principales conflictos de la sociedad costarricense en dicho periodo. El artículo argumenta que la construcción mítica de la protesta, la represión y el silencio forman parte de las principales respuestas brindadas al conflicto.

This article analyses the main tendencies in collective actions of social protest in Costa Rica, for the period 1995-2004. By analyzing the repertoire of collective actions, the social actors involved, the demands, as well as the reactions reported by the newspapers *La Nación* and *Extra*, the most important conflicts in Costa Rican society during the period are exposed. The article argues that mythic construction of protest, repression and silence are the principal reactions in the conflict.

1 Socióloga. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. E-mail: smora@iis.ucr.ac.cr, sindymora@gmail.com

Elecciones de alcaldes municipales 2006 en Costa Rica: muchos los llamados, pocos los concurridos

Local government's elections in Costa Rica (2006)

Ronald Alfaro Redondo
*Político*¹

El presente artículo expone las principales características de las elecciones de autoridades municipales en Costa Rica y se detiene, fundamentalmente, en los comicios del 2006. El documento se compone de siete secciones. En la primera de ellas se estudia el contexto político que rodea a estos comicios. Por su parte, la segunda aborda la organización política local y sus particularidades, mientras que el tercer apartado se detiene en las reglas electorales utilizadas para designar autoridades locales. En la cuarta sección se estudian los patrones de participación política local y se comparan con las elecciones nacionales. Asimismo, las secciones cinco y seis analizan los principales resultados de la elección municipal

This article describes the main characteristics of municipal elections in Costa Rica, especially the most recent event (2006). It has seven sections. First section analyzes local election context. The second one mentions local government's political organization and the third one explain current legal rules for electing local authorities. Likewise, section four studies patterns of local political participation and compared to national elections. Also, sections five and six discuss the main results of the municipal election of 2006 on topics such as nominations for the positions, the winning party and allocation of seats. The last section details the findings of work.

1 Político. Investigador del Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Docente e investigador Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: ralfaro@estadonacion.or.cr

del 2006 en temas como las candidaturas a los cargos, partido ganador y asignación de escaños. En la última sección se detallan las conclusiones del trabajo.

¿Es posible la cooperación en una comunidad rural que comparte un recurso común?

Is cooperation possible in a rural community that shares a common pool resource?

*Róger Madrigal*¹

*Francisco Alpizar*²

Los experimentos económicos de campo que se presentan en este artículo proveen información valiosa para determinar las posibilidades de cooperación en una colectividad rural que comparte un recurso común. La aplicación de tres experimentos económicos en dos colectividades distintas en Costa Rica sugiere que los niveles cooperativos agregados son dependientes de las normas sociales de reciprocidad y confianza, así

The experimental economics methods shown in this article provide insights about the likelihood of cooperation in a rural community that shares a common-pool resource. The application of three field experiments in two different collectivities in Costa Rica suggest that aggregated cooperation levels depend on social norms such as trust and reciprocity as well as face to face communication and punishment. The article also

1 Efd Central America, CATIE, Turrialba, Costa Rica. E-mail: rmadriga@catie.ac.cr

2 Efd Central America, CATIE, Turrialba, Costa Rica. E-mail: falpizar@catie.ac.cr

como de la comunicación cara a cara y la presencia de sanciones. El artículo señala además la forma en la cual el Estado puede apoyar y facilitar los procesos locales de diseño de instituciones de manejo efectivo de recursos comunes.

discusses about the governmental role to promote local processes for designing institutions for managing common-pool resources.

Vinculaciones vecinales en el proceso de conformación y disfrute del capital social comunitario. Caso de la comunidad Lagos de Lindora, Santa Ana, Costa Rica.
Neighbor bonding in the process of conformation and enjoyment of community social capital. Case of the community Lagos de Lindora, Santa Ana, Costa Rica.

*Ana María Soto Blanco*¹

El siguiente artículo presenta una propuesta para el análisis de la conformación de capital social comunitario, enfatizando en la existencia de aspectos socioculturales de la vida cotidiana, que favorecen al desarrollo de formas de vinculación vecinal propensas a obtener o potenciar beneficios comunitarios no económicos. Se muestra, además, la aplicación de la propuesta en el análisis de

The following article shows a proposal for the analysis of the conformation of community social capital, emphasizing the existence of sociocultural aspects in daily life that support the development of forms of local neighbor bonding disposed to obtain or promote not economic community benefits. The application of the proposal shows itself in the analysis of the experience of the community

1 Licenciada en Sociología, graduada de la Universidad de Costa Rica. E-mail. anamsb@gmail.com

la experiencia de la comunidad Lagos de Lindora, una comunidad urbana que lucha de manera conjunta y organizada por la consecución de vivienda social, dotándose de un tejido social denso que, aún ocho años después, ha facilitado a la comunidad el acceso a cierto bienestar social.

Lagos de Lindora, an urban community that fights in a joint and organized way for the achievement of social housing, being provided with dense social relations that, still eight years later, had improved to the community the access to some social well-being.

Lista de publicaciones
**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES – COSTA RICA**
Año 2008

Puliendo la Piedra. Un recorrido por la promoción de la igualdad de género en los proyectos de desarrollo. Autor Rosemary Vargas-Lundius en colaboración con Annelou Ypeij. 1ª. Ed. –San José, C.R.: FLACSO: FIDA, 2007.

La Modernización sin Estado: Reflexiones en torno al desarrollo, la pobreza y la exclusión social en América Latina. Carlos Sojo. – 1ª ed. – San José, C.R.: FLACSO, 2008. 256 p.

Globalización, Estado y Privatización: Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica. Benedicte Bull. 1ª. ed. – San José, C.R. : FLACSO, 2008. 258 p.

Colección de Cuadernos de Ciencias Sociales.

Cuaderno de Ciencia Sociales No. 145. El largo camino hacia la Policía Comunitaria: Las estrategias de derechos humanos para la policía en Costa Rica. Quirine Eijkman. FLACSO/SAREC. 1era. Ed. Febrero 2007, 76 pp.

Cuaderno de Ciencias Sociales No. 146. Democratización Interna de los partidos políticos en Costa Rica. Dr. Luis Antonio Sobrado. FLACSO/SAREC. 1era. Ed. Abril 2007. 117 pp.

Cuaderno de Ciencias Sociales No. 147. ¿Qué significa ser de izquierda en el Siglo XXI. Edelberto Torres-Rivas, Enrique Gomáriz Moraga, FLACSO/SAREC, 1era. Ed. Junio 2007. 77 pp.

Revista Centroamericana de Ciencias Sociales No. 1, Vol. IV. Juan Pablo Pérez Sáinz, Minor Mora Salas, Paul Almeida, Erica Walter, Daniel Matul Romero, Marvin Acuña O., Alberto Brugnoli, Laura Paniagua Arguedas, Mauricio López-Ruiz, Enésimo Gerardo Rodríguez Aguilar. 1ª. Ed. FLACSO/ASDI, Julio 2007, 271 pp

Lineamientos para autores

La Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (RCCS) constituye un espacio para quienes deseen publicar artículos sobre la realidad social centroamericana, desde la perspectiva histórica, sociológica, antropológica o politológica. La Revista acepta artículos basados en investigación empírica sustantiva y documental o que introduzcan debates teóricos pertinentes para la comprensión del contexto centroamericano. Se tomarán en cuenta solamente artículos inéditos en español o en inglés que no hayan sido enviados simultáneamente a otra publicación. Los artículos aceptados en principio por la dirección de la Revista, son sometidos a la consideración de dos evaluadores profesionales independientes, antes de definir su publicación.

La Revista consta de tres secciones. La principal intentará tener naturaleza temática pero está igualmente abierta a otras contribuciones que no correspondan al tema seleccionado. La sección “Voces Nuevas” está reservada a investigadores nuevos, especialmente a estudiantes de posgrado con tesis ya finalizadas. Finalmente hay una sección de reseña bibliográfica.

Junto con el artículo, los autores deben enviar un currículum resumido no mayor de dos páginas, y señalar la sección de la Revista en la que quieren publicarlo.

La extensión para artículos de la sección principal es de un máximo de 12 mil palabras incluyendo notas y referencias bibliográficas. En la sección “Voces Nuevas” se reduce a 10 mil palabras. Y cada reseña bibliográfica no debe exceder las 900 palabras. El texto principal se debe presentar en Times New Roman 12 mientras que las notas irían punto 11.

Las referencias en el texto deben de aparecer de la siguiente forma: sea “...se ha argumentado (Torres-Rivas, 1984) que...” o “...Torres-Rivas, (1984) ha argumentado...”, si la referencia remite a una página o sección específica debe aparecer de la siguiente manera (Torres-Rivas, 1984:37) o (Torres-Rivas, 1985: 30-40).

Las notas deben ir a pie de página y deben limitarse al mínimo posible. La bibliografía irá al final de artículo y debe seguir el siguiente estilo:

Libros: Acuña Ortega, V.H. (1986): *Los orígenes de la clase obrera en C.R: las huelgas de 1920 por la jornada de 8 horas*, (San José CENAP/CEPAS).

Artículos en libros: Baumaister, E. (1993): Guatemala: los trabajadores temporales en la agricultura, en S.Gómez y E. Klein (eds.): *Los pobres del campo. El trabajo eventual*, (Santiago, FLACSO/PREALC).

Artículos en revista: Uthoff, A. y Pollack, M. (1985): “Análisis microeconómico del ajuste del mercado del trabajo en Costa Rica, 1979-1982”, *Ciencias Económicas*, Vol.V, No.1.

Utilice letras (por ejemplo, Pérez Brignoli 1994a, Pérez Brignoli 1994b) para diferenciar trabajos de un mismo(s) autor(es) en el mismo año.

Los cuadros tendrán numeración consecutiva (cuadro 1, cuadro 2...) así como las figuras o diagramas. En el caso de los cuadros debe contener la fuente de los datos.

Los apartados se numeraran con números arábigos. En caso de subapartados se mantiene el número del correspondiente apartado y se le añade un punto seguido de otro número. Por ejemplo: 1.1, 1.2, etc.

Los artículos deben acompañarse de un doble resumen, en español y en inglés, del artículo. Cada resumen no debe superar las 100 palabras.

Enviar los artículos a la siguiente dirección electrónica:
fsalas@flacso.or.cr atención Flor Salas especificando que se trata de un artículo para la RCCS.